

Memorias:

12 historias
que nos deja
la guerra



Konrad
Adenauer
Stiftung

Memorias:

12 historias

que nos deja

la guerra

Memorias: 12 historias que nos deja la guerra

ISBN: 978-958-59512-5-9

© 2017, Consejo de Redacción

Autores

Paola Benjumea
Martha C. Romero
Diana Salinas
Juliana Castellanos
Andrés Córdoba
Juan Diego Restrepo
Edilma Prada
Sania Salazar
José Navia
Margarita Isaza
Edinson Bolaños
Claudia Mejía

Subeditores

GINNA MORELO
Gloria Castrillón Pulido
Kevin Alexis García
Olga Behar Leiser

Editora general

Patricia Nieto

Coordinación y gestión editorial

Jorge Iván Posada

Diseño y diagramación

Andrea Leal Villarreal

Portada

Ilustración de dibujos de la historia *Es más fácil hablar de los tristes*.

Versión digital

Santiago Moreno

Comité Directivo Consejo de Redacción

GINNA MORELO, Presidenta
Dora Montero, Vicepresidente
Gloria Castrillón
Kevin Alexis García
Olga Behar
Beatriz Marín
Fernando Ramírez
Jhon Jairo Jácome

Consejo de Redacción, CdR, Colombia

Transversal 4 Nro. 42-00, piso 6
(+57 1) 320 83 20 Ext. 4584
Bogotá, Colombia
contacto@consejoderedaccion.org
www.consejoderedaccion.org

Memorias : 12 historias periodísticas / José Navia y otros. --

Bogotá : Konrad Adenauer Stiftung, 2017.

252 páginas : fotos y tablas ; 22 cm.

ISBN 978-958-59512-5-9

1. Periodismo - Aspectos sociales - Colombia 2. Conflicto Armado - Colombia - Relatos personales 3. Paz - Colombia 4. Memoria colectiva - Colombia.

070.986 cd 21 ed.

A1585413

CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango

© 2017, **Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., KAS, Colombia**

Representante para Colombia

Dr. Hubert Gehring

Coordinación del proyecto

Angélica Torres

Revisión de textos y corrección de estilo

Martha Josefina Espejo Barrios

Impresión

La Patria

Fundación Konrad Adenauer, KAS, Colombia

Calle 90 Nro. 19C-74, piso 2

(+57 1) 743 09 47

Bogotá, Colombia

margarita.cuervo@kas.de

www.kas.de/kolumbien

El presente documento es un producto en el marco de la cooperación de la KAS con el Consejo de Redacción. Los textos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de la Fundación Konrad Adenauer.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción y la comunicación pública total o parcial, sin la previa autorización escrita de los titulares.

Impreso en Colombia



Memorias de un país que busca la paz

En el momento coyuntural por el que atraviesa Colombia, luego de la firma de un acuerdo de paz con las Farc, ahora en etapa de implementación, y de los primeros pasos y esfuerzos por llegar a un fructífero diálogo con la guerrilla del ELN, el país debe asumir el gran reto de avanzar en procesos de verdad y reconciliarse con el pasado, afrontar ejercicios de memoria que permitan crear conciencia en la sociedad, sanar las heridas de los territorios y reconstruir la realidad de las regiones donde muchas comunidades esperan ser dignificadas.

Sin duda, la historia de Colombia tiene más de una cara, tiene muchos matices, algunos negros, otros blanco, quizás grises, y hay que acercarse a cada una de ellos, hay que aproximarse a ese gran rompecabezas y examinar cada pieza para entender la complejidad de los hechos. Pensar que existe una verdad única es un error en tanto que se requiere de múltiples verdades para hacer visible las causas y secuelas de la guerra.

Precisamente, la publicación “Memorias: 12 historias que nos deja la guerra” es una apuesta y un acercamiento a los diversos acontecimientos que se entretajan en las regiones colombianas, a las memorias que víctimas, ex-combatientes, comunidades indígenas, afrodescendientes, líderes sociales y el país en general, tienen del conflicto en el país.

Este ejercicio de reconstrucción de memoria es preciso para que no se pierda la historia de pueblos, regiones y comunidades, y para que sus habitantes reconozcan la necesidad de saber y recordar. Hoy en día se transita o habita lugares que tiempo atrás fueron escenario de disputa por el poder o donde se cometieron actos violentos, sucesos en su mayoría desconocidos por la sociedad e ignorados incluso por sus pobladores.

De aquí la pertinencia de esta gran crónica de Colombia construida por varios autores, en diversos contextos y con diferentes protagonistas. Son relatos que nos llevan en un recorrido por diferentes aspectos, posiciones y miradas de la guerra; son narraciones minuciosas construidas con rigurosidad y que son eco de muchas voces heridas por un largo conflicto armado.

Desde territorios donde tuvieron lugar combates entre paramilitares y el Ejército, o regiones donde habitan comunidades indígenas hostigadas por grupos armados y capacitadas para usar las armas, incluso grandes extensiones de tierra que fueron cuna del polvo mágico de la coca, hasta relatos de reclutamiento forzado, desplazamiento y crímenes contra líderes sociales, son algunos de los hechos que miles de colombianos llevan latente en sus memorias y que decidieron compartir para que esta publicación fuese posible.

Esperamos que este compendio de historias, desarrollado en un esfuerzo conjunto entre Consejo de Redacción y la Fundación Konrad Adenauer, y después de haber publicado el manual “Pistas para Narrar la Memoria: Periodismo que reconstruya las verdades”, sea un incentivo para que periodistas y otros grupos de la sociedad se sumen al trabajo de hacer memoria.

Por último, queremos agradecer a todo el equipo de Consejo de Redacción, a Ginna Morelo, su Presidenta; Johana Moreno, Coordinadora General y Jorge Iván Posada, quien lideró y coordinó esta iniciativa. Igualmente agradecemos a los doce periodistas que recorrieron el territorio nacional para construir estas historias y a los editores y subeditores por guiar este ejercicio fundamental para el país.

Hubert Gehring

Representante de la KAS en Colombia

Un festival de la memoria

El sonido de las hojas movidas por la brisa conjugaba perfecto con el telón de fondo. El domingo 22 de octubre de 2017 cincuenta víctimas del conflicto armado colombiano se reunieron debajo de los árboles en la plaza del barrio Minuto de Dios de Montería. Hablaban entre sí de esa fuerza que las empuja a no dejar que el pasado se olvide, a que la memoria no se haga humo en el territorio.

Hicieron de los testimonios del conflicto padecido en sus muertos y en las acciones del día a día de sus vivos, resistentes y resilientes, un encuentro llamado Festival de la Memoria. Y lo propiciaron las nuevas generaciones que creen en el valor del pasado para hacer del presente algo menos imperfecto y, del futuro un momento sin forzadas ausencias. Las historias de estas víctimas, relatadas para combatir el silencio, pretenden hacer frente al desamparo, como seguro ocurre en muchos otros territorios colombianos, y como lo pretende este libro *Memorias: 12 historias que nos dejó la guerra*.

¿Qué podemos tener en la cabeza los asociados –periodistas y profesores– de Consejo de Redacción para compartir con humanidad algunas historias de los oprimidos, para hacer visibles las verdades, para demandar del Gobierno atención en la construcción de las memorias territoriales? La respuesta como colectivo es una: el periodismo que hace memoria no puede escurrirse como agua entre las manos en la etapa crucial que vive Colombia.

Puede ser eco de las voces que merecen ser escuchadas o que buscan en estos instantes romper las barreras de la indiferencia y la insolidaridad.

El país se inicia en una etapa de reconstrucción de las verdades, y como organización de la sociedad civil, Consejo de Redacción se comenzó a pensar en función de ello promoviendo dos guías periodísticas y académicas: *Pistas para narrar la paz* y *Pistas para narrar la memoria*. El paso siguiente, el que estamos dando ahora, no podía ser otro que el de convocar a un grupo de periodistas a reportear, a andar los pasos que con dolor, y con cierto halo de esperanza, han recorrido millones de colombianos.

Volver al origen del periodismo que está, ve, oye, comparte y piensa con el otro, como lo diría Kapuscinski, que desentraña y pregunta antes, ahora y siempre, en procura de relatar una historia que nos aproxime a la memoria, a las verdades, ha sido y seguirá siendo un propósito de CdR.

La apuesta es que esos relatos de la gente en sociedades conflictuadas como la nuestra se inserten en los reportajes periodísticos del hoy, para así sumar a la responsabilidad que como nación tenemos con las víctimas de devolverles el lugar y reconocer los hechos que las pusieron en esa condición que no debe perpetuarse.

Invitamos a los lectores a hacer de este libro un festival perenne de la memoria. La que no se borra. La que siempre estará viva.

Ginna Morelo

Presidenta Consejo de Redacción

2017

Contenido

Memorias de un país que busca la paz.....	7
Un festival de la memoria.....	9
Prólogo.....	13
1. Los discípulos de Salatiel	19
José Navia	
2. Crímenes abyectos	35
Diana Salinas	
3. El guardián de Montes de María.....	65
Martha C. Romero	
4. Amado no tuvo tiempo para aprender a matar	87
Margarita Isaza	
5. El polvo que guarda Tranquilandia.....	103
Edinson Bolaños	
6. La lucha por ser diferente.....	123
Sania Salazar	

7. Salaminita se levanta	141
Paola Benjumea	
8. El fin de un hombre bajo observación	157
Juan Diego Restrepo	
9. Coreguaje: voces de un despojo.....	173
Edilma Prada	
10. El arte de escuchar el corazón	193
Claudia Mejía	
11. Es más fácil hablar de los tristes.....	211
Juliana Castellanos	
12. No me puedo cortar las venas: Mayor Parga	227
Andrés Córdoba	
Autores.....	245

Prólogo

Las voces que se escuchan en este libro provienen del fondo de una grieta. Habría querido decir que vienen del mar en la espiral de una caracola pero no son suaves ni exóticas; hablan con cadencia conocida y marcan con intensidad las emociones. Al escucharlas, para tratar de descubrir parentescos, entendí que todas proceden del lado oscuro de la vida, emergen durante la pausa que les deja el vértigo, se pronuncian a pesar del daño, ocupan el papel para contar de qué material está hecha su tristeza y sobre qué roca han tallado su coraje.

Son cientos los colombianos que hablan en estas páginas. Sus relatos dan cuenta de un país que sobrevivió a 52 años de conflicto armado interno entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Estado, al que se sumaron otras guerrillas, diversos grupos de paramilitares y organizaciones dedicadas al narcotráfico. Sus historias retratan el momento crucial que viven los habitantes de un país en transición hacia la paz. Sus voces llegan a través de doce reporteros que “estuvieron allí” para escucharlos y tratar de retratar cómo sobrellevan el dolor que les dejó la guerra.

Ercilia Secue, madre de Salatiel Méndez, indígena del pueblo nasa asesinado en octubre de 2012, dice que todavía “él anda por ahí”. Luz Marina Bernal, desde su casa en Soacha, denuncia a los miembros del Ejército de Colombia que eliminaron a personas en situación de discapacidad, entre ellas a su hijo Fair Leonardo Porras, haciéndolas pasar por guerrilleros. Jesús

María Pérez revela por qué se mantuvo como líder de la lucha de los campesinos en Montes de María pese a poner en riesgo su vida. Gertrudis Nieto reconstruye las circunstancias en las que su hijo Jesús Amado Cárdenas murió a pocas cuadras de su casa en Sonsón, cuando aún no había aprendido a matar.

Eliécer Caicedo relata cómo el auge y la caída del cartel de Medellín determinaron el rumbo de la vida en los Llanos del Yarí. Pedro Antonio Valencia recuerda que el día que mataron a su esposa también comenzó la destrucción de Salaminita, su pueblo. Consuelo Arbeláez Gómez revive la escena del crimen de su esposo Gabriel Jaime Santamaría en la oficina de la Asamblea de Antioquia, donde era diputado por la Unión Patriótica. Álvaro Piranga Cruz, indígena coreguaje, narra cómo él y su comunidad abandonaron sus tierras en Caquetá cuando las guerrillas y los narcotraficantes los pusieron en la mitad del fuego. Manuel Velandia, líder de la comunidad LGTBI, revela que solo seguir viviendo en el exilio lo salva de morir asesinado en Colombia.

Julisa Mosquera repasa las cicatrices que le dejó la guerra en Chocó y las sanaciones que ha alcanzado a través del teatro en Bogotá. Los hermanos Juan y Jeison componen un relato de su vida en un grupo paramilitar y trazan un mapa de lo que puede ser su regreso a la vida sin armas. Julio César Parga Rivas, mayor del Ejército, confiesa que pagará su condena pero que no pedirá perdón por su participación en la serie de ejecuciones extrajudiciales, conocida como falsos positivos.

Ercilia, Luz Marina, Jesús, Gertrudis, Eliécer, Manuel, Pedro, Consuelo, Álvaro, Julisa, Juan, Jeison y Julio son algunas de las personas que ofrecieron su voz y se convirtieron en cuerdas de vida a las que los reporteros pudieron asirse para ir detrás de hechos del pasado y traerlos al presente; convertir el recuerdo en relato; provocar que la memoria dé a luz una noticia.

Es así que José Navia cuenta que las enseñanzas de Salatiel siguen pasando de boca en boca aunque hace ya cinco años que lo asesinaron. Diana Salinas reconstruye el proceso que familiares de las personas en situación de discapacidad asesinadas dentro del proyecto conocido como falsos positivos, siguieron para demostrar la crueldad sin límites de hombres del Ejército. Martha

Romero reconoce que, además de luchar por los derechos de los campesinos, los personajes de su historia han sido guardianes de la memoria de la región Caribe. Margarita Isaza revela la forma en la que al hacer público el dolor por la pérdida de un hijo miembro de un grupo armado es posible llegar a la empatía como un paso necesario para la reparación.

Edison Bolaños explora el paisaje de los Llanos del Yarí en busca de respuestas esperadas durante décadas en el centro del país. Al conversar con Manuel Velandia, Sania Salazar comprueba que en Colombia no están dadas las condiciones para convivir con las diferencias. Paola Benjumea relata la forma en la que habitantes de Salaminita han convertido la lucha por el derecho a la propiedad de las tierras de su pueblo en una cruzada por la que están dispuestos a entregar la vida. Edilma Prada describe la lucha de los indígenas coreguaje para evitar su exterminio físico y que el éxodo se convierta en sentencia de muerte para su cultura. A través de la historia de un hombre dedicado a la política, Juan Diego Restrepo expone que el asesinato de opositores en Colombia es un plan sistemático.

Claudia Mejía viaja a lo más profundo de la violencia contra una mujer para verla resurgir capaz de contarle al público sus vejámenes, con el propósito de proteger a otras personas. Juliana Castellanos se pregunta por las incertidumbres que la desmovilización de los distintos grupos armados ilegales genera en la vida particular de las personas excombatientes y por lo tanto de la comunidad política. Y Andrés Córdoba hace evidente que el perdón y la reconciliación que se proponen como relatos paralelos a la firma de los acuerdos de paz no se consiguen por decreto.

A las voces de los periodistas y de los personajes que contribuyen a contar el pasado, se sumarán ahora las de los lectores que convertirán cada relato en un estímulo incontrolable para recordar. En la intimidad del acto de leer, la memoria cobrará vida y tal vez por algunos minutos personajes, reporteros y lectores se encuentren en una narración inédita donde sea posible intuir que se hace parte de una historia compartida. Si esto sucede tendremos la esperanza de que algún día las memorias diversas del conflicto armado interno nos lleguen como susurros familiares provenientes del fondo de una caracola marina. Si no, estaremos obligados a acercar el oído a nuestra grieta para que alguien, en el fondo de su dolor, sepa que queremos escuchar.



Ivan Silva, el profesor de música del colegio de la vereda la Playa, en Tacueyó, y algunos de sus alumnos, visitan a dos 'mayoras' de esa comunidad indígena para tocar algunas canciones tradicionales y para escuchar las historias de las ancianas. Foto: José Navia Lame

1.

Los discípulos de Salatiel

Por José Navia Lame

En las montañas del Cauca, los nasa, un pueblo indígena de tradición guerrera, mantiene un proceso de resistencia desde hace más de 500 años. Durante generaciones, los nasa se heredan el arraigo por la tierra y formas organizativas que les han permitido mantener su territorio.

El rancho de los Méndez es angosto y de fachada larga. Tiene cinco piezas que dan a un corredor amplio donde solo se ven dos asientos de madera, polvorientos y desvencijados. La construcción se levanta en medio de un bosquecito de yarumos, guayabos, flormorados y otros arbustos de menor talla. Es una construcción en bahareque, teja de barro y piso de tierra. A Salatiel Méndez no le gustaba la baldosa ni el cemento: “Mamita, usted no vaya a estar pavimentando este rancho. La teja nos cobija, la pared nos protege... y esta [la tierra] es la mamá que nos alimenta; la madre tierra nos da mucha energía, mucha fuerza”.

Ercilia Secue aspira profundo y bota el aire muy despacio, sin ruido, mirando hacia el fogón donde arde un trozo de encenillo. Hace un esfuerzo por no llorar. No le gusta. Dice que Salatiel no se ha ido, aunque se lo hayan matado. “Él anda por ahí”. Un humo gris con olor a leña envuelve el lugar. Ercilia toma

por las patas una gallina a la que minutos antes le torció el pescuezo. La acerca al fogón para chamuscarle unas plumitas rebeldes que no alcanzó a arrancar con la mano y se la entrega a una de sus nueras para que la someta al cuchillo.

Alrededor de Ercilia se mueven sus cuatro nueras, dos niños, algunas gallinas y un gato. La cocina es amplia, como acostumbra los nasa, para comer en familia alrededor del fuego, casi siempre, sentados en bancas de madera rústica. Durante y después de la comida hablan de cómo les fue en su jornada de trabajo, de asuntos familiares, de sus ancestros y de la comunidad. Los nasa, sobre todo los adultos, siempre hablan de lo organizativo. Se agrupan para todo: cultivos, cosechas, cría de truchas, arreglar casas y caminos e incluso, alguna vez acompañé a un grupo de hombres y mujeres de la vereda Vichiquí, que recogen leña todos los domingos en la montaña, para favorecer, por turnos, a los miembros del colectivo.

Son casi las doce y los comensales están por llegar. Las mujeres le echan la papa y el plátano al fondo donde preparan el sancocho. Es un almuerzo familiar para hablar de Salatiel Méndez, el mayor de los cinco hijos de Ercilia Secue y Tiberio Méndez. Salatiel fue asesinado en octubre de 2012, un poco antes de cumplir los cuarenta años. Tres hombres lo balearon frente a su esposa. “Él siempre se les paró de frente a los que llegaron con armas al territorio y por eso lo mataron”, dice Ercilia Secue. Tiene sesenta y dos años. Es menuda, como casi todos los nasa, de piel cobriza y ojos achinados. En el apretón de manos y en sus movimientos recios se le nota la aspereza propia de quienes han trabajado toda su vida en las labores del campo.

Su hijo, Salatiel, era el dirigente indígena más reconocido de El Tablazo, una vereda ubicada en un vallecito salpicado por casas de bahareque y de ladrillo, a unos ocho kilómetros del casco urbano de Toribío, en Cauca. Al oriente del poblado la tierra se empina hasta convertirse en una imponente montaña; al occidente corren las aguas color tabaco del río Isabelilla. Su cauce guiaba antiguamente a los indígenas que bajaban por una trocha hasta Toribío, con los caballos cargados de cebolla, café o leña.

Ahora hay una carretera de piedra y cascajo por la que circula un buen número de motos, producto de la bonanza que les deja a algunos indígenas el cultivo de marihuana *cripy*, una variedad a la que le atribuyen una mayor

potencia alucinógena. En el casco urbano de Toribío algunos líderes se atreven a decir, en voz baja, que una poderosa organización de narcotraficantes les compra la droga a los indígenas y la exporta a Argentina, Brasil y Chile.

–Salatiel no quería esos cultivos ilícitos –dice Ercilia Secue–. Él decía que ni la amapola ni la mariguana eran para comer y que le iban a traer daño a la comunidad. Y había gente que no le gustaba lo que mi hijo decía.

Pero otros indígenas sí comulgaban con los planteamientos de Salatiel. Consideraban que sus ideas ayudaban a fortalecer el proceso de resistencia que, por cientos de años, les ha permitido a los nasa recuperar las tierras de sus resguardos y mantener el gobierno, la justicia y la cultura propios; además de una relativa autonomía sobre el territorio que heredaron de sus ancestros y han demostrado defender aún a costa de su vida.

Por esa razón, un grupo de indígenas del resguardo de Toribío se convirtió en seguidor de Salatiel Méndez. “Salatiel nos puso en contacto con la naturaleza. Él nos decía que hay que aprender a interpretarla y a respetarla para mantener la esencia indígena del pueblo nasa, para recuperar las costumbres de nuestros abuelos y defender el territorio”, dice Víctor Casamachín, uno de los indígenas que acompañó a Salatiel, durante seis años, en charlas y caminatas nocturnas por las trochas y carreteras que cruzan la cordillera.

Para los nasa, caminar el territorio forma parte de la educación que reciben desde niños por parte de sus mayores. Durante los primeros meses, el bebé viaja en la espalda de su madre. Ella lo envuelve en un cobertor y se lo amarra al cuerpo con un chumbe, una especie de cinturón, largo y colorido, tejido en hilo con figuras geométricas que representan las montañas, el rayo, los ríos y otros motivos de la cosmogonía nasa. Así, el niño aprende a conocer los olores de la huerta. Siente el viento de los caminos y escucha las arengas de sus dirigentes y las letras de los himnos nasa que pregonan la resistencia milenaria –“y seguiremos peleando, mientras no se apague el sol”– o la certeza de que “por cada indio muerto, otros miles nacerán”.

Quienes más caminan el territorio son los miembros de la Guardia Indígena o Kiwe Thegna, encargados de mantener el control en los territorios nasa. Sus recorridos por los linderos del resguardo duran hasta un mes. Vi-

sitan los lugares sagrados, van a las lagunas o siguen el curso de los ríos y quebradas hasta su nacimiento. Los Kiwe Thegna se forman desde el colegio. En los centros educativos funciona la Guardia Escolar cuya función es respaldar al Cabildo Escolar, organismo de gobierno indígena que también existe en los colegios del resguardo.

Este proceso es acompañado por los thewala que son médicos y guías espirituales. Entre los nasa, los thewala están presentes, incluso, desde antes del nacimiento de una persona. El thewala es un mediador entre lo terrenal y las fuerzas de la naturaleza. Por esa razón, un thewala de El Tablazo acompañó a Ercilia Secue el día en que nació Salatiel. El 2 de septiembre de 1972, Ercilia se fue temprano para el pequeño rancho que su esposo, Tiberio Méndez, construyó en medio del monte para que ella diera a luz a sus hijos. Allí, el thewala hizo un tendido con hierbas medicinales para que la partera depositara al recién nacido. Luego, según la tradición nasa, le cortó el cordón umbilical y lo enterró bajo el fogón. En el mismo rancho están enterrados los ombligos de los cuatro hermanos de Salatiel.

“Nos metíamos a la medianoche”

Con el entierro del ombligo, los nasa crean el primer vínculo atávico con el territorio. Un día antes de mi visita a El Tablazo, Ezequiel Vitonás, un importante líder nasa, me había explicado que “el indio no se va de la zona donde tiene enterrado su ombligo y muchas veces prefiere morir por defender o por recuperar un pedazo de tierra”. Vitonás ha sido gobernador del resguardo, alcalde del municipio y es otro de los dirigentes a quien los demás indígenas acuden en busca de consejo para enfrentar asuntos del conflicto armado y otros temas que van desde la historia política de los nasa hasta la creación de grupos asociativos para producir y cultivar. La Unesco lo considera maestro en sabiduría ancestral.

El ombligo de Ezequiel Vitonás está enterrado en Tacueyó, un resguardo ubicado a veinte kilómetros de Toribío, por una carretera destapada que atraviesa el pueblo y más adelante se divide en dos ramales. Uno baja hacia Santander de Quilichao y otro va para Corinto. Tres días antes de visitar El Tablazo, hice el recorrido de Toribío a Tacueyó.

El pueblo se deja ver después de casi media hora de zangoloteo por una carretera sin pavimentar. La buseta, repleta de carga y pasajeros, se detiene a la entrada, envuelta en una nube de polvo. Dos mujeres indígenas, de bluyín y botas de caucho, se bajan a la carrera. Una gallina negra estira el pescuezo en la mochila de fique que la más vieja carga terciada.

Tacueyó está construido en la falda de una montaña. Tiene unos dos mil habitantes, la mayoría indígenas. Otros quince mil se reparten en 36 veredas. Sobre la calle principal se ven locales de ropa, droguerías, productos agrícolas y mercancía china. En esa calle también funciona un almacén de misceláneos y una productora de lácteos, ambos propiedad de los indígenas. Junto al parque, angosto y triangular, sobresalen algunas casonas de dos pisos, de arquitectura paisa, construidas por los colonos antioqueños que, según cuentan Vitonás y algunos habitantes de Tacueyó, derribaron los bosques a golpes de hacha y expulsaron a familias indígenas que habitaron por generaciones en estas cordilleras.

Según los testimonios de los indígenas, entre los colonos también había santandereanos y tolimenses; pero a todos los llamaban “paisas”. Ezequiel Vitonás, quien bajaba a pie limpio de la vereda La Tolda a la escuela del pueblo, recuerda la advertencia diaria de su madre: “Váyase por la orilla del camino y si oye que vienen las mulas de los paisas métase pal’ monte porque se lo llevan por delante”. Dice que por la trocha que venía de Santo Domingo bajaban hasta cuarenta bestias en hilera, cargadas con bultos de papa y cantinas de leche.

—Se apoderaron de todas estas tierras y del pueblo. En Tacueyó ya no vivían indios; les tocó irse. Solo vivían blancos. Todas estas veredas eran haciendas grandísimas de los paisas. De la tolda para arriba, a López y Santo Domingo, no podían subir los indios —dice Vitonás, quien cuenta que los colonos comenzaron a llegar a principios del siglo pasado en busca del árbol de quina, al que se le atribuyen propiedades medicinales. Sin embargo, la mayor oleada de colonización se vivió hacia 1950, durante la época de La Violencia, cuando miles de colombianos fueron expulsados de campos y ciudades.

Este es un periodo que los nasa consideran trágico para su cultura; de pérdida de autoestima y de resignación, porque muy pocos se resistieron. Ezequiel

Vitonás, Honorio Chate y otros habitantes de Tacueyó cuentan que los profesores se burlaban y los castigaban por hablar nasa yuwe y por acudir al thewala.

–Los profesores les daban *juete* si hablaban nasa yuwe. Los amenazaban y los asustaban con el demonio. Entonces los abuelos no volvieron a hablar nasa yuwe. Por aquí nadie hablaba y tampoco nos enseñaron porque pensaban que eso era malo y que nos iban a castigar –dice Everney Chate, coordinador académico del colegio de la vereda La Playa, a unos cinco kilómetros del área urbana de Tacueyó.

En Tacueyó los indígenas más viejos cuentan sobre el despojo del que fueron víctimas sus abuelos desde principios del siglo pasado. Dicen que los paisas tumbaban monte, trazaban linderos, echaban cercas, construían sus casas y, al cabo de los años, los indígenas terminaban trabajando en las haciendas de los nuevos terratenientes. No les pagaban. Solo les daban permiso para vivir y cultivar en un pedazo de tierra.

Esa situación comenzó a cambiar a principios de los años setenta con la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric. Este organismo impulsó la recuperación de tierras en todo el departamento, amparado en los títulos coloniales de los resguardos.

–Pu'allá arriba, por López y Santo Domingo, nos metíamos a la medianoche unos doscientos o trescientos indígenas a las fincas de los terratenientes a *voliar* azadón en esos potreros. Les pelábamos una vaca y la repartíamos entre las familias más pobres. Hubo varios muertos. Pero seguimos hasta que los dueños se aburrieron y le dieron las fincas en venta al gobierno.

El que habla es Honorio Chate, el líder más reconocido de la vereda La Playa. Participó en decenas de tomas de tierra y enfrentamientos con los escuadrones antidisturbios de la policía que llegaba a desalojarlos. Tiene sesenta años y luce cansado. Está sentado en el patio de su casa, cubierto por una ruana. Son casi las ocho de la noche. A sus espaldas se divisan, en la lejanía, los parches de luces blancas de tres invernaderos de marihuana *cripy*. De algún lado llega, con el viento, el sonido de una cumbia peruana.

Chate fue amigo del padre Álvaro Ulcué Chocué, un sacerdote indígena, párroco de Toribío, asesinado por sicarios en 1984, y a quien los indígenas de

esta zona consideran un mártir de la resistencia nasa. Lo pintan en murales, organizan grupos para promover su pensamiento y le rinden frecuentes homenajes a su memoria.

–El padre Álvaro nos decía que había que recuperar la tierra porque todo esto era nuestro y nosotros nos aferramos a la idea de recuperar, y no se ha cambiado esa idea desde entonces –dice Honorio Chate.

Durante casi dos horas, el líder nasa habló de cómo recuperaron las tierras y de cómo los indígenas de Tacueyó perdieron su idioma hasta el punto de que –según sus cálculos– solo un tres por ciento de la población de este resguardo habla nasa yuwe.

Al día siguiente, muy temprano, regresé a Toribío en una chiva que venía de Corinto.

Las enseñanzas del padre Álvaro

Ercilia Secue, la mamá de Salatiel, también conoció de cerca al padre Álvaro Ulcué Chocué:

–Salatiel tenía unos tres años cuando nos dijeron que venía un padre nuevo para Toribío. De aquí nos fuimos varios a saludarlo el día que llegó. Nunca antes habíamos visto a un padre indígena. Después yo lo acompañaba por todas esas veredas. Yo me *apaba* [echaba a la espalda] al más pequeño y me llevaba a Salatiel de la mano a ayudar en los grupos de oración.

Ercilia cuenta con orgullo que el padre Álvaro le dio la primera comunión a Salatiel y visitaba seguido a los indígenas de El Tablazo. Celebraba misas multitudinarias en las veredas, donde los indígenas comenzaron a verlo como el guía que esperaban desde los tiempos del gran caudillo nasa Manuel Quintín Lame, quien lideró, en 1914, un levantamiento indígena contra los terratenientes caucanos.

Entre los objetivos del padre Álvaro Ulcué –según un documento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, publicado el 10 de noviembre de 2004, con motivo de los veinte años del crimen– figuraban: “Motivar al in-

dígena a salir del alcoholismo propiciado por los blancos para explotarlos con mayor sutileza”; “despertar la conciencia del indígena de tal manera que sean ellos mismos los constructores de su propia historia mediante la toma de sus propias decisiones”; “desterrar el paternalismo que inmoviliza y acompleja a quienes lo sufren, haciéndolos inferiores” y “recuperar las tierras de los resguardos, así como su unidad y cultura, patrimonio de los antepasados y garantía de la apropiación del futuro”.

Los sermones del sacerdote alebrestaban a los indígenas e indignaban a los terratenientes. En Toribío dicen que el padre Álvaro les enseñó a sentirse orgullosos de ser indígenas, de su lengua y de sus tradiciones y, además, fue el alma del Proyecto Nasa, una hoja de ruta que ha ganado reconocimientos internacionales y que guía, a largo plazo, la vida de este pueblo indígena.

No pasó mucho tiempo para que los terratenientes comenzaran a amenazar al padre Álvaro y a las monjas Lauritas. También el Ejército y la policía —dice el documento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz— comenzaron a hostigar al padre Álvaro. A finales de 1982 la comunidad de Toribío y los grupos de oración denunciaron que los terratenientes le habían puesto precio a la vida del sacerdote —agrega el documento—. Terminando ese mismo año, la hermana del religioso, Gloria Ulcué, y su tío, Serafín, murieron baleados durante una operación policial para desalojar a indígenas en la vereda Guayco adentro, en el municipio de Caldonó.

La tensión se mantuvo en aumento, las tomas de tierra, la muerte de indígenas y los enfrentamientos con la policía y el Ejército continuaron en distintos municipios del norte del Cauca. Además, las Farc y el M-19 habían establecido campamentos guerrilleros en las zonas indígenas. Luego apareció el Frente Ricardo Franco (disidencia de las Farc) y el grupo Quintín Lame, conformado casi en su totalidad por indígenas nasa. En los años siguientes, los ataques y hostigamientos a los cuarteles policiales se sucedían con una frecuencia aterradora. Además de la lucha por la tierra, los nasa comenzaron un peligroso pulso con las Farc, que intentaban imponer sus normas a las comunidades, lo cual violaba uno de los preceptos sagrados de este pueblo: la autonomía territorial.

Después de recuperar las tierras altas de sus resguardos, los nasa ocuparon, el 25 de enero de 1984, la hacienda López Adentro, la cual reclamaron como parte del resguardo de Corinto, asignado por la Corona española. La fuerza pública reaccionó de inmediato, según lo registra el investigador social Héctor Mondragón, en el documento *Ardila Lülle frente al pueblo nasa: la caña de azúcar en el norte del Cauca*. Hubo una batalla campal y en medio de los cañaduzales quedaron cinco indígenas muertos y otros 18 heridos. Algunos documentos señalan que después de ese hecho, el padre Álvaro Ulcué celebró una misa en la finca ocupada por los indígenas.

Los presagios sobre la suerte del padre Álvaro se cumplieron el 10 de noviembre de 1984. Dos sicarios le dispararon en las afueras de Santander de Quilichao, a cuarenta kilómetros de Toribío, y huyeron en una moto. Un testigo acusó a dos miembros del F-2 (policía secreta) –dice el documento de la Comisión Intereclesial–, pero se retractó una semana después, luego de recibir amenazas.

“Mataron a mi tío Cristóbal”

–¡Eucha! –saluda un indígena joven que se asoma a la puerta de la cocina. ¡Eucha!, le contestan las mujeres. Tras él ingresan otros indígenas que se distribuyen en las bancas. Algunos portan bastones de madera con cintas verdes y rojas, símbolo del Cric. Verde por la naturaleza y rojo por la sangre de los indígenas asesinados. Los últimos en entrar son cuatro niños con flautas, tambora y un rascador.

Por unos segundos solo se escucha el piar de una parvada de pollos que picotean alrededor del fogón. El sancocho hierve desde hace rato. Hienacú, el perro criollo que acompañaba a Salatiel en sus correrías, se echa junto a la puerta. Ercilia me había contado que Salatiel lo bautizó así porque el animal tiene pelo de hiena y cara de cusumbo. También me había dicho que cuando le mataron a su amo, Hienacú dejó de comer y husmeaba por toda la casa y los montes vecinos.

Víctor Casamachín, un indígena fornido, que se acerca a los cincuenta años, toma la palabra. Es de tez más clara que sus paisanos. Dice que an-

tes de almorzar hay que brindar a los espíritus de los mayores con chicha y chawaswa, una bebida ritual hecha a base de maíz capio. Explica que el fogón donde se preparan los alimentos es en realidad una tulpa, hecha con tres piedras que representan a los espíritus del abuelo, la abuela y el nieto.

La tulpa la construyeron para cumplir con la voluntad de Salatiel, quien quería recuperar la costumbre de reunirse en familia alrededor del fuego.

Víctor Casamachín se acerca a la tulpa y saca de su mochila una manotada de hojas de coca. Se las lleva a la boca y agrega un poco de mambe hecho de mármol. Otros indígenas lo imitan. Mambea la coca durante unos minutos. Antes de hablar abanica el aire con la mano para ahuyentar el humo de la cara:

–Salatiel decía que el nasa, para poder conectarse con el mundo espiritual y ver todo lo que se mueve alrededor, entender e interpretar, necesita tres cosas: el vegetal, que es el que estoy mascando; el mineral, este guambe [mambe], y el líquido, que es la chicha con la que estamos brindando.

Enseguida agarra la totuma de chicha, vierte un poco en la mano y rocía el piso de tierra alrededor de cada una de las tres piedras de la tulpa. Luego hace lo mismo con la chawaswa del calabazo pequeño, lo deposita en el suelo e invita a los niños para que se integren al ritual. Así, cada uno de los asistentes imitamos los movimientos de Víctor Casamachín en este brindis a la familia espiritual allí representada.

Tiberio Méndez, el papá de Salatiel, permanece en silencio en una de las bancas de madera. Tiene setenta y cinco años. Mide alrededor de 1,60. Usa botas de caucho, bluyín, camisa blanca y un sombrero de fieltro, ajado, y de color incierto. Confiesa que no sabe leer y que se le olvidan muchas cosas. Habla poco y a veces prefiere cederle la palabra a su esposa. Antes, cuando estaba joven, Tiberio se ganaba la vida cultivando la tierra. Además, transportaba, a caballo, productos agrícolas y leña hasta Toribío. Ahora permanece casi todo el día en el tul o huerta familiar, donde los Méndez cultivan la mayor la parte de las legumbres y hortalizas que consumen.

Le pregunto a Tiberio si a su padre también le tocó luchar por la tierra. Responde que sí, que su papá y otros tres indígenas se enfrentaron alguna

vez con hombres de los terratenientes y que cuando él estaba pequeño, una vez su papá, Manuel Méndez, se quitó la camisa y le dijo: “Vea, miyo, para que se dé cuenta que no es mentira”.

–¡Papá y usted cómo no se murió con todas esas cicatrices! –recuerda que le dijo.

–Yo creo que me favorecieron los espíritus –le respondió Manuel. Después del despojo de la tierra, de La Violencia de los años cincuenta y de la lucha contra los terratenientes llegó el conflicto armado a estas montañas. De nuevo, los indígenas nasa buscaron formas de resistencia para no abandonar su territorio.

Víctor Casamachín cuenta que un grupo del Sexto Frente de las Farc se instaló en los montes cercanos a El Tablazo. Salatiel fue el primero en decirles que desocuparan el territorio. Muchas veces lo escucharon decirle a la comunidad: “Las armas no traen nada bueno; el que porta un arma está hecho para matar y las armas no son bienvenidas a nuestro territorio porque solo traen destrucción y muerte”. Poco después llegaron los militares y Salatiel mantuvo su posición. Pero un día la guerrilla hirió a dos soldados en una emboscada. Salatiel y otros indígenas ayudaron a evacuar a los heridos hacia el casco urbano de Toribío. Desde ese momento –dicen los Méndez– las Farc lo “cogieron entre ojos”.

Mientras hablamos, Ercilia y sus nueras han servido sendos platos de sancocho con una presa de gallina. Comemos sin protocolo. Con algunos malabares para sostener el plato sobre las rodillas.

Ercilia vuelve a hablar del padre Álvaro y de su primo Cristóbal Secue, uno de los más respetados líderes del movimiento indígena del Cauca, asesinado –según las autoridades indígenas– por milicianos de las Farc. Cristóbal Secue había sido gobernador del resguardo de Toribío y presidente del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric. Lo mataron en 2001 en el municipio de Corinto. Ercilia resume, en pocas palabras, el proceso de muerte y resistencia que ha vivido el pueblo nasa durante muchas generaciones:

–Cuando mataron al padre Álvaro, Cristóbal vino aquí al rancho y me dijo: mataron al padre Álvaro, yo voy a reemplazar, yo no tengo miedo; y

siguió. Y cuando mataron a Cristóbal, Salatiel me dice: mataron a mi tío Cristóbal, yo me voy a ir a reemplazar. Yo no tengo miedo. Voy a seguir los pasos del padre Álvaro y del tío Cristóbal... Y siguió los pasos. Y ahora los hermanos de Salatiel me dicen: no estamos haciendo nada malo. Y ahí siguen trabajando por la comunidad.

Otro de los seguidores de Salatiel, Manuel Tumiñá, un líder de la Guardia Indígena de Toribío, también está muerto. Tumiñá fue asesinado, junto a otro guardia, Daniel Coicué, por un guerrillero de las Farc. La Guardia capturó a los siete guerrilleros involucrados y días después, una asamblea de cinco mil indígenas nasa condenó al homicida a sesenta años de cárcel y a otros cuatro insurgentes a cuarenta años. Dos menores de edad recibieron veinte latigazos cada uno.

Hasta la caída de una hoja

En una de las bancas de la cocina se encuentra Ana Delia Tenorio, la compañera de Salatiel. Se conocieron en la vereda Aguablanca, durante una jornada de trabajo comunitario para sembrar trigo. Ana Delia ha acabado de comer y ahora teje una jigra (mochila) de cabuya. Las mujeres nasa siempre tejen. Aprenden desde niñas. Comienzan con una mochila blanca, muy pequeña, y a medida que van creciendo deben tejer mochilas más grandes y complejas. Cuando consiguen su primer compañero acostumbran tejerle una jigra de fique en señal de compromiso.

Ana Delia cuenta que tuvo tres hijos con Salatiel. Los tres han seguido la tradición nasa. El mayor trabaja en la recuperación del tul o huerta tradicional y las mujeres están vinculadas al Cabildo y a la Guardia Indígena.

Uno de los seguidores más jóvenes de Salatiel es Mauricio Yule. Cuenta que todos los viernes, durante un año, recibieron clases de Salatiel sobre la esencia del nasa. Hablaban de economía y gobierno propios, salud, educación, autonomía, del orgullo de ser nasa, de sus tradiciones milenarias, de la historia política de su pueblo y de los grandes caciques, de la Gaitana, Juan Tama, Manuel de Quilo y Quintín Lame. Al cabo de ese tiempo comenzaron a caminar por la cordillera, todas las noches, hasta la una o dos de la mañana.

–Muchachos, vénganse preparados –les dijo la primera vez.

Ellos llegaron con un calabazo de chicha, las mochilas de hoja de coca y el mambe. Visitaban los sitios sagrados de sus ancestros, se bañaban a la medianoche en las cascadas heladas que se forman entre los riscos y pasaban horas tratando de interpretar el viento y los sonidos de la noche, como seguramente lo hacían sus antepasados antes de que el hombre blanco se asomara por estos filos.

–El indio debe saber interpretar hasta la caída de una hoja –les dijo un día.

Salatiel era cada vez más frentero en criticar a los armados y en la defensa del territorio. Impulsaba un proyecto de cultivos propios y programas económicos locales. Durante tres años –recuerda Ercilia– recibió amenazas. Mauricio Yule y la familia Méndez dicen que el círculo se fue cerrando. Las Farc incrementaron sus amenazas contra varios líderes indígenas, lo que motivó varias denuncias públicas por parte de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acin (Cxhab Wala Kiwe).

–Nos van a matar. Uno de nosotros se va tener que sacrificar –recuerda que les dijo una noche en su manera particular de hablar, influenciado quizá, por las homilías del padre Álvaro Ulcué, a las que asistió decenas de veces cuando era niño.

Salatiel presagiaba que esa mezcla de grupos armados y cultivos ilícitos iba a traer desgracias para la comunidad. De hecho, líderes indígenas de Tacueyó y Toribío afirman que cada vez hay más jóvenes consumidores de marihuana y más predios dedicados al cultivo. Incluso, en la vereda La Playa, en Tacueyó, vi un cultivo de marihuana a menos de diez metros del colegio. El día que visité ese lugar estaban quemando una pila de ripio (lo que queda después de armar los moños) y el olor penetrante del alucinógeno invadía el centro educativo, y un trecho de la carretera donde hay unas seis viviendas.

Ante los riesgos de los cultivos ilícitos y de la pérdida de la cultura propia–avasallada por la sorpresiva bonanza–, los cabildos comenzaron a impulsar la enseñanza de nasa yuwe a niños menores de siete años. También están fortaleciendo las actividades ancestrales. La intención es mantener,

entre los jóvenes, el arraigo por la esencia del pueblo nasa y por la resistencia que los caracteriza.

Los hermanos de Salatiel, uno de ellos con el chaleco, radio y bastón de la Guardia Indígena, quieren que fotografíe una pancarta. Cuentan que la hicieron hace tres años, para un encuentro dedicado a la memoria del padre Álvaro Ulcué y de Salatiel Méndez. Dos de los hermanos la extienden sobre la pared de bahareque del rancho.

Es un *banner* con las fotos de los dos líderes asesinados y una leyenda en nasa yuwe Jxiwkanas wecx ujweka yaatx pucxya Todos sean bienvenidos a ayudarnos a pensar.

A ese encuentro llegaron indígenas de varios resguardos. El Tejido de Comunicación de la Acin registró así la jornada: “Todo el lugar del Tablazo estaba bien organizado, los sitios donde iban las artesanías estaban listos para ser expuestos; los espacios para la gente tenían techo de hojas de cabuya para cubrirse del sol; en los puestos de comidas había pasteles de mejicano –papa cidra–, chachafrito, mote, trucha ahumada, sancocho de gallina, empanadas, papas aborrajadas, carne de cerdo, arracacha frita; los ‘mayorcitos’ habían llegado con semillas propias para compartir e intercambiar; gallinas, pollos, palomas, curíes, chivos, terneros y bimbos fueron intercambiados”.

El día fatídico fue un miércoles. El 3 de octubre de 2012, Salatiel Méndez viajaba para Santander de Quilichao en una motocicleta, junto con su esposa. Ella cuenta que al llegar a la vereda Los Chorros, la moto se descompuso y cuando el líder indígena trataba de arreglarla aparecieron tres hombres y lo acribillaron.

No quiere recordar más detalles. Tampoco quisieron poner un denuncia. “El día que me maten, ustedes no sean enemigos de nadie... no se vayan a poner a demandar”, le había dicho un día a su mamá.

–Él sigue por aquí, caminando con la gente. Hay muchos comuneros que siguen sus enseñanzas, me visitan, no me han dejado sola –dice Ercilia.

Además, cuenta que Salatiel la visita en sus sueños y entablan un corto diálogo. La última vez, ella estaba pelando papas para el almuerzo cuando se le apareció en la puerta.

–¡Mamá, llegué! –le anunció en tono alegre.

–Mijo, yo ya lo iba a ir a buscar.

–Es que estoy trabajando muy lejos, mamá.

Ercilia hace una pausa corta. Toma aire y concluye el relato:

–Y entonces me despierto y ya no está. Y yo digo: ¿Cómo es que mi hijo llegó y se me fue otra vez tan rápido?



Algunos amigos y familiares de Salatiel Méndez en su casa de la vereda El Tablazo. Abajo, izquierda, los padres del líder asesinado, Tiberio Méndez y Ercilia Secue. Foto: José Navia Lame

Referencias

ARCHIVOS Y COLECCIONES DE MANUSCRITOS

Archivo privado de José Navia Lame.

PERIÓDICOS Y REVISTAS

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, (2004), “Álvaro Ulcué Chocué”, en <https://www.justiciaypazcolombia.com/alvaro-ulcue-chocue/>.

El Espectador, (2014, 12 de noviembre), “El legado de Álvaro Ulcué Chocué”, en <https://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-legado-de-alvaro-ulcue-chocue-articulo-527124>.

Mondragón Héctor, (2008), “Ardila Lülle frente al pueblo Nasa: la caña de azúcar en el norte del Cauca”, en: Centro de Cooperación al indígena, Cecoim, y Organización Indígena de Antioquia, OIA, (2008), *La tierra contra la muerte: conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia*.

PUBLICACIONES OFICIALES

Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, (2012), *Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Resistencia y memoria en el Cauca Indígena*.

ENTREVISTAS

Entrevista realizada a Honorio Chate, llevada a cabo en Tacueyó, Toribío, julio de 2017.

Entrevista realizada a Everney Chate, llevada a cabo en Tacueyó, Toribío, julio de 2017.

Entrevista realizada a Sofía Valencia, llevada a cabo en Tacueyó, Toribío, julio de 2017.

Entrevista realizada a Iván Silva, llevada a cabo en Tacueyó, Toribío, julio de 2017.

- Entrevista realizada a Rubén Orley Velasco, llevada a cabo en Tacueyó, Toribío, julio de 2017.
- Entrevista realizada a Julia Silva, llevada a cabo en Tacueyó, Toribío, julio de 2017.
- Entrevista realizada a Rosa Quipo, llevada a cabo en Tacueyó, Toribío, julio de 2017.
- Entrevista realizada a Ezequiel Vitonás, llevada a cabo en Toribío, julio de 2017.
- Entrevista realizada a Félix Escué, llevada a cabo en Toribío, julio de 2017.
- Entrevista realizada a Ercilia Secue, llevada a cabo en El Tablazo, Toribío, julio de 2017.
- Entrevista realizada a Tiberio Méndez, llevada a cabo en El Tablazo, Toribío, julio de 2017.
- Entrevista realizada a Víctor Casamachín, llevada a cabo en El Tablazo, Toribío, julio de 2017.
- Entrevista realizada a Mauricio Yule, llevada a cabo en El Tablazo, Toribío, julio de 2017.
- Entrevista realizada a Manuel Méndez, llevada a cabo en El Tablazo, Toribío, julio de 2017.
- Entrevista realizada a Danilo Méndez, llevada a cabo en El Tablazo, Toribío, julio de 2017.
- Entrevista realizada a Ana Delia Tenorio, llevada a cabo en El Tablazo, Toribío, julio de 2017.



Luz Marina Bernal, con la imagen de su hijo Fair Leonardo Porras
asesinado por el Ejército. Foto: Edward Goyeneche.

Crímenes abyectos*

Por Diana Salinas

Dijeron que era jefe de una organización narcoterrorista, pero Fair Leonardo Porras Bernal era un joven de 26 años que jugaba con carritos y canicas y dormía con su ratón de peluche, tenía discapacidad mental y física, fue asesinado por miembros de la fuerza pública en los llamados “falsos positivos”, en una red criminal tejida en Soacha.

Sentado en una silla, frente al computador, estaba el teniente militar que pronunció la frase. Recibía el informe de un “falso positivo”.

–Eso sí pasó, doctora –le dijo el teniente a la abogada Ana González, quien para ese entonces era contratista del Ejército.

–¿Qué cosa?

–Los “falsos positivos”. El problema fue cuando empezaron a matar a los “bobos del pueblo”. Ahí sí le dolió a la gente.

Era diciembre de 2014. Olía a café y a comida rápida en una oficina provisional del Ministerio de Defensa, diagonal al Palacio de Justicia y a una cuadra de la alcaldía de Bogotá. El tercer piso de un edificio alto, esquinero, de la carrera 8 con calle 12. El coronel Raúl Parra, a cargo de lo que para ese

*Algunos nombres fueron cambiados por seguridad de las fuentes.

momento se llamó Dirección de Asuntos del Contencioso Administrativo del Ejército, DIACA, le solicitó días atrás a ese teniente recibir el balance y las respuestas de todos los procesos jurídicos en curso.

Tanto en las tupidas callejuelas del centro, como en el tercer piso de ese edificio la algarabía alcanzaba su grado de ebullición por el alboroto que provocaba la entrega de los informes jurídicos que había solicitado el coronel Parra. Las abogadas, unas ocho, iban de un lado para otro con documentos. Hablaban en voz alta de los casos. Sobre los puestos de trabajo reposaban carpetas blancas marcadas con los nombres de los demandantes.

Seis años atrás se habían destapado los “falsos positivos” de Soacha. Se trató de la desaparición y ejecución de 19 muchachos por parte de miembros del Ejército Nacional, que fueron presentados como jefes de bandas criminales y guerrilleros. Con el tiempo se supo que los militares lo hicieron a cambio de permisos, primas y ascensos.

Cuando ese teniente, militar, funcionario público, abogado, mencionó a los “bobos” del pueblo, se refería peyorativamente a jóvenes seleccionados por los militares, justamente por su condición de discapacidad. Un patrón discriminatorio denunciado por organizaciones como la Coalición Colombiana por la Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD y el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH. Situación conocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e investigado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

De los 3.700 “falsos positivos” en investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, a la fecha solo hay 10 víctimas identificadas con alguna discapacidad.

Una vez la doctora González escuchó la frase detuvo la rendición del informe en aquella oficina improvisada del centro. La algarabía seguía. Pero ella sintió, de un momento a otro, un silencio ensordecedor.

Ana González recuerda la escena desde su casa. Es agosto de 2017.

—¿Al Ejército le hace falta pedirle perdón a la sociedad colombiana?

La pregunta queda en el aire.

Nacer y morir varias veces en la misma vida

Si se parte del norte camino al sur, Bogotá es una ciudad odiosamente desigual. A la mitad del recorrido los grafitis dejan de hablar para gritar una sinfonía *in crescendo*, cuyo fin son los decibeles de un *heavy metal* apasionado. Son signos de la selva de cemento. Parecen decir: “no nos fuimos aunque nos mandaran al sur”.

San Mateo, la última estación de Transmilenio, aparece después de 15 kilómetros de recorrido. La capital se ha terminado y empieza un municipio reverberante.

Soacha es una ciudad del extrarradio de Bogotá. Tiene 700 mil habitantes, pero son cálculos no oficiales de la actual administración. La proyección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sostiene que hay 527.644 personas viviendo en la cabecera. Sea como fuere, la superpoblación de Soacha es un coctel social de pobreza, personas desplazadas, personas desmovilizadas del paramilitarismo y transeúntes del conflicto. La tensión es latente. En parte alimentada por el estigma y la crónica roja, en parte por el paisaje atiborrado de ladrillo y las calles a medio hacer.

El cielo es una capota de nubes grises. Luz Marina Bernal, la madre de Fair Leonardo Porras Bernal, un joven de 26 años asesinado a comienzos de 2008 por miembros del Ejército, continúa viviendo en el mismo lugar.

Tiene 57 años, los ojos claros, el cabello rizado, largo hasta la cintura. Nació en Turmequé, Boyacá. Se casó en 1980 con Carlos Faustino Porras, un conductor de tractomula. Seis años después se trasladaron a Bogotá. En 1987 toda la familia se radicó en Soacha, en un segundo piso con un gran ventanal.

Para ese momento tenía dos hijos: John Smith y Fair Leonardo. Después nacerían dos mujeres.

Al subir las escaleras del segundo piso donde vive la familia Porras Bernal se abre una sala. Una foto de Fair Leonardo vestido de traje eclipsa la llegada del visitante. Está colgada cerca de una biblioteca. La mirada y la postura es impávida: los mismos ojos azules de su abuelo materno, las facciones finas y los cachetes chapeados.

Sobre una pared exterior de la cocina hay otra foto. En ella está Luz Marina, de 21 años, con su esposo Carlos Faustino Porrás Robayo. La pareja hace un brindis matrimonial. Ella tiene las uñas pintadas de rojo, el cabello recogido en una trenza. Él tiene un saco color crema y una camisa blanca. Ella no tiene puesto un vestido de novia. Luz Marina no lo mira, igual sonrío.

En la sala de la casa ella se sienta en una de las poltronas dispuesta a contar la historia de su hijo. Cuando habla suele mirar la foto de su hijo.

Fair Leonardo nació el 22 de diciembre de 1981, apenas once meses después de su hermano John Smith. Desde muy pequeño se acostumbró a ser el ayudante de los vecinos del barrio, sobre todo en construcción. Su mamá quiso mantenerlo escolarizado, pero no hubo manera.

—Empecé a notar la dificultad que él tenía desde los tres años que lo matriculé en el colegio. Compramos la cartilla Nacho Lee para Leonardo y para John Smith, pero él solamente aprendió a hacer una rayita durante un año. Cuando estaba en casa le encantaba sacar su colección de quinientos muñequitos, de esos que venían en los paquetes de Yupi. Cuando se cansaba de jugar con ellos sacaba la de canicas.

Cae la tarde. Un sonido de bocina de camión inunda el barrio y la casa de Luz Marina. Afuera hay una procesión de buses y carros con imágenes de la virgen del Carmen.

—Doña Luz Marina, ¿usted ha podido identificar cuál es el dolor persistente en todo este proceso, aparte del asesinato de su hijo?

—Lo que más me duele es que las personas que asesinaron a mi hijo sabían que era especial... Su inocencia... Cuando esas personas del Ejército preguntaron por “la mercancía”, porque él era una mercancía para ellos, dijeron: “¿y la mercancía, dónde está?”. El otro militar contestó: “¡ah, el bobito!, el bobito lo tenemos aquí”.

Se agarra las manos como si estuviera rezando y mira hacia la pared donde está la foto de Fair Leonardo. Su voz se quiebra.

—El otro dolor es la sevicia con que lo mataron, ¡hubo una sevicia tan grande!, si ellos sabían que él era un bobito, como le decían, por qué trece

impactos de bala, ¿qué le estaban cobrando a él? Cuando me tocó atestiguar en el juicio, el abogado de uno de los militares, dijo: “¿y si sabía que su hijo era de educación especial, por qué no lo mantenía al pie suyo?”. ¡Porque yo era una madre que respetaba las decisiones de mi hijo, no me avergonzaba de él! Yo era la mujer más feliz cuando me preguntaban: “¿está el “gringo”?, es que él nos va a ayudar a recoger unos escombros”. ¿Por qué yo tenía que meter a mi hijo en una pieza?

Acaba de llegar el marido de Luz Marina. Se saludan. La situación es extraña porque ya no viven en la misma casa. Es una separación reciente, casi producto de todo lo que han tenido que vivir tras el asesinato del hijo. Luz Marina había comentado que al ser don Carlos Faustino conductor de tractomula solo se veían una vez al mes o cada tres meses. Por eso casi nunca está presente en el relato de los sucesos que ella narra. Los hermanos también sostienen que él es muy lejano en sus vidas.

Tras el saludo, ella continúa:

—Y un tercer dolor es la mentira. ¿Cómo un fiscal se pudo reír en el momento cuando llegué a Ocaña?... “¡Ah!, ¿usted es la madre del jefe de la organización narcoterrorista?”, me dijo como en burla. Cuando le expliqué la situación de Fair Leonardo se escudó diciendo que era la versión oficial del Ejército.

—¿Se reprocha algo, doña Luz Marina?

—La ignorancia. Vivía en mi burbuja, porque creía que mi mundo era tener un esposo, cuatro hijos y una nieta. Cuando me reventaron la burbuja fue como si me hubieran dejado muerta en vida y tuve que buscar la manera de sobrevivir en ese mundo desconocido al que me metieron sin pedir ser víctima y mucho menos elegir mi victimario.

El lunes festivo 7 de enero de 2008 Luz Marina vio por última vez a su hijo Fair Leonardo. Vestía camisa y pantalón color caqui. Ese día no jugó con sus carritos ni con sus canicas. Permaneció en casa con toda la familia. Desayunó en su cuarto. Organizó sus colecciones de juguetes. Miró la biblia y se acostó con el tío Luis, un ratón de peluche.

Al día siguiente, 8 de enero, desapareció. A partir de ese momento, todos los lunes, durante siete meses, Luz Marina revisó en los álbumes de Medicina Legal donde aparecen los NN. Nada. Buscó en el sistema penitenciario. Nada. Intentó poner las denuncias por desaparición, pero ninguna entidad las recibió. Avisó a los medios de comunicación, RCN y Caracol. Nada. Preguntó en las calles y carreras del centro. Nada. Durante siete meses nadie dio razón de Fair Leonardo.

El 16 de septiembre de 2008 a las diez de la mañana la llamaron de Medicina legal para que fuera a reconocer a su hijo. Luz Marina de inmediato pensó: “se acabó la búsqueda, Fair Leonardo está muerto”.

El desmadre del Ejército

Hasta ahora son 10. Es el número de víctimas identificadas con alguna discapacidad, que fueron ejecutadas extrajudicialmente por miembros del Ejército, de acuerdo con un “informe sombra” de la Coalición, CDPD. Se le denomina ‘sombra’ por ser un informe alternativo al que presentó el gobierno y porque es construido por la sociedad civil.

En 2016, el informe puso en conocimiento los casos ante ONU, en la Convención sobre los derechos de personas con discapacidad. De las 79 observaciones finales, la número 24 hace referencia al número de víctimas identificadas: “Preocupan al Comité informaciones que indican que personas con discapacidad fueron ejecutados extrajudicialmente y posteriormente reportados falsamente como “guerrilleros” en **diez casos** de víctimas de falsos positivos”.

Los 10 murieron entre marzo de 1997 y abril de 2010 a manos de miembros del Ejército.

La organización Human Rights Watch, HRW, realizó un documento en 2015 sobre los “falsos positivos”. En síntesis cuenta que la Fiscalía investiga 3.700 casos ocurridos entre 2002 y 2008. Entre esos, hay involucrados: 800 miembros de rango inferior del Ejército, 180 batallones, 41 brigadas, 7 divisiones del Ejército y 16 generales.

A los 12 podrían sumarse nuevos casos y llegar a ser cientos. Nayibe Sánchez, Coordinadora del Enfoque Diferencial de Discapacidad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), explica la necesidad de un sistema de información que permita llegar a más casos.

–Si pudiéramos, a través del sistema de información de la Fiscalía, cruzar los ítems de búsqueda: desaparición forzada, ejecución extrajudicial con condición de discapacidad, seguro aparecerían muchos más casos. Pero, por otra parte, también hay que tener en cuenta el alto subregistro, porque hay todo tipo de ideas que hacen que las personas tengan temor o incluso vergüenza de decir que se trataba de una persona con discapacidad.

Sánchez reflexiona sobre el presunto patrón de falsos positivos en condición de discapacidad.

–Los “falsos positivos” son el resultado de las ideas negativas y estigmatizantes que tienen los colombianos asociadas a la discapacidad.

Dicho en otras palabras, los “falsos positivos” revelaron el perverso imaginario de la sociedad colombiana frente a la discapacidad y las enfermedades mentales.

De acuerdo con las características de las víctimas reconstruidas por los fiscales durante el juicio en contra de los asesinos de Fair Leonardo Porras Bernal, los jóvenes seleccionados debían tener poca escolaridad, poca representatividad en la sociedad, provenir de familias humildes sin recursos suficientes para buscarlos y su arraigo debía estar alejado del lugar donde eran ultimados. “Las víctimas debían ser hombres. No niños, no mujeres, no ancianos”, dijo Alexander Carretero, uno de los reclutadores, al referirse en el juicio a las exigencias específicas que le hacían miembros de la Brigada 15 del Batallón Santander, en Ocaña.

Y una más: “Búsqueme en Soacha unos tres indigentes”, le dijo el Sargento Sandro Pérez, del Batallón GR Santander a Pedro Gámez, otro de los reclutadores de los jóvenes de Soacha.

Michael Evans, director de The Colombia Documentation Project, de la National Security Archive, investigó el tema. “El registro más antiguo so-

bre este fenómeno aparece en la colección de los *Archives* en 1990. En un cable aprobado por el embajador de Estados Unidos Thomas McNamara. “Un juez militar que llegó a la escena aparentemente se dio cuenta de que no había agujeros de bala en los uniformes que coincidieran con las heridas en los cuerpos de las víctimas”. En el documento se refiere a un preocupante aumento de violaciones atribuidas al Ejército de Colombia. McNamara cuestiona la versión de los militares de que “habían [dado de baja] a nueve guerrilleros en El Ramal, Santander en junio 7 de ese año”, escribió Evans en sus investigaciones.

En un intercambio de correos para este trabajo periodístico, Evans comenta: “Me pregunto si estaría interesada en documentos sobre el tema más general de los llamados asesinatos ‘limpieza social’ (...)”.

Evans cruzó el patrón con otro fenómeno, la “limpieza social”.

En 2015 el investigador Carlos Mario Perea Restrepo, en su libro *Limpieza social, una violencia mal nombrada*, desarrollado con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional (Iepri), definió el tema: “Grupos de personas encubiertas, a menudo envueltos en las tinieblas de la noche, asesinan a otras personas en estado de completa indefensión. (...) Es una “limpieza” —dicen quienes perpetran esos crímenes—, queriendo significar que se ocupan del acto de remover la inmundicia y la suciedad. Los cuerpos que yacen portan consigo una marca de identidad: habitar la calle, un oficio sexual, delinquir, ser joven popular... Esa identidad —dicen de nuevo los perpetradores— condena y despoja de toda dignidad a las víctimas, reduciéndolas a la condición de mal que es necesario extirpar”.

El sargento Carlos Eduardo Mora, de 33 años, quien perteneció al grupo de inteligencia de la Brigada 15 del Batallón GR Santander, en Ocaña, descubrió la situación. Para este trabajo periodístico Mora acepta conversar vía Skype sobre el tema:

—Como me la pasaba vestido de civil con una maletica universitaria me enteré que allá en el Batallón todos estaban comprados. No sabía hasta qué grado, pero todos tenían negocios con los paramilitares y con la guerrilla.

Así fue como me di cuenta de los “falsos positivos”. Para inicios de 2007 se desató todo, porque en el Batallón se descararon.

Mora hizo la carrera de suboficial del Ejército en la Escuela de Caballería en Bogotá. De ahí, en 2006, pasó a formar parte de la Central de Inteligencia de Ocaña, Cioca.

Ese fue el inicio de un periplo de denuncias que casi le cuestan la vida al sargento. Tras destapar los “falsos positivos”, Mora fue ascendido a sargento y trasladado en 2017 por el Ejército colombiano a Estados Unidos. Durante la conversación se le pregunta a Mora si el patrón de los militares obedece a un tema de “limpieza social”.

–En todo lado la gente dice: “mate a ese ‘man’ porque estaba robando o porque estaba fumando marihuana en el parque”. ¡La gente lo aclama! Y después dicen qué desgraciados, qué miserables por matarlos, pero más del 50 por ciento de la gente piensa que los que son considerados escoria deberían matarlos sin enjuiciarlos y la gente lo pide más cuando son barrios donde hay mucha peligrosidad. Entonces, los militares pensaban que estaban haciendo un servicio social.

Para que este fenómeno, que ya ocurría, se disparara en el Ejército de manera desbocada se necesitó de un incentivo. “Motivos abyectos o fútiles”, dijeron los fiscales en su teoría del caso durante el juicio que hizo justicia a la vida de Fair Leonardo Porras.

La directiva de la muerte

Para principios de 2000 Colombia era un país sumido en el conflicto armado con el paramilitarismo y las guerrillas, especialmente con las Farc y el ELN.

Si se hace el ejercicio de mirar el pasado desde el presente, cuesta trabajo pensar en todo lo que soportó la sociedad colombiana. De acuerdo con los datos recopilados por el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, entre 1958 y 2012 murieron bajo ese contexto de conflicto armado 218.094 personas. De esas, 27.023 fueron víctimas del secuestro y 1.566 de atentados

terroristas. El conflicto dejó como saldo: 1.982 masacres, que dejaron 11.751 víctimas. Otras 25.007 fueron víctimas de desaparición forzada.

Aunque esas cifras aun no eran las del principio de milenio, las estadísticas sí alcanzaban sus puntos máximos. Acabar o no el conflicto fue la medida electoral de los aspirantes a presidente para 2002. Álvaro Uribe Vélez llegó al poder en ese año bajo el lema “Mano fuerte, corazón grande” y en su primer gobierno buscó estrategias para mostrar resultados “positivos”, bajo la idea de acabar con la guerrilla a través del Ejército.

Una de esas estrategias quedó consignada en la directiva ministerial 029, del 17 de noviembre de 2005, revelada por el periodista Félix de Bedout, en La W Radio, a finales de 2008. En los encabezados de página rezaba la palabra: SECRETO. Firmada por Camilo Ospina, un fugaz ministro de defensa.

La ministerial incluyó una escalonada lista de tarifas de recompensas para los militares. El último ítem pagaba hasta \$3.815.000 por la muerte o captura de “cabecillas, miembros de guerrillas, escuadras o rasos responsables materiales de desarrollar y/o apoyar a nivel local acciones terroristas, secuestros, extorsiones, abigeato, actividades de inteligencia, emboscadas, hostigamientos, asalto a poblaciones, ataques e instalaciones militares”. Después se vino a saber que ese ítem, en especial, exacerbó las ejecuciones extrajudiciales.

Como requisito debía existir una orden de combate o captura en flagrancia. Pero, en últimas, una constancia de la realización de la operación y de los resultados obtenidos también servía, según consta en el documento.

Si bien Ospina firmó e implementó la ministerial sin reparo alguno, las prácticas de las recompensas de la ministerial aumentaron en el periodo en que Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa, desde 2006 hasta 2009. La gran paradoja es que Santos logró posteriormente ser el Presidente del país, el ejecutor de los diálogos de paz con las Farc y Premio Nobel de la Paz.

Tres años después de la puesta en marcha de la directiva ministerial, la sede de Medicina Legal en Ocaña, Norte de Santander, reportó un problema sanitario. “Los cuerpos se descomponían en la misma sede de la entidad por la cantidad de presuntas bajas en combate”, dijo en entrevista Gloria Silva, apoderada de víctimas en el caso de Fair Leonardo Porras.

La directiva ministerial fue una especie de caldo de cultivo que alimentó hechos de violencia como el de Fair Leonardo y el asesinato de miles de inocentes que nada tenían que ver con el conflicto armado. La situación avanzó de manera silenciosa hasta que a finales de 2008 estalló el escándalo con la desaparición de 19 jóvenes de Soacha. El 7 de octubre de ese mismo año, el entonces presidente Uribe dijo en alocución y en horario *prime* de la televisión colombiana: “Los muchachos de Soacha no se fueron precisamente a coger café, lo hicieron con propósitos delincuenciales”.

En Soacha, Luz Marina Bernal, la mamá de Fair Leonardo Porras, fue testigo de esas palabras frente al televisor. Se paró indignada y sentenció: “te voy a demostrar que ese discapacitado no fue un delincuente” y tras pronunciar la frase sintió que el miedo que la tuvo paralizada la abandonaba para siempre. Por esa frase las madres de Soacha, incluida Luz Marina, denunciaron a Uribe.

Fue por esos días que, el entonces cabo Carlos Eduardo Mora, denunció con gran eco la situación al interior de la entidad. No acababa 2008 cuando el presidente Uribe no tuvo otro remedio que, tras las denuncias, anunciar la destitución de 27 militares y el retiro del general Mario Montoya, al mando del Ejército desde 2006.

“No fue por dinero”, asegura el hoy sargento Mora. “A los coroneles les convenía presentar bajas en combates para lograr el ascenso a generales”, dice.

Una década después y por orden judicial, el expresidente Álvaro Uribe rectificó la famosa frase, a través de un comunicado: “Si mis palabras ofendieron a las madres les pido perdón. Las madres que me denunciaron no estuvieron en la reunión de la presidencia, aunque mis palabras no [se] refieren a ellas, les pido perdón. En el mensaje de Twitter repetí lo que dije como presidente, que corresponde a lo que escuché en dicha reunión”.

Casi 10 años después, Luz Marina logró su propósito frente al televisor.

Tres momentos antes de morir

Tras la llamada de Medicina Legal, Luz Marina fue a reconocerlo. Pero la familia de Fair Leonardo necesitó ir al día siguiente hasta el lugar para constatar que lo habían encontrado muerto. En la camioneta rumbo a la entidad iban el padre Carlos Faustino, una de las hermanas, Dolly Caterine, el hermano mayor John Smith y Luz Marina. Al llegar al sitio, John Smith presintió la soledad.

—Yo andaba con mi hermano para arriba y para abajo, como trabajaba conduciendo un bus, él siempre me acompañaba. Íbamos a los partidos de fútbol, a hacer compras y desde muy chiquitos fuimos muy unidos. Él era mi sombra.

Ya en la oficina, les advirtieron que las fotos eran fuertes, que si alguno no estaba preparado, mejor se saliera. Todos permanecieron fuertes hasta el momento cuando aparecieron las imágenes en el computador. Se veía a Fair Leonardo tirado en un terreno cultivado, con los ojos abiertos, la mirada perdida y en su cuerpo la mezcla fatal de metal y sangre. El rostro quedó desfigurado por uno de los impactos de bala.

La manera cómo había quedado hirió profundamente a John Smith. Supo, entonces, que su amigo de la infancia ya no estaría nunca más. Un gemido del padre irrumpió el silencio. Los hermanos nunca lo habían visto llorar. De eso se percató Dolly Caterine: “Él nunca llora y ese día la reacción fue llorar”.

John Smith sintió que la vida se había suspendido: “se me acabó el aire y quedé bloqueado... Pensé: ¿quién lo mató?, ¿cómo fue?, ¿qué sucedió?, ¿por qué él?”.

Dolly Caterine no pudo olvidar esas imágenes nunca más. Cuando piensa en su hermano siempre trae entre sus recuerdos la imagen de Fair asesinado: “Nosotros pensamos que mi mamá había visto otra cosa y le insistimos y fuimos todos y ahí nos dimos cuenta que sí era él”.

La única que no estuvo fue Liz Caroline, la hermana menor. “Yo no pude ir porque tenía que ir a trabajar. Pero estaba cuando llamaron a mi mamá de

Medicina Legal para que fuera a ver las fotos y le dije: “vaya, pero yo sé que mi hermano no está muerto”. Ese día llegué como a las ocho de la noche a la casa y me acuerdo tanto que mi hermana abrió la puerta y me dijo: “Leonardo está muerto”, quedé en *shock*, la verdad yo sentí que me iba a morir”, dijo mientras la voz se le quebraba en llanto.

En efecto, tras la llamada que recibió ese 16 de septiembre de 2008, Luz Marina fue la primera de la familia en ir hasta Medicina Legal. Y en el instante en que vio las fotografías de su hijo asesinado evocó, en cuestión de minutos, tres episodios de la vida de Fair Leonardo.

El primero. Cuando tenía cinco meses de embarazo, Luz Marina fue atropellada por una camioneta. Fue trasladada al hospital La Victoria. Allí un médico la examinó y dio por muerto al bebé. Todo se detuvo: la sensación del tiempo, la idea de ocupar un espacio, el corazón de Fair Leonardo.

Otra doctora entró después y la examinó. En ese momento logró sentir un movimiento. Luz Marina no sabe si fue la suavidad de la caricia, en todo caso, el bebé pareció estar vivo. Fair Leonardo nació contra de todo pronóstico un mes después, el 22 de diciembre de 1981, en Bogotá. Llegó de seis meses a este mundo sin romper la placenta. Fuera del vientre de la mamá, el médico tuvo que pincharla para sacarlo del saco. Luz Marina lloraba de emoción. El reloj marcaba las doce del día, en punto.

—Era tan hermoso, con esa carita de él tan perfecta. Cuando llegué a la casa al día siguiente llegó mi cuñado y me dijo: “¿muestre a ver qué le regalaron?”. Él lo miró y dijo: “¡es un puro gringo!”. Ahí surgió el apodo de “gringo”.

El segundo. A los tres meses le dio meningitis. Fair Leonardo pasó siete meses en la clínica San Rafael, en Bogotá. Permaneció conectado a cables y alimentación intravenosa.

Cumplidos los siete meses, Luz Marina lo desconectó y se lo llevó de la clínica. La situación fue azarosa. Era de noche, caía un aguacero torrencial. Envuelto en cobijas se llevó a Fair Leonardo y tomó un taxi. Primero, recogió a su otro hijo John Smith, quien estaba bajo los cuidados de una comadre. Luego, a su casa. Empacó ropa de clima caliente y las cosas del bebé. Sin pensarlo, salió rumbo al departamento del Meta, donde vivía uno de sus

hermanos. Fueron a Villavicencio a una droguería cerca a la cárcel de hombres. Llegaron a las ocho de la mañana y una fila de trescientas personas los esperaba frente al consultorio de Ana Griselda Chávez, una parasicóloga. Ella priorizó al bebé y le pidió acostarlo en una camilla. “¿Usted está consciente que su hijo va a morir?”, le preguntó. Un “sí” quejumbroso salió de los labios de la madre. Entonces, la parasicóloga formuló unas inyecciones para el bebé, que debían ser conseguidas cuanto antes. El hermano de Luz Marina fue presuroso en busca de la fórmula médica. Una vez la obtuvo le entregó los medicamentos a la parasicóloga.

—Ella tenía un platoncito así como metálico y le prendió candela a la fórmula. Me dijo: “ayúdame a abrir estas inyecciones”. Después, como mi hijo no tenía carne, cogió su piel, lo inyectó en una pierna y me dijo: “salga”.

Después de treinta minutos, la parasicóloga le dijo al oído: “su hijo tiene una misión muy grande en este mundo, pero no le puedo decir de qué se trata”. Luz Marina la abrazaba y lloraba. No cayó en cuenta del milagro. Frente a ella, el bebé lloraba. Vivo.

El tercero. Cuando trece impactos de bala acabaron con la vida de Fair Leonardo el 12 de enero de 2008. El episodio definitivo.

Ese día, 16 de septiembre de 2008, sentada en la oficina de Medicina Legal Luz Marina supo que lo habían asesinado cuatro días después de desaparecido.

Se preguntó tantas cosas: y si fue asesinado cuatro días después, ¿por qué hasta ahora me vengo a enterar?, ¿por qué después de ocho meses de estar buscando, Medicina Legal hasta ahora me muestra las fotos?, ¿quién lo mató?, ¿por qué?, ¿por qué tan lejos de casa?, ¿por qué mi hijo?

El plan macabro

He aquí las pruebas recopiladas por la Unidad de Derechos Humanos del ente investigador, presentadas como teoría del caso.

Todo comenzó en familia. En 2005, Alexander Carretero Díaz y su esposa Edith del Carmen Palomino Ballesteros se instalaron en el sector Soacha San Nicolás. Muy cerca de la casa de Fair Leonardo y de las de otros jóvenes engañados por la red criminal. Para empezar, crearon la tienda Los costeños. El lugar servía como punto de encuentro para atraer la “mercancía” solicitada en Ocaña, por miembros de la Brigada 15 del Batallón GR Francisco de Paula Santander.

El soldado Dairo José Palomino, cuñado de Carretero, fue el enlace con el Batallón GR Santander, en Ocaña. También, el soldado Medardo Ríos.

Dos años después del funcionamiento de la tienda, Carretero conoció a los hermanos Ender Obeso Ocampo, *Pique*, y Uriel Ballesteros, *Pocho*, ambos primos de su esposa. Pedro Gámez, otro reclutador, vivía a tres cuadras de la tienda.

Mientras, Fair Leonardo ayudaba de vez en cuando a Carretero a vender empanadas en el barrio y en la fábrica Alfagres, frente a la tienda.

Días antes al martes 8 de enero de 2008, una llamada del soldado Palomino pidiendo “mercancía” a *Pique* inició la estrategia para desaparecer y matar a Fair Leonardo. Cuando llegó el martes, Carretero llamó hacia el mediodía a la casa de “gringo” para pedirle que lo ayudara a vender empanadas. La llamada la contestó el hermano, John Smith y lo comunicó con el reclutador. Era la carnada para que “gringo” saliera de su casa hacia la tienda Los costeños. En efecto, “gringo” fue al encuentro y desde entonces su familia no supo más de él.

En el relato de Carretero no se sabe qué hizo con Fair Leonardo hasta el otro día. Lo cierto es que el 9 de enero, a las 10:15 de la noche, Carretero y Fair Leonardo viajaron en un bus de la empresa Brasilia rumbo al departamento de Norte de Santander.

Llegaron a Aguas Claras, en Ocaña. Allí se encontraron con Pedro Gámez. Se hospedaron en las residencias Santa Clara. El jueves 10 de enero vieron televisión todo el día. Fair Leonardo permaneció toda esa tarde y la noche en un billar, propiedad del soldado Palomino. Hicieron lo mismo el 11 de enero. Aprovecharon también para comprarle ropa. Todos los gastos los pagó Carretero.

El viernes 11 de enero a las 7:30 de la noche una moto DT blanca, sin placas, otra azul y una camioneta Trooper vino tinto, placas BIA 306, con vidrios polarizados, esperaban a Pedro Gámez y a Uriel Ballesteros *Pocho* fuera del hotel.

Le quitaron los documentos a “gringo”, también el celular.

Carretero condujo la moto blanca con Fair Leonardo de parrillero. Llegaron a la vereda el Tabaco del municipio de Ábrego, a veintitrés kilómetros de Ocaña. En un camión de la tropa del Ejército venían el teniente Diego Aldair Vargas Cortés, el cabo segundo Carlos Manuel González Alfonso y los soldados Carlos Antonio Zapata Roldán, Ricardo García Corzo y Richard Contreras Aguilar. Los militares armaron un retén y detuvieron la moto sin placas: “¿Documentos?”.

Como no los tenía, lo apartaron. Lo llevaron hacia un cultivo de tomate. Carretero dio la vuelta y se fue. Entre las dos y las dos y treinta de la madrugada sonaron trece disparos en la vereda El Tabaco. El cultivo quedó intacto. El espacio abierto. Vacío. Mudo.

En las fotos forenses se observa a Fair Leonardo con una herida letal en la barbilla. Según dijo Roberto Bux, un perito internacional que analizó la trayectoria de la bala, estaba de rodillas y sus ojos miraban en dirección al asesino.

Operación Soberanía, así titularon el falso combate. El informe de la misión de operaciones fue firmado por el teniente Diego Aldair Vargas Cortés, comandante del pelotón Búfalo 1, del plan Meteoro. “En el cumplimiento del deber”, escribió a mano Vargas Cortés, con error ortográfico y todo.

En el libro de programas del Batallón quedó registrado el combate el 12 de enero de 2008 a las 2:20 de la madrugada “Sostuvieron combates contra terroristas, bandas criminales al servicio del narcotráfico, los cuales se encontraban extorsionando, intimidando en el sector”. Pasada la escena, los militares plantaron un arma 9 mm en la mano derecha de Fair Leonardo. Ni siquiera notaron la falta de destreza del lado derecho de su cuerpo.

Después de las seis de la mañana avisaron al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía para hacer el levantamiento. En el acta de actuación del primer respondiente, la víctima fue sepultada como NN.

A las siete de la mañana el mayor Marco Wilson Quijano Mariño firmó la “Orden semanal No. 003 de la compañía motorizada de control vial No. 03, división II”, en la que felicitó a todos los soldados por los excelentes resultados de esa madrugada. Incluyó una perversa frase de saludo: “Quien no sirve para servir no sirve para vivir”.

Quijano Mariño tenía al mando la compañía de control vial Meteoro No. 3, a cargo de las unidades Búfalo 1, 2, 3. Unidades integrantes de la Segunda División del Ejército de Bucaramanga, bajo las órdenes del general José Joaquín Cortez Franco, destituido a finales de 2008 por estos hechos.

Pagaron la recompensa de la directiva ministerial. El 30 de enero de 2008, el soldado Dairo José Palomino giró desde Tibú hacia Ocaña \$1.070.000.

Quijano Mariño adquirió una casa en un lujoso condominio de Cúcuta, Norte de Santander, el 27 de agosto de ese mismo año.

5449860001135200880006

Es de día. Bogotá se levanta con 7º de temperatura. La oficina del Juzgado 44 Penal del Circuito está cerrada, como todas las del Bloque C y del piso tercero del Complejo Judicial Paloquemao. Diez minutos después aparece la jueza Sonia Castillo.

–Tuvimos una especie de suerte de que el Consejo Superior de la Judicatura tuviera la voluntad política para que los jueces se quedaran solo resolviendo esos casos.

–¿A qué se refiere?

–Cuando hubo toda esa presión de organismos internacionales, el gobierno dijo “sí, hagan lo que sea que aquí les damos el presupuesto”. Hubo trabajo de la mano del Consejo Superior de la Judicatura y la Presidencia de la República.

La justicia marcó el proceso en contra de los militares responsables del asesinato de Fair Leonardo con el radicado 5449860001135200880006. Es tan conocido el serial, que las personas que atienden en el archivo de los juzga-

dos lo saben de memoria, porque en los últimos nueve dígitos “200880006” está el año y la marca del proceso. “Ese es el de los “falsos positivos”, dicen sin necesidad de chequear.

El Proceso marcado con el serial llegó al despacho de la jueza Sonia Castillo en 2010, quien para ese momento fungía como Jueza Segunda Penal de Cundinamarca.

El juicio terminó en 2012. La sentencia fue apelada al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Un año después fue ratificada por ese Tribunal. En 2014 la sentencia quedó en firme en última instancia en la Corte Suprema de Justicia.

El mayor Marco Wilson Quijano Mariño fue condenado a 51 años de prisión. El teniente Diego Aldair Vargas Cortés a 52 años. Los demás a 35 años de prisión. Todos fueron condenados por los delitos de desaparición forzada, homicidio agravado, falsificación en documento público y concierto para delinquir. El Tribunal de Cundinamarca declaró el asesinato de Fair Leonardo como delito de Lesa Humanidad.

—¿Por qué doña Luz Marina Bernal, la madre de Fair Leonardo, dice que nunca va a saber toda la verdad?

—Es que la verdad nunca se va a llegar a saber, porque hay una verdad jurídica que surte sus trámites y por obvias razones tiene una estructura jurídica. Esa verdad que alguien quiere conocer digamos, de principio a fin, no se da. Además, entre más se demoren los procesos más lejos la verdad. Creo que en este caso se logró reconstruir bastante.

Gloria Silva, representante de las víctimas en el juicio, aporta otro detalle acerca de esa sed de verdad.

—Los militares rindieron declaración en la Justicia Penal Militar (JPM) y ahí contaron su versión de los hechos. Qué es lo que pasa, esas versiones no podían ser tenidas en cuenta en el juicio para ningún efecto, porque si bien eran válidas conforme a la ley que rige la JPM, no eran válidas para el sistema penal acusatorio, porque conforme a la disposición de la Ley 906 guardaron silencio.

Gloria coincide con la jueza Sonia Castillo: “La verdad es como un caucho, tiene un límite”.

En minutos, el despacho de la jueza se vuelve una oficina transitada. La mañana se abre en Bogotá.

–Hubo una cosa muy *sui generis*, no sé si tú supiste y es que a los de menor rango no los dejaron aceptar cargos. Con estas pruebas, esas personas debieron haber aceptado para que la pena fuera más benigna.

La jueza Castillo plantea un tema crucial.

La estrategia de la Fiscalía, de “hacer cantar a los militares de bajo rango” para llegar a la cadena de mando y así llegar a la responsabilidad de los generales y coroneles, prendió las alarmas en el ministerio de defensa. En respuesta, crearon Fondetec. Un fondo del Ministerio de Defensa con recursos para la defensa técnica de los militares. En especial para los involucrados en los “falsos positivos”. En el ministerio tuvieron la idea de proteger especialmente a los soldados rasos para evitar que se volvieran testigos de la Fiscalía. La jueza continúa la conversación, como si pensara en voz alta.

–Ahora los militares implicados se irán para la Justicia Especial para la Paz [JEP].

La JEP es el nuevo mecanismo de justicia producto de los acuerdos de paz para juzgar los crímenes del conflicto armado con la guerrilla de las Farc. Los militares implicados en “falsos positivos” esperan la implementación para ingresar al nuevo sistema. En parte porque en la JEP no se juzgará la cadena de mando.

Queda una última instancia para las víctimas. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene un reporte de 29 altos oficiales, implicados en ejecuciones extrajudiciales. Si la justicia ordinaria o la JEP no juzgan los casos sí lo haría la Corte Penal Internacional.

Son las nueve de la mañana. El ruido del tráfico de la ciudad se cuela por el ventanal del despacho. El equipo de Sonia Castillo trabaja a full y ella, entre pregunta y pregunta, firma documentos.

—¿Qué le queda por aprender al Ejército?

—Ellos deben tener el compromiso con Colombia, no solamente con su institución. La institución hace parte de todo el andamiaje y ellos tienen una función constitucional que tiene que estar por encima de sus propios intereses.

Coraje

En otro lugar, en otro momento, al sur, en la casa de los Porras Bernal el tiempo al fin dejó de estar suspendido. Se nota en los títulos de los libros de la biblioteca que la búsqueda ya pasó. Así como la incertidumbre de saber si Fair Leonardo aguantó hambre o frío. Ahora la casa y sus libros hablan de derechos humanos, de justicia, de mujeres líderes. Se nota que una nueva vida inició para todos, porque sobre la mesa comedor están los atuendos de las obras de teatro en las que Luz Marina hace catarsis. En su presente hay viajes a Europa y Estados Unidos cual vocera de la historia de su hijo como un sino de una tragedia que busca detener eternamente. En Youtube quedó el rap con el que una de las hermanas de “gringo” plantó los hechos en la memoria musical de la web. La habitación que fue de Fair Leonardo se desvaneció en las circunstancias del presente de la familia Porras Bernal.

John Smith, el hermano mayor, lo ve todo el tiempo, como una ilusión que rápido se desvanece y lo deja aturdido: “cuando estaba trabajando tuve unas pequeñas recaídas porque lo veía en todo lado”. Tras la ausencia de su hermano se fue de la casa. Pero las amenazas que llegaron por las investigaciones judiciales recayeron directamente en él. Hasta que Luz Marina decidió que solo ella se haría cargo. John Smith regresó a casa y ahora vive con el padre, Carlos Faustino.

—A veces la soledad me afecta, poco a poco he aprendido a asimilar que no está con nosotros, pero no puedo decir que eso quedó en el pasado. Sigo teniendo recaídas, lo sigo viendo en todas partes, como un fantasma.

Dolly Catherine, otra de las hermanas, siente que a partir de ese suceso la vida cambió para siempre: “él era nuestra unión como hermanos, ahora cada

uno vive su vida aparte. Él era el que estaba pendiente de todos y la ausencia de él nos distanció mucho”, comenta.

La menor, Liz Caroline, aún no lo acepta. “Esta es la hora en que yo no creo que él está muerto. Nunca lo vi muerto, sabía que estaba en ese cajón pero prefería conservar la imagen de mi hermano tal como yo lo conocía”. Ella escribió y dejó para siempre una canción de rap llamada, Lágrimas. Fue la manera de tramitar el dolor.

Y el padre Carlos Faustino siguió lejano y ausente por su trabajo, en el que se refugió tras el asesinato de su hijo.

En cambio, la vida de Luz Marina se partió en dos. Después del asesinato de Fair Leonardo nació una nueva madre y mujer.

–Para mí este proceso de investigar unos crímenes de Estado, de “falsos positivos” a lo largo y ancho del país me ha generado mucho dolor, mucha tristeza, mucha indignación. También mucho compromiso y cambió mi vida al cien por ciento. Asumí una responsabilidad de lucha, de búsqueda de la verdad, de la justicia y creo que me convertí en una mujer con mucho coraje.

Tanto así, que en 2016 fue postulada para el Premio Nobel de la Paz. Sentada en la misma poltrona de la sala, en aquella casa de Soacha, Luz Marina detiene la entrevista y dice una frase que sorprende. Quizá la frase final.

–Venga le muestro por qué Fair Leonardo está vivo.

Se levanta del asiento, va hacia la mesa comedor. Trae una cajita azul. Dentro hay un cubo de vidrio con una imagen de Fair Leonardo. Al darle vueltas con su mano, la imagen parece girar sola. Parece tener vida propia.

–¿No le parece que está vivo?

En memoria*

1. Alexander Quirama Morales. Ejecutado extrajudicialmente el 17 de septiembre de 2008, por miembros del Batallón de Infantería No. 1 General Simón Bolívar, en Chivor, Boyacá. Discapacidad: trastorno bipolar.

2. Ebin David Patermina. Ejecutado extrajudicialmente el 8 de agosto de 2007, por tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta, en Chinú Córdoba. Discapacidad: cognitiva. Menor de edad.
3. Fabio Nelson Rodríguez. Ejecutado extrajudicialmente el 18 de marzo de 2005, por miembros del Batallón de Infantería No. 32, en Buriticá Antioquia. Discapacidad: auditiva.
4. Fair Leonardo Porras Bernal, de 26 años. Ejecutado extrajudicialmente el 12 de enero de 2008, por miembros de la Brigada 15 del Batallón Santander, en Ocaña. Discapacidad: cognitiva.
5. Genaro Potes. Ejecutado extrajudicialmente el 26 de mayo de 2007, por miembros del Batallón 21 Vargas, en El Castillo, Meta. Discapacidad: cognitiva.
6. Gonzalo de Jesús Agudelo. Ejecutado extrajudicialmente el 11 de diciembre de 2002, por miembros del Batallón de contraguerrilla No. 4 Granaderos, en Campamento, Antioquia. Discapacidad: física.
7. Heliberto Guerra. Ejecutado extrajudicialmente el 29 de marzo de 1997, por miembros de la Brigada 17 del Batallón Vélez, en San José de Apartadó, Antioquia. Discapacidad: “desorden mental”.
8. Jorge Luis Villanueva López. Ejecutado extrajudicialmente el 6 de noviembre de 2007, por miembros del Batallón La Popa de Valledupar, en Guatapurí. Discapacidad: trastorno bipolar. Habitante de calle.
9. José María Valencia Morales. Ejecutado extrajudicialmente el 10 de abril de 2010, por miembros de la escuadra de contraguerrilla del Batallón de Artillería No. 4, en El Peñol, Antioquia. Discapacidad: “desorden mental”.
10. Luis Carlos Zuluaga. Ejecutado extrajudicialmente el 15 de marzo de 2004, por soldados del grupo de Caballería Mecanizada No. 4 Juan del Corral, Guarne, Antioquia. Diagnóstico médico: epilepsia.
11. Luis Francisco Pamplona Imbacuen. Ejecutado extrajudicialmente el 16 de diciembre de 2007, por miembros del Batallón de Infantería Bárbula, en la vía Bogotá- Medellín. Discapacidad: auditiva.

12. Roger Acero Hernández. Ejecutado extrajudicialmente el 24 de febrero de 2009, por miembros del Pelotón Guerrero 3, de la compañía del Batallón de Infantería No. 44, en Aguazul, Casanare. Diagnóstico médico: osteoporosis.

*La lista fue reconstruida a partir del artículo “Diez crímenes aberrantes del Ejército”, publicado en El Espectador el 6 de agosto de 2016. Agradecimientos especiales a la periodista María José Medellín Cano por compartir información y al Colectivo Orlando Fals Borda, que facilitó los datos del caso de Genaro Potes. El caso de Alexander Quirama Morales se sumó a la lista y fue encontrado a partir de la búsqueda de información en Internet.



En el marco de la conmemoración de Fair Leonardo Porras joven asistente escribe en su cuerpo para manifestar su posición política. Foto: Daniel Sarmiento para el CNMH.

Referencias

ARCHIVOS Y COLECCIONES DE MANUSCRITOS

Archivo privado de la periodista María José Medellín Cano donde se encuentra la relación de casos de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” con enfoque en discapacidad.

Archivo privado de Gloria Silva, abogada del caso Fair Leonardo Porras Bernal.

Archivo privado de la jueza Sonia Castillo en el caso de Fair Leonardo Porras Bernal.

Fiscalía, Unidad Nacional de Derechos Humanos, Grupo de Investigaciones de Derechos Humanos y DIH y Grupo Policía Judicial CTI, Archivo documentos militares, informe.

Human Rights Watch, (2015, junio), Informe, *El rol de los altos mandos en falsos positivos*.

Informe Pericial Équitas, (2010, 10 de septiembre), *Segunda autopsia del cuerpo del Sr. Fair Leonardo Porras Bernal*.

Sánchez Nayibe Lizeth, (2017, mayo), *Documento de avance sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de UN sobre víctimas con discapacidad desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente por agentes del Estado*, documento de trabajo escrito para el enfoque diferencial de discapacidad.

Unidad Nacional de Derechos Humanos, Grupo de Investigaciones de Derechos Humanos y DIH y Grupo Policía Judicial CTI, Informes Fiscalía, presentación caso Soacha.

Unidad Nacional de Derechos Humanos, Grupo de Investigaciones de Derechos Humanos y DIH y Grupo Policía Judicial CTI, Registro fotográfico de los hechos, caso Soacha.

PERIÓDICOS Y REVISTAS

Caracol Radio, (2014, 15 de agosto), “Falso positivos de Fair, un joven de Soacha con síndrome de Down”, en http://caracol.com.co/radio/2014/08/15/judicial/1408103400_369362.html.

- Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, (2016, 22 de febrero), “Un Nobel de Paz por la memoria”, en <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/un-nobel-de-paz-por-la-memoria>.
- Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, (2015, 19 de septiembre), “Madres de Soacha”, en <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/madres-de-soacha>.
- Documental “Falsos positivos” (2009) dirigido por Simone Bruno y Dado Carrillo, en <https://www.youtube.com/watch?v=Srxt7bGBsr4>.
- Documental “Retratos de Familia”, (2013), dirigido por Alexandra Cardona Restrepo, en <https://www.youtube.com/watch?v=kBwxIAaUy5o>.
- El Espectador, Colombia 2020, (2017, 9 de julio), “29 generales y coroneles, en la mira de la CPI por ejecuciones extrajudiciales”, en <http://colombia2020.elespectador.com/jep/29-generales-y-coroneles-en-la-mira-de-la-cpi-por-ejecuciones-extrajudiciales>.
- El Espectador, (2016, 6 de agosto), “Diez crímenes aberrantes del Ejército”, en <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/diez-crimenes-aberrantes-del-ejercito-articulo-647681>.
- El Espectador, (2016, 29 de marzo), “No quiero verlos vestidos como militares en las audiencias”: madre de Soacha, en <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/no-quiero-verlos-vestidos-militares-audiencias-madre-de-articulo-624337>.
- El Colombiano, (2017, 3 de abril), “21 militares, condenados por “falsos positivos” de Soacha”, en <http://www.elcolombiano.com/colombia/condena-a-coronel-ricon-amado-por-falsos-positivos-de-soacha-BC6271065>.
- El malpensante, (2014, diciembre), “Los positivos del cabo Mora”, edición No. 159, en http://www.elmalpensante.com/articulo/3266/los_positivos_del_cabo_mora.
- El Tiempo, (2017, 19 de mayo), “Obligado, Uribe se retracta con las madres de Soacha”, en <http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/falsos-positivos-alvaro-uribe-se-retracta-de-senalamientos-contra-hijos-de-las-madres-de-soacha-90076>.
- El Tiempo, (2012, 31 de marzo), “Condenan a 6 militares por asesinato de joven con retraso mental”, en <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5323721>.

- El Tiempo, (2017, 10 de agosto), “Historias que no deberían repetirse en Colombia: Falsos positivos”, en <http://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/historia-de-un-falsos-positivo-de-soacha-118634>.
- Fiscalía General de la Nación, (2014, 12 de noviembre), “Fiscalía pide máxima condena contra oficiales del Ejército Nacional por falsos positivos”, en <http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-pide-maxima-condena-contra-oficiales-del-ejercito-nacional-por-falsos-positivos/>.
- Revista Semana, (2009, 1 de julio), “Los “falsos positivos” son una práctica vieja en el Ejército”, en <http://www.semana.com/opinion/articulo/los-falsos-positivos-practica-vieja-ejercito/98864-3>.
- Revista Semana, (2009, 16 de enero), “Desaparecidos en Bogotá, muertos en combate en Boyacá”, en <http://www.semana.com/nacion/conflicto-armado/articulo/desaparecidos-bogota-muertos-combate-boyaca/99137-3>.
- Revista Semana, (2017, 7 de octubre), “Generales Rodríguez y Lasprilla deben ser removidos”: Vivanco”, en <http://www.semana.com/nacion/articulo/jose-miguel-vivanco-hrw-corte-penal-internacional-tras-la-pista-de-generales/531982>.
- Soacha Ilustrada, “Condenados 21 militares por el caso de “Falsos positivos” de Soacha”, en <http://soachailustrada.com/tag/coronel-gabriel-de-jesus-rincon-amado/>.
- The National Security Archive, (2009, 6 de enero), “Body count mentalities” Colombia’s “False Positives” Scandal, Declassified, en <http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB266/index.htm>.
- Verdad Abierta, (2015, 11 de mayo), “La peregrinación al jardín de la vida”, en <http://www.verdadabierta.com/desde-las-regiones/5756-la-peregrinacion-al-jardin-de-la-vida>.
- Verdad Abierta, (2015), “Especial Falsos Positivos”, en <http://www.verdadabierta.com/especiales-v/2015/falsos-positivos/>.

PUBLICACIONES OFICIALES

Consultas en Rama Judicial www.procesos.ramajudicial.gov.co

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Decisión sobre la admisibilidad de las demandas de casación presentadas por el representante del Ministerio Público y los defensores del teniente DIEGO ALDAIR VARGAS CORTÉS, del cabo CARLOS MANUEL GONZÁLEZ ALFONSO y de los soldados profesionales RICHARD RAMIRO CONTRERAS AGUILAR, RICARDO GARCÍA CORZO y CARLOS ANTONIO ZAPATA ROLDÁN, miembros del Ejército Nacional, contra la sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, por cuyo medio se confirmó parcialmente la proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, que los condenó, junto al mayor[®] de la misma fuerza MARCO WILSON QUIJANO MARIÑO, como coautores del delito de homicidio agravado, además emitió condena contra los mencionados oficiales por la conducta punible de desaparición forzada agravada, y al teniente VARGAS CORTÉS también lo declaró penalmente responsable por el ilícito de falsedad ideológica en documento público; en tanto que revocó la absolución que por el delito de concierto para delinquir agravado cobijó a todos los procesados en mención, y aquella que por el delito de desaparición forzada se profirió a favor del suboficial y de los soldados profesionales citados.

Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio, (2012, mayo 10), Acción de Reparación Directa, caso Genaro Potes.

Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, Sentencia del Proceso: 5449860001135200880006 y los procesados: mayor en retiro Marco Wilson Quijano Mariño, teniente Diego Aldair Vargas Cortés, cabo segundo Carlos Manuel González Alfonso, los soldados profesionales Carlos, Antonio Zapata Roldán, Ricardo García Corzo y Richard Contreras Aguilar. Por los delitos de Desaparición forzada y otros.

Ministerio de Defensa, (2005), *Directiva ministerial permanente No. 29 de 2005*.

Organización de las Naciones Unidas, ONU, (2016, 31 de agosto), Informe. *Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad*.

Registros de inmuebles en la Oficina de Instrumentos Públicos del mayor Marco Wilson Quijano.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala penal, Decisión del Proceso: 5449860001135200880006 y los procesados: mayor en retiro Marco Wilson Quijano Mariño, teniente Diego Aldair Vargas Cortés, cabo segundo Carlos Manuel González Alfonso, los soldados profesionales Carlos, Antonio Zapata Roldán, Ricardo García Corzo y Richard Contreras Aguilar. Por los delitos de Desaparición forzada y otros.

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, (2015), *Bitácora Diaria de Eventos*. Semana comprendida entre el 16 y el 22 de agosto de 2015.

ENTREVISTAS

Entrevista realizada a Ana González, llevada a cabo en Bogotá en agosto de 2017.

Entrevista realizada al sargento Carlos Eduardo Mora, vía Skype, llevada a cabo el 11 de agosto de 2017.

Entrevistas realizadas a la familia de Fair Leonardo Porras, vía telefónica, llevadas a cabo en septiembre de 2017.

Entrevista realizada a la abogada Gloria Silva, llevada a cabo en Bogotá el 18 de julio de 2017.

Dos entrevistas realizadas a Héctor Arley Quirama, llevadas a cabo en Bogotá el 22 y 31 de julio de 2017.

Cuatro entrevistas realizadas a Luz Marina Bernal, llevadas a cabo en Soacha entre julio y agosto de 2017.

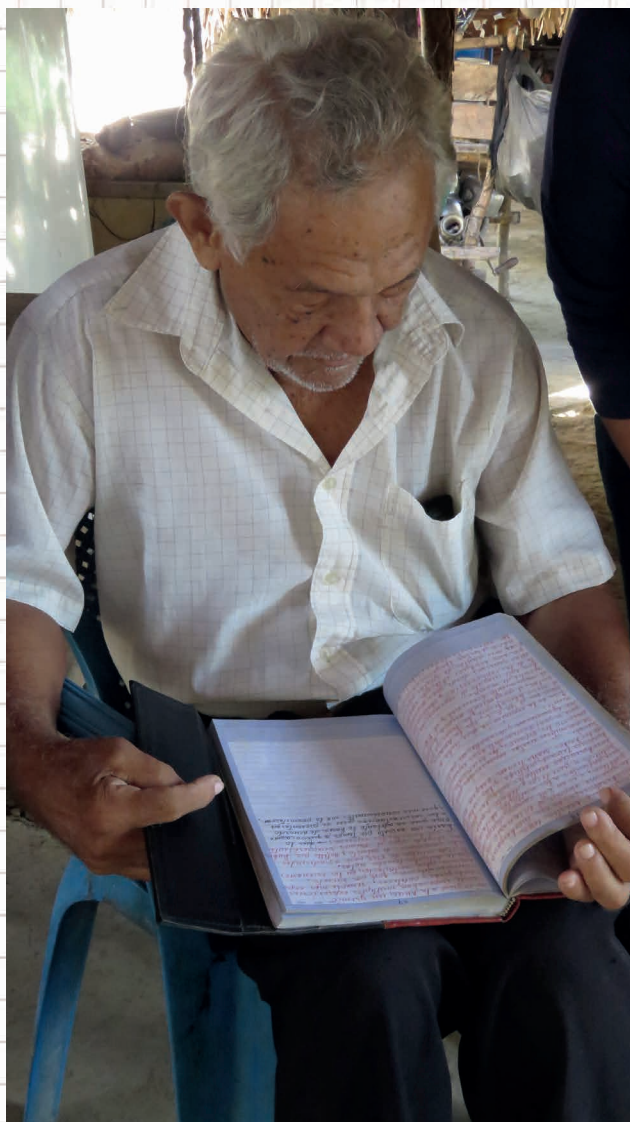
Entrevista realizada a la periodista María José Medellín Cano en julio de 2017.

Intercambio de correos con Michel Evans, llevados a cabo en agosto de 2017.

Entrevista realizada a Nayibe Sánchez, llevada a cabo en Bogotá el 2 de agosto de 2017.

Entrevista realizada a Pablo Cala, jefe de prensa del Colectivo de Abogados Fals Borda, en agosto de 2017.

Entrevista realizada a la jueza Sonia Castillo, llevada a cabo en Bogotá el 2 de agosto de 2017.



Con ocho décadas en sus espaldas, Jesús María sigue escribiendo y revisando diariamente sus textos. En sus manos está el manuscrito de su autobiografía, en espera de un editor que la publique. Foto: Sandra Meléndez.

El guardián de los Montes de María

Por Martha C. Romero-Moreno

La región de los Montes de María es de tradición agrícola y campesina y ha sufrido las desigualdades con la tierra y la violencia, que llevó a que férreos campesinos conformaran la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc-Línea Sincelejo, y otras organizaciones de lucha. “Chucho” Pérez conformó un archivo de documentos sobre la violencia, sus luchas campesinas y los problemas de la tierra en la región.

Una de las principales causas de la larga duración del conflicto armado en Colombia es la lucha territorial. Y uno de los lugares que sufrió el conflicto por la tierra fue la región Caribe, en especial los Montes de María. En esta zona nació Jesús María Pérez Ortega, un hombre que ha dedicado su vida a defender el territorio. Para campesinos como él, el territorio está asociado a la comunidad, al parentesco, a la lucha compartida, a la solidaridad económica, política y cultural, y sobre todo, a la resistencia ante la adversidad.

Para Soraya Bayuelo, directora del Colectivo de Comunicación Montes de María Línea 21, Jesús “Chucho” Pérez, encarna el legado de la lucha campesina. Es un cultivador del campo que sin haber recibido ninguna instrucción académica formal quiso conservar el registro de las actividades de las organizaciones campesinas en manuscritos, actas, fotografías y libros que permitieron construir la memoria histórica.

Ahora, Jesús es frecuentado en su casa de Palmito, Sucre, por investigadores, académicos, comisiones institucionales y estudiantes. Ven en él un libro vivo que guarda en su memoria y en sus archivos gran parte de la historia de más de cincuenta años de la lucha campesina de Colombia. Los archivos que defendió contra la persecución y el olvido hoy son el “Fondo Jesús María Pérez Ortega”, disponible en el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Llegar a su casa requiere tomar la carretera Troncal en el sitio de división entre la vía para Barranquilla y Magangué, llamado El Bongo. Se avanza hasta el corregimiento de Hatillo, marcado en su entrada por un tanque elevado que hace las veces de acueducto del lugar. Y desde ahí se prosigue en línea, como en casi todos los caseríos de la sabana, hasta encontrar a Palmito, la vereda que lleva el nombre de la finca original de los ancestros de Jesús Pérez. El camino es polvoriento y se asoman en la vera piedras redondas como balones, que por esos lares llaman “chibolos”. Y ahí, a medio camino, diagonal al billar de una sola mesa desde donde se oye música vallenata vive “Chucho”.

La costa Caribe, como se le llama generalmente a esta región del país, es una extensa zona de tierras planas y bajas, enmarcada por las estribaciones de las tres cordilleras en Córdoba, Bolívar y Cesar, así como por las serranías de San Jerónimo y San Jacinto que conforman los Montes de María, una subregión compartida por los departamentos de Bolívar y Sucre. La región Caribe está ubicada al norte de Colombia y la conforman siete departamentos en su parte continental: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre; y uno insular: San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Según el Observatorio del Caribe Colombiano esta región representa el 11,6 por ciento del territorio nacional.

Rodeado de la riqueza agrícola de los Montes de María, cobijado por el olor del campo y de la tierra, Jesús María Pérez Ortega nació el 30 de agosto de 1934 en la vereda Palmito del actual municipio de Los Palmitos, en Sucre. “Chucho” Pérez, como es más conocido en la región, es uno de los cuatro hijos de Francisco Antonio Pérez y María Luisa Ortega Medina, una pareja de campesinos.

Su casa está pintada de un rosado fuerte y como casi todo el caserío ahora es de cemento y techo de teja. A la entrada, al lado de la sala está la puerta

del hogar comunitario que atiende su hija Sara y las risas y voces de los niños inundan el lugar. Al llegar nos recibe directamente Chucho y nos conduce al caney, una construcción típica de la sabana con pisos pulidos por las manos de las mujeres de la casa con una mezcla de arena, arcilla y agua que denominan “amasados” y que mantienen fresco y limpio el sitio.

El espacio elegido para contar su historia está rodeado de plantas cerca de la cocina artesanal donde algunos familiares ensartan pilas de tabaco para secarse al calor de la hornilla. Cuatro taburetes de cuero de vaca y madera rodean la mesa llena de tiras de tabaco y pepitas de uvita, un fruto que sirve de pegante y que brota silvestre en la región. “Chucho” se recuesta en su taburete y como buscando la cercanía propia de los sabaneros se inclina hacia los interlocutores cuando empieza a contar su historia.

“Yo nunca fui a la escuela realmente, soy un autodidacta”, dice, mientras recuerda que sus primeras letras las aprendió por las enseñanzas que de segunda mano logró de su hermano Adelmo. Igual suerte corrieron miles de personas. Bolívar y Sucre, los dos departamentos en los que se encuentra la subregión de Montes de María, han presentado históricamente índices de desarrollo humano inferiores al promedio nacional. Son 15 municipios con un área mayor a los seis mil kilómetros cuadrados que en 2005 tenía, según el Dane, una población cercana a los cuatrocientos treinta mil habitantes. Informes de competitividad de la zona indican que para 2011 ya contaba con seiscientos mil habitantes y el 5,16 por ciento era población indígena, el 28,96 por ciento afrodescendiente, y el restante 65,88 por ciento campesina. La zona vivió desde los años setenta, y con mayor fuerza entre 1980 y 2005, la migración masiva del campo hacia las partes urbanas como consecuencia de la presión de grupos armados. Según lo ha indicado el Pnud un 59,7 por ciento de la población ha presentado necesidades básicas insatisfechas, especialmente en Sucre.

Con su hermano Adelmo “Chucho” se las arregló para alcanzar una alfabetización incipiente y el conocimiento de las operaciones aritméticas básicas. Cuenta que esa educación inicial la complementarían más adelante con las enseñanzas del joven Francisco Antonio Mendoza Domínguez, sobrino de una vecina de la zona quien abrió por seis meses una escuelita. Aunque fue lo más cercano que tuvo de educación formal, estos conocimientos le

sirvieron para ser el lector oficial de su padre, quien le encargó la lectura en voz alta del periódico *Jornada*, un medio de expresión de corte gaitanista que existió entre 1944 y 1957. Su padre estaba suscrito aunque era totalmente analfabeta y gracias a esto Jesús conoció desde su adolescencia lo que pasaba en el país político. También fue comprendiendo la realidad social de su región.

Una historia en conflicto

Desde el siglo XIX la región de los Montes de María, de tradición básicamente campesina, ya era considerada una despensa agrícola por la abundancia de productos y terrenos para la producción. Pero la riqueza estaba en manos de un reducido número de familias que poseían enormes extensiones de tierra, disfrutaban los beneficios de la integración al Estado central y se beneficiaban de los mercados nacionales e internacionales, lo que convirtió a la mayoría de los campesinos en jornaleros de los terratenientes. El conflicto en la región precedió a Jesús Pérez mucho antes de su nacimiento; al evocarlo, cuenta que la apropiación y expropiación de tierras en Colombia se ha presentado desde la época de la Colonia cuando los nativos que sobrevivieron a la Conquista y los encomenderos fueron desplazados.

Esta situación de pugnas por la tierra que empezó a abrir grandes brechas sociales en la región dio inicio en los años veinte del siglo XX al auge de organizaciones que reivindicaban el derecho a la tierra en varias zonas del país. Cuenta Jesús Pérez que esos movimientos fueron precursores de las ligas campesinas, que se formalizarían entre 1930 y 1940 con el apoyo de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, un sindicato de tendencia liberal. Las ligas se extendieron a municipios como El Carmen de Bolívar, en Bolívar, y Los Palmitos, en Sucre. Este movimiento de campesinos féreos y decididos terminó conformando la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc-Línea Sincelejo, una de las organizaciones sociales más fuertes que ha tenido el país.

Los ojos experimentados de “Chucho” Pérez se iluminan al contar que esta organización consiguió titulación de tierras, créditos, capacitación técnica y educación para los campesinos. Bajo el lema “la tierra pa’l que la tra-

baja” la organización empezó a exigir una reforma agraria en Colombia, bajo el gobierno de Carlos Lleras. En ese punto de su narración, Jesús levanta el dedo como para que no quede duda y dice: “yo tengo el fragmento de los discursos de Lleras donde él justificaba tanto en el parlamento como ante los gremios económicos la necesidad de organizar y vincular al campesinado como elemento social para que tuviera acceso a los servicios del Estado”. Hace mención de uno de los miles de documentos que guardó del movimiento campesino antes, durante y después de la Anuc.

El propósito de los campesinos, ahora asociados en la Anuc, era intentar evitar la concentración de la tierra, y aunque era un ideal loable, las molestias de los grandes terratenientes no se hicieron esperar. Recuerda Jesús Pérez las movilizaciones, las grandes tomas como la de la finca Mula, hacienda de propiedad de “Los García” y que fue tomada por centenares de campesinos. Allí hubo dos muertos y más de trescientos campesinos fueron detenidos. Recuerda que en esa toma, Soledad, su esposa, tuvo un papel importante como mediadora de mensajes entre los detenidos y los campesinos no capturados; también fue gran soporte de su casa mientras duraron las detenciones. Desde ahí ya se empezaron a acumular los folios, las sentencias, los discursos.

Líderes como Jesús Pérez empezaron a entender que las actas de sus asambleas, las decisiones de sus reuniones, las cartas que enviaban a las autoridades y las denuncias que hacían, eran sus armas, pero también las pruebas de que sus luchas eran pacíficas, justas y sin alianzas con grupos armados, como quisieron hacerlos ver sus opositores en más de una oportunidad y por lo que fueron perseguidos. Por ello, muchos de los familiares de líderes, sus esposas e hijos, quemaban los documentos o los botaban para que no los vincularan con las acciones campesinas, por “miedo o por no ver la importancia de lo que hacían”.

La memoria histórica que ya se ha empezado a organizar en el país por varios organismos, da luces de los inicios de grupos que surgieron con el interés especial de evitar la toma de tierras y recuperar los terrenos que habían sido comprados por el gobierno a través del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora. A partir de los años ochenta empezaron a surgir en la región grupos armados con denominaciones diversas: La Cascona, Los Macarenos, Los Rodríguez, Los Méndez, Los Cohen, Los Meza, incluso grupos

que luchaban contra los campesinos con trasfondos partidistas llamados “pájaros”; estos nombres han sido mencionados en las audiencias de Justicia y Paz, en informes de memoria histórica y en investigaciones periodísticas como las de Verdad Abierta sobre el conflicto de Montes de María. Los grupos ejercían violencia por su propia mano argumentando la necesidad de proteger a sus familias y sus tierras ante la poca atención institucional y de las fuerzas armadas. Las mismas investigaciones indican que para finales de 1994 estos grupos armados precursores de los paramilitares causaron la muerte de más de una docena de líderes sociales, entre ellos los campesinos, maestros sindicalizados, activistas y políticos cívicos, en especial de partidos alternativos como la Unión Patriótica.

Las desigualdades con la tierra conllevaron a una agudización del conflicto en la región montemariana desde finales de la década de los noventa hasta el año 2005, inicialmente con la presencia de las Farc y en menor medida por las acciones de otros grupos guerrilleros como la Corriente de Renovación Socialista CRS, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Todos pretendieron incidir, sin lograrlo, en las crecientes luchas campesinas por el acceso a la tierra. Los guerrilleros decían estar del lado de los campesinos, pero como lo indica Jesús María Pérez “en la región nunca se logró ni una hectárea de tierra ganada por estos grupos para los campesinos”. Tiempo después, organismos de seguridad indicaron que con la presencia de los guerrilleros se aumentaron las acciones delincuenciales relacionadas con la extorsión, el secuestro de ganaderos y comerciantes, así como los retenes ilegales.

Pero así como este territorio dio cabida al conflicto, durante los años noventa la zona de Los Montes de María también empezó a ser escenario de procesos de dejación de armas y desmovilización de grupos subversivos. En enero de 1991 el PRT firmó el acuerdo de paz en Don Gabriel, municipio de Ovejas; un mes después, como parte del proceso de desmovilización nacional del EPL, un buen número de sus combatientes se concentró en el municipio de Juan José, Córdoba, cerca de Los Montes de María; y más adelante, el 9 de abril de 1994, la CRS firmó su acuerdo de paz en Flor del Monte, Ovejas.

Llama la atención que los tres grupos subversivos exigieron en la negociación para su desmovilización la creación de programas de inversión

social para las comunidades que habían sido afectadas por la presencia armada. Esto trajo a la población una esperanza de desarrollo que poco a poco animó nuevos liderazgos, en especial de mujeres y de jóvenes, así como la consolidación de movimientos cívicos, el fortalecimiento de partidos políticos de izquierda, y apoyos a iniciativas de nuevas tendencias liberales como la de Luis Carlos Galán. Recuerda Jesús Pérez que con estos grupos llegaron a ocupar varias alcaldías y puestos en los concejos de varios municipios de la región como Bolívar, Cesar y Sucre. Se mostraron como una fuerza política independiente.

Pero los tiempos aciagos no terminarían para los campesinos y la población en general de los Montes de María. En este escenario de paz y entusiasmo por la política local llegaron los paramilitares a la región, en 1997, luego de una reunión en la finca Las Canarias, propiedad del exgobernador de Sucre Miguel Nule Amín. Así lo declararon varios de sus exintegrantes como Salvatore Mancuso, alias *Diego Vecino* y Jairo Castillo, alias *Pitirri* en las audiencias de Justicia y Paz en 2007, en versiones libres que luego fueron avaladas por la Corte Suprema.

Por ello, el contexto de conflicto en el que se siguieron moviendo y trabajando los líderes campesinos de los Montes de María listaban masacres, asesinatos selectivos, homicidios indiscriminados, desplazamiento forzado y amenazas, hechos que se perpetraban sin distinción en el campo y los pueblos de la zona. Entre 1997 y 2003 los paramilitares de la región desplazaron a unas cien mil personas y murieron al menos 115 en masacres como las de Las Palmas, Bajo Grande, La Sierrita, El Salado, Mampuján, Chengue y Macayepo, según información de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Varios informes dan cuenta de más de 56 masacres entre 1994 y 2006, aunque la primera ocurrida en los Montes de María se registró en la finca El Cielo, Chalán, en 1992. Allí fueron asesinadas ocho personas sin que se sepa aún si fueron guerrilleros o paramilitares quienes la perpetraron.

Luego del auge paramilitar, durante el proceso de implementación de las Zonas de Rehabilitación y Consolidación en 2002 -las cuales fueron declaradas inexecutable por la Corte Constitucional en 2003-, y con la aplicación de la Política de Seguridad Democrática de los ocho años de gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002 – 2010), la fuerza pública inició estrategias

de control social con el argumento de la lucha contra las Farc. Nuevamente los Montes de María sintieron el confinamiento a comunidades, controles de la movilidad, supervisión en la compra y abastecimiento de alimentos de la población, estigmatización y persecución de dirigentes campesinos y capturas masivas, junto con la conformación de las denominadas “Redes de Informantes”, organizadas bajo el servicio de las autoridades militares y de policía, que conllevaron a desestabilizar los movimientos sociales e impactaron de forma negativa la participación ciudadana y social en la región.

En esa situación de desbalance social en la zona, que alcanzó en la última década cifras de pobreza cercanas al 37 por ciento; índices de analfabetismo del 22,8 por ciento; baja cobertura de salud, desnutrición infantil y en la que solo el 12,8 por ciento de las viviendas contaba con los servicios básicos de agua, energía y alcantarillado, en 2008 el presidente Álvaro Uribe anunció que la región se encontraba en situación de posconflicto.

Respaldaba esta afirmación con la desmovilización de 2005 de los bloques paramilitares Héroes de los Montes de María, con sus frentes Canal del Dique, Central Bolívar y Golfo de Morrosquillo; el fuerte golpe militar perpetrado por la fuerza pública contra las Farc en 2007 en el cual murió *Martín Caballero* -comandante del Frente 37 y miembro del Bloque Caribe de las Farc-, y el incremento exponencial de la presencia de la fuerza pública en los Montes de María.

Al hacer el recuento de este contexto político, de conflicto armado y de luchas sindicales y por la tierra que han vivido los campesinos en los Montes de María, Jesús Pérez reflexiona sobre la necesidad de una transformación política y hace alusión a los compromisos que tenemos frente a la construcción de la paz, la lucha contra la corrupción galopante, la poca credibilidad de los partidos, al abstencionismo que generan las promesas incumplidas, y destaca la necesidad de nuevos liderazgos. Sus ideas son similares a las mencionadas por estudios del área de Paz, Desarrollo y Reconciliación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud. Ideas que señalan que aparte del conflicto por la tierra y las consecuencias que este generó, otras formas de conflicto se han dado en la región de los Montes de María, como el fraude electoral, la ilegalidad enmascarada por el contrabando, el desdén por lo público y la impunidad por la acción social.

Todos estos fenómenos incrementan la fragilidad de su población frente a los actores ilegales; ejemplo de ello es que de las 134.000 hectáreas que recuperaron líderes como Jesús Pérez y sus compañeros del movimiento campesino, el 43 por ciento se encuentran hoy en manos de inversionistas externos a la región.

El visionario de la memoria

Al preguntarle por sus inicios en la lucha campesina, hoy a sus 83 años, Jesús Pérez dice no saber qué lo inspiró, pero cree que su inclinación por la justicia social tiene cimientos religiosos y políticos. Su madre era una fervorosa creyente que cada domingo a las tres de la mañana salía con Jesús, de entonces seis años, desde su hogar en Palmito hasta Corozal para asistir a misa en la única parroquia de la zona. El viaje demoraba tres horas y media en burro. Recuerda que en aquella época un sacerdote de apellido Salcedo incitaba desde las cuatro de la mañana, a través de una emisora, el odio y el exterminio hacia los liberales porque los consideraba ateos y masónicos. Y él pensaba que “si los curas eran los representantes de Dios en la tierra por qué tenían que promover el odio y no el amor” y no entendía por qué “no hablaban de religión sino de política”; y un tiempo después le dijo a su mamá que no quería ir más a misa. Desde entonces respeta todos los cultos, pero no va a la iglesia.

Lo político, dice Jesús Pérez, le llega por su padre, quien era partidario y activista del movimiento gaitanista. Menciona que era un personaje respetado por toda la familia y que sus inclinaciones políticas le ocasionaron persecuciones por la influencia del emporio de conservadores que era por ese entonces Corozal (Sucre) y sus alrededores. Recuerda que por el año 1941, cuando contaba con solo ocho años, acompañaba a su padre a las labores del campo y algunas veces en la noche se quedaba con él en el monte huyendo de lo que llamaban *la popol*, una policía política civil que perseguía a los liberales.

Matiza el relato de su infancia con una sentencia fuerte, dice que creció marcado por el odio hacia los conservadores debido a la persecución que vivió de su padre, el cual alcanzó a ser capitán de zona del movimiento gaitanista.

Ya en su adolescencia, otros eventos atizarían sus ideas. Jesús Pérez vivió los efectos del 9 de abril de 1948, lo que trajo para la zona un aumento de los conflictos, agudizamiento del orden público, y estancamiento del desarrollo de los campesinos. Estos hechos aumentaron las reflexiones del joven sobre la necesidad de un cambio de esa situación de zozobra que cubría la zona.

Lo único bueno de esa época -recuerda con una sonrisa cómplice- es que con tanta restricción, la información era censurada y escasa, pero llegaba el periódico *El Espectador* cada ocho días y esa fue la puerta informativa que serviría a Jesús para enterarse de fútbol, su pasión juvenil. También conoció de política nacional e internacional y gracias a ello fue adquiriendo cultura general.

Ya hecho un hombre, inició su camino por la política y participó en la reforma plebiscitaria del 57, luego se vinculó con el Movimiento de La Calle, más tarde integró el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL. Posteriormente, se declaró contrario a la alternancia de los partidos por lo que se convirtió en un abstencionista, hasta su vinculación el 19 de octubre de 1969 al Movimiento de Usuarios Campesinos¹ de Los Palmitos. Desde entonces la lucha campesina ha sido el eje de su vida, por ello, más que un dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, se considera un líder del movimiento campesino en general, pues su lucha viene desde antes de pertenecer a la Anuc y ha continuado posterior a ella.

Registrar para el presente y el futuro

Con la vinculación al movimiento campesino “Chucho” Pérez sintió la necesidad de dar cuenta de sus pensamientos por escrito, inicialmente por temor a equivocarse, como lo dice en el discurso que dio cuando fue elegido vicepresidente del comité de la asociación campesina en Los Palmitos. Luego, la estrategia de escribir todo lo que piensa, hace, o dicen en la asociación se convierte en una práctica que mejora con la formación que recibe

¹ El movimiento campesino inició con la promulgación del Decreto 755 de mayo de 1967 y culminó oficialmente en julio de 1970 con la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, la cual tuvo su época de mayor actividad en los años setenta.

en 1969, gracias al Incora, desde la división de organización campesina del Ministerio de Agricultura y el Departamento de Desarrollo Social. Conoce a la socióloga antioqueña Edelmira Pérez² y al sociólogo João Bosco Pinto, funcionario del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas y Centro Interamericano de Reforma Agraria. Y entonces, el aprendiz se convierte en multiplicador y bajo la filosofía de enseñanza de Paulo Freire que adquiere en la formación de alfabetizadores populares, fortalece sus deseos y acciones de lucha por los oprimidos.

Año tras año y actividad tras actividad empiezan a aumentar los folios, documentos, fotografías y cuadernos con anotaciones. En cada rincón o recoveco de su casa se empezaron a acumular actas de las reuniones, memorandos de las decisiones que divulgaban entre los asociados, discursos donde expresaban inconformismos, agradecimientos, dudas y peticiones. Cada libreta marcada con el año resguardaba detalles de los recursos entregados y gastados, los compromisos hechos, las agendas de los encuentros y los congresos, así como la logística de los interminables viajes recorriendo el país y sembrando por toda Colombia la semilla de la que es considerada la asociación campesina más fuerte que ha tenido el país, la Anuc-Línea Sincelejo.

Esta organización campesina gestionó ochenta y seis mil hectáreas de tierra desde enero de 1969 hasta septiembre de 1988; créditos de cuarenta y tres millones de pesos en 1973 que en 1988 llegarían a ser de casi tres mil millones, lo que permitió que 6.795 familias fueran beneficiadas entre las once mil que estaban registradas en la asociación departamental de Anuc Sucre. También logró ampliación de cobertura e infraestructura educativa para los hijos de los campesinos y capacitación técnica para los productores agrarios.

Y así como crecía la asociación, también crecían los problemas, las amenazas y los señalamientos de los adversarios de ser supuestamente guerrilleros y/o comunistas, pero también de los mismos compañeros por las divisiones internas y las vertientes de izquierda, maoistas, troskistas, mar-

² Edelmira Pérez, ahora jubilada del INCORA, luego de acercamientos con Jesús Pérez y el Centro Nacional de Memoria Histórica donó su archivo de fotografías de la ANUC.

xista leninistas e independientes que empezaron a gestar rupturas en el movimiento. Debido a esto, luego del II Congreso Nacional, la organización se dividiría en Anuc-Línea Sincelejo y Anuc-Línea Armenia. Los enfrentamientos ideológicos y políticos eran grandes. Las conclusiones a modo de *Manifestos* fueron valiosas, agresivas y movieron las fibras del país.

Fue en esos momentos de agitación política que muchos documentos que empezaron a guardar los líderes se perdieron porque las mujeres y familiares quemaban y botaban aquello que los pudiera comprometer, para que en las requisas no encontraran evidencia de la adhesión a los movimientos campesinos o porque no veían en ellos valor.

Por su parte, Soledad Acosta, esposa de Jesús Pérez, con quien tuvo doce hijos, se convirtió en la compañera, la estratega y el soporte productivo y afectivo de la familia. Ella escondía en el alar de la casa, en los baúles, debajo de las camas, en bolsas, en cajas y en cuanto recoveco pudiera aquellos tesoros que Jesús dejaba en casa y que recordaban la presencia y la función del padre y esposo en sus prolongadas y continuas ausencias, pues Jesús ocupó todos los cargos de la Anuc-Línea Sincelejo e incluso llegó a ser directivo a nivel nacional.

Dice “Chucho” Pérez que sin Soledad Acosta no existiría como líder, porque ella se encargó de la casa, de la familia y hasta de la producción del campo cuando él estaba luchando por todos los campesinos. Ella también vivió persecución, fue detenida, sirvió de puente cuando los líderes (hombres y mujeres) eran apresados e ideó formas de mantenerlos comunicados. Esta mujer pequeña, de rasgos indígenas y voz suave aún hoy ya octogenaria atiende la salud de su esposo y dobla con experticia trozos de tabaco que en sus manos se convierten rápidamente en cigarros gruesos como puros y también en delgados y largos tabacos llamados “calillas” que vende en su casa. Sus ojos pequeños, negros y brillantes aún demuestran el amor por Jesús y el convencimiento que ambos tienen por la lucha a la que han invertido sus vidas.

El tesoro de Jesús “Chucho” Pérez

Ya entrado en sus ochenta, aún labra la tierra que heredó de sus ancestros y sigue centrando su sustento en el trabajo de sus propias manos. Formó una familia numerosa y unida, que gracias a la herencia cultural de los campesinos sabaneros practica la cooperación, la solidaridad y el trabajo en comunidad; esa es su otra forma de subsistencia. Los campesinos en Colombia no se pensionan por ser líderes de las organizaciones campesinas.

Los archivos foliados, organizados y sistematizados de Jesús María Pérez Ortega llenaban varias cajas y envoltorios, que poco a poco fueron conociendo sus amigos, copartidarios y compañeros de lucha. Llamaron la atención de los académicos e investigadores que empezaron a llegar a la zona para estudiar el fenómeno de la violencia, la lucha campesina y los problemas de la tierra. Los foráneos, al conocer al hombre pequeño, de voz pausada y profunda, quedaban sorprendidos por su dicción neutra, su vocabulario erudito, su conocimiento detallado de la historia del país y la biblioteca personal que había armado en su casa.

Uno de los primeros interesados en sus saberes y archivos fue Gabriel Turriago, quien hizo parte del Programa Nacional de Reinserción, PNR, y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, Pnud, en Montes de María -Sucre, Cesar y Córdoba-. Fue gran impulsor de la construcción de paz de la región y articuló organizaciones de víctimas, mujeres, indígenas, afrocolombianos y campesinos.

Otro de esos académicos fue Gonzalo Sánchez, quien por el año 2005 era el coordinador del Grupo de Memoria Histórica que se encargaría de hacer el informe sobre el despojo de tierras en la región Caribe para la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, acompañado de José Francisco Restrepo (sociólogo, exdelegado de la Red de Solidaridad Social), el asistente regional de investigación. Alrededor estuvieron también otros animadores de procesos sociales como Ricardo Esquivia, Soraya Bayuelo, Ítala Samudio, el padre Rafael Castillo de la Corporación Desarrollo y Paz de los Montes de María, entre otros.

Y fue precisamente por el trabajo de esos aliados de la paz en la zona que esa promesa de Gonzalo Sánchez de visibilizar las memorias de Jesús se cristalizó. Inició con la publicación del libro *Luchas campesinas y reforma agraria. Memorias de un dirigente de la Anuc en la costa Caribe*, cuya primera edición se hizo en 2010 en el marco del proyecto de investigación Tierra y Conflicto, del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR. El aporte del texto, como lo indica su prólogo, se basa en tres elementos: el recuento de los principales acontecimientos de la Anuc como expresión de un gran movimiento social, las reflexiones del autor sobre el discurrir de las luchas agrarias a las que estuvo vinculado, y sus apreciaciones sobre el impacto de la reforma agraria en la región.

Ya Jesús era reconocido como líder y memoria del movimiento campesino con el que seguía vinculado, también había pasado la época de gloria de la Anuc y ahora sus energías estaban encauzadas en el momento histórico que vivía el territorio con la construcción del Programa de Desarrollo y Paz de los Montes de María.

Más adelante, luego de la publicación del libro de Jesús Pérez, el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Colectivo de Comunicación Línea 21 firmaron un convenio para adelantar trabajos de archivo. Esto permitió en 2014 el registro especial de sus archivos físicos en el marco de la *Política pública de archivos de graves violaciones de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario, memoria histórica y conflicto armado*. Gracias a ese proceso, de aquellas cajas y paquetes llenos de papeles, fotos y textos carcomidos, algunos por el comején y enmohecidos otros por la humedad, se logró el acopio, limpieza, curaduría, catalogación y digitalización de 1.032 folios del ámbito laboral (años 1969-2011), la digitalización de cuatro libretas manuscritas (años 1970, 1978, 1984, 2002), la digitalización de cuatro carpetas con la producción intelectual de sus libros inéditos, una compilación hemerográfica de cinco ejemplares de la Revista Combate y la colección bibliográfica de tres libros de temas agrarios y políticos.

Revisar las carpetas digitales del “Fondo Jesús Pérez Ortega” es todo un trabajo de minería. Carpeta tras carpeta, imagen tras imagen van apareciendo ante los ojos del observador partes del pasado, pero también del presente y del futuro, pues preservar los archivos tiene una función que va más allá

de dar cuenta de una época y un momento. En 2012 el Centro Nacional de Memoria Histórica inició por solicitud de un grupo de campesinos el acompañamiento de un informe de reparación colectiva. En ese proceso dimensionó el valor del archivo de estas comunidades.

Las fotografías y los textos producidos por las organizaciones o por las comunidades campesinas cumplen varias funciones: se constituyen en dispositivos de memoria que desatan el recuerdo y las vivencias compartidas por la población; son fuente de información sobre hechos, momentos y situaciones de la vida comunitaria; dan aportes para la identificación de pruebas cuando se trata de la violación de los derechos humanos y el derecho internacional, pues contienen datos que permiten la reconstrucción de hechos; son soporte de los procesos sociales y de la exigibilidad de derechos; y son memoria social o colectiva de un grupo o comunidad, en este caso, el campesinado.

El archivo nombrado por el CNMH como “Fondo personal líder campesino Jesús María Pérez” está disponible para su consulta en Bogotá. El fondo es una parte del archivo total, pues en su casa en Palmito, debajo de una mesa de madera grande llena de libros y coronada con el computador que le dieron como parte del convenio y en el cual tiene la versión digital de su tesoro, Jesús conserva cientos de textos y hojas foliadas, amarradas, organizadas. Cada cierto tiempo sus nietos limpian los archivos con detergentes y trapos. Lo hacen con esmero para que su abuelo pueda revisarlos, pues por la edad ya sus pulmones están afectados.

En clave de memoria: ahora el sueño de la paz

Jesús Pérez ha resistido anclado en el territorio, con su espíritu, su saber y sus archivos, reinventándose, enfrentando las adversidades y reexistiendo. Por ello, junto a otros líderes, ya sea en la zona o en el exilio, desde distintas vertientes políticas o ideológicas, junto al Estado o luchando contra su abandono, aún sueña. Ve en los acuerdos firmados entre las Farc y el Gobierno Nacional una esperanza para hacer posible algunos de los cambios que el movimiento campesino y la Anuc-Línea Sincelejo pedían en su momento. Cree que la reforma rural integral puede ser una opción de aquella reforma agraria que se frustró en los años setenta y ochenta.

Luego de sus más de cincuenta años de lucha por la justicia social “Chucho” Pérez insiste en la necesidad de un esclarecimiento y en la reivindicación del campesinado como víctima, no de la Anuc como organización, ni del sindicato, sino del movimiento campesino en general. Plantea “la creación de una jurisdicción nacional electoral campesina para que se reconozca el campesinado como sujeto de derechos políticos, se respete a sus líderes y a las expresiones organizativas”.

Otra de sus reflexiones es sobre la paz, “porque la paz no es un eslogan, es una práctica”. Siente preocupación porque el legado de tantos dirigentes sociales no se pierda con las nuevas generaciones y quisiera que se valorara más a la memoria propia, al esfuerzo de documentar, al ejercicio de consultar lo que ya existe, para que se atienda la información que con tanto esfuerzo él y otros guardianes resguardaron celosamente para el futuro.

Jesús “Chucho” Pérez sigue trabajando en el campo, escribiendo en prosa y poesía textos que hablan de la tierra, del narcotráfico, de la política, de la corrupción, de los dirigentes y hasta de los presidentes. No pierde la costumbre de leer, de organizar sus papeles y con orgullo repasa y muestra con sus dedos nudosos, sus ojos viejos y su andar tranquilo, los nuevos textos que relatan su autobiografía, los estudios sociológicos sobre la formación lineal de los pueblos de la sabana, la monografía de los apellidos y la descendencia de la población de esta zona.

Ahí rodeado de su familia, de las imágenes de sus hijos, nietos y de los documentos que hablan del movimiento campesino más fuerte que ha vivido el país, permanece el cultivador de libros al lado de Soledad, su eterna compañera, en la serenidad de Palmito, su territorio amado.



En el caney de su casa en Palmito, rodeado de vida, naturaleza y voces familiares, Jesús Pérez recibe a todos los que buscan su sabiduría, los que admiran sus luchas o los que quieren consejos. Foto Sandra Meléndez.

Referencias

ARCHIVOS Y COLECCIONES DE MANUSCRITOS

Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, (2014), Archivo de Derechos Humanos, “Fondo Jesús Pérez Ortega”, Bogotá.

PERIÓDICOS Y REVISTAS

Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, (2013), Video documental: *Documental: ¿Y si dejáramos de cultivar? Campesinado y producción agroalimentaria en Montes de María*, consultado el 10 de julio de 2017, disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=hbKAUGEa9gs>.

Noticias Centro Nacional de Memoria Histórica, (2014, 22 de septiembre), “La pregunta por la tierra”, consultado el 6 de agosto de 2017, disponible en <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/fr/noticias/noticias-cmh/la-pregunta-por-la-tierra>.

Reliefweb, (2013, 13 de diciembre), “El problema agrario en el marco de los diálogos y construcción de paz”, consultado el 28 de julio de 2017, disponible en <http://reliefweb.int/report/colombia/el-problema-agrario-en-el-marco-de-los-di-logos-y-construcci-n-de-paz>.

PUBLICACIONES OFICIALES

Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, (2015), *Memorias, Territorio y Luchas Campesinas. Aportes metodológicos para la caracterización del sujeto y el daño colectivo con población campesina en la región Caribe desde la perspectiva de memoria histórica* (Documento de trabajo), Bogotá, CNMH.

Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, (2010), *La tierra en disputa Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010)*, consultado el 15 de julio de 2017, disponible en https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2010/tierra_conflicto/la_tierra_en_%20disputa.pdf.

Contraloría General de la República, (2014), *El buen gobierno como mecanismo y principio: balance del funcionamiento del sistema general de regalías*, con-

sultado el 26 de julio de 2017, en <http://www.contraloria.gov.co/documents/20181/198738/Buen+Gobierno.pdf/5a1ec866-e8bo-4906-a026-4906455513d9?version=1.0>.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, (2005), CENSO, disponible en <http://www.dane.gov.co/index.php/esp/poblacion-y-registros-vitales/censos/censo-2005>.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, (2017), *Población proyectada en Colombia*, consultado el 2 de agosto de 2017 en <http://www.dane.gov.co/reloj/>.

Grupo de Memoria Histórica, GMH, (2013), *¡Basta ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad*. Informe General, Bogotá.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, (2010), *Los Montes de María. Análisis de la conflictividad*, Bogotá, PNUD- Área de Desarrollo, Paz y Reconciliación, en http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/projects/COL/00058220_Analisis%20conflctividad%20Montes%20de%20Maria%20PDF.pdf.

ENTREVISTAS

Entrevista realizada a Jesús María Pérez Ortega, llevada a cabo en Palmito corregimiento de Hatillo, municipio de Los Palmitos, Sucre, el 24 de julio de 2017.

Entrevista realizada a Sara Pérez, llevada a cabo en Palmito, corregimiento de Hatillo, municipio de Los Palmitos, Sucre, el 24 de julio de 2017.

Entrevista realizada a Soledad Acosta, llevada a cabo en el corregimiento de Hatillo, municipio de Los Palmitos, Sucre, el 24 de julio de 2017.

Entrevista realizada a Soraya Bayuelo, llevada a cabo en Rincón del Mar, San Onofre, Sucre, el 22 de julio de 2017.

Entrevista realizada a Ricardo Esquivia, comunicación vía telefónica desde Sincelejo, llevada a cabo el 5 de agosto de 2017.

Entrevista realizada a Jose Francisco Restrepo, comunicación personal desde Sincelejo, llevada a cabo el 5 de agosto de 2017.

LIBROS, ARTÍCULOS, ENSAYOS, TESIS

- Albán A., (2013), *Pedagogías de la re-existencia. Artistas indígenas y afrocolombianos*. El texto fue originalmente publicado como “Artistas indígenas y afrocolombianas: Entre las memorias y cosmovisiones estéticas de la resistencia”, en: *Arte y estética en la encrucijada descolonial*, editado por W. Mignolo y Z. Palermo, Ediciones del Signo, 2009, consultado el 28 de julio de 2017, disponible en <http://sb5a91bdb84d6b295.jimcontent.com/download/version/1413834561/module/5711503813/name/Pedagog%C3%ADas%20de%20Re.existencia%20A.%20Alban.pdf>.
- Borda, O. F., (2002), *Historia Doble de la Costa*, Tomo 4, Retorno a la tierra, Bogotá, Áncora Editores.
- Centro de Estudios Interculturales, (2013), *Caracterización de los conflictos territoriales de la región de Montes de María*, Bogotá, Universidad Javeriana.
- Corporación PBA, (2014), *Informe Técnico: Lineamientos y estrategias de desarrollo rural territorial para la región Caribe colombiana*. Serie Documentos de Trabajo N° 142. Grupo de Trabajo: Desarrollo con Cohesión Territorial, Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo, Santiago, Chile, Rimisp, consultado el 28 de julio de 2017, disponible en http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1437688081InformeLineamientosDesarrolloRuralconEnfoqueTerritorialparalaRegionCaribe_Final_editado.pdf.
- De los Ríos, E., (2012), *Montes de María. Entre la consolidación del territorio y el acaparamiento de tierras. Aproximación a la situación de Derechos Humanos y del Derecho Internacional (2006-2012)*, Bogotá, Publicaciones ILSA, en <http://ilsa.org.co:81/biblioteca/dwnlds/otras/montes1/informe.pdf>.
- Mesa de Interlocución y concertación de los Montes de María, MIC, (2014), *Propuestas de desarrollo rural y agrario construidas por organizaciones campesinas, afrodescendientes, consejos comunitarios, cabildos indígenas, mujeres, jóvenes y víctimas del conflicto armado de Montes de María*, Cartagena, Corporación Desarrollo Solidario.
- Pérez Ortega, Jesús María, (2010), *Luchas campesinas y reforma agraria. Memorias de un dirigente de la ANUC en la Costa Caribe*, Bogotá, Ediciones Aguilar.
- Rodríguez, Clemencia, (2008), *Lo que le vamos quitando a la guerra*, Bogotá, Centro de Competencia en Comunicación, consultado el 30 de julio de

2017, disponible en <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/c3-comunicacion/07330.pdf>.



Gertrudis Nieto repasa las fotos de su hijo Amado Cárdenas: en las navidades, en la escuela, junto a sus hermanos, en su uniforme de auxiliar bachiller. Con ellas en la mano cuenta quién era él, qué le gustaba hacer, cuáles eran sus ilusiones. Foto: Elizabeth Otálvaro.

Amado no tuvo tiempo para aprender a matar

Por Margarita Isaza Velásquez

Con Jesús Amado Cárdenas Nieto murieron 17 paramilitares más cerca de Sonsón, Antioquia, en un combate con el Ejército. Poco se conoce sobre esta historia, pero también sobre las vueltas de la vida para que un joven tome esta decisión. Gertrudis, la madre del joven paramilitar, narra la historia sobre las disputas por la memoria, por saber qué pasó con su hijo, por conocer cómo fueron las cosas.

El niño de Gertrudis Nieto murió hace quince años. En realidad, ya no era un niño, era un hombre de 21 que había aceptado convertirse en paramilitar. Dice Gertrudis que las vueltas de la vida lo arrinconaron por ese camino, pero que él, el cuarto de sus doce hijos, era un muchacho bueno que no tuvo tiempo de aprender a matar.

Ella lo despidió una mañana y no volvió a saber de él sino hasta un día antes de que falleciera en un confuso encuentro de su grupo armado con el Ejército. En la madrugada del 13 de junio de 2002, murió él, Jesús Amado Cárdenas Nieto, y murieron también 17 personas más que acantonaban en

el club social La Pinera, a tres kilómetros del casco urbano de Sonsón, en la vereda Río Arriba.

Ese lugar al que a veces Gertrudis acude en las noches de luna llena para sentarse en un columpio y recordar a su hijo se llama La Pinera. Está rodeado por un bosque de pinos, pero ya no es el club recreacional representativo de ese municipio del suroriente de Antioquia, ubicado a 108 kilómetros de Medellín. Ahora, y desde enero de 2006, es una de las sedes regionales de la Universidad de Antioquia. Permanecen allí, junto a los salones de clase, las canchas de fútbol, las zonas para hacer asados y las piscinas de aguas gélidas.

Los jóvenes que hoy cursan en la sede carreras técnicas y profesionales eran bebés cuando ocurrió la masacre de los 18 paramilitares. Tal vez por eso muchos no recuerdan la historia, y a la mayoría nadie se las ha contado. Algunos que sí la saben, sin embargo, se estremecen al mencionar que esos muchachos muertos podían ser sus hermanos mayores, quizás sus primos. El hecho es que ese suelo que hoy pisan los 238 universitarios de la sede Sonsón estuvo manchado de sangre y, por mucho tiempo, cubierto de silencio.

De lo que había pasado en La Pinera nadie hablaba; a unos les incomodaba y a otros les producía mucho dolor. Se trataba de un suceso sangriento con un número significativo de muertos, ocurrido a escasos minutos del casco urbano, pero había quedado atrás, como un combate más, o un denominado “contacto armado”, entre el Ejército y las AUC. En Sonsón permaneció la idea de que no hubo civiles involucrados y, por lo tanto, muchos habitantes consideraron que no hubo víctimas, al menos no víctimas inocentes de esa misma guerra que ya había enlutado a otras familias de Sonsón, especialmente en la zona rural.

Las noticias de esos primeros años del siglo XXI, leídas desde el presente, dejan ver que Sonsón y todo el oriente antioqueño estaban sitiados por los grupos armados. Municipios como Granada, El Peñol, San Carlos, Cocorná y Nariño –vecino de Sonsón– ya habían padecido tomas guerrilleras y paramilitares. En Sonsón, tierra de páramos, las entradas y salidas del pueblo, su conexión con las veredas, los corregimientos y Medellín, eran constantemente asediadas con retenes ilegales que a veces impedían el paso de ví-

veres o a veces terminaban en el secuestro de ciudadanos y el asesinato de campesinos y funcionarios públicos.

El alcalde municipal William Ospina, por ejemplo, fue secuestrado dos veces en 2001 por hombres armados del Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN; primero en mayo y luego en octubre, cuando se lo llevaron por dos días junto al personero, Víctor Bedoya. Al año siguiente, el 15 de abril, el técnico de la Fiscalía local John Jairo Durán, de 43 años, fue hallado muerto al pie de una carretera: uno de los frentes de las Farc que azotaba la región (el noveno y el 47) lo había secuestrado tres días antes cuando viajaba en un bus de servicio público entre Sonsón y Nariño.

Puentes dinamitados, campesinos asesinados, hostigamientos en las carreteras, amenazas y un ambiente generalizado de zozobra eran el pan de cada día que tenían los habitantes de Sonsón.

En junio de 2002 las noticias volvieron a situar al pueblo en medio de las acciones de los grupos armados: el ELN había instalado un retén en el Alto de Guayaquil, punto estratégico en la vía a La Unión, y allí había atracado un camión que llevaba 273 pipetas de gas. Las Farc, en su poderío subregional al mando de alias *Karina*, habían amenazado de muerte a los 23 alcaldes del oriente antioqueño, así como a concejales, registradores municipales, inspectores de policía, jueces y fiscales. También en varias ocasiones grupos armados sin identificar, que hoy se presume correspondían a cuadrillas de las Autodefensas Unidas de Colombia, habían asesinado selectivamente a hombres y mujeres en las áreas rurales. Por ejemplo, los hermanos John Fredy y Óscar Darío Alzate Vásquez fueron baleados el 27 de ese mes en el corregimiento Alto de Sabanas.

Estos hechos y al menos veinte más para el año 2002, que dan cuenta del panorama de violencia y el tipo de afectaciones que vivieron los habitantes de Sonsón, están recogidos y disponibles en la página web del banco de datos *Noche y Niebla* del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP.

Allí, sin embargo, no aparece la masacre de La Pinera. La conocieron los oyentes de Caracol Radio y los lectores de *El Mundo* y *El Colombiano* como el resultado de un enfrentamiento en el que tropas del Batallón Juan del Corral, con ayuda de helicópteros artillados tipo "Arpía", habían abatido a 18 miembros de las AUC y capturado a 11 al final del operativo. El general Mario

Montoya Uribe –hoy investigado por diez casos de homicidios en persona protegida, lo que se conoce como falsos positivos— dio parte de victoria tras el supuesto combate en el que ningún hombre del Ejército resultó muerto.

La voz de una mujer desgarra en la pantalla la imagen de las montañas del suroriente de Antioquia captadas por un dron. Su tono transmite un sentimiento que se parece al dolor. Conmueve. “Porque una madre o un padre de familia nunca quieren parir los hijos para la guerra. Jamás”. Esas palabras de Gertrudis Nieto anticipan la historia del reportaje audiovisual *Luces y sombras: Reconstrucción de memoria sobre La Pinera*, que fue realizado durante 2016 por los periodistas del canal Sonsón TV con el apoyo de docentes de Hacemos Memoria, un proyecto de la Universidad de Antioquia y la Deutsche Welle Akademie que busca enlazar los relatos de los grupos de víctimas con la experiencia de los medios de comunicación locales para que pueda emerger la memoria de los días de la guerra y ser discutida, vuelta a contar, por los habitantes que en ella se implican.

El documental rescata la historia de Jesús Amado Cárdenas Nieto, el hijo de Gertrudis, y consulta a otras fuentes, como el personero municipal de 2002, un desmovilizado de las AUC, un líder comunitario, una maestra de escuela, vecinos de La Pinera y, en fin, sonsoneños comunes y corrientes que hicieron parte de una época difícil de la que apenas ahora comienzan a atar cabos y a revisitar como sociedad.

En el año 2002 Gertrudis trabajaba en el restaurante de la Asociación de Mujeres del Municipio de Sonsón, MAIS, haciendo almuerzos y organizando los víveres para los programas de restaurantes escolares y los hogares de Bienestar Familiar. Tenía 44 años, algunos hijos ya criados y viviendo con sus familias y otros aún en casa a los que despachaba en las mañanas para la escuela o el trabajo con un portacomidas y su bendición de madre.

La situación económica de su familia no era la mejor. A veces costaba reunir el dinero para pagar los servicios y ni hablar de placeres como viajar a Medellín o comprar bluyines nuevos para el día del cumpleaños. Jesús Amado era bachiller y había prestado el servicio militar como auxiliar de policía en 1999, pero no había podido conseguir un empleo que le permitiera aportar en su casa y, con el tiempo, organizarse con su novia Beatriz López.

Gertrudis explica esa preocupación de Jesús Amado: “Él era el cuarto de mis hijos, pero se convirtió en la cabeza principal, porque él sabía que había que pagar la luz, el agua, y estaba muy pendiente siempre de mí. Él trabajaba: vendía el periódico, celaba en las calles, trabajó en la administración municipal en oficios varios. De allí lo sacaron y lo pusieron a hacer un curso en la cooperativa junto con otros muchachos, porque les iban a dar un empleo fijo, y empezaron a mamarles gallo y nunca los llamaron. Un día me dijo: ‘Vamos, mamá, para que me acompañe adonde el alcalde’. Y vea, yo fui muy grosera con ese señor: le dije que si no les iban a dar el empleo a los muchachos, que no los embobaran prometiéndoles que sí; que el tiempo de nosotros era tan valioso como el suyo. Se suponía que a Jesús Amado lo iban a poner a trabajar en servicios generales en el polideportivo del municipio, pero el contrato nunca llegó y jamás lo llamaron. Entonces, como no tenía empleo, se puso a trabajar con la gente que conocía: celaba por la noche en la plaza o en temporadas iba a arrancar papa en las fincas”. El alcalde al que se refiere Gertrudis es William Ospina, el mismo que había sido secuestrado dos veces por el ELN.

Y así fue como, en esa búsqueda de empleo y de jornales aquí y allá, Jesús Amado terminó enrolado en un grupo paramilitar. Gertrudis, como miembro activo de organizaciones sociales, había asistido con otros sonsoneños a la marcha de solidaridad con Caicedo, aquella donde el Frente 34 de las Farc secuestró al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y a su asesor de paz, Gilberto Echeverri Mejía. Caminó junto a ellos por las carreteras del occidente antioqueño y regresó a Sonsón en la noche del 29 de abril de 2002. El martes 30 estuvo en casa y les contó a sus hijos la odisea y la desesperanza que todos los caminantes habían padecido en el camino a Caicedo, cuando se vieron rodeados de guerrilleros armados que los hicieron devolver en buses bajo la amenaza de quemarlos ahí mismo si no se alejaban. El miércoles primero de mayo fue el último día que Gertrudis hizo parte de la rutina de su hijo: le preparó el almuerzo, se lo empacó en un portacomidas y le dio la bendición, como en un día cualquiera. Él no dijo nada especial; simplemente, salió a trabajar.

“No supimos qué pasó, por qué él no volvió; la gente de pronto sí sabía, pero yo fui la última en enterarme”, relata Gertrudis. Dice que esos días fueron de angustia, no dormía esperando a que Amado volviera y preguntaba

a conocidos y desconocidos si lo habían visto. Mientras tanto, seguía trabajando en el restaurante de la asociación de mujeres y bregaba a reunir el dinero para pagar los servicios de la casa que ya acumulados los iban a cortar.

A las pocas semanas, Gertrudis pudo saber dónde y con quién estaba Jesús Amado. Las noticias fueron a buscarla. “Cuando tumbaron el puente de la vereda Tasajo, en otro de los retenes ilegales que encerró a los habitantes de Sonsón, tenían que transportar a la gente a pie para que pudiera pasar. Y él estaba ahí uniformado pero encapuchado, hacía parte del retén, y se encontró a Omaira, una muchacha que trabajaba en la alcaldía, y él le preguntó por mí, que cómo estaba yo, pero ella le preguntaba quién era la mamá, porque así encapuchado no lo reconocía; entonces, la llevó aparte y se quitó la capucha para darle la cara. Esa mujer me dice que se orinó en la ropa, que soltó el bolso y se subió al otro bus. Él le recogió el bolso y fue hasta donde ella y le dijo que no le diera miedo de él, que simplemente quería saber cómo estaba su mamá. Omaira llegó a Sonsón y me buscó en el local de MAIS. Eran como las siete u ocho de la noche”.

—Gertrudis, ¿usted qué está haciendo? —le preguntó Omaira.

—Aquí dejando todo limpio y listo para irme a la casa —le respondió con sospecha, porque no era una visita habitual.

—Si tiene tinto, sírvase uno; y préndase un cigarrillo para que conversemos.

—¿Cuál es la bobada suya? —se sorprendió Gertrudis ante la petición de la muchacha.

—Siéntese... ¿Usted está buscando mucho a Amadito?

—Sí, y no voy a descansar hasta encontrarlo. Necesito saber de él.

—Tranquila, no lo busque más, yo ya lo encontré. Está en el puente de Tasajo, uniformado de paramilitar y encapuchado.

Gertrudis sintió desvanecerse, que se iba a morir en ese momento. Tasajo es una vereda a seis kilómetros del casco urbano. Aguardó en silencio a que Omaira contara algo más.

—No lo pude creer cuando lo vi, me asusté, se me revolvió el estómago. Usted no sabe, Gertrudis. Es que ¿Amado? ¿Amado en esas? Que fuera otro gamín de la calle, pero él no. Qué tristeza.

Omaira se fue y Gertrudis retomó la limpieza del local, la organización de los víveres, para poderse ir tan pronto como le fuera posible. No cruzó palabras con las demás compañeras de MAIS. “El saber dónde estaba mi hijo se me metió en el corazón. De la cafetería fui al Imperio, que es un café que queda al lado de la empresa de buses, y le pedí al dueño que me despachara dos paquetes de cigarrillos, mil pesos de confites y unas pilas para linterna. Él se sorprendió y me dijo: ‘Gertrudis, ¿usted para dónde va?’. Y le contesté: ‘Voy para donde usted y todos ya saben que voy’. Me miró de arriba abajo y me dijo: ‘Pero Gertru, piénselo bien’. Me entregó los confites, los cigarrillos y las pilas, y me fui ahí mismo. Muchas más personas ya sabían que Amado estaba con los paramilitares”.

“Cogí la carretera para el puente de Tasajo donde me había dicho Omaira, a las once de la noche, y llegué allá a la una de la madrugada. En esa carretera no había sino paramilitares. Me pararon, no me iban a dejar pasar, y me preguntaron para dónde iba. Les dije, muy segura: ‘En busca de una cosa que es mía’. ‘¿Y no le da miedo?’, me preguntó uno de los muchachos que me paró, como burlándose de mí. ‘Pues no, no me da miedo. Si hoy es el día de morirme, me muero, pero no tengo miedo’. Y seguí. Llegué al puente y ahí me habló un jefe de ellos, y le dije lo mismo: ‘Estoy buscando lo que es mío, un pedazo de mi vida que ustedes se me llevaron’. ‘¿Quién es?’, me preguntó el viejo ese. ‘Se llama Jesús Amado Cárdenas Nieto’, le contesté. ‘Oiga señora, ese aquí no está’, me dijo y me pidió que me sentara en el suelo en una manguita junto al puente donde estaba el retén de ellos. Yo fumaba y fumaba. Ahí quedé espalda con espalda con otro muchacho uniformado, mientras el jefe de ellos me seguía preguntando cosas: que si no me daba miedo estar ahí, que viera la cantidad de hombres que eran y que estaban armados, que yo cómo me había ido así sola y en medio de la noche. Y yo le contestaba, insistiéndole en lo mismo, y lo que no sabía en ese momento era que el muchacho que estaba detrás de mí, mejor dicho que esa espalda era la de mi hijo. Él tuvo que quedarse callado mientras me hablaba el jefe y me convencía de devolverme para el pueblo”, relata Gertrudis acordándose de cada palabra como si la hubiera pronunciado ayer.

“El viejo siguió preguntándome cosas: ‘Y si usted está tan segura de que lo tenemos, ¿cómo fue que él llegó hasta acá?, ¿quién se lo trajo?’. Y le contesté lo que había estado medio averiguando en esos días: ‘Ese hijueputa al que le dicen El Zarco se me lo llevó’. Ese viejo ahí mismo empuñó el arma que tenía y me miró con odio, pensé que me iba a matar. Al momentico siguió: ‘¿Y usted lo conoce?’. Solté la risa de la rabia que me dio y le dije: ‘Cómo no lo voy a conocer si a ese desgraciado le lavé los pañales, porque trabajé en la casa de su familia mucho tiempo’, y ya ahí me paré para regresar al pueblo. Entonces el jefe ese me dijo: ‘Cómo se va a devolver así, espere yo la mando en un carro’. Y no, pues cómo, caminando vine, caminando me voy, pensé en ese momento y no acepté lo del carro. Ya cuando me iba le grité: ‘Yo sé que él está aquí, ustedes se lo llevaron y aquí me lo tienen, que no me lo quieran dejar ver es otra cosa’”. Después, cuando pudo volver a hablar con su hijo, Gertrudis supo que a Jesús Amado lo castigaron unos días por la visita intempestiva a la zona del retén y por el reclamo que ella había hecho.

“Yo seguí yendo de día a Tasajo a ver si lo encontraba, pero ya no podía preguntar por él. Solamente rezaba y rezaba y miraba para todos lados. En esos días en uno de los carros en que viajaba a Tasajo un muchacho me dijo que le rezara la novena a María Auxiliadora con mucha fe para que apareciera Amado. Y terminándose la novena, el último día, el ejemplo que sale, el texto que se lee ahí, es el del hijo perdido. Terminé la novena el sábado con toda la fe que se me redobló, y el miércoles me llamó Amado”. Dice Gertrudis que su preocupación por esos días era pagar la línea telefónica de la casa, para que Amado pudiera comunicarse y decirle algo más sobre su vida. Esa línea telefónica la había instalado el mismo muchacho cuando cuatro años antes iba a prestar el servicio militar por fuera de Sonsón, tal vez en Medellín o en un batallón lejano, lo que finalmente no sucedió, porque terminó siendo auxiliar bachiller a las órdenes de la alcaldía municipal. Pero Amado no la llamó a la casa.

“Estaba yo llegando al restaurante de MAIS, cuando el teléfono suene que suene, y yo apenas abriendo la puerta. Era él, Amado. ‘Mamá, la bendición’, me dijo. Yo creí que era otro de mis hijos, pero él notó que no lo reconocí y me dijo: ‘Soy yo, soy Amado. Usted tiene que venir a verme, mamá’. Le pregunté dónde estaba y cómo iba a verlo, y me dijo que después me explicaba, pero que fuera, que tenía que ir”. Otra vez Gertrudis quedó intranquila y con el anhelo de ver a su muchacho.

Había pasado un poco más de un mes desde la mañana en que Jesús Amado salió de la casa. “Seguí con el trabajo del día, aunque no me concentraba, y él volvió a llamar, que estuviera pendiente que un carro me iba a recoger. Llamé a una de mis hijas y esperé a un chofer, que me dijo: ‘Usted puede irse aquí adelante pero ella tiene que ir acostada atrás, que nadie la vea’. Y así nos fuimos. Llegamos al mediodía a La Pinera, y qué impresión me dio: había allí más de doscientas personas. Eso estaba lleno de gente, todos esos muchachos armados hasta los dientes, uniformados, tusitos. Y Amado estaba ahí junto a las piscinas sentado en un tronco, también iba armado. El jefe le dijo que podía estar con nosotras, pero que no podíamos entrar al edificio, que tenía que ser afuerita. Nos quedamos en el columpio y él me lanzaba y me recibía, como si fuera yo una niña chiquita, me abrazaba, me halaba los cachetes y me decía que me quería mucho. Hablamos por un buen rato y le pregunté qué estaba haciendo ahí, por qué se había ido. Él me dijo: ‘Era yo o los mataban a ustedes. Pero aquí estoy y ustedes están bien’. Seguimos hablando y jugando, pero nos tuvimos que despedir como a las dos de la tarde”.

Era miércoles 12 de junio. Al despedirse, Jesús Amado le preguntó a su mamá si iba a volver. Ella le prometió que lo haría y que como fuera iba a encontrar la forma de regresar a La Pinera. Ese día Gertrudis, que era la representante de los padres de familia en el colegio de sus hijos menores, debía leer una plegaria en la misa anterior a la salida a vacaciones. La hoja de la plegaria le temblaba entre las manos y por eso el sacerdote se dio cuenta de su nerviosismo. Le preguntó por qué estaba así y le pidió que se calmara. Ella le contó que había visitado a su hijo perdido y él no la miró con buenos ojos, le dijo que cómo se le ocurría haber ido por allá, a la boca del lobo, que toda la familia iba a quedar señalada. Gertrudis le respondió con calma que señalados ya estaban, que todo el mundo hablaba mal de su familia en Sonson y que Amado para todos ya no era más que otro paramilitar.

Con la idea fija de volverlo a ver, ese mismo día Gertrudis salió con Bibiana, otra de sus hijas, y con Beatriz, la novia de Amado, con rumbo a La Pinera. Esta vez no las dejaron subir hasta la zona de piscinas, debieron quedarse en la entrada del club social que los paramilitares se habían tomado. A Amado le permitieron bajar a recibir la visita de las tres mujeres, como si se tratara de un domingo en un cuartel militar.

“Amado bajó, nos saludó y me abrazó un rato. Yo me puse a llorar y él me dijo que no llorara, que estuviera tranquila, que ahí estaban todos los muchachos juntos, como cuando había prestado el servicio, y que iba a estar bien, nada les iba a pasar a ninguno, porque el Ejército estaba en llave con ellos, que, mejor dicho, estaban todos protegidos, que paras y Ejército eran lo mismo. Ya fue corriendo el tiempo y Amado se quitó el gorro que le cubría la cara: estaba motilado y con un poquito de bozo. Como a las ocho me dijo que nos fuéramos porque a las once o doce de la noche se iban a llevar todo el pelotón, iban a quedar menos, y que no sabía si lo iban a dejar ahí o se lo llevarían para otro lado. Nos despedimos. Él se arrodilló, le eché la bendición muchas veces, le pedí que me regalara la argollita y me dijo que no porque se la había dado Beatriz”.

Gertrudis, Bibiana y Beatriz volvieron al pueblo en completo silencio. Quizás las tres presentían que iba a ser difícil volver a ver al hijo, al hermano, al novio. Gertrudis se quiebra al contar esta parte de la historia y empieza a hablar de su hijo en absoluto pasado: “Tuve la satisfacción de que pude estar con él dos veces y darle la bendición”.

“Ya en la casa, todos se acostaron y yo me quedé despierta, tomando tinto y fumándome un cigarrillo. No podía dormir. Como a la una o dos, en la madrugada, sentí a Amado conmigo, que me decía que lo viera, que él estaba ahí: ‘Véame, mamá, aquí estoy’. Pero él ya no tenía la ropa con que lo había visto en el día, sino otra, bluyines y camiseta. Me quedé en una tristeza muy honda, piense y piense en mi hijo. Entonces salí de la casa a esa hora y me conseguí dos mil pesitos con los celadores del barrio, y me agarré a llamar al restaurante de La Pinera desde un teléfono público. Cuando por fin alguien me contestó, pedí que me pasaran a mi hijo, pero no lo hicieron, me dejaron esperando en el teléfono hasta que se me acabaron las monedas. Volví a la casa y traté de dormirme. Ya más tarde a todos nos despertó la bulla. Tan, tan, explosiones, balas, se oía que estaba pasando una cosa muy horrible. Nosotros vivíamos junto a la capilla del Carmen, lejos de la salida hacia el municipio de Nariño, pero la balacera se oía como si fuera dentro del pueblo”.

Era el amanecer del jueves 13 de junio. Empezó a correr el rumor de que las explosiones y las balas habían detonado en La Pinera, donde los paramilitares acantonaban a plena vista del público desde hacía varios días, acaso

semanas. Gertrudis salió a averiguar qué había ocurrido, pero los agentes de Policía tenían restringido el paso más allá de la plaza de mercado.

“A las siete de la mañana, Nubia, una compañera de la asociación, fue a la casa a buscarme y me dijo: ‘Gertrudis, Amadito está muerto’. Yo no le creí, pero el corazón me avisaba. Ella no me dejó sola, estuvo conmigo pendiente. Ahí me acordé de cuando él en la madrugada se me había aparecido en la pieza, y ahí reconocí lo que había pasado. Fue un día de terror, de incertidumbre. Nubia me acompañó a la Personería, donde trabajaba Beatriz, y le pregunté si sabía de Amado. Ella tenía la cara roja de llorar y no pudo disimular conmigo. El mundo se me nubló y recuerdo muy poco de lo que pasó ese día. A ratos me llegan como momentos, pero lo que sí sé es que estaba muy triste, como fuera de mí”, dice Gertrudis ya en un momento de calma. Otra vez se ha tragado las lágrimas.

Un desmovilizado de las AUC que sobrevivió a la masacre –y tras la promulgación de la Ley de Justicia y Paz se acogió a ella– narró para el documental *Luces y sombras: Reconstrucción de memoria sobre La Pinera*, que Amado, uno de los muchachos recién reclutados, fue el primero en caer, porque estaba de centinela. El hombre, con identidad protegida, dijo también que ese joven no tenía entrenamiento militar, que nunca le había tocado disparar. Hoy, el contacto armado de La Pinera, que enfrentó con helicópteros artillados y armas de largo alcance al Ejército con el grupo paramilitar, está siendo investigado en la Fiscalía 74 de Medellín, delegada ante la IV Brigada, para determinar si hubo irregularidades en el uso de la fuerza.

El 14 de junio de 2002 el cuerpo de Amado fue velado en la funeraria. Allí compartió sala con otro muchacho, menor de edad, que también murió en La Pinera. Se llamaba Luis Javier López y según lo supo Gertrudis, era huérfano porque la guerrilla le había matado a los papás. Una tía de Luis Javier aún tiene contacto con la familia de Amado, pero casi nunca hablan de lo que pasó hace ya quince años.

Gertrudis explica que algunas otras mamás o familiares de los que mataron en La Pinera no se han acercado nunca a los grupos de víctimas del municipio, como el costurero de Tejedoras por la Memoria de Sonsón o la Asociación de Víctimas por la Paz y la Esperanza, de la que Gertrudis hace

parte desde hace varios años. “Muchos no van a las reuniones o los talleres, porque dicen que eso es un señalamiento, que es estar en boca de la gente, y que mejor se quedan en la casa con su dolor. Conozco por ejemplo a una señora a la que le mataron un hijo y nunca pudo aprender a vivir con eso, se volvió drogadicta y terminó en la calle, perdió a toda su familia”, dice Gertrudis, quien reconoce que para ella se había vuelto una necesidad poder contar la historia completa de su hijo, honrar su memoria más allá del estigma que cargó por haber sido asesinado como paramilitar.

“Los grupos de mujeres, los de víctimas, las compañeras, las amigas, eso fue lo que me salvó. Me obligaban a salir, a trabajar, a no quedarme encerrada llorando. Y empezamos a compartir las historias, a saber que a todas nos había pasado algo pero que nos podíamos apoyar. La presidenta de la Asociación de Víctimas, Gloria Serna, que es mi amiga, les dijo a todas: ‘¿Y qué querían? ¿Que Gertrudis se parara en la puerta y gritara ‘es que mi hijo era un paramilitar’?’. Y esa fue una forma en que ella me protegió de los señalamientos, ella me ayudó y les ayudó a todas a entender que mi dolor también contaba, que yo como ellas también había perdido a un hijo en la guerra de este país. De todas maneras, yo no hablaba mucho de Amado ni decía quién era él o por qué lo habían matado. Había gente que nos rechazaba a mí y a mis hijos porque decían que quién sabe Amado a cuántos habría matado, que él era un paramilitar. No nos volvieron a fiar en la tienda y mucha gente me dejó de hablar. ‘Ah, es que esa es la mamá de un paraco’, decían”, cuenta Gertrudis luego de haber pasado por procesos de acompañamiento sicosocial y haber asistido a talleres donde pocas veces ha podido contar su historia: ella prefería callar y evitar cualquier enemistad con otra familia que hubiera sido víctima de las AUC, del ELN o de las Farc.

Por eso, quizás, fue tan importante para Gertrudis contar la historia de su hijo y revivir los hechos de La Pinera en el documental que hizo el canal Sonsón TV, en la dirección de Natalia Grisales, con el proyecto Hacemos Memoria, y que fue emitido por primera vez en la televisión local el Viernes Santo de 2017, después del viacrucis. Desde entonces está disponible en el canal de Youtube del medio local.

Según Gertrudis, “en el tiempo que pasó entre la masacre y el documental, solamente una vez un padre tiró agüita bendita en La Pinera y ya, sin

celebrar misa, pero aparte de eso, nunca se mencionó La Pinera como lugar de un hecho ni se habló de nada de lo que había pasado. Y yo me mantenía con la idea de que la gente no se quedara sin saber más de la historia, sin conocer hasta donde sabemos cómo fueron las cosas”.

En 2017 por primera vez hubo una conmemoración pública de la masacre en La Pinera: en el mismo lugar donde los muertos fueron tendidos por el Ejército y exhibidos como prueba de victoria, la Asociación de Víctimas plantó 18 crucecitas de madera y sembró huellas de cartón con los nombres de los fallecidos. Según Gertrudis, asistieron muy pocos familiares de las víctimas directas, pero lo importante fue que acudieron jóvenes y vecinos del pueblo que se sintieron convocados a levantar el velo de silencio que cubría hasta entonces el confuso combate entre el Ejército y el grupo de paramilitares.

En julio, Producciones El Retorno pidió permiso al canal Sonsón TV para presentar en la vereda El Zancudo, del municipio de Argelia, el documental *Luces y sombras*. Lo mostraron como cierre de una jornada de integración de paz territorial a la que asistieron pobladores de ocho municipios de Antioquia y habitantes de la zona rural. A Gertrudis la invitaron para que hablara con la gente sobre la experiencia de contar lo que pasó. Ella se convirtió así en la protagonista de una historia sobre las disputas por la memoria, por el pasado. Más de doscientas personas vieron en pantalla grande el documental y al final algunos jóvenes y madres de familia se animaron a preguntarle a la invitada un poco más de la vida de Amado o a ofrecerle condolencias por la pérdida de su hijo. Gertrudis cuenta que ese día se emocionó hasta las lágrimas, sintió que su hijo descansaba en paz.

Días después, sin la presencia de Gertrudis, el documental fue presentado ante doce mujeres líderes de Sonsón que son capacitadas por Microempresas de Colombia y la red Meco. Algunas dijeron que ya lo habían visto en la televisión local pero que no le habían prestado suficiente atención; otras contaron que conocían los sucesos de La Pinera pero no con tantos detalles como salía en *Luces y sombras*; algunas más concluyeron que ese hecho, como los asesinatos a manos de paramilitares o del ELN o de las Farc, también hacía parte de la historia del municipio y que debía ser visto y reflexionado por los jóvenes y los mayores, para que no se volviera a repetir el horror de que las madres entierren a sus hijos por causa de la guerra.

Tanto en la proyección de Sonsón como en la de El Zancudo, *Luces y sombras* y el relato de Gertrudis Nieto sirvieron para que La Pinera emergiera del olvido, y con su tragedia emergieran también voces y recuerdos de los días más sombríos de ese municipio, uno más en la geografía colombiana, que vio cruzar por su calles y veredas al terror vestido de uniforme militar. Gertrudis piensa hoy en la vida de Amado, en esas últimas semanas, y en lo que significó para ella contarle a los demás lo que su hijo alcanzó a decirle en la víspera de su muerte: “Él no tenía las manos untadas de sangre”.



A veinte años de la masacre, las mujeres de la Asociación de Víctimas por la Paz y la Esperanza de Sonsón, de la que Gertrudis Nieto es miembro, plantaron en La Pinera 18 cruces de madera que recordaban los nombres de los jóvenes fallecidos. Foto: Elizabeth Otálvaro.

Referencias

PERIÓDICOS Y REVISTAS

El Mundo, 2002, junio.

El Colombiano, 2002, junio.

Sonsón TV y Hacemos Memoria, (2016), *Luces y sombras: Reconstrucción de memoria sobre La Pinera*, documental periodístico. Sonsón: Sonsón TV y Universidad de Antioquia. 43 min, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=aorqbZsm6xw>.

ENTREVISTAS

Entrevista realizada a Gertrudis Nieto, llevada a cabo el 31 de julio de 2017, La Ceja.

LIBROS, ARTÍCULOS, ENSAYOS, TESIS

Elizabeth Otálvaro Vélez, (2017, junio 13), “15 años de ‘Luces y sombras’ en La Pinera”, *Hacemos Memoria*, Medellín, Universidad de Antioquia. Disponible en: <http://hacemosmemoria.org/2017/06/13/15-anos-de-luces-y-sombras-en-la-pinera>.

Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, (2002), *Noche y Niebla. Banco de datos*, Bogotá, CINEP, en: <http://www.nocheyniebla.org/taxonomy/term/28>.



Restos de un avión bimotor HK modelo 70, los cuales están en la pista aérea Felipe, muy cerca de la hacienda El Recreo donde vivió varios años Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mejicano. Foto: Mauricio Alvarado.

El polvo que guarda Tranquilandia

Por Edison Bolaños

En una mezcla entre pasado y presente durante un recorrido llano adentro del Yará, este relato es la historia de cómo han sacado a la fuerza a campesinos colonos de sus tierras, de la guerrilla, del narcotráfico, de las tierras, de un gran territorio dividido en haciendas ganaderas. Y le sigue el rastro a un asunto que parece no estar resuelto: lo que encontraron las autoridades al interior de Tranquilandia y lo que siguió luego.

Cuando vimos la cola del avión enredada en un matorral y alejada del bullicio de un aeropuerto, supimos que lo habíamos encontrado. Estaba a un kilómetro de la pista de aterrizaje “Felipe”, una recta de tierra de tres mil metros marcada por el trillo perdido de las llantas y por los cráteres que dejaron las bombas de las fuerzas estatales. El aluminio desteñido de los alerones estallaba la luz solar y resaltaba entre la selva húmeda de los Llanos del Yará.

Fueron cientos de avionetas las que quedaron varadas o escondidas en estas sabanas. El 26 de julio de 2017, el día que llegamos a esa pista clandestina,

la cola de la aeronave conservaba una placa del piloto automático, lo que permitió concluir que era una HK modelo 70 de dos motores, explicó un amigo piloto. Un detalle para saber por qué la mafia las prefería: podían cargar hasta 1.000 kilos de cocaína, quitándole los tres asientos de los pasajeros.

Volaban a dos mil pies de altura y el resultado muchas veces era trágico; cerca de allí, Pablo Escobar dispuso un terreno para un cementerio de pilotos y en 2008 encontraron la lápida de una tumba violentada y con nombre ficticio. “Fueron los testaferros del cartel de Medellín que guardaban una caleta”, contó Eliécer Caicedo, un colono que se asentó en la vereda Las Damas en 2002 y quien guió esta ruta del poder del narcotráfico en las llanuras infinitas de Meta y Caquetá, cuyo monte se enreda con los bosques que canalizan y llevan agua hacia el Parque Nacional Natural Chiribiquete.

El viaje empezó en la vereda Playa Rica o la Y, donde Caicedo tenía una miscelánea a la entrada de la zona veredal de la Macarena (Meta). Adentro estaban los exguerrilleros de los frentes Yarí, Felipe Rincón y de las compañías Urías Rondón de las Farc, quienes dejaron las armas a mediados de 2017. Con Caicedo y los exguerrilleros, en la caseta de madera, organizamos el recorrido por Tranquilandia y por otros hatos ganaderos que en un principio pertenecieron a los colonos, luego fueron despojados por la mafia, el Gobierno bombardeó algunos y finalmente terminaron en manos de las Farc.

Los hacendados y la mafia

El emblema del derrumbamiento del cartel de Medellín es Tranquilandia, la hacienda yarisense que dio nombre al operativo ejecutado el 7 de marzo de 1984 con el cual los laboratorios erigidos por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha en esas tierras llaneras, fueron destruidos. Pero Tranquilandia era mucho más: un gran territorio dividido en haciendas ganaderas que poco se conoce y desde donde se enviaron toneladas de cocaína al exterior.

El Yarí está atravesado por tres ríos que marcan el poblamiento del territorio: Guayabero, del que se desprende el Lozada, y el río Tunia, que tiene una decena de caños que alimentan de agua a varios hatos ganaderos. Estas aguas se recogen en el gran Apaporis, la frontera natural con el Amazonas brasileño.

Mucho antes de empezar a romper monte por esas sabanas selváticas -tierras colonizadas en 1920 por ganaderos que entraron con cincuenta reses aportadas por la Sociedad Colonizadora del Huila- fuimos desde la vereda Playa Rica hasta Morrocoy a conversar con Carlos Rodríguez, un campesino que nació en ese llano hace sesenta años. No hay nostalgia para referirse a los días de la guerra; no la extraña.

Rodríguez participó en la investigación del sanvicentino Carlos Farith Perdomo para el libro *Gotas de aceite*. Perdomo recopiló documentos y testimonios inéditos de pobladores de la época para demostrar que los Llanos del Yarí pertenecen al Caquetá y no al Meta. Un litigio que viene desde 1976 cuando el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) modificó el mapa de los dos departamentos y generó una controversia de límites pendiente de resolverse. La prueba más importante del documento es que los descendientes de los fundadores del Yarí se identifican más con San Vicente del Caguán que con el municipio de la Macarena.

Transitamos dieciséis horas de carretera desde Bogotá hasta la vereda Morrocoy, pasando por San Vicente y adentrándonos por la trocha que trazó la petrolera Shell en 1943, cuando buscaba el oro negro que brotó en la vereda Los Pozos. Según Perdomo, la multinacional ingresó a los Llanos del Yarí por San Vicente y fue la primera en construir una pista aérea en el hato Jalisco, una hacienda donde años después habría problemas con las Farc, cuando se impuso la ley del destierro de la insurgencia para contrarrestar la amenaza paramilitar.

En esa pista embarcaron a los primeros semovientes que enviaban a Bogotá o Neiva, resultado de las pequeñas ganaderías fundadas después de que los primeros campesinos -cazadores de tigres y lobos, y traficantes de pieles- conocieran en 1920 las sabanas e informaran que esas tierras eran únicas para cría de ganado, porque había agua y el pasto abundaba, en invierno y en verano.

Rápidamente, la noticia llegó a los ganaderos del Huila, y el Yarí se llenó de gente y de bovinos. Para 1940 la ganadería creció tanto que Luis Pilla y Uldarico Pérez, colonos de la región, compraron un avión DC3, y cuatro veces al día sacaban cerdos y reses, ilustró Perdomo en su libro.

El Yará se fue poblando, los fundos crecieron al tiempo que los campesinos colonos eran arrinconados o sacados por los hacendados que llegaban del Huila o Caquetá a comprar las mejoras de los terrenos baldíos o a correr la cerca a sangre y fuego. Esa estrategia se intensificó en 1940, cuando una enfermedad desconocida para los colonos, una fiebre amarilla a la que llamaron peste, hizo que abandonaran esas tierras. Los hatos quedaron llenos de ganado y los pocos dueños de fincas que se quedaron siguieron hasta que llegó la época de La Violencia, en 1948, contó Rodríguez, descendiente de los fundadores de las haciendas Miramar y Manila en los Llanos del Yará.

Después de la amnistía de Gustavo Rojas Pinilla a la guerrilla del Llano -la de Guadalupe Salcedo- Hernando Palma -disidente del rápido proceso de paz en 1953- llegó a los Llanos del Yará junto a otros guerrilleros a declararles la guerra a los indígenas tinigua. Su sevicia no solo acabó con esta etnia, sino que también quemó la ranchería SanchenaJona (en lengua tinigua, Aposento Tranquilo), que pronto se convertiría en hatos para la ganadería.

Solo pasaron siete años y en los albores del Frente Nacional llegarían al Yará Oliverio Lara y otros ganaderos. Lara era muy amigo de Misael Pastrana, presidente de Colombia (1970-1974), agregó Rodríguez, para significar el poder de este hacendado, que llegó a tener más de cincuenta mil cabezas de ganado en esas sabanas.

La ranchería de los tinigua se convirtió en el hato ganadero El Recreo, donde Lara construyó una pista aérea para transportar los semovientes hasta Chile y Perú. El sueño de este empresario era unir tres haciendas: Larandia (ubicada en Florencia, Caquetá); Balsillas (cerca de Neiva) y El Recreo (en los Llanos del Yará), y formar un gran latifundio ganadero, comprando a precios pírricos las mejoras de los campesinos colonos. Mucho antes, el hato El Recreo perteneció a Esteban Cerón y varios años después, no se sabe si legalmente, a Escobar Gaviria y a Rodríguez Gacha. El Recreo, Tinajitas y Méjico son haciendas yarisenses que décadas más tarde serían vendidas por los descendientes de Oliverio Lara.

El 27 de abril de 1965, Lara fue secuestrado y cinco años después encontraron su cadáver enterrado en forma vertical y con la cabeza afuera, cerca del hato Larandia. En el libro *La tierra no basta*, del Centro de Memoria Histó-

rica, José Antonio Palomino, un campesino que trabajó como mampostero de Lara, cuenta que los trabajadores terminaron asesinandolo así porque los puso a pelar quince vacas gordas que se mataron cuando una de las volquetas se volcó con el cargamento. No quiso darles carne cuando estos le pidieron una pierna para calmar el hambre. “Por eso les pago el día, yo de los animales no regalo a nadie nada, porque así siguen pidiendo que se muera el ganado para seguir jartando”, les habría dicho el hacendado.

Lo que queda del hato El Recreo es una casa esquelética. Los marcos vacíos de las puertas permiten ver el laberinto donde se encerraban Escobar y Gacha a contar los dólares que desembarcaban en la pista ubicada a quinientos metros de la casa finca, comentó Caicedo y mostró cómo se conectaban las puertas de las habitaciones. Un laberinto para escapar de las Farc, en un principio, y años después, de las autoridades que los persiguieron a muerte.

El asesinato de Lara conmocionó al país. Fue el padrastro impuesto al Yarí y un empresario “prominente” que acumuló tierras, endeudando a los colonos para recibirla a cambio. De hecho, la sociedad Agropecuaria Balsillas Limitada (que agrupaba las tres haciendas) tenía como objetivo tomar en arrendamiento bienes raíces, según el certificado de existencia del 2 de marzo de 1981 que establece que la empresa estaría vigente hasta 2910, exactamente 929 años.

El Recreo había sido fundado por el pionero de la aviación en la Amazonía, el capitán retirado de la Fuerza Aérea Gustavo Artunduaga Paredes, el primer piloto que llegaría con la empresa Aeroselva al Caguán, liberal turbayista y candidato a la alcaldía de Florencia en 1988, en alianza con la Unión Patriótica. El 18 de enero de ese año, previo a las elecciones, fue asesinado en su finca, cercana a Florencia.

En la escritura 1563 de 1963 figura el historial de propiedad de esta hacienda. Los hermanos José Ricardo y Agustín Moreno la compraron al capitán Artunduaga el 23 de febrero de 1960. El 31 de diciembre de 1963, la Compañía del Sur Ltda., que gerenciaba Oliverio Lara Borrero, compró El Recreo y los predios de Méjico y Tinajitas, por \$129.000.

Para finales de los años setenta, con la aparición de Lara y otros ganaderos del Huila y Caquetá, el Yarí ya tenía más de cincuenta hatos y siete pistas

aéreas. Desde El Recreo, Méjico, Caquetania, Canadá, Tranquilandia, Ciudad Yará, Candilejas y otras, salían vuelos para Neiva o Bogotá. Y pronto, muchas avionetas bimotor cargadas de cocaína hacia las costas de Venezuela y Perú.

El arribo de la mafia

La muerte de Lara ocasionó un enredo de propietarios que reclaman hasta hoy. Según Rodríguez, quien tiene las escrituras de varios hatos ganaderos, los herederos de Oliverio Lara vendieron los dos principales predios, Méjico y El Recreo, a Rogelio Mora y Ricardo Cabrera. Este último, un apasionado por los caballos y heredero de grandes extensiones de tierra en el Huila, con haciendas como La Virginia, Las Mercedes, Satias, Tamas, Los Alpes, La Blanca, La Leyva, La Avisinia, La Holanda y La Polonia; también era dueño de la hacienda Trapichito (en Neiva), que luego pasaría a manos de los Lara.

Meses más tarde llegaron al Yará Isauro y Hernando Murcia (socios del esmeraldero Víctor Carranza), como dueños del hato Méjico que habían comprado a los herederos de Lara, dijo Rodríguez. “Ahí se instalaron y luego en El Recreo”. El primero que llegó fue Carlos Lehder Rivas, el joven *lavape-rros* de Pablo Escobar, quien estuvo “jugando fútbol” durante un mes y luego desapareció. Pero no hizo ninguna demostración de poder, dijo Rodríguez. Muy rápido, en 1980, llegaron Escobar, a El Recreo, y Rodríguez Gacha, a Méjico. Los Murcia desaparecieron como por arte de magia y los campesinos aún se preguntan si ellos fueron los testaferros.

Para los colonos se volvió costumbre ver volar avionetas siete veces al día y a 10 metros de altura sobre el río Yará. “A la llegada de esos señores no hubo problemas, había una convivencia pacífica, incluso, a mucha gente le dieron la idea de fundarse y prosperar”, acotó Rodríguez desde una de las siete habitaciones de la casona principal de El Recreo, una construcción que tiene una plancha. “Por ahí caminaban los escoltas de esos mafiosos”, refirió Caicedo, el portador de las coordenadas del avión que buscábamos.

A la entrada de El Recreo, entre dos árboles de guayaba frondosos y de monte enredado en las vigas, yacía intacto un corral de cemento, el establo que mandó a construir *El Mejicano* Gacha para guardar los equinos más fi-

nos que lucía en el Llano. Para el ejército que armó con Escobar, dicen los colonos, Gacha llevó 200 caballos en avión y en ellos puso a patrullar a sus hombres.

En los primeros meses de los ochenta, Gacha hizo una fiesta en El Recreo para celebrar el día del campesino. Regaló motosierras, guadañas, calzado y ropa. Sin embargo, estos no confiaban en él, porque sus hombres, los paramilitares del Yarí, asesinaban a quien se asomara a la sabana donde estaban los laboratorios para procesar cocaína. Si los campesinos eran sorprendidos por los paras, terminaban en la laguna de las pirañas, un estanque de agua verde que está a la entrada de El Recreo -al que Pablo Escobar regó con esos peces carnívoros- a donde mandaba “a nadar” a los trabajadores de seguridad o de los laboratorios que llevó desde Medellín. Nadaban como castigo cuando se acercaban a las Farc o simplemente ese era el pago a su trabajo, mencionó Caicedo. “En el verano, los que pescan en esta laguna sacan con sus anzuelos pedazos de huesos o calaveras”, recalcó.

Los primeros guerrilleros que se lanzaron desde La Uribe (Meta) a cruzar los Llanos del Yarí y fundar el Frente 40 (al final de la guerra Frente Felipe Rincón) que operaría entre Caquetá y Guaviare, se encontraron a los paramilitares en El Recreo. Fue en 1982 cuando saquearon la tienda que tenían los mafiosos en esa vereda. Se llevaron provisiones, ropa, calzado, comida y medicamentos. Los paramilitares los siguieron y entre las haciendas Manchuria (de la familia de Carlos Rodríguez) y Sevilla se enfrentaron, con resultado sangriento para los dos bandos.

El comandante de la IV División del Ejército, mayor general Luis Enrique Rodríguez Botiva, denunció los vínculos entre guerrilleros y narcotraficantes, dijo El Espectador del 17 de marzo de 1984. El operativo contra Tranquilandia y los otros hatos ganaderos había creado el mito de la alianza entre las Farc y el cartel de Medellín. Algo sencillo de decir durante la guerra, pero hoy, tanto los campesinos (a quienes la mafia nunca utilizó para sus laboratorios, cuentan los colonos) como la guerrilla reconocen un solo vínculo: el cobro del impuesto por la producción y comercialización de cocaína, política que las Farc adoptaron desde 1982 tras la Séptima Conferencia. Este fue el motivo de la discordia entre la insurgencia y Gacha.

El exterminio del primer partido político de las Farc, la Unión Patriótica, fue la respuesta de este narcotraficante declarado anticomunista. Más adelante, el entonces teniente coronel Luis Ernesto Gilibert Vargas (hoy general retirado de la Policía), contará con quiénes se enfrentaron sus hombres el día del allanamiento y qué tan cierto es que la guerrilla prestó seguridad a los laboratorios de Escobar y Gacha.

Un operativo inconcluso

Como si fuéramos a encontrar los restos de las llamas que la destruyeron, el 27 de julio llegamos al hato que tiene el nombre de Tranquilandia. Íbamos con el fotógrafo Mauricio Alvarado y el colono Eliécer Caicedo. La ceniza ya estaba negra. Días antes había conversado varias horas con el general Gilibert, quien dirigió en terreno el operativo contra la máquina de dinero que tenía Escobar entre el llano y la selva. “Voy hacia la hacienda donde hace 43 años empezó el fin del cartel de Medellín”, le dije una tarde de julio, cuando ya las Farc habían dejado las armas. Respondió, desde un piso 10 en Bogotá, sentado en su silla de consultor de una empresa de seguridad de la que es socio, con las manos en los bolsillos y la suspicacia de un expolicía de 74 años: “Yo no quiero revivir ese muerto”.

Tranquilandia está a 96 kilómetros desde la vereda La Y. Para llegar a ese sitio, que parece un óleo de paisaje con una palmera al pie de la casa, hay que pasar por los hatos Caquetania, Guadalajara y El Recreo. El fundador de Tranquilandia fue Aurelio Ferro, uno de los colonos comerciantes de quina y caucho que llegaron desde el Huila al Yará, y quien se hizo a esa hacienda de tierra baldía, cuyo único rastro hoy es que en 2011, Aldemar Soto Charry, conocido como “El Ingeniero” de las Farc, fue capturado allí, acusado de preparar la casa bomba en la capital del Huila en febrero de 2003, para atentar contra el entonces presidente Álvaro Uribe.

En febrero de 2013 el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) dijo que había iniciado el proceso de restitución de cerca de 130.000 hectáreas de tierras usurpadas por las Farc años atrás en manos del jefe guerrillero Víctor Julio Suárez, el “Mono Jojoy”.

Quien vio a Gacha en Tranquilandia fue Faryd Perdomo, Lilo, un campesino nacido en las sabanas del Yará hace 53 años. Fue en la única reunión que el narcotraficante hizo en el hato ganadero antes de que se desatara la guerra con las Farc. “Atraían a la gente para que se uniera a ellos. Fue lo más complicado, porque las Farc, si nos veían allá, también amenazaban. Un día Gacha le dijo al mayordomo que nos regalara las mulas viejas a los campesinos”, contó.

Meses antes del operativo, cuando Tranquilandia era el imperio de Escobar y Gacha, según Lilo, apareció Arnulfo Amaya, un finquero que tenía un *cristalizador* de cocaína y hombres armados para defenderse de la guerrilla. Amaya era quien daba la cara y autorizaba el paso por la sabana, “porque eso era propiedad de la mafia”, recordaron los hijos de los colonos que fundaron las tierras del Yará.

Al parecer, Amaya pasó inadvertido ante las autoridades de la época, pues no figura un solo antecedente en su contra; solo la “condena” que le impuso la Columna Teófilo Forero de las Farc el 12 de febrero de 1995: lo secuestraron y doce días después apareció muerto en Cartagena del Chairá (Caquetá) con una marca en su pecho: “paramilitar”.

Esta hacienda ha estado oculta desde el 7 de marzo de 1984, cuando la Policía Antinarcóticos y la DEA dieron el golpe. Queda en la vereda Paraísos del Yará, luego de atravesar la sabana feroz y de dejar atrás los bosques que se forman en los caños de agua, donde nace la palma Canangucha, de la que se alimentan los cajuches, tanto de los que viven en la mata como los que salen del Chiribiquete a la llanura. Escobar solía decir que allá tenía un zoológico nativo.

Un día antes del operativo, el entonces teniente coronel Gilibert recibió en Bogotá las coordenadas de manos del coronel Jaime Ramírez, comandante de la Policía Antinarcóticos, quien le confió dismantelar los laboratorios de cocaína del Yará. Aterrizaron en San José del Guaviare y luego en una pista equivocada. A juzgar por las indicaciones iniciales, ni siquiera sabían que los Llanos del Yará existían. Minutos más tarde, en la pista correcta, los estaban esperando a plomo. “Eran hombres vestidos de caqui”, relató Gilibert.

“En ese momento no se hablaba de que las Farc querían meterse al narcotráfico. Fue posterior cuando abrieron sus fábricas. Las Farc entran en guerra con Rodríguez Gacha y ahí es cuando nacen los del Magdalena Medio, para darle la pela a la guerrilla. No querían repartir sus riquezas y poderes con ellos”, agregó.

En un oficio del 20 de agosto de 2014, el exsecretario general de la Policía, Ciro Carvajal, le entregó el acta del operativo al entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda, quien investigaba los nexos de la familia del expresidente Álvaro Uribe con el narcotráfico. En dicho documento, Carvajal incluyó un asunto que está pendiente por esclarecerse: “La organización Farc era la encargada de la seguridad de dicho complejo, constituyéndose en la primera evidencia sobre la participación de la organización en actividades vinculadas con el narcotráfico”. El Espectador del 14 de marzo de 1984, lo había advertido: “...se afirma que las guerrillas de las Farc tenían vinculaciones con los narcotraficantes que venían operando a orillas del río Yari”.

Los campesinos no saben si hubo alianza con el cartel, solo que la guerrilla cobraba el impuesto al gramaje. Mauricio Jaramillo, miembro del Secretariado y excomandante del Bloque Oriental, aseguró que la disputa fue por el territorio y que nunca recibieron plata de Escobar y Gacha a cambio de prestarles seguridad.

Según el oficio que Gilibert le entregó el 10 de marzo de 1984 al juez segundo de instrucción criminal, Samuel Alberto Agudelo Luque, durante el allanamiento encontraron cien construcciones rústicas, siete aeronaves, diez lanchas, tres vehículos, cuatro tractores, seis pistas de aterrizaje, 21 armas largas, siete radios de comunicación, 34 plantas eléctricas, 38 motosierras, 10 compresores y 12 estufas. Tres días después, “ahí se quedó personal del Ejército” acompañando el operativo, que siguió dando resultados en los otros hatos y pistas durante ese mes. El imperio que se destruyó, aparte del complejo, dijo la Policía Antinarcóticos, incluyó 13,8 toneladas métricas de cocaína avaluadas en 1.2 billones de dólares.

El “muerto” que le trajo tantos problemas después, “dolores de cabeza”, diría Gilibert, y lo llevaría a retirarse de la Policía en 2002, tal vez sea la aeronave Hughes 500 HK – 2704-X, que estaba parqueada en una de las pistas de

Tranquilandia y cuyo propietario era una empresa de Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro Uribe Vélez.

Según los archivos de la Aeronáutica Civil, el helicóptero fue registrado y licenciado el 27 de octubre de 1981, cuando Álvaro Uribe era director de la Aerocivil. La empresa que lo importó, Afa Ltda. Aerofoto Amórtegui & Cía., se dedicaba a tomar fotos aéreas, pero ese 7 de marzo, su aeronave estaba en una pista clandestina del narcotráfico.

Sobre el particular, en los días posteriores al operativo, no se dijo mucho al público. Solo que en el allanamiento se habían incautado siete aeronaves del cartel de Medellín. La información era manejada por el coronel Ramírez, el juez Agudelo Luque y el Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, quien había liderado la investigación.

Fueron llamados a los estrados judiciales. Gilibert contó todo y entregó al juez las pruebas para que se dictara orden de captura contra Escobar: los planes de vuelo, las matrículas de las avionetas y los datos del helicóptero en mención. Además, relacionó los nombres de las cuarenta personas capturadas (ningún capo); el listado de las pistas que encontró en la sala de pilotos; y las pruebas de que el juez quemó toda la cocaína y los insumos que estaban en el lugar. “El juez llama a declarar a Ramírez Gómez y él dice que los que mataron a Lara Bonilla fueron los del Yarí, los de Tranquilandia”, afirmó Gilibert.

Luego, en una declaración juramentada de julio de 1984, conocida en 2007, cuando el periodista Gerardo Reyes publicó una investigación en El Nuevo Herald, la hermana del ministro de justicia reforzó una hipótesis develada en el corazón de esa familia: según Cecilia Lara Bonilla, su hermano le contó antes de que lo mataran “que lo de Tranquilandia era muy grave y comprometía a gente muy importante de la política del país, que el helicóptero que habían cogido en Tranquilandia era del papá de Álvaro Uribe Vélez”.

Horas después de esta revelación, Rodrigo Lara Restrepo, hijo del ministro asesinado, renunció al cargo de zar anticorrupción del gobierno de Álvaro Uribe. “Mi papá quedó sorprendido por todo lo que encontró en Tranqui-

landia. Era el [proceso] ocho mil del cartel de Medellín. Estaba el helicóptero del papá de Uribe. En la declaración aparece y eso mismo lo dice el general Ramírez, el único policía en el que mi papá confiaba en esa época. Mi papá llama al general y le dice que sí había plan para matarlo y que “los responsables eran los dueños de los aviones y los del helicóptero que incauté”. Yo no puedo sacar una conclusión definitiva, pero yo le dije a Uribe que eso era insostenible y por eso renuncié. No podía trabajar con él”, contó Lara en su oficina de presidente de la Cámara de Representantes.

A las 7:30 de la noche del 30 de abril de 1984, a la altura de la calle 127 con carrera 41 de Bogotá, murió abaleado Lara Bonilla, cuando se desplazaba en un automóvil oficial Mercedes Benz. Una motocicleta roja Yamaha DT 175 se acercó; Byron Alberto Velásquez Arenas, alias *Quesito*, transportaba al otro sicario, Iván Darío Guisao Álvarez, alias *Guisado*. Ambos, supuestamente, miembros del movimiento guerrillero Ricardo Franco.

Las autoridades encontraron también tres avionetas Cessna (matrículas 206 HK-3007-X; 206 HK-3064-X; 206 YU-3085-P) y una avioneta bimotor N – 3271-R. En el operativo participó el mayor Enrique Escobar, miembro de la entonces Policía de Control de Sustancias que Producen Adicción Física o Psíquica, hoy Dirección de Antinarcóticos, quien el 9 de abril de 1984 informó que en la pista Pascualandia encontró un avión completamente destruido de siglas HK-2456, color blanco, con rayas rojas, amarillas y verdes. También la avioneta Titanic 404 HK-2992-P que, consta en el acta, quedó en la pista Tranquilandia “por presentar desperfectos que impiden su traslado a Bogotá”.

Nunca más se supo de las aeronaves incautadas. Según un artículo del periódico *El Tiempo* publicado el 23 de abril de 2002: “tres de ellas un fiscal sin rostro ordenó devolverlas en 1995 a sus propietarios”, expresó en ese entonces Gabriel Merchán, jefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Incluido el helicóptero HK-2704X.

Los documentos de la Aeronáutica Civil, 43 años después del operativo, revelan: las matrículas de dichas aeronaves solo fueron canceladas cuando transcurrieron nueve años del operativo. Eso muestra el certificado de tradición y libertad de la Oficina de Registro Aeronáutico del helicóptero del

padre de Uribe Vélez: “Matrícula cancelada. Resolución 3280. Fecha de cancelación el 6 de mayo de 1993”.

Uribe ha defendido a su familia aduciendo que, un mes antes del operativo, lo vendieron para pagar una deuda que tenía su padre. No obstante, como cayó en Tranquilandia, nunca lograron hacer efectivo el traspaso. Refuerza su defensa con un aviso publicado un mes después del operativo en la revista Cromos, donde Carlos Amórtegui Romero, socio del asesinado Alberto Uribe Sierra, anunció: “el día 6 de febrero (1984) fue vendido y entregado por la compañía el helicóptero HK-2704X”.

El expresidente ha negado cualquier vínculo con el cartel de Medellín. Sin embargo, las versiones lo siguen señalando: “Cuando se supo que pertenecía al grupo de Medellín y que tenía vuelo y quién autorizó la matrícula y la operación de esa aeronave. Y eso recae en Aeronáutica Civil. ¿Quién era el jefe en ese momento en la Aeronáutica y a quién perteneció ese helicóptero? Esas preguntas se las hacen las personas”, sentenció Gilibert.

El 17 de septiembre de 2012 el homicidio del ministro Lara Bonilla fue decretado por la Fiscalía como crimen de lesa humanidad. La investigación aún está abierta en la Fiscalía octava especializada y contiene 115 cuadernos originales con sus anexos.

Tierra de nadie, tierra de todos

El mito de las guacas de la mafia creció mucho a principios de 2000, cuando la Zona de Distensión permitió el ingreso de muchos colonos en busca de tierra y comida. Las Farc ya tenían el control de los hatos, “que eran como una especie de trofeo de guerra”, afirmó Gustavo Pérez, un campesino buscador de caletas. El comandante Cipriano alcanzó a repartir, en calidad de préstamo, algunos predios entre los colonos, para que cultivaran coca, maíz y plátano.

Los buscadores de la plata del narcotráfico se hicieron famosos en estas sabanas. Un día de 2008, siendo Pérez presidente de la junta comunal de la vereda La Y, lo sorprendió un risaraldense, de unos 70 años, con mapas envejecidos y coordenadas exactas. Le dijo que sabía del entierro de una ca-

leta de Gacha. Salazar buscó la retroexcavadora, llamó a 17 campesinos más, pidieron permiso a las Farc y se metieron a El Recreo.

“Confiábamos en el viejito. En dos días excavamos aproximadamente una hectárea en donde supuestamente estaba, pero como no hubo claridad, el señor nos llevó a otro lugar a seguir buscando y no encontramos nada. Rompimos bosque y todo. Seguimos cavando cerca de la casa y tampoco. La gente se emputó y la mayoría se fue contra el viejito, lo iban a matar. Tocó controlar la situación. Nosotros nos devolvimos y el viejito se quedó, buscó más gente para seguir cavando. Lo volvimos a ver a los seis meses y después nunca más supimos de él, no sabemos si está muerto o rico”, relató el buscador de caletas.

Así se repoblaron nuevamente los Llanos del Yarí. Las Farc “decomisó” las tierras que ocupó la mafia (algunas hasta 2016 de la familia Lara) y “expropió” a los testaferros que intentaron regresar a la región durante la Zona de Despeje. Como dijo Gamadiel Muñoz, un exguerrillero de la escuela de Manuel Marulanda: “La idea era que esta región se poblara para podernos camuflar. Muchos colonos, desde ese tiempo, fundaron sus fincas y hoy pueden decir que sobrevivieron a la guerra”.

Cuando las Farc se quedaron con el poder territorial, impusieron sus reglas y quien no las acató tuvo que irse. Los herederos de grandes extensiones de fincas y ganaderos del Huila y Caquetá, se enfrentaron a ese modelo de “Estado” que dictó la insurgencia. El impuesto de 5 mil pesos por cabeza de ganado, por ejemplo, fue rechazado por los hacendados. “Los hatos empezaron a ser desocupados. El hato de Carlos Alfonso Monsalvo, Jalisco, tenía 1.500 reses en 1988; lo dejaron limpio, lo acusaron de paramilitar”, contó Lilo, mayordomo de esa hacienda desde 1987 y desmintió tal aseveración contra su patrón, oriundo del Tolima. Después de la Décima Conferencia de las Farc, en septiembre de 2016, que se realizó en esas tierras, la guerrilla le devolvió los predios a Monsalvo.

Luego de que las autoridades dismantelaran los laboratorios de Tranquilandia, Leonidas Vargas, heredero de Gonzalo Rodríguez Gacha, dominó los negocios del narcotráfico en Caquetá e incluso las autoridades del momento dijeron que tuvo negocios con las Farc. Los campesinos supieron que administró laboratorios en Tranquilandia.

Rodríguez Gacha peleó hasta el último minuto de vida. Se quedó solo y disparó hasta que la ametralladora de un helicóptero artillado de la Policía impactó su cabeza con una bala calibre 7.62 el 15 de diciembre de 1989, en Coveñas (Sucre). Escobar Gaviria, mientras tanto, sería abatido el 2 de diciembre de 1993, en el tejado de una casa de Medellín, cuando intentaba escapar de las autoridades.

Vargas fue capturado en septiembre de 1995 y condenado a 19 años de prisión por narcotráfico. Pronto saldría de la mazmorra (en 2001) y su decisión fue irse del país para intentar lavar dinero. El 8 de enero de 2009, en el hospital 12 de octubre de Madrid, fue asesinado con cinco disparos mientras se recuperaba de una afección pulmonar. Lo mataron dos sicarios de Medellín.

Del hato El Recreo, donde vivieron como reyes los del cartel de Medellín, se sabe que fue vendido el 11 de agosto de 2017 a William Fernando Bonilla, Leonel Perdomo Almario y Augusto Silva, quienes pagaron 60 millones de pesos a la Compañía del Sur Limitada en Liquidación, la empresa de los descendientes de Oliverio Lara Borrero (en la que figuran como socios: Hernán Lara Perdomo, Emma Lara de Martínez, Olga Lara de Lizarralde, Mercedes Lara de Rodríguez, Oliver Lara Perdomo, María Pepita Lara de Irigorri, entre otros), medio siglo después de adquirida por el patriarca. Son unas 5.400 hectáreas que reúnen los predios Tinajitas y Seboruco, se lee en el certificado de tradición. Es decir, todo indica que los antiguos nombres mafiosos -El Recreo y Méjico-, que aparecen en la escritura de 1963, fueron cambiados por Seboruco.

El negocio se selló en la notaria de La Montañita (Caquetá) el 6 de diciembre de 2016, casi ocho meses después de que la directora de extinción de dominio de la Fiscalía General de la Nación, Andrea Malagón, dijera (el 5 de mayo de 2016) que había “recuperado una gran extensión de terreno históricamente usufructuado por las Farc en los Llanos del Yarí, Caquetá”.

Rodríguez contó que todos los hatos en los que estuvo la mafia hacen parte de ese gran baldío de 277.000 hectáreas. Sin embargo, parece que El Recreo, Mejico (o Seboruco) y Tinajitas no fueron incluidos, pues varios meses después del anuncio fueron vendidos por la Compañía del Sur Limitada.

Así las cosas, los Lara y asociados deberían tener las escrituras que demuestran que esos predios baldíos fueron adjudicados por el Estado al señor Oliverio Lara, pues como dice la Fiscalía, nunca hubo proceso de extinción, porque contra un bien del Estado nunca procede. “Y el baldío es un bien del Estado”, resaltó Malagón.

En mayo de 2015, Carlos Carmona, funcionario del desaparecido Incoder, sobrevoló las sabanas del Yarí y al término de su viaje dijo que allá no vivía nadie, que solo había visto a un campesino. Iba con el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, ahora presidente del partido Cambio Radical.

Ofendidos, una semana después los pobladores del Yarí citaron al Gobierno a una reunión en la cabecera municipal de la Macarena (Meta), para decirle cuántos habían votado para reelegir a Juan Manuel Santos. “Éramos unos cinco mil campesinos, muchos de los cuales hoy habitan esos hatos”, relató Rodríguez.

El gran baldío del que se habla estaba formado por El Recreo, Méjico, Caquetania, Tranquilandia, Canadá y Felipe. En esta última estaba la mitad del avión que decidimos buscar cuando *Chaqueto*, un exguerrillero de las Farc, contó que en los últimos días de la guerra durmió dentro de él para huir de los tigres y los osos hormigueros. La otra mitad de ese avión quizá salió en un camión, en 2011, cuando la guerrilla autorizó sacar todas las latas de la zona a unos chatarreros de Florencia. “Duraron seis meses convirtiéndolas en plomo aquí en la vereda la Y”, aseguró el gúaquero Gustavo Pérez, mientras mostraba en la palma de su mano el polvo gris al que quedaron reducidas las aeronaves de la cocaína.



En el patio infinito de la hacienda Tranquilandia aún hay restos de la maquinaria de poder que tuvo el cartel de Medellín en estas sabanas de los Llanos Orientales. Foto: Mauricio Alvarado

Referencias

PERIÓDICOS Y REVISTAS

El Espectador, (17 de marzo de 1984), “Hay vínculos estrechos”.

El Espectador, (14 de marzo de 1984), “Hay vinculaciones”.

El Nuevo Herald, (2007, 9 de diciembre), “Cabos sueltos en la muerte de Lara Bonilla”, en <http://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-blogs/article1931635.html>.

Cromos (1984, 6 de febrero), “Aviso publicitario de “Afa Ltda Aero Foto Amortegui & Cia””.

PUBLICACIONES OFICIALES

Aeronáutica Civil, Unidad Administrativa Especial, Certificado de Tradición y Libertad, Folios de Matrícula del 6 de mayo de 1993.

Cámara de Comercio de Bogotá, Certificados de existencia y representación de la sociedad “Agropecuaria Balsillas Limitada”, de noviembre de 1981.

Dijin, sección de estupefacientes, Oficio 0464 del 4 de abril de 1984.

Fiscalía General de la Nación, Respuesta derecho de petición al representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, Oficio 236 del 14 de julio de 2014.

Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Datos generales de la operación Tranquilandia, Memorando del 20 de agosto de 2014.

Notaría Segunda Principal del Circuito de Neiva, Escritura Pública 1553 de 1963 de la hacienda El Recreo.

Notaría Veinticinco del Circuito de Cundinamarca, Escritura 1142 del 11 de diciembre de 1981.

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Vicente del Caguán (Caquetá), Certificado de tradición del 11 de agosto de 2017.

Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, Certificado de tradición del 2 de marzo de 1981.

Oficina Seccional de Catastro de Florencia, Certificado Catastral N° 981 del 9 de diciembre de 1963.

Policía Nacional, Policía de Control de Sustancias que Producen Adicción Física o Síquica, Informe del 9 de abril de 1984.

ENTREVISTAS

Entrevista realizada al señor Eliécer Caicedo, llevada a cabo en la vereda Playa Rica, municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), en julio de 2017.

Entrevista realizada al general Luis Ernesto Gilibert Vargas, llevada a cabo en Bogotá (Colombia), en julio 2017.

Entrevista realizada a Faryd Perdomo, llevada a cabo en la vereda Playa Rica, municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), en julio de 2017.

Entrevista realizada a Rodrigo Lara Restrepo, llevada a cabo en Bogotá (Colombia), en agosto de 2017.

Entrevista realizada a Gustavo Pérez, llevada a cabo en la vereda Playa Rica, municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), en julio de 2017.

Entrevista realizada a Gamadiel Muñoz, llevada a cabo en la zona veredal para la dejación de armas de las Farc, Vereda Playa Rica, municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), en julio de 2017.

Entrevista realizada a Carlos Rodríguez, llevada a cabo en la vereda Morrocoy Alto, municipio de la Macarena (Meta), en julio 2017.

Entrevista realizada a Andrea Malagón, directora de extinción de dominio de la Fiscalía General de la Nación, en agosto de 2017.

LIBROS, ARTÍCULOS, ENSAYOS, TESIS

Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, (2017), *La tierra no basta*, Bogotá (Colombia).

Perdomo, Carlos Farith, (2009), *Gotas de aceite*, San Vicente del Caguán (Caquetá), Editorial Perdomo Lozada, Carlos Farith.



En España Manuel encontró el ambiente ideal para explotar sus habilidades artísticas. Foto: Archivo particular Manuel Velandia.

La lucha por ser diferente

Por Sania Salazar

Manuel Velandia es uno de los nombres clave del movimiento LGBTI en Colombia. Ser abierta y orgullosamente gay desde los años setenta le facilitó liderar su comunidad, pero incursionar en política para reclamar sus derechos hizo que los violentos lo amenazaran y desplazaran. Es el reflejo de un país en el que no hay garantías para vivir en la diferencia.

Había aprendido a vivir con amenazas de muerte. Incluso una granada estalló en la puerta de su casa sin más consecuencias que unos vidrios rotos. Manuel Antonio Velandia Mora se hacía el loco, como cuando alguien tiene un dolor físico y aplaza la visita al médico porque piensa que no se trata de una enfermedad grave. Llevaba por lo menos veinte años lidiando con las llamadas intimidantes que empezaron por su trabajo en la prevención del VIH Sida, en la década de los ochenta.

Cada tanto una voz al otro lado del teléfono le repetía: “hijueputa lo vamos a matar”. También recibió sufragios en los que le hacían la misma advertencia. El autor de esos mensajes nunca se identificó.

Ya había visto morir a varios amigos y conocidos activistas en circunstancias nunca aclaradas. Aunque las autoridades no lo admitieran, era claro que se trataba de amenazas y ataques producto de su trabajo y de su condi-

ción. Unos años atrás en Medellín, otro Manuel, el periodista Manuel José Bermúdez Andrade se había salvado de la muerte. Hombres armados llegaron a buscarlo hasta su casa en 2002, pero se equivocaron de apartamento.

Pero era la primera vez que a Manuel Velandia lo amenazaban con matar a un familiar. Así que empacó la vida en dos maletas y mientras podía salir de Colombia se ocultó en la finca de la familia de una amiga. No sirvió de mucho, porque hasta allí lo siguió la voz amenazante. Era noviembre de 2006 y por la proximidad de las festividades navideñas, los papeles para que lo recibieran como estudiante en una universidad española se demorarían hasta el nuevo año. Esa era la forma más rápida para salir del país.

Después de la explosión de la granada supo lo que era andar escoltado por un policía que le preguntaba por la identidad de cuanta persona lo miraba o saludaba en la calle. La experiencia no le gustó y le duró apenas dos semanas, prefirió renunciar a la protección. Pero esta vez varias personas cercanas le insistieron en que era imposible ponerle escoltas a cada uno de sus familiares. Se había vuelto un peligro para las personas que más quería, y así llegó a la conclusión de que la única solución era irse del país.

Gloria Ortega, periodista y fotógrafa independiente y amiga de Manuel, está segura de que él fue consciente, en ese momento, del dolor que les causaría a sus hermanas si quienes lo amenazaban cambiaban de plan y lo mataban a él.

Manuel era visible entre los homosexuales de Bogotá desde 1976, cuando conoció a León Zuleta y ambos se convirtieron en los impulsores de ese movimiento en el país. León era filósofo y profesor universitario. Es recordado como activista, defensor de los derechos humanos e intelectual. Lo hirieron con cuchillo hasta matarlo en su apartamento en Medellín, en 1993. Según el informe *Aniquilar la diferencia*, del Centro Nacional de Memoria Histórica, publicado en 2015, su muerte no fue aclarada, por lo que no se sabe si fue un crimen por prejuicio.

Para Ricardo Montenegro, abogado y amigo, una de las principales conquistas de Manuel fue lograr que en Colombia se excluyera la homosexualidad de los delitos contemplados en el Código Penal. En el artículo 324 del Código de 1936 se preveía una pena de seis meses a dos años de prisión para aquellos que “consumen el acceso carnal homosexual, cualquiera que sea su edad”.

Manuel cuenta que fue un lobby directo con magistrados homosexuales y heterosexuales, que estaban de acuerdo en que no era un delito. Entre ellos acordaron que lo mejor era eliminar del Código los dos artículos que penalizaban la conducta sin propiciar mayores discusiones.

No era una coyuntura favorable. Ricardo recuerda que esa reforma al Código Penal arrancó en 1978 y tenía como objetivo hacer más duras las sanciones. “Era la época del Estatuto de Seguridad del presidente Julio César Turbay. A muchos homosexuales se los llevaban en redadas que la Policía hacía en los bares”. Manuel cuenta que los llevaban en patrullas hasta el cerro de Monserrate y allá los hacían desnudarse y les tiraban agua, y que en el frío de la madrugada les tocaba regresar a la casa sin ropa porque la tiraban al monte y en la oscuridad era muy difícil encontrarla.

Aun así, resultó siendo más fácil de lo que pensaban. “Éramos tan invisibles que nuestros derechos no se discutían, ellos daban por hecho que era delito y no comprobaron que seguía siéndolo. Realmente más que una ganancia nuestra, fue un descuido de ellos [risas]. Pero en caso de que se hubiera dado la discusión había toda una argumentación teórica para explicar por qué no era delito”, cuenta Manuel. Él y un grupo de activistas habían preparado esa argumentación jurídica, filosófica y sociológica, a punta de “comer” libros.

En el discurso que tenían preparado para defender su causa argumentaban, entre otras cosas, que eliminar las sanciones a las conductas homosexuales podía contribuir “al menos en algo, a mitigar la homofobia extendida socialmente”. Y se lograba así modificar la actitud hostil y condenatoria de la sociedad heterosexual. Además, llamaban la atención sobre la “auto-opresión” de los homosexuales por esa represión legal, lo que, explicaban, acentuaba la necesidad de ocultarse y reforzaba sentimientos de culpa y temor.

Así, la homosexualidad dejó de ser delito, sin mucho escándalo, en 1980.

La lucha contra el Sida

Manuel sabía cómo traducir en palabras sencillas los tecnicismos con los que médicos y enfermeras pretendían explicar la necesidad de usar preservativos en las relaciones sexuales para evitar el contagio del VIH, un virus

que los médicos estadounidenses describieron por primera vez en 1982. En ese momento se había generado pánico alrededor del mundo porque el Sida, la enfermedad que producía el virus, se propagaba de manera rápida y había mucha desinformación sobre el tema, se creía que hasta dar la mano a una persona enferma podría propagarla. El hecho de que los primeros casos documentados se hubieran detectado entre personas homosexuales hizo que se pensara que era una enfermedad exclusiva de esta población.

La pandemia avanzaba. Según el documento titulado *Resumen de situación de la epidemia por VIH/Sida en Colombia 1983 a 2011*, del Ministerio de Salud y Protección Social, en 1986 hubo 47 casos notificados de VIH/Sida, 29 de esas personas murieron. Ese año contactaron a Manuel de la Alcaldía de Bogotá, (durante la administración del conservador Rafael de Zubiría Gómez) para que ayudara a realizar campañas de prevención en bares y discotecas, pues creían que era la estrategia más eficaz contra la enfermedad. Manuel dictaba charlas sobre el uso del condón y sobre el Sida en los bares desde 1982, año en el que se realizó en Colombia la primera manifestación homosexual, conocida hoy como marcha del orgullo gay.

Andaba en ese trabajo de prevención mientras el país político se transformaba con la Asamblea Nacional Constituyente.

Aunque la comunidad LGBTI no participó en la elaboración de la nueva Constitución, pues según Ricardo en ese momento no tenían el grado de organización para hacerlo, y la nueva Constitución no tiene explícitos derechos para ellos, sí tiene mecanismos con los que han podido exigir sus derechos, como la tutela, nueva herramienta jurídica que les sirvió a los gays para hacer visibles algunas de sus necesidades en atención médica y para exigir otros derechos.

De tal manera que apenas fue promulgada la Constitución de 1991, él ya estaba en la tarea de aprender cómo se presentaba una tutela para exigir medicamentos para el tratamiento del Sida. Manuel les facilitaba a los enfermos el formato en el que debían presentar la solicitud, los asesoraba gratis con la redacción de la tutela. Incluso recibía en su casa a quienes ya tenían la manifestación del virus e iban en busca de consuelo. El número de teléfono de su casa sirvió como línea de información sobre la enfermedad.

Desde esa época, el abogado Germán Humberto Rincón Perfetti, también abiertamente homosexual, ha sido otro de los líderes de la defensa jurídica de las causas gay. Aunque Manuel reconoce los logros en materia jurídica que ha alcanzado Germán Humberto, admite que lo considera su antagonista. Y da sus razones: porque León Zuleta y Manuel preferían que los derechos de los homosexuales se alcanzaran por medio de una transformación política y cultural de la sociedad y no por una pelea jurídica. Entre los dos había una lucha por el protagonismo en la comunidad gay y en los medios de comunicación.

Manuel dice que a finales de los noventa aumentaron las llamadas amenazantes. Durante años las ignoró y prefirió no hablar sobre sus temores, pero en algún momento decidió exteriorizarlos en algunos escritos que todavía conserva:

En los miedos está la diferencia

*Una voz ronca y desconocida invade mis oídos
“¡Hijueputa lo vamos a matar!”*

A cero se reduce la respuesta.

*Pasan las horas como si fueran días
pasan los días como si fueran meses,
el miedo alarga el tiempo,
silencio espeso y largo
la voz retumba en mi cabeza.*

Manuel Velandia.

Ya con la nueva Constitución en vigencia, el ministro de salud, Camilo González Posso, le propuso, en 1991, que lo asesorara en el programa de prevención del Sida y enfermedades de transmisión sexual. “El trabajo con Manuel fue fascinante”, se ríe Gloria, recordando algunas pilatunas memorables. Ella era la jefa de prensa del ministerio. Los dos andaban de aquí para allá con un pene de plástico explicando cómo se usaba un condón. En ese momento era un gran atrevimiento.

Cuando empezaron a trabajar en la entidad se dieron cuenta de que acababan de sacar de la televisión nacional un comercial en el que un hombre desnudo se tapaba el pene con el empaque de un condón. El mensaje decía algo así como: recuerda que la única prenda que no te puedes quitar es el condón. Era una de las primeras campañas contra el Sida, lanzada en diciembre de ese año. Los sectores más conservadores del país, incluida la iglesia y algunos senadores, se escandalizaron porque ver a un hombre desnudo en la televisión era inmoral. La palabra condón los incomodaba, era escandalosa.

El paso de Manuel por el ministerio no duró más de un año, pero después siguió trabajando con Gloria en Apoyémonos, una ONG que se inventaron para seguir promoviendo la prevención del Sida. En esos años lograron que en los medios de comunicación se hablara del condón. Repartieron preservativos durante talleres en colegios, universidades y hasta en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en Bogotá, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Lograron que con la edición del 1 de diciembre de 1992 del periódico El Espectador circulara una revista dedicada al Sida. El punto final era un condón pegado en la contraportada.

Para esa misma celebración, ofrecieron una fiesta en la que invitaban a un vuelo de placer. La noche empezaba con travestis que repartían condones en bandejas de plata. Seguía con Manuel y otro hombre vestidos como pilotos simulando el inicio de un vuelo. La voz de la azafata daba las instrucciones: en caso de emergencia, debajo de las sillas están los salvavidas, los condones. La fiesta terminaba alrededor de una cama de bronce con lencería blanca dispuesta en la mitad de la discoteca. A la cama llegaba una pareja de recién casados cuya pasión se apagaba porque la novia se sentía mal. Una voz narraba la vida sexual de ambos y la cama se llenaba con los compañeros sexuales de cada uno. Los dos tenían Sida.

Por ese entonces Gloria y Manuel sabían de la necesidad urgente de que la gente entendiera que el Sida no era una enfermedad exclusiva de homosexuales, que cualquiera se podía contagiar y que la única barrera, por lo mucho que había investigado Manuel en revistas especializadas que le llegaban del exterior, era el condón. Ya médicos y científicos lo sabían, pero a principios de los años ochenta Manuel era uno de los pocos bien informados sobre el Sida en Colombia.

La decepción de la política

Piedad Córdoba, congresista del Partido Liberal, lo buscó para dar una segunda pelea por los derechos de los homosexuales en el Senado en 2001. Él ya había colaborado en un primer intento junto a la senadora María Margarita Londoño, del Partido Verde Oxígeno, y la exministra María Elena Jiménez. Ellas le pidieron que les ayudara a presentar un proyecto de ley que fue radicado en 1999 con el título: “por el cual se protegen y reconocen derechos a las mujeres y hombres bisexuales y homosexuales”. La iniciativa se hundió antes del primer debate en la Comisión Séptima, que estudia, entre otros asuntos, los relacionados con la mujer y la familia.

Los intentos para que el Congreso reconociera los derechos de esta comunidad siguieron. Piedad presentó cuatro proyectos de ley con el mismo objetivo y ninguno pasó. Según los registros de Congreso Visible, entre 2001 y 2015 se presentaron 19 iniciativas que buscaban proteger los derechos de las parejas del mismo sexo. Los tres primeros intentos de Piedad fueron en 2001, 2002 y 2004. En 2005 radicó el proyecto el senador Álvaro Araújo, que tampoco tuvo éxito. El más reciente intento de Piedad fue en 2010.

La historia terminó demostrando que el Congreso no sería la vía para el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI. Desde 1993 fueron las altas cortes –en especial la Corte Constitucional– las que hicieron este trabajo. Cerca de sesenta fallos en los últimos veinte años han sido determinantes para tratar de conseguir la igualdad.

A Manuel, con un perfil más de activista, artista y académico, no le interesaba la política. Pero tenía una gran ventaja: además de vivir su orientación sexual libre y abiertamente, tenía la formación suficiente para defender la homosexualidad con argumentos. Sociólogo con formación en filosofía, era miembro de la Sociedad Colombiana de Sexología e investigador. Eso lo convertía en un candidato ideal. Piedad Córdoba le habló sobre la necesidad de tener representantes de la comunidad homosexual en el partido y le propuso que se lanzara a la política, pero el Movimiento de Solidaridad Comunitaria, una organización de minorías sexuales del mismo partido, se le había adelantado en la propuesta, así que aceptó la primera invitación.

Esa iniciativa la lideraban personas muy cercanas a Manuel, entre ellos Ricardo Montenegro, su amigo, Ricardo Molano, su novio en aquel entonces, y Andrés Vásquez, en ese momento estudiante de la Universidad Javeriana. Con ese apoyo, Velandia se lanzó a la Cámara de Representantes en 2002. En esa época tuvo la mayor exposición mediática que recuerden sus amigos, acostumbrados, desde inicios de los ochenta, a escucharlo decir con la mayor naturalidad que era gay y a enseñar ante las cámaras cómo se ponía un condón, incluso, con la boca. Lo veían encarar los demonios de toda una sociedad y completar las críticas con sonoras carcajadas. Fue el periodo más crítico de las amenazas.

“Cuando lo de la granada” es una expresión común entre Manuel y sus amigos para referirse al atentado en su contra. Él vivía con Ricardo, su novio, en una casa antigua y grande en Chapinero, en Bogotá. Era la noche del jueves 28 de febrero de 2002. Estaban en un cuarto de la parte trasera cuando explotó. Salieron de ahí sin un rasguño y encontraron los ventanales hechos pedacitos en el suelo.

Al día siguiente un vecino estaba insultándolo.

—¡Marica hijueputa, por su culpa nos quebraron todos los vidrios, ¿y ahora quién nos los va a pagar?

—Mire, señor, a mí no me viene a decir marica; por favor me dice don marica, le dijo Manuel sacando la cabeza por una ventana de la casa.

“A Ricardo [el novio] le dio un ataque de risa y me dijo que cómo se me ocurría contestarle eso al señor. ‘Y el otro por qué me viene a decir marica si no me conoce’, le respondí. Es que a mí se me ocurrían cosas así porque soy muy salido del marco. Lo de don marica me parecía buenísimo, entonces de ahí en adelante me volví don marica”, recuerda entre carcajadas.

Se burlaba, muy en serio, de que su vecino lo considerara un bicho raro por ser homosexual. Algo por lo que no hay que esconderse ni considerarlo sucio ni enfermo ni anormal. Se había tomado el descubrimiento de su inclinación sexual de la única forma que podía, de la manera más natural. Sí, era marica, pero merecía respeto, como cualquier otra persona. Si su vecino era don heterosexual, él era don marica.

Ese cara a cara con su sexualidad y con su entorno se le facilitó porque ni en su casa ni en la universidad lo discriminaron. Sabe perfectamente que la familia es uno de los primeros escenarios en donde las personas que se salen del “deber ser” heterosexual sufren violencia. Pero a él le tocó una familia santandereana, de académicos (una hermana fue decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional y un hermano rector de la Universidad Cooperativa de Colombia, para citar solo dos ejemplos) en la que incluso, la mamá no opinó mucho. “Ah, bueno”, respondió cuando le explicó.

“En esa época era subversivo decir que había un gay aspirando a la Cámara, y sobre todo que fuera Manuel, porque él hablaba de frente. Era subversivo hasta para los gays porque había muchos que no se identificaban con él, sobre todo el gay que quería seguir aparentando para encajar en la sociedad”, sentencia Ricardo Molano, el exnovio.

La incursión de Manuel en la política no fue más que un desvarío, dice Gloria. Un fuera de lugar del que Manuel fue consciente. En uno de sus blogs titulado investigadormanuelvelandia.blogspot.com.co escribió sobre ese momento: “Lo más tenaz fue llegar a los barrios y darnos cuenta de que a las juntas de acción comunal no les interesaban las propuestas para la ciudad, sino los televisores, las sillas, las ‘ayuditas’, así que como buenos pobres no teníamos cabida en esos sectores, pues no teníamos cómo llenarles el estómago con tamal y cerveza”. No estaba dispuesto a reivindicar lo gay a cualquier costo.

A él le quedó muy claro por qué lo amenazaron. “Por marica [carcajadas]. Lo que es peligroso es que tengas ventanas para opinar. Yo tenía una columna en la revista *Semana* y salía en programas de RCN, hacía investigaciones en las que los paramilitares salían como perpetradores, era evidente que quienes me amenazaban eran ellos. Yo era visible. No creo que mi problema fuera con todos los paras, sino con algunos”, reflexiona.

Según el informe *Aniquilar la diferencia*, una de las formas en que los miembros de la comunidad LGBTI se vuelven blanco de la violencia de los grupos armados se da cuando hacen parte de colectivos y participan de espacios políticos para erradicar las violencias en su contra.

Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa y amiga de Manuel, explica que en el marco del conflicto armado se exacerbó la discriminación y el prejuicio

que hay en la sociedad colombiana. “El conflicto reflejaba de una manera más cruda, más amenazante, lo que se da por fuera. No es que hayan escogido como blanco específico a la población LGBT, sino que, sin duda, ser gay, lesbiana, bisexual o trans no era visto como algo positivo en las zonas de control de grupos armados, tanto paramilitares, como guerrillas, e incluso para el Ejército y Policía”.

Para Marcela lo cuestionable es que una sola persona haya sido víctima solo por ser gay, lesbiana, bisexual o trans, y que la razón del victimario sea la sexualidad de las personas: “Los crímenes por prejuicio son muy difíciles de erradicar porque tienen su origen en las normas sociales y culturales, y cambiarlas toma mucho más tiempo”, sentencia Marcela.

Los sospechosos

Manuel no denunció las amenazas que lo llevaron a salir del país porque se concentró en lograr ponerse a salvo, pero cree que están relacionadas con un incidente que tuvo a finales de noviembre de 2006, durante una conferencia que dictaba en Cali. Alguien del público consultó su opinión sobre las acusaciones que circulaban en los medios en contra del entonces senador Álvaro Araújo Castro, del Movimiento Alas Equipo Colombia, por presuntamente financiar grupos paramilitares. La pregunta se debía a que el senador había presentado una iniciativa en el Congreso a favor de las parejas del mismo sexo y en ese momento era uno de los primeros implicados en parapolítica. En 2010 lo condenaron a nueve años de cárcel por el delito de “concierto para promover grupos armados al margen de la ley y, determinante de constreñimiento al sufragante”.

“Dije que si esa persona, que se había vuelto abanderada de los derechos de los homosexuales, nos defendía siendo un asesino, prefería que el proyecto se cayera a que un asesino consiguiera derechos para mí”, recuerda Manuel.

Sin saberlo había respondido la pregunta de un periodista y los medios de comunicación reprodujeron lo que había dicho. Horas después lo llamaron para amenazarlo con hacerle daño a su familia. Era la primera vez que su franqueza ponía a sus seres queridos al borde del abismo donde él continuamente le gritaba las verdades incómodas a la sociedad. Esa coincidencia lo llevó a pensar que quienes lo amenazaron eran paramilitares.

Pero ese no era el único atrevimiento que sentía que le estaban cobrando. Ese año había trabajado como consultor del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en una investigación sobre explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, en colegios de Bogotá. Al resultado de esa investigación atribuye la reactivación de las amenazas. “Descubrimos que entre los que traficaban con niños estaban los paramilitares”.

Además, en 2005 había iniciado un periodo de exacerbación de la violencia de grupos armados posdesmovilización de las AUC contra personas con identidades sexuales diversas. Este pico violento se prolongó hasta 2014, según el informe *Aniquilar la diferencia*.

En ese lapso se registraron 58 casos, de los cuales 18 son atribuidos a paramilitares y 28 a esos grupos posdesmovilización. El informe enfatiza en que ese periodo coincidió con la implementación de la Ley 975 de 2005, llamada ley de Justicia y Paz.

Tres años después de que lo amenazaran con hacerle daño a su familia, asesinaron a dos activistas que ya habían sido amenazados. La primera víctima fue el ingeniero agrónomo y defensor de los derechos humanos de los sectores LGBT Álvaro Miguel Rivera, de cuarenta y un años. Lo asesinaron el 6 de marzo de 2009 en Cali. Grupos desconocidos lo habían desplazado de Cali y Villavicencio. A Wanda Fox, mujer transgénero de treinta años, la mataron en la localidad de Los Mártires, en Bogotá, en octubre de ese mismo año.

Haciendo maletas y una vida nueva

El torbellino en que se había convertido la vida de Manuel, entre sus actividades de profesor en la Universidad Cooperativa de Colombia e investigador, el activismo gay, el trabajo de prevención del Sida y sus actividades artísticas, paró de repente cuando decidió marcharse, en 2006.

Ver a Manuel haciendo maletas, decidiendo qué dejaba y qué se llevaba, reduciendo una casa de 270 metros cuadrados a dos maletas, fue verlo quebrado por primera vez, evoca Ricardo, el exnovio. “Él no lo exteriorizaba. Creo que era lo que más enloquecía a la gente que lo odiaba: no verlo amilánado; él nunca posó de víctima”.

Ricardo, el exnovio, y Ricardo, el amigo, sintieron su partida como la muerte. Al exnovio le daba instrucciones sobre a quién entregar esto o aquello. Armó tres pilas de objetos: lo para llevar, lo para regalar y lo para botar.

Manuel pudo, por fin, salir del país el 16 de enero de 2007. Llegó a España, el tercer país que, según la Unidad para las Víctimas, ha recibido mayor cantidad de declaraciones de víctimas (782) después de Ecuador (1.979) y Canadá (1.202). Se adaptó fácil, pero admite que al principio tenía pesadillas recurrentes en las que se veía sin nada, durmiendo en la calle y sin ayuda.

Una buena noticia le llegó en dos hojas con el logo del Ministerio del Interior español, fechadas el 8 de abril de 2010. “Reconocer la condición de refugiado y conceder el derecho de asilo a Manuel Antonio Velandia Mora”, se lee al final de la segunda hoja. Un año después, el Estado colombiano lo incluyó en el Registro Único de Víctimas, RUV, por haber sufrido atentados, amenazas y desplazamiento forzado. Así, entró en la lista de las 37 personas de la comunidad LGBTI que se han registrado como víctimas desde el exterior.

Los hechos violentos que han afectado a esta población están relacionados, en su mayoría, con el desplazamiento forzado. Así lo muestra un informe de Colombia Diversa de agosto 2017. Bajo el nombre *Vivir bajo sospecha*, la investigación muestra que de 2.354 hechos reportados por personas LGBT en el RUV (Registro Único de Víctimas de Colombia), 1.676 correspondían a ese delito y 358 a amenazas. Los actos terroristas, atentados, combates y hostigamientos están en cuarto lugar con 28 hechos.

El informe señala, además, que en 366 de esos hechos el presunto agresor es una agrupación paramilitar. En 287 hechos se presume responsabilidad de las guerrillas. “En medio de la guerra, el detonante era simplemente ser o parecer diferente a los demás”, sentencia el documento.

Los retos pendientes

Desde que Manuel se fue del país, hace diez años, la Corte Constitucional ha promulgado varias sentencias que reconocen los derechos de la población LGBTI. La mayor parte ha girado en torno a derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo, la adopción consentida cuando un miembro

de la pareja es progenitora biológica, el cambio de nombre y algunas cirugías para las personas transgénero, la protección para casos de violencias en el trabajo (especialmente despidos), el reconocimiento de orientaciones sexuales e identidades de género en cárceles, y el reconocimiento de las parejas del mismo sexo en el sistema de seguridad social, entre otros.

Sin embargo, el informe del CNMH señala que esos avances no se reflejaron en la reducción de las violencias en el conflicto armado, pues entre 1991 y 2006 y entre 2007 y 2014 se registraron “los periodos de aumento de los hechos victimizantes contra estos sectores sociales. Esta situación sugiere que la despenalización de la ‘homosexualidad’ y los avances jurisprudenciales no significaron la eliminación o reducción de las violencias heteronormativas contra estas personas, tanto por actores armados legales como ilegales”.

En medio de cincuenta años de conflicto armado sorprende que se hayan registrado apenas 1.966 víctimas a julio de 2017. Hay un clarísimo subregistro, admite Paula Gaviria, exdirectora de la Unidad para las Víctimas, pero en el gobierno esperan que uno de los efectos del fin de conflicto con las Farc sea que más personas sientan que hay condiciones de seguridad para contar, por fin, lo que han tenido que sufrir en silencio.

En la Unidad para las Víctimas tienen el inmenso reto de crear los ambientes de confianza para que las víctimas LGBTI puedan, en cualquier lugar del país, denunciar sin exponerse a juicios y malas miradas, que es un aspecto por el que se han quejado. Pero otro reto mayor es que muchas de las personas afectadas entiendan que fueron víctimas del conflicto, que no es normal, aunque lo hayan vivido por mucho tiempo, que los agredan por tener un gusto sexual diverso.

¿Volver?

Las redes sociales son la ventana desde la que Manuel mira constantemente hacia Colombia, y Twitter, el altavoz por el que sigue gritando lo que piensa. Creó un blog que tituló Asilo LGBT, en el que cuenta cómo fue su asilo y desde el que pretende ayudar, con información, a víctimas que por razón de su orientación sexual necesiten buscar refugio fuera de Colombia.

Sentado en la sala de su casa en Alicante, Manuel sostiene en una mano el celular mediante el que se comunica por Skype mientras que con la otra mano despeina su cabello azul chicle de goma (ese es el nombre del tinte que tiene en el momento de la conversación). “Mi cabello es del color del que me siento. Eso quiere decir que como la vida es de diferentes colores también he tenido el pelo de colores muy diversos”, apunta.

Su vida ha tenido un giro interesante. “Ha ganado concursos de fotografía, ha hecho exposiciones de pintura, escribe poesía, se reúne con poetas, tiene una vida cultural impresionante”, resalta Gloria, quien reconoce que la estadía de Manuel en España lo ha llevado a una explosión artística que no hubiera ocurrido en Colombia. “Allá está en las condiciones óptimas para que surja el creador integral e impetuoso que lleva adentro”.

Ante la pregunta de volver a Colombia Manuel pronuncia un tímido sí y calla unos segundos. Duda. Y vocaliza un contundente no. Pensó que el Acuerdo entre el Gobierno y las Farc crearía condiciones propicias para volver, pero el asesinato de líderes sociales le quitó la esperanza. Su experiencia le dice que los violentos empiezan con líderes campesinos y siguen con la comunidad LGBT.

Ricardo, el exnovio, dice que la vez que más afectado vio a Manuel por estar lejos fue cuando murió su madre, de quien tuvo que despedirse por teléfono, mientras sus hermanos estaban alrededor de ella. Un precio demasiado alto por ser “diferente”.

¿Si volvieses a Colombia qué es lo primero que te gustaría hacer?, le pregunta un periodista de Vice News a Manuel en un especial de televisión titulado *Colombianos al fin del exilio*. Cierra los ojos, como para soportar un pinchazo inesperado que lo desinfla. “¡Uffff! Visitar a los amigos”, responde y aprieta los labios, intentando detener las lágrimas.

Esos amigos que tanto anhela ver no hubieran tenido problema en recolectar dinero si el problema de Manuel para despedirse de su madre hubiera sido de dinero, está seguro Ricardo, el exnovio, quien ha ido a visitarlo a España. “Pero el problema es que él no puede poner un pie en Colombia”, concluye.

*Matar, con cualquier excusa,
desaparecer, empobrecer, desplazar, masacrar,
son manifestaciones de la locura
Cordura, cordura es amar.*

Manuel Velandia.



Manuel es un reconocido activista de la comunidad LGBT en España y continuamente lo consultan los medios de comunicación. Foto: Archivo particular Manuel Velandia.

Referencias

ARCHIVOS Y COLECCIONES DE MANUSCRITOS

Blog, investigadormanuelvelandia.blogspot.com.co.

PUBLICACIONES OFICIALES

Ministerio de Salud y Protección Social, (2012, mayo), *Resumen de situación de la epidemia por VIH/Sida en Colombia 1983 a 2011*, Colombia, en https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/observatorio_vih/documentos/monitoreo_evaluacion/1_vigilancia_salud_publica/a_situacion_epidemiologica/RESUMEN%20EPIDEMIA%20VIH%20FINAL%2021%20mayo_2012.pdf.

ENTREVISTAS

Entrevista realizada a Ricardo Montenegro, llevada a cabo en Bogotá el 29 de julio de 2017.

Entrevista realizada a Gloria Ortega, llevada a cabo en Bogotá el 31 de julio de 2017.

Entrevista realizada a Ricardo Molano, llevada a cabo en Bogotá el 7 de agosto de 2017.

Entrevista realizada a Marcela Sánchez, llevada a cabo el 3 de agosto de 2017 vía telefónica.

Entrevista a Manuel Velandia, llevada a cabo vía Skype el 2 de agosto de 2017.

LIBROS, ARTÍCULOS, ENSAYOS, TESIS

Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, (2015), *Aniquilar la Diferencia. Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano*, Bogotá, CNMH - UARIV - USAID –OIM.

Colombia Diversa, (2017), *Vivir bajo sospecha. Estudios de caso: personas LGBT víctimas del conflicto armado en Vistahermosa y San Onofre*, Bogotá.

Especial de televisión Vice News titulado *Colombianos al fin del exilio*, en <https://www.youtube.com/watch?v=6xhmwG8lFTI>.



Pedro Antonio Valencia Pacheco muestra la fotografía de una procesión de fiestas patronales de la Virgen del Rosario, en la que aparece con su esposa María del Rosario Hernández Álvarez, quien fue asesinada por los paramilitares. Foto: Paola Benjumea Brito.

Salaminita se levanta

Por Paola Benjumea Brito

Salaminita empezó a ser conocido en el país, paradójicamente después de su desaparición. Este corregimiento de Pivijay, Magdalena, fue borrado del mapa hace 18 años por los paramilitares del Bloque Norte de las AUC y sus antiguos pobladores emprendieron una lucha por reconstruirlo.

Muchas personas que viajan por la carretera que conduce de Fundación a Pivijay desconocen que entre la vegetación que crece a ambos lados del kilómetro 19 se esconden los cimientos de las casas que conformaban este corregimiento. La única referencia que hay sobre su existencia es un letrero: Puente Salaminita.

Pedro Antonio Valencia Pacheco, de 66 años, transita casi a diario por esta carretera para hacer negocios de compra y venta de ganado o de tierras, pero no le gusta detenerse en el punto donde quedó su pueblo. Allí los paramilitares asesinaron a su esposa María del Rosario Hernández Álvarez, quien durante doce años fue la inspectora de Policía del corregimiento, y a los campesinos Óscar Barrios y Carlos Cantillo el 7 de junio de 1999. Los recuerdos todavía lo atormentan.

El sábado 22 de julio de 2017, Pedro le ganó una batalla a sus recuerdos y regresó a recorrer las ruinas de Salaminita. Con él caminaron Martina Josefa

García Cantillo, de 82 años y su hija Edilsa Esther García, de 51; José Encarnación Berbén Córdoba, de 45, y Lesa María Daza Crespo, de 31.

Salaminita, en el departamento del Magdalena, tenía un área de 3,5 hectáreas, según el estudio topográfico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). En el costado norte del pueblo, donde estaban veinticinco casas, la Escuela Nueva Rural Mixta La Esperanza, el puesto de salud y la oficina de Telecom, se encuentra, rodeada con cercas eléctricas, la finca Los Hatos, propiedad de María Teresa Rueda Acevedo.

En el costado sur, donde había veintidos casas y la cancha de fútbol, está la finca Montevideo, propiedad de Adolfo Díaz Quintero, cercada con alambres de púas. En ese sector, a pocos metros del arroyo Mata de Guineo, se mantiene en pie el pozo de donde se abastecían de agua y donde, temen, se encuentren restos humanos.

La casa de Pedro estaba en el costado norte, donde hay árboles de roble, trupillo, calabazo, naranjo y guásimo y crece la maleza. En el lugar donde vivió con su esposa, su hijo menor Carlos Andrés y su nieta Marcela, el único rastro de su vivienda es un muro de unos cincuenta centímetros de altura. Al lado está el piso rojo de la oficina de Telecom, las bases de lo que fue la torre de Telecomunicaciones y los cimientos de la escuela. En ese mismo costado también estaba la casa de Edilsa García, en cuyo predio solo encontró maleza y un árbol de campano.

Martina García, su mamá, vivía en el costado sur, pero en el lote donde quedaba su vivienda construyeron un jagüey, en el que bebe agua el ganado. “Aquí en esta tierra tuve once hijos, siete hombres y cuatro mujeres, y todos están vivos”, dice Martina, quien se casó a los catorce años y tuvo su primer hijo a los quince. Unos metros más adelante está el lote donde estuvo la tienda de José Berbén, de la cual solo queda el piso.

Pedro asegura que después del asesinato de su esposa, con quien se casó apenas cumplió la mayoría de edad, su familia no ha vuelto a estar unida. Sus hijos mayores se fueron a vivir a Pivijay, Barranquilla y Maicao, La Guajira, y él vive con su nueva compañera en Fundación, a veinte minutos de Salaminita.

El día que visitó lo que era su pueblo y su casa, llevaba un pendón con la foto de María del Rosario Hernández, vestida de blanco y con expresión adusta. En el cartel se leía: “Exigimos Justicia. No solo acabaron con su vida, sino con toda su familia. Nunca la olvidaremos”.

La masacre

José Berbén, dueño de una tienda en Salaminita, cuenta que a las dos de la tarde del lunes festivo 7 de junio de 1999, treinta hombres del Frente Pivijay de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, al mando de Tomás Gregorio Freyle Guillén, alias *Esteban*, llegaron al pueblo a bordo de un camión. Iban uniformados y armados con fusiles AK-47.

Los “paras” fueron de casa en casa convocando a los pobladores a una reunión frente a la tienda de Belisario Bocanegra. Los vehículos que transitaban por la vía Fundación - Pivijay los detenían y bajaban a sus ocupantes para que también asistieran. A los niños los encerraron en las casas de María Gregoria Palmera y Elvia Cantillo.

Berbén regresaba a lomo de yegua de la finca de su papá y un paramilitar le dijo que se bajara para que asistiera a la reunión. Entró a su casa, cogió los papeles de la cartera y le preguntó a Gala Martínez, su compañera, si había asegurado la plata del producido de la tienda. Al llegar al sitio de reunión oyó los insultos de los “paras”: “¡Guerrilleros hijueputas!”, les gritaban, y les advertían que nadie podía hablar ni llorar. Quien lo hiciera sería asesinado.

El día estaba soleado, pero media hora después el cielo se oscureció y comenzó a caer un aguacero. El sonido de la lluvia y la brisa fuerte ahogaron el ruido de los disparos. La primera víctima fue la inspectora María del Rosario Hernández, a quien sentaron en un tronco y le dispararon por la espalda con tiros de fusil en la cabeza.

Martina García, una campesina menuda con el cabello corto y gris, recuerda el grito de terror que lanzó al verla caer muerta: “¡Ay Virgen del Carmen bendita, protégenos!”. Sintió temor por su vida. Pensó que sería la siguiente porque les habían dicho que nadie podía hablar.

Edilsa no estuvo en la reunión porque se escondió en su casa con cuatro niños, dos de sus hijos y dos de la vecina, detrás de una teja de zinc. Apenas escuchó los disparos salió corriendo con los niños. ¡Ay mis hijos, están matando a la gente, les dijo presa de los nervios y huyeron hacia el monte.

Los paramilitares continuaron con la pesadilla. Óscar Barrios estaba durmiendo en la casa de Lucila García, su suegra, a donde llegó a pasar unos días con su esposa, y no se había percatado de la reunión. Salió al patio a orinar y, según Berbén, un paramilitar lo confundió con uno de sus hermanos que presuntamente frecuentaba los campamentos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se lo llevó. Alias *Esteban* le preguntó por su hermano y le dio una cachetada. Él trató de defenderse, lo separaron del grupo, lo amarraron de pies y manos y lo mataron con tiros en la cabeza.

A Carlos Cantillo, quien trabajaba en una parcela cerca de Salaminita y era poco conocido en el pueblo, se lo llevaron detrás de la tienda de José Berbén, le metieron la cabeza en una bolsa plástica, lo amarraron de pies y manos y después lo mataron igual que a los otros dos, en mitad de la carretera.

“Cuando ya se pasó la ira que ellos tenían, nos dijeron que nos podíamos ir para las casas y al día siguiente fue que abrimos vela [abandonaron el pueblo]. Mientras nos pasaba el susto no teníamos pies para salir para ninguna parte. Ahí dormimos en la noche, todos juntos”, cuenta Martina hoy, quien llegó a los cinco años a Salaminita desde Pivijay, después de recorrer el predio donde quedaba su casa, construida con barro y techo con láminas de Eternit.

El sábado 5 de junio de 1999 había habido un enfrentamiento entre las Auto-defensas Unidas de Colombia y el Frente Domingo Barrios del ELN en el corregimiento La Avianca, a una hora de Salaminita. Los “paras” tenían amarradas a unas ocho personas para asesinarlas y los guerrilleros lo evitaron a bala. Los soldados del Ejército colombiano que estaban apostados en la vereda La Suiza se fueron a Fundación y la zona quedó sin presencia de la fuerza pública.

El domingo, un día antes de los crímenes cometidos por los paramilitares, Lesa Daza recuerda que de La Avianca llamaron a su hermana Elba Damaris Daza, quien era la recepcionista de Telecom en Salaminita, para que alertara a los pobladores de que las AUC iban para allá. Hubo gente que

abandonó ese mismo día el pueblo, otros lo hicieron al día siguiente. Los que se quedaron tuvieron que ver la barbarie.

Pedro estaba el lunes en Fundación acompañando a su hija Alejandrina, quien se encontraba interna en la clínica porque la habían operado de la vesícula. Cuando regresó a casa encontró a su mujer muerta. “Los vecinos la habían cogido y la habían metido en la casa. Había caído un aguacero grande y yo la cogí, la metí en la camioneta y me la llevé para Fundación, con una señora muy amiga de nosotros que se llama Elvia Crespo”, recuerda.

El cuerpo de Óscar Barrios lo llevaron a la casa de su suegra, donde lo velaron encima de una mesa y al día siguiente lo recogió su papá y lo llevó al municipio de Nueva Granada para sepultarlo, mientras que el de Carlos Cantillo demoró tres días tirado debajo de un palo de matarratón, hasta que la Cruz Roja Internacional llegó a recogerlo.

A la inspectora de 48 años la mataron por alertar a las autoridades sobre las decenas de cadáveres que los “paras” dejaban tirados en los caminos y la carretera. “Ella llamaba a la Policía de Fundación o a la de Pivijay y venían a recoger a los muertos, pero en últimas dejaron de venir y los goleros se comían a la gente. Ella seguía denunciando y la mataron por eso, porque por aquí dejaron de venir policías y soldados”, dice Pedro.

Después de la masacre todos los pobladores salieron huyendo, la mayoría para Fundación porque en Pivijay tenían sus campamentos los “paras”. Algunos regresaron a los pocos días para recoger lo que dejaron en sus casas y volvieron a irse.

En los meses siguientes los paramilitares desvalijaron las casas, les quitaron los techos, las puertas y las ventanas, desarmaron la antena de Telecom, se llevaron los postes de energía y se robaron los muebles, enseres, animales (gallinas, cerdos, vacas) y hasta la Virgen del Rosario. Alias *Gitano* llevó un buldócer para tumbar las casas. El pueblo fue arrasado.

El paramilitar Daniel Velázquez Madera, alias *José Cabezón*, contó en versión libre ante un fiscal de Justicia y Paz que después de la incursión el pueblo quedó solo y ellos se quedaron ahí por varios días, según publicó Verdad Abierta en el artículo “Salaminita, el pueblo que surge entre las cenizas” (del

13 de enero de 2017). Como en la vía al pueblo había un enorme hueco, alias *Esteban* ordenó derribar unas casas para tapanlo con los escombros. Decía que en las viviendas se podía esconder la guerrilla.

Nadie impidió la desaparición de Salaminita. “Este era un pueblo que no estaba metido por la Sierra Nevada, por los montes, sino en toda la carretera, por donde pasan los carros, buses de La Veloz, carros ganaderos, de todo y ¿nadie se va a dar cuenta de que esa gente estaba destruyendo este pueblo?, ¿no va a venir la Policía ni a darse cuenta de lo que estaban haciendo?”, dice Pedro.

No contentos con destruir el pueblo, los “paras” siguieron sembrando el terror en la zona rural. A los habitantes de las veredas La Suiza y El Jardín, que se negaron a salir de sus fincas, los amenazaron o los mataron.

Los asesinatos continuaron. En agosto de 1999 mataron a José Rosalía Palmera Hernández y a su hijo Víctor Palmera Reales en su finca y les robaron los animales. También a Blanca Flor Gutiérrez y a Domingo González en el kilómetro 20 y desaparecieron a Freddy Polo. Un año después las víctimas fueron Antonio Araque Bolaños y María Eloísa Gutiérrez, una pareja de la tercera edad que vivía en la finca Bella Dama en la vereda El Jardín.

El desarraigo

Pedro se fue primero a Fundación y a los ocho días de la masacre a Barranquilla con un amigo ganadero también desplazado por los paramilitares. En esa ciudad conoció a su actual compañera y se fueron a vivir a Maicao, luego a Venezuela, donde trabajó en una fábrica de bluyines y finalmente se regresó a Fundación.

En todos estos años no ha podido superar ni el desarraigo ni el dolor. En Salaminita estaba acostumbrado a levantarse a las cuatro de la madrugada, tomarse un café y salir a caballo a mirar los terneros. Pero todo eso cambió. Tras el crimen de su esposa la familia se desintegró, perdió su casa y tuvo que vender su camioneta y los animales que pudo recuperar.

“Duré como dos años llorando todos los días. No quiero ni acordarme de eso, pero uno se acuerda todos los días (...) Cuando uno es malo, uno dice yo

me busqué esta vaina, pero cuando uno sabe que tiene su alma limpia, que nunca ha tenido problemas con nadie, eso duele más”, expresa.

La intimidación de los paramilitares no terminó con la destrucción del pueblo. Entre los años 2000 y 2003 las personas desplazadas fueron contactadas por los ganaderos Adolfo Díaz Quintero y Vicente Rueda Acevedo, dueños de las fincas aledañas a sus lotes, para que vendieran los predios abandonados. Unos lo hicieron por 100, 150 y 200 mil pesos y otros nunca vendieron. No importó, de todas formas las tierras quedaron incluidas en las fincas de los dos terratenientes. Simplemente corrieron las cercas, según la sentencia del 16 de diciembre de 2016 del Tribunal Superior de Antioquia, de la sala civil especializada en restitución de tierras.

Alias *José Cabezón* aseguró en versiones libres ante Justicia y Paz, que Adolfo Díaz, Vicente Rueda y Gustavo Pabón hicieron parte de los ganaderos que a finales de los noventa financiaron al Frente Pivijay de las Autodefensas Unidas de Colombia y participaron en una reunión en la finca La Zulia, ubicada en el municipio de Pivijay, días antes de la masacre.

El corregimiento de Salaminita estaba conformado por un casco urbano y dos veredas: La Suiza y El Jardín. El pueblo se fue levantando sobre un terreno baldío, en el que algunos de sus habitantes invadieron lotes de 500 metros cuadrados aproximadamente.

El terreno donde se encuentra la vereda La Suiza era propiedad de Aura y María Teresa de Polo. En 1977 Laureano Peláez contrató a veintitrés campesinos para que se instalaran en estos predios con el fin de hacerles creer a las dueñas que eran invasores y que lo mejor era que se lo vendieran a él.

Después de la compra, Peláez expulsó a los campesinos quienes, al enterarse de que habían sido utilizados, buscaron el apoyo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) para iniciar un proceso de adjudicación ante el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora). En 1980 el Instituto le adjudicó a cada parcelero 10 hectáreas, regresó 165 a las herederas de Polo y le entregó 220 hectáreas a Peláez.

En los años 1982 y 1983 la vereda El Jardín fue poblada por veintiun parceleros que cultivaban la tierra. En 1984 Julián Escalante intentó sacarlos con la

Policía y el Ejército afirmando que las tierras le pertenecían. Cuatro años después hizo lo mismo Germán Llanos, quien llegó con ciento cincuenta hombres del Ejército y cuarenta personas vestidas de civil, pero los campesinos no se dejaron sacar del predio. Habría de llegar la calma, pero no para siempre.

Salaminita fue elevado a la categoría de corregimiento en 1986. Había 47 casas, algunas de material y otras de bahareque, donde vivían 211 personas que se dedicaban a cultivar yuca, maíz, ahuyama, ajonjolí y a la ganadería a pequeña escala. Los dueños y trabajadores de las fincas cercanas iban los fines de semana a tomar cervezas en las tiendas y también hacían bailes.

Las fiestas patronales de la Virgen del Rosario se celebraban el 28 de octubre. Martina dice que ese día había misa, bautizos, carreras de caballos, partidos de fútbol y festejos. Instalaban una carpa y ponían un picó para que los asistentes bailaran hasta el amanecer.

De esas épocas felices quedan algunas fotografías que ha recopilado Aso-renacer, la asociación que conformaron los reclamantes de tierras de Salaminita en 2014 liderada por Lesa Daza, Erika Rangel y José Berbén. En las fotos se ve a los habitantes cargando la imagen de la Virgen del Rosario en la procesión, en las primeras comuniones celebradas en la escuela porque no tenían iglesia y algunos niños corriendo por la carretera todavía destapada.

“Era un pueblo tranquilo, todos éramos unidos. De repente se metió una gente mala y todo el mundo se fue. Nunca habíamos visto un desastre como ese, mataron a la gente y todo el mundo apenas amaneció dejó Salaminita solo. Después vino una caterpillar (sic) y molió las casas para que no regresáramos más”, recuerda Martina.

La restitución

Lesla Daza, una morena de cabello largo y 1,64 metros de estatura, tenía catorce años cuando ocurrió la masacre. Estudiaba en la escuela de Salaminita, en el caserío se quedaba de lunes a viernes en casa de tres de sus hermanos y, los fines de semana, se iba para donde sus papás que tenían una parcela en La Suiza. Aunque no fue testigo de lo ocurrido, su familia tam-

bién tuvo que abandonar la tierra por las presiones de los grupos paramilitares. Por eso, decidió luchar por la reconstrucción del pueblo donde aprendió a leer y a escribir y por la reparación de las víctimas.

Dos años después de que el gobierno aprobara la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, supo que la Unidad de Restitución de Tierras iba a atender a las víctimas de La Avianca y convocó a algunos de los antiguos pobladores de Salaminita para aprovechar esa oportunidad. Era febrero de 2013. Recuerda que en La Suiza los pobladores detuvieron los vehículos en los que iban los funcionarios del gobierno y concretaron una fecha para contar su historia.

Un mes después se reunirían en lo que fue Salaminita. “Fueron sentimientos encontrados. La gente lloraba de alegría y de tristeza porque la mayoría después que pasó el caso ni más que habían vuelto”, relata Lesa, sentada en la terraza de la casa de una de las sobrevivientes en Fundación.

Los pobladores al encontrarse hicieron un sancocho comunitario y después se fueron para Fundación, donde les prestaron un salón en el puesto de salud Paz del Río. Allí diligenciaron los formularios de ingreso a la Unidad de Restitución de Tierras y dieron las primeras declaraciones. Hubo más reuniones para la recolección de pruebas y testimonios en la fase administrativa.

El 6 de marzo de 2014, 38 familias de Salaminita y 16 de La Suiza y El Jardín presentaron, a través de La Comisión Colombiana de Juristas, la demanda de restitución de 37 lotes en la cabecera y 16 en la zona rural, la cual fue admitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado de Santa Marta, que ordenó suspender cualquier proceso comercial y jurídico que involucrara los predios objeto de reclamación.

Aunque los terratenientes Adolfo Díaz Quintero, Vicente Rueda Acevedo y María Teresa Rueda Acevedo se opusieron al proceso alegando que habían adquirido esos predios de buena fe, el Tribunal Superior de Antioquia reconoció, el 16 de diciembre de 2016, el derecho de restitución y formalización de tierras a 38 familias reclamantes y ordenó a las entidades del Estado trabajar en la reconstrucción del pueblo.

Lesa recibió la noticia de la sentencia cuatro días después durante una reunión de líderes de víctimas en Bogotá. Lloró de la emoción y en-

seguida llamó a varios reclamantes para contarles. Acababan de ganar la primera batalla.

Todavía faltan las sentencias de los 16 predios de la zona rural, donde el proceso ha sido más demorado porque a mediados de 2014 fue suspendido por orden de un juez de Aracataca debido a que siete solicitantes fueron demandados por falso testimonio por el opositor Adolfo Díaz, dueño hoy de unas de las fincas. La Corte Constitucional ordenó el 26 de octubre de 2015 que se reanudara.

El proceso de reclamación no ha sido fácil. Los pobladores han sido intimidados. En octubre de 2016, Lesa, representante legal de Asorenacer, fue abordada cuando regresaba del municipio de El Retén por dos hombres en motocicleta que le dijeron que Adolfo Díaz estaba averiguando quién era el líder de Salaminita para mandarlo a matar con el Clan del Golfo. Como protección decidieron hacer una denuncia colectiva ante la Unidad de Restitución de Tierras.

Días después empezó a ser acosada por Eliécer Royero, un exfuncionario del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía que, según Lesa, fue contratado como investigador privado por Díaz para contactar a los antiguos pobladores de Salaminita. Iba a buscarla a su casa, la llamaba reiterativamente por teléfono, pero nunca se vieron personalmente. En diciembre de 2016 se enteró por los periódicos locales que lo habían asesinado en Santa Marta.

Ahora, Lesa tiene dos preocupaciones. La primera es que cuando retornen a sus tierras tendrán como vecinos a los opositores del proceso de restitución; y la segunda, que los reclamantes no alcancen a ver Salaminita reconstruido porque la mayoría son adultos mayores. Entre junio y julio de 2017 fallecieron dos: Sebastián Gutiérrez, de 84 años, y Nora Bonett, de 69. “No están viendo el resultado de la lucha por la tierra. No vemos agilidad en los procesos”, dice.

El renacer

El martes primero de agosto de 2017 los antiguos pobladores de Salaminita volvieron a reencontrarse en el auditorio de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, de Pivijay. Todos vestían camisetas verdes.

A 36 familias del antiguo pueblo les entregaron los títulos que las acreditan como propietarias de los predios de los que fueron despojadas. A una no la incluyeron debido a un error en la sentencia que debe ser corregido por el Tribunal Superior de Antioquia.

Previo al evento hicieron una parada en donde quedaba el pueblo y allí pusieron unas banderas blancas a lado y lado de la carretera, y atravesaron una pancarta con el mensaje: “Aquí renace Salaminita”.

En el acto protocolario, Lesa Daza y José Berbén agradecieron el acompañamiento de las instituciones para recuperar su territorio y leyeron una lista de peticiones para la reconstrucción material y social del pueblo. A la Unidad de Restitución de Tierras le solicitaron celeridad en la inclusión de los 12 predios del centro poblado en el registro de tierras despojadas y abandonadas, lo mismo que al Juzgado Segundo del Circuito de Restitución de Tierras en la etapa judicial para que fallen las sentencias de los 16 predios de la zona rural.

También les pidieron a la Agencia de Desarrollo Rural entregarles un subsidio de tierras para el desarrollo integral de la comunidad y a la fuerza pública implementar estrategias de protección y seguridad para que puedan retornar. El 30 de agosto de 2017 el Juez Segundo Civil del Circuito de Restitución de Tierras realizó la entrega material de sus predios a las 36 familias.

Luego empezaron a llamar, uno a uno, a los beneficiados con los títulos. La primera que subió a la tarima fue Martina García. Estaba feliz. Ese papel era el pasaporte para regresar al pueblo donde se crió y parió once hijos. Abrazó al alcalde encargado de Pivijay, Félix Ospino, y posó para los fotógrafos con la resolución en la mano.

“Ya la cosa cambió, ya no estamos humillados por los dueños de las fincas, vamos a tener dónde vivir. Vivimos en Fundación porque las casas nos las tumbaron, no nos dejaron nada, ojalá no recupere los ‘chismes’ [enferos], pero mi casa yo la necesito. Que Dios me dé un añito más de vida para dejarles eso a mis hijos”, expresa Martina.

La embajadora de Suecia en Colombia, Marie Andersson, quien apoya financieramente el acompañamiento jurídico de los campesinos de Salaminita desde que leyó la sentencia en diciembre de 2016 en la sala de su casa

en Bogotá, asistió al acto de entrega de títulos. En marzo de 2017 ya había viajado a donde quedaba el corregimiento y en compañía de algunos de sus antiguos pobladores sembró una planta de crotón.

“Lo que ustedes padecieron nunca ha debido ocurrir. Hoy ustedes son los protagonistas y me alegra ser parte de este homenaje y reconocimiento por tantos años de lucha por recuperar sus tierras, su pueblo”, les dijo a los asistentes. La diplomática le entregó una placa conmemorativa a los cinco hijos y a la nieta de María del Rosario Hernández, como homenaje póstumo a la mujer inspectora que fue asesinada por los paramilitares por atreverse a denunciar sus atrocidades.

María del Rosario Valencia Hernández, una de las hijas mayores, se mudó a Pivijay tras la muerte de su madre y dice que el mejor homenaje que pueden hacerle es reconstruir Salaminita: “Esperamos la materialización de la resolución, que todas las cosas se den, que el fallo se haga tangible y que la gente pueda recuperar lo que perdió”.

En los próximos meses, la Unidad de Restitución de Tierras del Magdalena debe hacer el proceso de caracterización de las familias para determinar su vocación productiva e implementar proyectos, el Banco Agrario debe entregar los subsidios de vivienda y la Alcaldía de Pivijay, la Gobernación del Magdalena y la Nación deben reconstruir el pueblo de Salaminita, garantizar el acceso a los servicios públicos domiciliarios y la prestación de los servicios de salud y educación, con la construcción y dotación del centro de salud y la escuela.

Antes de culminar el evento, Elizabeth Crespo Gutiérrez, una de las reclamantes, en compañía de un acordeonero y un guacharaquero, interpretó un vallenato:

Salaminita, tierra querida, aquí estamos contigo (bis)
Con lucha y con sacrificio, aquí vamos a volver (bis)
Y si Dios nos da el permiso, vas a volver a nacer (bis)
Con lucha y con sacrificio, aquí vamos a volver
A este pueblo querido, que fue el que nos vio nacer
Por eso denme la mano porque somos como hermanos

Estos versos resumen el anhelo de los antiguos pobladores de Salaminita de volver a su tierra, recuperar sus raíces y acabar con el destierro al que los condenó el conflicto armado. Al escuchar la música varios bailaron como lo hacían en las fiestas patronales de la Virgen del Rosario. Tenían motivos para celebrar. Aunque la reconstrucción del pueblo no será de la noche a la mañana, ellos no pierden la fe de verlo renacer.



En las fincas que están en los predios que ocupaba Salaminita se pueden observar los cimientos de las viviendas que hacían parte del corregimiento. Foto: Paola Benjumea Brito.

Referencias

PERIÓDICOS Y REVISTAS

Verdad Abierta, (2017, 13 de enero), “Salaminita, el pueblo que surge entre las cenizas”, en <http://www.verdadabierta.com/restitucion-de-bienes/6512-salaminita-el-pueblo-que-surge-entre-las-cenizas>).

Verdad Abierta, (2015, 19 de junio), “Salaminita, un pueblo que desapareció en Magdalena”, en <http://www.verdadabierta.com/masacres-secion/5847-salaminita-un-pueblo-que-desaparecio-en-magdalena>.

El Heraldo, (2017, abril), “Salaminita, el pueblo que luchó por volver a nacer”, en (<https://www.elheraldo.co/magdalena/salaminita-el-pueblo-que-lucho-por-volver-nacer-343617>).

PUBLICACIONES OFICIALES

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), (2017, julio), *Estudio topográfico del predio centro poblado Salaminita*.

Tribunal Superior de Antioquia, (2016), Sala Civil especializada en Restitución de Tierras, Sentencia del 16 de diciembre de 2016.

ENTREVISTAS

Entrevista realizada a Pedro Antonio Valencia Pacheco, llevada a cabo en Salaminita en julio de 2017.

Entrevista realizada a Martina Josefa García Cantillo, llevada a cabo en Salaminita en julio de 2017.

Entrevista realizada a José Encarnación Berbén Córdoba, llevada a cabo en Salaminita en julio de 2017.

Entrevista realizada a Edilsa Ester García, llevada a cabo en Salaminita en julio de 2017.

Entrevista realizada a Lesa María Daza Crespo, llevada a cabo en Fundación en julio de 2017.

Entrevista realizada a María Valencia Hernández, llevada a cabo en Pivijay en agosto de 2017.

Entrevista realizada a Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, llevada a cabo en Pivijay en agosto de 2017.



Cortesía Álbumes de la Memoria y Narraciones
Visuales de los dirigentes asesinados,
Unión Patriótica, de Luisa Santamaría.

El fin de un hombre bajo observación

Por Juan Diego Restrepo E.

Luego de una larga e intensa labor en su liderazgo político y finalmente como vicepresidente de la asamblea departamental de Antioquia y diputado por la Unión Patriótica, Gabriel Jaime Santamaría es asesinado en 1989, como evidencia de un plan criminal y sistemático contra dirigentes, integrantes y simpatizantes de la UP. La intolerancia política que vivía el país cobraba una nueva vida; una que siempre estuvo bajo la observación de los organismos de seguridad del Estado, paramilitares, políticos, empresarios, terratenientes, industriales y narcotraficantes.

Lo último que escuchó Gabriel Jaime Santamaría fue la voz de un joven que lo saludó al entrar a su oficina. “Doctor Santamaría”, dijo el visitante. El entonces vicepresidente de la Asamblea Departamental de Antioquia y diputado por la Unión Patriótica (UP) revisaba en ese momento varios documentos y hablaba por teléfono. Al oír las palabras, levantó la mirada y vio a un muchacho vestido de saco y corbata, quien llevaba un maletín de cuero en su mano izquierda y en la derecha una subametralladora Ingram que le apuntaba a la cabeza. Un rafagazo puso fin a su vida.

Lo que vino después fue la rápida reacción de los escoltas del diputado, adscritos al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que tenían

la responsabilidad de protegerlo. Sus armas le apuntaron al sicario Marco Antonio Meneses, de veinte años de edad, quien no intentó fugarse. Solo esperó a que lo mataran. Su cuerpo recibió varios disparos, entre ellos un tiro de gracia en la cabeza. Los hechos sucedieron en pocos minutos y en uno de los recintos más custodiados del país, la Asamblea Departamental de Antioquia.

Su esposa, Consuelo Arbeláez Gómez, supo del asesinato a las tres y cincuenta de la tarde. A esa hora sonó el teléfono en su casa y una voz al otro lado de la línea le dijo: “señora, acaban de matar a don Gabriel Jaime”. Era la secretaria del presidente de la Asamblea. Lo que vino después fue una veloz carrera hacia la Asamblea en el vehículo que tenía asignado por razones de seguridad. La vida al lado de su esposo también le generaba riesgos.

Mientras la señora avanzaba en medio del caótico tránsito de viernes en la ciudad, cientos de curiosos se iban agolpando en los alrededores de la Asamblea Departamental, preguntándose qué había pasado. Fue tanta la gente que se aglomeró que cuando ella arribó al lugar tuvo dificultades para ingresar al recinto y subir las escalas que la conducían al segundo piso, donde yacía el cuerpo sin vida de su esposo. Su mano izquierda, inerte, se aferraba al teléfono.

Aquella tarde del 27 de octubre de 1989 la intolerancia política que vivía el país cobraba una nueva vida. Ya era evidente el plan criminal y sistemático contra dirigentes, integrantes y simpatizantes de la UP, movimiento de izquierda que surgió como resultado de las negociaciones de paz que adelantaba el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur Cuartas (1982-1986) con la guerrilla de las Farc.

Es esa época, las conversaciones entre los voceros del gobierno nacional y del grupo insurgente avanzaban y se concluyó que la creación de un movimiento político era el mejor camino para consolidar ese proceso e impulsar la plataforma ideológica de las Farc. Fue así como en marzo de 1985 cobró vida la UP. Cientos de líderes políticos de izquierda, provenientes de diversas tendencias ideológicas, vieron en esa nueva organización una opción para plantear sus ideas y concretar lo que tanto habían soñado: un país más democrático, justo e incluyente, donde el desarrollo llegara a las zonas más

alejadas del centro del país, y de paso se abandonaran las armas como instrumentos de lucha política.

En su estreno, las urnas arrojaron datos muy alentadores para la UP. En las elecciones legislativas y presidenciales de 1986 sus candidatos conquistaron concejos y asambleas en varias regiones del país. Entre los ganadores estaba, justamente, Santamaría, quien obtuvo su curul en la Duma de Antioquia, donde fue nombrado vicepresidente. Dados esos resultados, el entonces presidente Virgilio Barco (1986-1990) les otorgó 16 alcaldías, pero lo que vino después, cuando se intensificó la lucha electoral, fue la expresión macabra de la “guerra sucia” contra todos los que hacían parte del nuevo movimiento político o, simplemente simpatizaban con ellos. Desde diversas regiones del país se difundían noticias de asesinatos y atentados contra hombres y mujeres que se habían adherido a este movimiento.

En aquellos años soplaban fuertes vientos contra las expresiones de izquierda civilista que se estaban abriendo camino en el país. Diversos sectores sociales, económicos y políticos, incluidos algunos de carácter estatal, temían perder sus privilegios y vieron en la UP una amenaza a sus intereses. Entonces se activó un dispositivo criminal que tenía como objetivo eliminar la mayor cantidad de militantes, simpatizantes y colaboradores de la nueva fuerza política. A todos se les sindicaba, extrajudicialmente, de ser cercanos a la guerrilla de las Farc. Se estima que por lo menos 3.600 personas perdieron la vida de manera violenta.

Santamaría estaba entre ellos. Su condición de liderazgo, su visión política y sus convicciones ideológicas, gestadas inicialmente en las Juventudes Comunistas (JUCO) y fortalecidas en el Partido Comunista Colombiano (PCC), lo llevaron a impulsar la creación de la UP en Antioquia, convirtiéndose en su presidente regional. Pero la situación de seguridad para los activistas de izquierda era compleja, tanto organismos de seguridad del Estado como grupos paramilitares los observaban constantemente, como los leones a su futura presa.

En la plaza pública, Santamaría se expresaba con convicción. Así quedó registrado en un audio grabado en 1984 en el municipio de Remedios, Antioquia, durante una jornada nacional por la paz convocada por el Partido

Comunista y la UP: “Desde la plaza de Remedios, y ante la bandera nacional de la república de Colombia y el heroico campesinado del nordeste, les decimos, sin reforma agraria que entregue la tierra al campesino que la trabaja no hay paz en Colombia. Y estamos seguros que la paz en Colombia no va a ser la graciosa concesión de un presidente por bien intencionado que él sea. La paz en Colombia es el producto de la lucha incesante del pueblo colombiano que ha puesto centenares e incluso, miles de muertos, porque los muertos han sido del pueblo, obreros, campesinos, guerrilleros, policías y soldados. Por eso, porque el pueblo ha puesto los muertos, queremos decir ¡viva la paz democrática en Colombia!”.

Y justo por ese tipo de discursos, muy cercanos a la gente del campo, es que líderes como Santamaría eran considerados “enemigos” por paramilitares, políticos, empresarios, terratenientes, industriales y narcotraficantes. Cuatro años después de aquella intervención pública, se gestó en esa región antioqueña, rica en oro, una fuerza lúgubre, autodenominada Muerte a Revolucionarios del Nordeste, que bajo el auspicio del cacique del Partido Liberal César Pérez García perpetró una masacre el 11 de noviembre de 1988 en el vecino municipio de Segovia, que dejó 43 muertos, muchos de ellos militantes y simpatizantes de la UP.

“Luego de la masacre, la represión contra la población fue muy dura. La Unión Patriótica tenía mucho respaldo en la zona, no solo en Segovia, también en Remedios y Zaragoza. Por esa razón, cualquier poblador de esos municipios era considerado guerrillero. Al pasar por un retén militar no podíamos decir que éramos de esos municipios. Si la cédula era de alguno de esos lugares era un indicio de que se pertenecía a la UP. Eso fue una estigmatización muy fuerte”, recuerda una defensora de derechos humanos que, aún hoy, prefiere ocultar su identidad.

Uno de los pocos criminales que tiene registros escritos sobre lo ocurrido a Santamaría es el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias *Don Berna*. Los detalles de su versión fueron conocidos el 19 de abril de 2015 durante una diligencia judicial adelantada por investigadores de la Fiscalía General de la Nación en el penal F.D.C. de Miami, Estados Unidos. Ese día leyó fragmentos de sus escritos, en particular uno, titulado Los Suizos:

“Los hermanos Fidel y Carlos Castaño lo declaran objetivo militar al considerar que estaba al servicio de sus más acérrimos enemigos, las Farc, guerrilla de corte comunista (...) Carlos después de analizar cuál es la mejor forma de acabar con la vida de Gabriel Santamaría toma la decisión de hacerlo a través de un suicida, recluta para ello a un joven de Itagüí, municipio perteneciente al área metropolitana de Medellín, nombre Marco Antonio, una persona con el valor y arrojo y dispuesto a perpetrar dicha acción (...) Carlos lo entrenó durante varios días en Montecasino, el cuartel general de las autodefensas en Medellín (...) También había reclutado a varios escoltas del DAS encargados de escoltar al Diputado, convenciéndolos que les hacía un servicio a la paz, además, recibían como incentivo una gruesa suma de dinero. Los detectives le informan todos los movimientos que hace el señor Santamaría, incluyendo su esquema de seguridad (...) Un crimen perfecto, no hay pistas, nadie investiga nada, en ese momento la UP es el enemigo del país”.

Directivos, bases políticas y simpatizantes estaban en la mira de quienes los consideraban “sus enemigos”, Santamaría entre ellos. El acoso era letal. Antes de su muerte, sufrió por lo menos dos ataques, el primero de ellos el 3 de julio de 1985. Ese día sicarios balearon su vehículo y le ocasionaron heridas de poca gravedad; el segundo sucedió el 17 de diciembre de 1987, cuando dos desconocidos dispararon contra el vehículo en el que se desplazaba y le arrojaron una granada, ocasionándoles graves heridas a él y al conductor, un viejo amigo de militancia política.

Dada la situación de inseguridad que los rodeaba, Santamaría no vivía con su esposa y sus dos hijas. Los riesgos que corrían los hizo separarse. Se veían esporádicamente y a escondidas. Justamente momentos antes de sufrir el último atentado, salía de visitar a su familia. Durante cinco años sobrevivió de hotel en hotel y en casas de amigos. Quienes querían asesinarlo, no le perdían la pista, siempre estaba bajo observación. Y las amenazas, que venían de tiempo atrás, persistían.

“Yo tenía una lista de casas de amigos”, recuerda Consuelo. “Muchos, incluso, no militaban en el Partido Comunista, simplemente nos ayudaban. Lo llevaba de un lado a otro para evitar que lo mataran”. Por recomendación de

ella, así como de amigos y de las directivas del PCC, estuvo varias veces fuera del país. Pasó por México, Alemania Democrática, Cuba y la Unión Soviética, pero siempre regresaba. Ella recuerda cómo le aliviaba su migraña verlo salir en un avión hacia algún destino en el extranjero, pero también cómo le angustiaba su regreso.

Vivir solo fuera del país, agobiado por el riesgo que corría su familia y las condiciones que padecían sus compañeros de causa política, no era su opción de vida. Confiaba en que soplarían vientos a favor. En el último retorno y semanas antes de su muerte se expresaba ilusionado: “Tenemos todos los días el alma destrozada por la muerte de los mejores amigos y compañeros, pero tenemos optimismo de encontrar la luz al final de este oscuro túnel”.

Sin duda era alguien que veía con ojos de esperanza aquello que otros se obstinaban en mostrar con total fatalismo. Pero así era él, un soñador, inspirado tal vez en las tonadas de su padre, el maestro de música Jaime Santamaría. Animado por ese optimismo, regresó por última vez al país. Según el periodista Roberto Romero Ospina, volvió “para organizar la campaña presidencial de su amigo del alma, Bernardo Jaramillo y ser suplente en un escaño para el Senado”. Pero la persecución sin tregua que padecía la UP también se llevó por delante a Jaramillo: fue asesinado el 22 de marzo de 1990.

La ráfaga disparada contra Santamaría silenció la vida de un espíritu rebelde que se forjó en la agitada década del sesenta, cuando el futuro líder del PCC apenas llegaba a la mayoría de edad. Sus lecturas sobre el marxismo-leninismo, los viajes de estudio a diferentes países de Europa Oriental y a la Unión Soviética, la agitación social y política en América Latina, y las eternas conversaciones sobre estos temas con su esposa, sus amigos y tertulios forjaron su camino político.

Sus intereses académicos también estaban puestos en las ciencias exactas, por lo que se matriculó en el programa de Química de la Universidad de Antioquia en 1965. En esos años, el activismo estudiantil era intenso, las protestas contra las políticas estatales que afectaban la educación pública bullían en todo el país y Santamaría se había convertido en un protagonista de primera línea, destacándose por sus discursos emotivos y su capacidad de convocar a los jóvenes.

“En esa época la juventud era muy rica ideológicamente”, dice su esposa. Para esa época, ella estaba dedicada al “teatro revolucionario” interpretando a dramaturgos marxistas. “Yo hacía parte del club obrero-estudiantil de integración juvenil”, recuerda. Ambos coincidieron en la JUCO, donde forjaron una profunda relación que combinó amor y política por más de veinte años.

Los estudios de Química terminaron abruptamente para Santamaría en 1968 cuando fue expulsado de la universidad por liderar asambleas estudiantiles. Su inquietud académica no se frenó allí. Pese a que este centro de estudios envió referencias académicas negativas a diversas instituciones públicas de educación superior en el país para que no lo admitieran, la Universidad Autónoma Latinoamericana decidió recibirlo y se matriculó en el programa de Ingeniería Industrial.

Este centro de educación superior, fundado en 1966 por un grupo de docentes y estudiantes que abandonaron la Universidad de Medellín en rechazo a la pésima calidad académica y el maltrato de las directivas, se convirtió en espacio de reflexión crítica sobre temas políticos, sociales, culturales y económicos, y se nutrió de diversas corrientes ideológicas, lo que enriquecía las discusiones académicas, el activismo y la protesta social. Allí también se destacó Santamaría, no solo como estudiante, sino como docente.

Para finales de la década del sesenta y comienzos del setenta, estaba dedicado a sus cursos de ingeniería, pero también a trabajar con distintos sindicatos en el país. El compromiso con las clases obreras era profundo. Su esposa recuerda que “él era de la corriente de académicos del Partido”, lo que le permitía entablar diálogos con diversos sectores sociales y participar en agitadas movilizaciones. En un semblante escrito a propósito de la conmemoración de los 25 años de su asesinato, Romero Ospina resaltó su paso de la JUCO al PCC a mediados de la década del setenta, “donde descolló con fuerza llegando a ser dirigente regional y a quien se le veía en todas las comarcas”.

Pero los tiempos de agitación social y política traen consigo una labor sistemática de vigilancia y control por parte de funcionarios de organismos de seguridad del Estado sobre quienes se destacan en las marchas callejeras, en los mítines estudiantiles y obreros, así como en las actividades políticas

y académicas en las que se abordaban temas relacionados con la evolución del comunismo internacional. Investigadores infiltrados en huelgas, centros educativos, sindicatos, partidos político de izquierda, organizaciones barriales y asociaciones campesinas, entre otras, redactaban informes secretos, incluso a mano, que describían no solo los hechos, sino los discursos y quiénes los pronunciaban. También recogían los volantes que se repartían en las calles promoviendo la revuelta social. Todo ese material se iba acumulando en las oscuras oficinas del DAS, la Policía e Inteligencia del Ejército.

Sendos informes de esos que hoy se encuentran archivados en diversos repositorios son testigos de las tareas encomendadas a los investigadores policiales y militares. Uno de esos documentos, fechado el 2 de junio de 1969 y elaborado por el Grupo de Orden Público del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Seccional Antioquia, ofrece una visión clara sobre las órdenes que recibían los investigadores:

“En cumplimiento a la orden verbal impartida por la Jefatura de Orden Público de esta repartición relacionada con identificar a los elementos que participaron como activistas y agitadores en el reciente problema y disturbios estudiantiles efectuados en esta ciudad, se adelantaron averiguaciones encaminadas a tal fin”.

El documento lo elaboraron cinco detectives, quienes firmaron solo con la huella del dedo índice y se identificaron con los números 1812, 2032, 2000, 2206 y 1322.

Consuelo, la esposa del diputado asesinado, recuerda aquellos años. “A nosotros nos allanaban cada rato. “Buscaban siempre documentos, pero nunca encontraron nada en nuestra casa”. Ambos estaban ya bajo observación y seguimiento desde finales de la década del sesenta por los organismos de seguridad del Estado. De hecho, uno de los resultados de aquella tarea investigativa adelantada por el DAS fue que se reseñó a Santamaría:

“GABRIEL JAIME SANTAMARÍA MONTOYA, C.C. 8238231 de Medellín, nació el 20 de noviembre de 1946 en Medellín, el día 31 de mayo de corriente año cuando participaba en una manifestación estudiantil programada por los consejos de las Universidades Nacional y Antioquia; SANTAMARÍA MONTOYA portaba la bandera de EE.UU. gritando

abajos a Rockefeller, a la cabeza de un grupo de estudiantes que respondían animadamente los gritos haciendo un recorrido por las principales calles de la ciudad. La policía disolvió el tumulto e impidió que el pabellón fuera quemado. No se estableció la universidad a la cual pertenece. Ha sido retenido varias veces por su activa participación en mítines violentos”.

La tarea encomendada a los cinco detectives era una reacción a las expresiones de rechazo de diversos sectores sociales, sindicales, estudiantiles y políticos a la visita del entonces gobernador del estado de New York, Nelson Rockefeller, a Colombia, como parte de una gira por varias naciones de América Latina, en representación del presidente Richard Nixon. La visita generó enormes protestas, con saldos trágicos en algunos países y cancelación de la agenda en Venezuela, Perú y Chile, por considerarla inconveniente.

El sentimiento de rechazo en Medellín quedó consignado en multitud de volantes y pequeños órganos informativos, como Eco Sindical, producido por el Sindicato de Trabajadores de Empresas Públicas de Medellín. El 16 de mayo de 1969, días antes de la visita divulgaron su punto de vista: “En América Latina se levanta un poderoso movimiento antimperialista que ya no se detendrá nunca, hasta la derrota final y definitiva de los monopolios norteamericanos”. Este tipo de arengas estimulaban a las juventudes que salían a las calles.

Pero los efectos represivos que impuso el entonces presidente de la república Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) fueron bastante drásticos en ciudades como Bogotá y Medellín, donde se registraron intensos disturbios. En la capital antioqueña piquetes de la Policía dispararon de manera indiscriminada contra los manifestantes. Para contrarrestar las protestas, el gobierno ordenó a la fuerza pública tomarse los campus de la Universidad Nacional, en la capital del país, y la Universidad de Antioquia. Ambas cesaron actividades durante mes y medio.

En el recuerdo de la esposa de Santamaría está aquella toma de la Universidad de Antioquia por parte de las autoridades. “Para esa época el campus era abierto, no tenía mallas, y los estudiantes se habían congregado en varios bloques, dispuestos a no dejarse sacar. Los militares la tenían rodeada

y se temía que los mataran. La noticia le llegó a Jaime, el papá de Gabriel Jaime, y se fue hasta allá y conversó con uno de los oficiales al mando de la operación. A través de un megáfono llamaron a Gabriel Jaime para que saliera, que allí estaba su padre. Y él salió, a regañadientes”.

Pero el activismo del futuro diputado no paró allí, por el contrario, se fue consolidando poco a poco dentro del PCC, hasta llegar a cuadros directivos del partido. Desde esa posición privilegiada y ya finalizando la década del setenta se embarcó en un proyecto de gran envergadura: mostrar el rostro de los guerrilleros de las Farc a distintos sectores políticos tradicionales de Antioquia y hablar de la dejación de armas. “Lo hizo mucho antes que se dieran los diálogos con el presidente Belisario Betancur”, afirma su esposa.

Santamaría tenía buenas relaciones con células guerrilleras en el Urabá antioqueño y allí viajaba constantemente a hablar de paz. Una de las fotos, rescatada por su hija, Luisa, para el proyecto “Álbumes de memoria y narraciones visuales. Galería Unión Patriótica”, muestra a su padre con un guerrillero y a su lado Fabio Valencia Cossio, líder político del Partido Conservador en Antioquia. La imagen tiene un escrito a mano: “Diálogos de acercamiento con las Farc Urabá con invitados especiales”.

A la par de sus visitas a los campamentos a hablar de paz, comenzaron a llegar los panfletos amenazantes. “Eran frases escritas con letras de periódicos”, recuerda Consuelo, y se lamenta de no haber guardado uno de esos volantes. Pero también se intensificaron los seguimientos de los organismos de seguridad del Estado y de aquellos que se oponían a cualquier diálogo con las Farc.

Eran los tiempos del Estatuto de Seguridad impuesto por el presidente Julio César Turbay Ayala a través del Decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978 al amparo del estado de sitio, que se sustentaba en la alteración del orden público y la seguridad ciudadana. La decisión estatal reforzó los conceptos del “enemigo interno”, les otorgó amplias funciones y facultades a los organismos de seguridad del Estado, permitió que civiles fueran juzgados en tribunales militares a través de los llamados consejos de guerra verbales y endureció las penas de cárcel a quienes participaran en manifestaciones estudiantiles, paros cívicos y huelgas.

La “amenaza comunista” cobró nuevos bríos y todos aquellos que promovían sus ideas eran considerados “elementos peligrosos”. Además, el Estatuto de Seguridad promovía la participación ciudadana en las tareas de la fuerza pública, lo que puso un ingrediente conflictivo en las relaciones personales y se incrementó la desconfianza colectiva. Los gremios económicos reforzaron esas ideas: “Queremos hacer explícito reconocimiento de la obra reparadora de las Fuerzas Armadas, que en su encargo de defender la nación, deben tener el apoyo solidario y permanente de todos los estamentos sociales”, registró el diario *El Tiempo* el 3 de marzo de 1979.

Los abusos en los que incurrieron las fuerzas de seguridad del Estado comenzaron a recibir críticas de diversos estamentos, incluidos militares en retiro, altos prelados de la Iglesia Católica y senadores de la república. La medida del estado de sitio y, por ende, el Estatuto de Seguridad, fue desmontada en junio de 1982, dos meses antes del fin del gobierno de Turbay Ayala. Atrás quedó una estela de torturas y desapariciones forzadas.

Con la llegada de Belisario Betancur a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 1982, se impuso un discurso radicalmente contrario al de Turbay Ayala. Se abrieron las expectativas por una solución negociada a la confrontación armada con las guerrillas y proliferaron por todo el país las “palomitas de la paz”. Las actividades de Santamaría en los campamentos guerrilleros se vieron avaladas, lo que estimuló aún más su trabajo político, adhiriéndose a la UP como cuota del PCC. Corrían nuevos aires y la visión optimista de este líder político se fortalecía.

Pero el aire se fue viciando con la inconformidad de sectores políticos, económicos y estatales, sobre todo de militares y policías, quienes se sintieron respaldados por los nacientes grupos paramilitares en el Magdalena Medio, y se inició la cacería contra todos los que tuvieran relación con la UP. En medio de esa zozobra, Santamaría recibió sus primeros escoltas, y sus últimos cinco años estuvo bajo cuidados de los organismos estatales, pero también bajo observación, tal como lo reportaron en sus informes a finales de los sesenta.

“Yo desconfiaba mucho de los escoltas”, dice ahora Consuelo. “Fue tanta mi preocupación por Gabriel Jaime que alguna vez me dijeron que yo era

más escolta que los escoltas, situación que preocupaba a mi esposo, quien decía que yo era demasiado dura con ellos". Su preocupación aumentó días antes del asesinato, cuando le cambiaron un escolta. "El que llegó no me gustaba", recuerda.

Y sus sospechas se hicieron realidad aquella tarde del 27 de octubre de 1989, cuando el sicario Marco Antonio Meneses, protegido por el personal de escoltas del DAS, ingresó al recinto de la Asamblea Departamental, pasó los controles de ingreso sin ningún problema, subió al segundo piso y sin asomo de vacilación apuntó a la cabeza del diputado Santamaría y descargó una ráfaga con la subametralladora Ingram.

El cuerpo del líder político de la UP fue velado durante tres días en la Asamblea y luego, bajo una intensa lluvia, llevado en su última marcha callejera por el centro de la ciudad hasta el cementerio San Pedro, donde lo despidió su familia, junto a sus amigos más cercanos y sus correligionarios. Así llegó a su fin un hombre que desde muy joven estuvo bajo observación. Un cielo gris y lúgubre extendía un sombrío augurio sobre el futuro del país.

Referencias

ARCHIVOS Y COLECCIONES DE MANUSCRITOS

Álbumes de memoria y narraciones visuales. Galería Unión Patriótica.

Archivo privado de Luisa Santamaría.

Archivo del proyecto Guerra Sorda, de VerdadAbierta.com.

Archivos personales del autor.

PERIÓDICOS Y REVISTAS

El Espectador, (2014, 26 de octubre), “La historia tras la muerte de un líder de la UP”, consultado en: <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/historia-tras-muerte-de-un-lider-de-up-articulo-524039>.

VerdadAbierta.com, (2008, 24 de agosto), “El saldo rojo de la Unión Patriótica”, consultado en: <http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/157-el-saldo-rojo-de-la-union-patrioticaSee>.

VerdadAbierta.com, (2012, 13 de febrero), “DAS e Inteligencia Militar fueron cómplices de los Castaño: ‘Don Berna’”, consultado en: <http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/3855>.

VerdadAbierta.com, (2011, 5 de septiembre), “La persecución contra defensores de DDHH en Segovia”, consultado en: <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/231-los-resistentes/3509-la-persecucion-contra-defensores-de-ddhh-en-segovia>.

PUBLICACIONES OFICIALES

Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, (1969, 2 de junio), Seccional Antioquia, Grupo Orden Público, Medellín.

Presidencia de la República, (1978), Decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978.

ENTREVISTAS

Entrevista realizada a Consuelo Arbeláez Gómez, llevada a cabo en Medellín, vía telefónica, el 20 de septiembre de 2017.

Entrevista realizada a fuente con reserva de identidad, vía correo electrónico, el 18 de septiembre de 2017.

Entrevista realizada a fuente con reserva de identidad en Medellín, el 15 de septiembre de 2017.

LIBROS, ARTÍCULOS, ENSAYOS, TESIS

Romero Ospina, Roberto, (2011), *Unión Patriótica: expedientes contra el olvido*, Bogotá, Alcaldía de Bogotá, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.



El gobernador indígena, Germán Ibáñez, junto a su hijo menor.

Dos generaciones, símbolo de la esperanza. Foto. Edilma Prada.

Coreguaje: voces de un despojo

Por Edilma Prada Céspedes

Lejos de la sabana de Caquetá, los Coreguaje narran el éxodo brutal, silencioso e invisible que debieron emprender para salvar sus vidas. Recuerdan a sus muertos, abrazan a los vivos y luchan por volver a la tierra de donde brotaron.

Nos arrebataron nuestros líderes, creencias y vidas, pero no nos quitarán el sentir indígena y el amor por la selva, nuestra tierra. Hoy caminamos el territorio para perdonar y encontrar de nuevo la armonía.

Baniso'okaisiname mai ainare, mai kuasache name paivanare, jatani mai paichetani siamamu, pojuju mai pai chejare kuirame. Irumu nukakuime mai cheja kuasa oiju kabesuuñu chiini, mama pai jachere jñaañu chinni.

Álvaro Piranga Gruz

A las seis de la tarde del 21 de octubre de 1981 el cielo de la Amazonía fue atravesado por un gigantesco pájaro metálico que antes del oscurecer descendió sobre las aguas del río Ortegua, enclavado en las selvas del Caquetá. Era el avión de Aeropesca, con matrícula HK-388, que el M-19 había

secuestrado en Medellín para transportar, desde La Guajira, 600 fusiles hasta esta zona del sur del país. Más de 150 guerrilleros ayudaron a trasladar el armamento en medio de la selva espesa. Muchos de ellos eran indígenas coreguaje, reclutados y entrenados por el M-19 para alimentar una guerra que cambiaría para siempre la vida de sus comunidades. Con la llegada de las armas, la zona se convirtió en área estratégica para la confrontación.

Álvaro Piranga Cruz, actual consejero de comunicaciones de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, es un hombre trigüeño, de piel dorada por el sol, fornido, de pelo negro y liso. Nació y se crio en el resguardo Aguanegra, en Milán, Caquetá. Hoy vive en Bogotá, tuvo que salir desplazado en 2006 de su territorio para salvaguardar su vida. Cuenta que *“la avioneta iba aterrizar en un caserío de nombre Granario, junto a una hacienda ganadera, que queda muy cerca de donde estaba preparada la pista de aterrizaje construida por los coreguaje. El avión se demoró en salir de la costa [norte del país] le cogió la tarde y no alcanzó a ver la pista, por eso siguió río abajo, iba aterrizar en la playa pero quedó finalmente en el río, cerca al resguardo de San Luis y de la base aérea de Tres Esquinas”*, recuerda.

Germán Ibáñez Gutiérrez, un indígena de contextura delgada, bajo en estatura, ojos negros rasgados y un rostro visiblemente cansado por el paso de los años, es el actual gobernador del territorio Chaibajú, ubicado en Puerto Leguizamó, Putumayo. Dice que los coreguaje fueron preparados durante tres meses para recibir las armas. *“Eran como seiscientas, cuatrocientas cajas de munición y bombas, unos tubos largos, con pepas grandes. Las recogimos entre blancos e indígenas y las sacamos en canoas, todo fue muy rápido. A las tres de la mañana ya nos habíamos ido hacia la selva. Y ahí empezó la guerra”*, relata.

Para entonces los coreguaje eran una comunidad de aproximadamente dos mil indígenas que vivían en veintidós asentamientos o reservas pertenecientes a veinticuatro clanes sobre los ríos Orteguaza, Peneya, Consaya y Caquetá, en la jurisdicción de los municipios Milán y Solano. Los primeros nativos de esta etnia que arribaron al país, también conocidos como koreguajes, korebajü o coreguaxe, pertenecían a la familia lingüística tukano occidental. Se desplazaron desde territorios de Brasil hasta Vaupés y se ubicaron en la gran Amazonía colombiana.

Meses antes del aterrizaje del avión llegaron los guerrilleros del M-19. *“Ellos nos recogieron. Fuimos unos ochenta de cada comunidad, hombres y mujeres. Yo estaba estudiando y me tocó ir. Fuimos a veredas donde nos enseñaron a manejar pistolas y fusiles; también nos enseñaron a hacer guardia y nos metieron ideas revolucionarias (...) A mí me cambiaron el nombre, me llamaban Óscar. Yo hablaba mi dialecto y no entendía el castellano”,* cuenta Germán, recostado sobre una hamaca dispuesta en su casa de madera ubicada en una zona inhóspita del territorio Chaibajú.

Menciona que en medio del adiestramiento, el M-19, grupo guerrillero que surgió en enero de 1974 con el asalto a la Quinta de Bolívar en Bogotá, les enseñó procesos políticos y liderazgo social, enmarcados en una lucha por la justicia, el respeto y la igualdad. Ideales que los pueblos indígenas de América Latina venían persiguiendo tras el exterminio que habían vivido desde el año 1600 con la colonización española, el adoctrinamiento católico, el genocidio por la explotación del caucho en la Amazonía, y la expansión ganadera; sucesos presentados entre los siglos XVI hasta finales del XX, que los fue arrinconado hasta reducirlos.

“Luego del entrenamiento volvimos a la comunidad por más gente -relata Germán- era lo que nos ordenaban los comandantes “Julián” y “Ramírez”. Pensábamos que era bueno, no sabíamos lo que iba a suceder después”.

Antes de la guerra, en un día corriente en la comunidad Aguanegra, los hombres salían a pescar al amanecer. Al iniciar la mañana las mujeres labraban la chagra, -una zona de cultivo donde los coreguaje siembran yuca, maíz, piña, ají y plátano-, y atendían los quehaceres de sus casas, construcciones pequeñas hechas en madera y hojas de palma. Los abuelos y caciques maceraban la hoja de coca y preparaban el yagé para hacer los rituales de la palabra y la armonización que tradicionalmente celebran cuando cae el día. Los niños, los más pequeños, permanecían cerca de las cusmas o faldas de sus madres, y los más grandes jugaban en el río Orteguaza. En las tardes, tanto hombres como mujeres tejían, descansaban en hamacas colgadas en las entradas de los ranchos y se resguardaban del sol intenso y del calor humeante de la Amazonía. Las noches se compartían en grupo en la maloca. En ella discutían las actividades de la comunidad. Los abuelos mientras mambeaban coca, conversaban de la vida, cantaban y contaban las historias

míticas de la boa, el tigre, la danta, el sol, la luna, el delfín rosado y la tierra. Los hombres, después de entrada la noche y luego de la toma del yagé, volvían al silencio del bosque, para cazar o para encontrarse con *Makatañú*, el espíritu que cuida los animales de la selva.

Eduardo Bolaños Piranga, de ojos negros, fornido y de piel trigueña, es el actual cacique del resguardo San Luis, ubicado en Milán, franja nororiental del Caquetá. Menciona que luego del aterrizaje del avión de Aeropesca, la tranquilidad en las comunidades cambió. Los militares torturaron a varios líderes, entre ellos a su padre, Aquiles Bolaños Piranga.

“El Ejército torturó a muchos compañeros para que contaran dónde estaba el armamento. Mi papá era líder de la comunidad y le amarraron las manos y los pies, y lo arrastraron hasta su casa”. También asegura que además del asedio de las tropas hacia los coreguaje, se registraron muchos combates muy cerca de los caseríos.

Las confrontaciones bélicas y los señalamientos permanentes a que fueron sometidos, motivó a los líderes indígenas a repensar su territorio y a tomar posiciones ante los armados. Los llevó a organizar, en diciembre de 1981, dos meses después de la llegada del avión, el primer congreso indígena de la zona, que dio paso a la creación del Consejo Regional Indígena del Orteguzaza Medio Caquetá –Criomc. Esta organización social empezó con la participación de veintidós autoridades tradicionales y se inspiró del Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC, uno de los movimientos de pueblos nativos con más fuerza en el país.

Álvaro, consejero de comunicaciones de la ONIC, reconoce que en la constitución del Criomc se adoptaron algunas ideas del M-19, las cuales fueron *“recreadas a nuestra propia convicción ideológica indígena, pero lejos de las armas”* y reitera que el principal propósito de la organización es la *“lucha por la unidad, el territorio, la cultura y la autonomía”*. Principios con los que además buscaban la titulación de los resguardos y la educación propia.

Entre 1982 y 1989 los controles y la presencia de las fuerzas armadas del Estado en el Caquetá se hicieron más fuertes. La guerra en Colombia arremetía con ataques terroristas en ciudades como Bogotá y Medellín, crímenes contra líderes políticos, despliegue de grupos guerrilleros como las Farc, el EPL y el ELN, y el aumento de bandas de narcotraficantes.

Germán Ibáñez, luego de estar siete años en el M-19, recuerda que decidió abandonar las filas de esa guerrilla y esconder su fusil, para retornar a su territorio. Cuenta que tuvo que reconstruir nuevamente confianzas con sus compañeros, los coreguaje, pues dentro de los resguardos y tras el fortalecimiento del Criomc, se tomaron decisiones colectivas como la prohibición del uso de armas en el seno de las comunidades. *“Cuando iba a volver, el Ejército me cogió tres días, me quitaron la ropa para ver cómo cargaba el fusil pero no me encontraron nada. Luego llegué a mi comunidad. Nunca más volví a usar armas”*, recuerda Germán, gobernador de Chaibajú.

Las armas del episodio del avión de Aeropesca fueron entregadas en 1990 por el M-19 al gobierno del presidente Belisario Betancour, en medio de la firma de paz, luego de dieciseis años de insurgencia.

Opresión

Entre los años 1988 y 1989, y tras la salida del M-19, la guerrilla de las Farc se estableció en territorio de los coreguaje. Sobre la ribera del Orteguzza se ubicaron los frentes 14 y 15, y hacia la frontera con el Putumayo se desplegaron los frentes 48 y 49.

“Quedamos cercados. Ese cambio de las fuerzas guerrilleras, en comparación con el M-19, fue muy crítico porque ellos [las Farc] llegaron prácticamente a imponerse a la fuerza, la gente tenía mucho más miedo. Entonces notamos que le quitaron autonomía a las comunidades, nos exigieron que teníamos que hacer parte de ellos, involucrándonos en las filas. Se presentaron choques duros de la autonomía militar con la autonomía de los pueblos indígenas”, dice Álvaro, desde la emisora de la ONIC en Bogotá, al continuar con el relato de las vivencias de su comunidad en medio del conflicto armado.

“Se llevaron a nuestros jóvenes, reclutaron niños, sobre todo se llevaron muchas niñas, de cada comunidad dos o tres. A veces las Farc incentivaban con algunas cosas o engañaban, decían que daban plata o que le ayudaban a las familias, y con esa idea hacían campañas de vinculación”. Álvaro también comenta que se libró de ser reclutado gracias a su pronta participación en el comité del resguardo.

Las madres coreguaje sufrieron la partida obligada de sus compañeros e hijos. Yasmina Ibáñez, una mujer robusta, de piel cobriza y cabello lacio recogido en la espalda, carga sobre sus piernas a su hijo pequeño, mientras recuerda que en 1989 las Farc llegaron hasta su comunidad San Francisco y reclutaron a su esposo Hugo Gasca. En ese momento Yasmina, con tan solo 14 años, tenía tres meses de embarazo. *“Tenía que irse con ellos pero él no quería”*. Ella volvió a ver a su marido un año después, cuando las Farc le permitieron visitarla para ver al recién nacido. *“Él dijo: yo no puedo volver, no me dejan volver; desde entonces no sabemos nada de él”*.

Yasmina, quien actualmente vive en Puerto Leguizamó, manifiesta que su hijo mayor, quien tiene 28 años, ha buscado a su padre, en Caquetá, pero no ha logrado tener noticia alguna.

Las Farc también impusieron sus normas en la zona. Establecieron un estatuto interno y prohibieron la circulación en horas nocturnas. Los indígenas no podían caminar por la selva, ni por las veredas y mucho menos navegar por los ríos. *“La cuestión más fuerte fue el control territorial, el indígena coreguaje está enseñado a andar y pescar de noche, a caminar por sus propias selvas”*, pronuncia Álvaro, quien también recuerda que las Farc prohibieron que se hicieran ceremonias como la toma del yagé.

“Hubo persecución a los mayores espirituales; no podíamos hacer rituales, como las tomas de yagé porque supuestamente se distorsionaban las cosas o el pensamiento de ellos. Pero el mameo de la coca ha sido permanente”. Álvaro agrega que esa fue una forma de desestabilizar la armonía de los indígenas.

El fortalecimiento de las Farc y las alianzas con grupos de narcotraficantes convirtió al territorio de los coreguaje en uno de los mayores productores de hojas de coca. El Orteguaza y sus afluentes fueron utilizados como rutas fluviales para la movilización de insumos para la producción de base de coca, combatientes y armas hacia Putumayo. *“Fue muy fuerte la cuestión del narcotráfico, de la coca, hubo mucha plata en el Caquetá, incluyendo Milán y Solano, que fueron los centros y corredores. Muchas familias fueron obligadas a cultivar para sobrevivir”*, cuenta Álvaro.

La vida colectiva que caracterizaba a estos pueblos nativos empezó a cambiar. Las costumbres de las mingas o trabajos comunitarios fueron re-

emplazadas por la ambición al dinero, así lo menciona Álvaro quien dice que la coca hizo que la etnia, literalmente, se convirtiera en una comunidad rota. *“Se presentó un choque con el pensamiento indígena, pues la gente ya no quería trabajar en la organización, comunitariamente, cada familia empezó a crear su fuente de ingreso a través de la coca; fue un momento que se salió de las manos de nuestra cosmovisión, ya no éramos nosotros”.*

Silencio

Las voces de los líderes coreguaje fueron silenciadas. Eduardo, cacique de la comunidad de San Luis, recuerda que el rechazo de los indígenas hacia las Farc y sus llamados a las autoridades estatales para evitar que su territorio se siguiera convirtiendo en un bastión del narcotráfico, desencadenaron una serie de muertes.

En 1993 las Farc asesinaron a Aquiles Bolaños Piranga, uno de los principales gobernantes nativos del resguardo de San Luis. *“Me acuerdo que el 11 de septiembre estuvimos reunidos en comunidad toda la noche; debatimos, analizamos un plan de trabajo pues estábamos en contra de la construcción de una pista clandestina para sacar coca, ya no queríamos más eso para nosotros. Luego de esa asamblea, las Farc citaron a mi padre Aquiles Bolaños. Él se fue hasta la inspección de San Antonio de Jetuchá, a reunirse con ellos, supuestamente para organizar un trabajo. Eso fue un domingo entre las diez y once de la mañana. Como al medio día, nos enteramos que habían asesinado a mi padre”,* relata Eduardo. A su padre lo encontraron tirado en una calle del casco urbano.

Álvaro, quien para ese año era el secretario general del Criomc, mientras con pausa escribe en su libreta los nombres de cada una de las víctimas, para no olvidar, cuenta que luego de la muerte de Aquiles se activó un plan para aniquilar sistemáticamente al pueblo coreguaje, y señala a las Farc como los responsables de los crímenes de profesores, concejales y caciques.

“En 1994, asesinan al primer concejal indígena del pueblo, Luis Piranga Cruz, mi primo, en su propia comunidad, en el resguardo Erichá. Él también hacía parte del comité como Aquiles. Luego asesinan a Roque Piranga, que fue uno de los presidentes del Criomc; murió en San Antonio de Jetuchá, y ahí siguieron muertes selectivas

hasta 1996, como la de Bernabé Piranga, un hijo suyo, también fue presidente del Criomc”.

Entre 1993 y 1997 el miedo se apoderó de los coreguaje. Vivían en medio de torturas, desapariciones y combates. Situación de la que no era ajena buena parte de la geografía nacional. En ese periodo la guerrilla se tomó varias poblaciones en Caquetá, Huila, Putumayo, Cauca y Nariño; emboscó y asaltó a unidades militares, se llevó a soldados como prisioneros de guerra y secuestró a políticos. Estos hechos se dieron de forma paralela con el accionar sangriento de paramilitares que se apoderaron de distintas zonas, entre ellos Caquetá.

“En mayo de 1997 se presentó la desaparición de un profesor y un promotor de salud del resguardo Puerto Naranjo, del municipio de Solano. Hicimos una investigación y logramos saber que ellos [las Farc] los tenían en la selva, y con la guardia indígena logramos rescatar al promotor de salud que se llama Fernando Gasca, él todavía vive, pero del profesor Óscar Camacho no se sabe nada, sigue desaparecido”, narra Álvaro. También recuerda que el 20 de julio de 1997 guerrilleros de las Farc asesinaron a los hermanos Valencia, en el sitio conocido como Campoalegre, en Milán.

Una de las tragedias más recordadas por los coreguaje es la masacre de siete líderes de la comunidad de San Luis. El hecho se presentó el 25 de julio de 1997. *“Llegaron trece personas vestidas con uniformes de camuflado militar, y otras rodearon el caserío. Eran guerrilleros. Fue a las seis de la mañana. Al principio sacaron a todos de sus casas: mayores, hombres, mujeres y niños, los ubicaron en el centro de la comunidad al pie del palo de mango, separaron a las mujeres y los niños de los hombres. A ellos los colocaron boca abajo y los iban separando a quienes aparecían en un listado. Luego se los llevaron en fila india a un sitio a trescientos metros de la comunidad, por el camino que conduce a la chagra y al cementerio. Ellos gritaban: vengan a salvarnos, Jakooo Raijuuu [en coreguaje: venga mamá]. Como a los cinco minutos se escucharon los disparos, ráfagas de fusil. Ahí los mataron”, cuenta Álvaro, mientras hace pausas silenciosas, como queriendo rendir homenaje póstumo a las víctimas de la masacre.*

Los indígenas que murieron esa mañana fueron Dionisio Figueroa, el cacique de la comunidad; Silvio Piranga, excacique; Reimundo Figueroa y

Leonardo Bolaños, coordinadores comunitarios; los profesores Égdar Camacho Bolaños y Abraham Figueroa, y el estudiante universitario Carlos Arturo Valencia.

Miriam Piranga, una mujer de contextura gruesa, ojos negros y cabellera larga, es profesora del colegio *mama b~ue*, en el resguardo de San Luis. En 1997 ella y su esposo, Carlos Valencia, estudiaban licenciatura en educación indígena en la Universidad de la Amazonía. *“Yo estaba en otra comunidad cuando se presentó la masacre. Fuimos avisados de lo que pasó muy temprano. Nos dijeron que las Farc habían asesinado a Carlos, junto a varias autoridades tradicionales. Fue un momento horrible para todos. Después de eso me tocó luchar mucho para sacar adelante a mis cuatro hijos”*.

Hoy todavía se escuchan versiones diversas de lo ocurrido. Las madres, viudas, huérfanos y la comunidad en general se preguntan ¿por qué fueron asesinados?, ¿cuál fue la razón? Veinte años después de la masacre esperan una respuesta.

“Antes de la masacre desaparecieron varios muchachos de la comunidad. Lo que decía la guerrilla era que existían informantes del Ejército y esa es una versión que para nosotros no es real. La guerrilla decía que se estaba conformando un grupo de paramilitarismo y esa es otra versión que también es descartada por los mismos indígenas; otros dicen que habían recibido recursos para comprar coca, lo cual también es descartado, pero un asunto que sí se alcanza a reconocer, es que hubo mucho desorden en esa comunidad de San Luis. Aprovechando el tema de la coca, la gente empezó a formar grupos de delincuencia común y hubo participación de indígenas, de chicos a los que les gustaba hacer esos desórdenes, pero las Farc se metió con las autoridades y luego se presentó la masacre”, comenta Álvaro.

La masacre para los coreguaje fue un hecho anunciado. *“Incluso en la semana anterior, habían realizado tres citaciones a las autoridades tradicionales para que fueran a aclarar el desorden de la delincuencia. Los líderes por miedo no fueron, y ellos llegaron a la fuerza”*.

Álvaro también recuerda que en noviembre de 1997, luego de que los indígenas le exigieron a las Farc respeto a la vida y a su autonomía territorial, firmaron con la guerrilla un *“acuerdo humanitario”*, en la inspección de Campoalegre Danubio, sobre el río Peneya. *“Ese acuerdo se firmó con los comandan-*

tes del Frente 15 de las Farc. Yo mismo lo escribí a mano, yo mismo lo redacté junto con Constantino Figueroa, que un año después fue asesinado (1998), Bernabé Piranga, quien también fue asesinado, y el coreguaje William Bolaños. También estaba el compañero Carlos Sánchez del CRIC, y de la ONIC, Jesualdo Fernández. Las Farc metieron su parte, sus reglas”.

En el documento quedaron consignados varios compromisos: los indígenas acordaron garantizar el orden en la comunidad y las Farc aceptaron reclutar indígenas solo de forma voluntaria, realizar enfrentamientos con el Ejército fuera del territorio de la comunidad y cesar el derramamiento de sangre del pueblo coreguaje.

Acuerdo que las Farc no cumplió, según relata Álvaro *“porque siguieron matando en medio de las conversaciones”*. El documento, hojas escritas a puño y letra, todavía es conservado por Álvaro, como prueba histórica del sufrimiento de su pueblo.

De acuerdo con la ONIC, 65 líderes indígenas coreguaje fueron asesinados entre 1997 y 2000. El Gobierno Nacional, en 2009, en un informe publicado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, de la Vicepresidencia de la República, reseñó que a *“finales de la década de los noventa, se presentaron 10 asesinatos de sus integrantes”*, y entre 2000 y 2008 no murió ningún coreguaje a causa del conflicto armado.

En 1997 varias instituciones que acompañaban los procesos indígenas decidieron retirarse de la zona por presiones de la guerrilla. El profesor Pedro Tulio Marín Silva, lingüista de la Universidad Nacional de Colombia y quien llevaba más de dos décadas investigando la mitología y lengua de los coreguaje, recuerda que los últimos años fueron tenebrosos y que todo pasó ante los ojos del Estado, de las ONG, de la iglesia y de las mismas universidades que no hicieron nada ante la barbarie que estaban viviendo los indígenas.

“Había un apetito voraz, capitalistas, empresarios de la coca y los coreguaje se metieron a la fuerza en esa dinámica de la guerra, una guerra ajena; ellos no querían hacer parte, fueron obligados. Esa guerra les dejó pobreza, miseria, viudas y huérfanos (...) la comunidad quedó fragmentada, dividida, casi irreconciliable; todavía

conservan esos dolores, muchos indígenas ven con desconfianza al Criomc, hay una gran separación entre la sabiduría tradicional de los ancianos y los jóvenes, hay un híbrido muy fuerte que los separa, fue perverso lo que sucedió con los coreguaje”, dice el académico, quizás uno de los “blancos” u occidentales que más conoce a los coreguaje. En 2004 publicó el libro Mítica Korebajü, que había logrado construir gracias a los relatos e historias mitológicas narradas por los indígenas, algunos de ellos víctimas de la masacre.

Desarraigo

Entre 1998 y 2005 varias familias de los coreguaje decidieron desplazarse por las muertes y señalamientos que seguían padeciendo, y porque se iniciaron las fumigaciones con glifosato para acabar con grandes plantaciones de coca, lo que afectó los cultivos de pancoger que tenían sembrados en sus chagras. Las fumigaciones hacían parte del Plan Colombia, un programa del gobierno nacional apoyado por Estados Unidos para erradicar cultivos de uso ilícito. Pese a que en esos años soplaron vientos de paz, por las negociaciones entre el gobierno del expresidente Andrés Pastrana Arango (1998 - 2002) y las Farc en San Vicente del Caguán, el acoso armado en la comunidad de los coreguaje continuaba.

Reportes históricos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, indican que en Caquetá, en el año 2000 había 26.603 hectáreas sembradas de hoja de coca, y entre los municipios con mayor concentración se encontraban Milán y Solano. A diciembre de 2006 se reportaron 4.967 hectáreas, cifra que bajó debido a los programas de fumigación y erradicación que implementó el gobierno a través del Plan Colombia.

Según los coreguaje, varias familias del resguardo El Diamante, del municipio de Solano, se desplazaron a Florencia, capital del Caquetá. Otro grupo tomó rumbo a Bogotá y Usme, en Cundinamarca. Del resguardo Puerto Naranjo, ubicado sobre el río Peneya se desplazaron al río Mecaya en el Putumayo. Y de la comunidad de San Francisco salió la familia Ibáñez, para Puerto Leguízamo.

Los Ibáñez llevan puestos sus trajes tradicionales, batas largas con cintillas de colores que bordean las mangas, el cuello y la parte inferior de los vestidos o cusmas. Lucen collares tejidos con plumas, conchas y semillas secas. Algunos de ellos están descalzos, sus pies son anchos y presentan grietas de tanto caminar por los territorios. Los hombres llevan coronas de plumas como símbolo de autoridad ante la comunidad. Y las mujeres tienen mochilas de fibras naturales. Los Ibáñez, quienes actualmente viven en Puerto Leguízamo, en medio de un diálogo colectivo, cuentan la experiencia del desplazamiento y la lucha por conseguir un territorio digno para rehacer sus vidas.

En noviembre de 2003, el clan Ibáñez, un total de siete familias, conformado por cuarenta personas, decidió salir de la comunidad de San Francisco. Esas personas abandonaron sus tierras, debido a que perdieron varias hectáreas de cultivos de pancoger tras las fumigaciones con glifosato, y el asedio permanente de la guerrilla.

“Las Farc nos prohibieron ir a la chagra. No podíamos trabajar, ni sacar yuca, ni cazar de noche. Una vez no fuimos casi un mes a la chagra para traer la comida porque el territorio estaba en medio de combates. En la casa pasaban las balas [recrea con su voz el sonido de las detonaciones] muchas balas, habían soldados armados y andaban con aviones, eso fue muy feísimo”, dice Bertha Ibáñez, con esfuerzo al tratar de pronunciar bien el español, pues ella como los demás miembros de la familia conservan perfectamente la lengua materna indígena.

Los Ibáñez recuerdan que una noche de noviembre se acomodaron todos en un bote y navegaron río abajo por el Orteguaza. La travesía para alejarse de una guerra ajena duró quince días. También navegaron por aguas del río Caquetá hasta el río Putumayo, con destino a Puerto Leguízamo, zona fronteriza con Perú, donde actualmente residen. *“Dejamos todo botado. Solo teníamos lo que llevábamos puesto. En el camino solo nos alimentamos de pescado, fueron quince días al sol y al agua, un recorrido duro. Salimos en noviembre y llegamos un diciembre”, recuerda Alfonsita Ibáñez.*

A su turno María Veyanith Ibáñez relata que el día que llegaron a Leguízamo, la única opción que tenían era dormir en el parque principal del pueblo. Allí duraron una semana. *“No conocíamos a nadie, nos tocó dormir en la*

calle, aguantamos hambre. Luego fuimos a una invasión, nos acomodamos en carpas y ahí empezaron a colaborar con alimentos. A mi mamá por ser anciana le trajeron una camita”.

Silvia Ibáñez complementa que ante la Personería de Leguízamo presentaron la declaración de desplazados y que luego el gobierno les entregó un subsidio para pagar arriendo durante tres meses, después se asentaron en la invasión el 19 de noviembre. *“Después se olvidaron de nosotros. Nos tocó buscar solos, comenzamos a vender artesanía, fue duro sobrevivir sin chagra, todo se tenía que comprar”.*

Por su parte, Fabián Ibáñez, dice que con la ayuda de pobladores de Leguízamo lograron que les prestaran una hectárea de tierra, a orillas del río Putumayo, donde cultivaron yuca dulce y plátano, y así retomaron sus actividades tradicionales. *“No hay guerrilla, acá nunca hubo pelea, logramos trabajar en la chagra, vender yuca, hacer fariña y casabe, alimentos tradicionales del pueblo coreguaje”*, menciona.

Esta familia, tras un acuerdo en comodato con la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de los Pueblos Indígenas del Municipio de Leguízamo y Alto Resguardo Predio Putumayo, Acilapp, desde 2009 comparte territorio con los pueblos murui y quichua.

Los Ibáñez guardan los recuerdos de la violencia. Pronuncian los nombres de Floro Ibáñez y Delfín Valencia, asesinados en su territorio en Caquetá. Dicen que varios miembros de su familia fueron reclutados y otros están desaparecidos.

Esta historia de desplazamiento masivo se suma a la experiencia que vivió Álvaro Piranga; él se vio obligado a abandonar su resguardo porque las Farc lo iban a matar. En 2006 era líder y director de la emisora Coreguaje Estéreo, que habían creado desde el Criomc en 2001 para difundir sus visiones y lógicas comunitarias; la emisora también se convirtió en uno de los canales para exigir respeto de los derechos humanos por parte de los armados que todavía tenían el control en la región.

Álvaro recuerda que en ese 2006 a la emisora empezaron a llegar guerrilleros. *“De manera estratégica llevaban y traían música de ellos, decían: “compañero traemos música a ver si ustedes ponen a través de la emisora”, y cuando*

apagábamos sonaba otra sobre la resistencia revolucionaria. Un día llegaron y me dijeron: “el comandante manda a decir que si puede ir a formar nuestro personal, muchachos que les gusta hacer radio, nosotros le pagábamos”, yo les decía que no podía, les sacaba excusas, y un día regresaron tres guerrilleros, yo estaba en Milán y preguntaron: “dónde está el director de la emisora, lo necesitamos urgente, si no aparece pronto que desaparezca de la comunidad”, y la guardia me llamó a advertirme lo que pasaba”. A su regreso Álvaro se escondió en su casa, y luego con la ayuda de las religiosas del colegio huyó en un bote. Durante dos años se radicó en Florencia con su familia y, posteriormente, se fue a Bogotá.

La realidad es más crítica para los coreguaje que residen en las grandes ciudades. Quienes viven en Bogotá subsisten en condiciones precarias, casi que arrinconados en casas pequeñas y con el peligro de que su cultura se pierda en medio de las costumbres ciudadinas.

En la capital del país los coreguaje, 31 familias y 132 personas, residen en los sectores San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme. Humberto Figueroa Claros, antropólogo, de estatura baja, ojos negros y piel trigueña, es el actual gobernador del Cabildo Coreguaje, creado en 2015 en Bogotá. Con un tono de voz pausado, cuenta que la mayoría de los coreguaje que están en la ciudad, casi todos líderes, salieron de sus territorios por la persecución y amenazas de grupos armados, entre ellos las Farc.

Él era cacique de su comunidad y en 2005 abandonó el resguardo de Peña Roja del municipio de Solano. Recuerda que, en mayo de ese año, la guerrilla asesinó al profesor de la escuela, Óscar Alejandro Camacho, y al estudiante Enrique Vallejo Figueroa, por una supuesta vinculación con el Ejército. Ocho días después las Farc también estaban buscando a Humberto, al parecer para matarlo.

“Decían que Óscar era informante del Ejército, del batallón y eso fue mentira de la guerrilla, por eso lo asesinaron. También fue asesinado el estudiante. Nunca supimos dónde quedaron sus cuerpos. A los ocho días de la muerte de ellos, que eran familiares míos, salí desplazado porque decían que Óscar como que había mencionado mi nombre a la guerrilla, y por eso me estaban buscando para capturarme, para matarme. La comunidad supo que ellos habían sido asesinados porque la misma guerrilla lo informó en una reunión”, recuerda Humberto.

Para proteger su vida y la de su familia salió desplazado para Solano y luego se trasladó a Florencia; posteriormente, se asentó en Puerto Leguízamo y después llegó a Bogotá, donde ha mantenido su lucha en medio de la “selva de calles y de cemento”, como llama a la ciudad.

“La vida cambia. Se tiene que buscar medios de pervivir. Aquí los coreguajes trabajamos en construcción, artesanía y oficios varios. Todo es diferente porque no tenemos dónde ir a pescar, no tenemos dónde hacer la siembra de nuestra comida tradicional; nos complica vivir en una ciudad tan grande”. Humberto también menciona que los integrantes de su pueblo han logrado algunas oportunidades como estudiar en universidades y en el Sena, y de esa manera han buscado mejorar su situación y mantener los liderazgos.

El exterminio del pueblo coreguaje fue considerado como “una emergencia tan grave como invisible” por la Corte Constitucional en el Auto No. 004 de 2009, en el que le exige al Estado tomar medidas urgentes para la protección de esta comunidad y la de otros treinta pueblos originarios del país por el riesgo a desaparecer física y culturalmente a causa del conflicto armado interno.

De acuerdo con la Unidad de Víctimas, entre 1985 y julio de 2017, un total de 192.194 indígenas sufrieron diversas situaciones de violencia. De esa cifra 1.453 son nativos de Milán y Solano, Caquetá.

Esperanza

Eduardo Bolaños asegura que sus pensamientos siguen atados a los recuerdos de la muerte; a Miriam Piranga todavía le duele la pérdida de sus seres queridos; a Álvaro Piranga el miedo aún ronda sus pensamientos; y la familia Ibáñez aún vive de las añoranzas de su territorio. Los coreguaje tienen dolores que sanar y esperan hacerlo regresando a sus tradiciones y a la cotidianidad de la selva.

En su territorio, en Caquetá, volvieron a levantar las malocas o casas de pensamiento, que alguna vez fueron abandonadas por el terror de la guerra. Hoy hay doce malocas donde se reúnen hombres, mujeres y niños. Los indígenas son orientados por un médico tradicional para tomar yagé y limpiarse

de los dolores del pasado; para curar las heridas del corazón, pero sobre todo para prepararse para el perdón.

La dirigencia indígena del Criomc espera que las Farc, quienes en 2017 entregaron las armas en el marco del acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, reconozcan que cometieron actos atroces contra su pueblo, como la masacre ocurrida hace veinte años. *“Hoy reclamamos que las Farc reconozcan que fue un error y que nos pidan perdón. Es un diálogo que está pendiente y en este momento estamos en aras de conversar”*, pide Álvaro como un mecanismo de verdad y reparación colectiva que todavía no se ha cumplido para este pueblo.

“Lo que hay que hacer ahora es otorgarles un acto mínimo de autonomía respetando ese proceso del retorno al chamanismo, a la espiritualidad”, dice el profesor Pedro Marín, al celebrar que los coreguaje recuperen su maravillosa mítica ancestral.

Los coreguaje, hoy aproximadamente 3.700 personas, quienes en su relato mítico se consideran hijos nacidos de la tierra, quieren volver a cantar y honrar a los que se fueron y acompañar a los que siguen el camino, a los sobrevivientes.



La familia Ibáñez en 2003 se desplazó de Milán, Caquetá, a Puerto Leguizamo, Putumayo. Huían de la represión de los grupos armados, del dolor que causó la muerte y reclutamiento de varios de sus seres queridos y la fumigación con glifosato de sus cultivos de pancoger. Foto. Edilma Prada.

Referencias

ARCHIVOS Y COLECCIONES DE MANUSCRITOS

Archivo privado de Álvaro Piranga.

Archivo privado de Pedro Marín.

PERIÓDICOS Y REVISTAS

El Tiempo, (1997, 26 de julio), “Asesinan a siete indígenas Coreguajes en Caquetá”, en <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-620287>.

PUBLICACIONES OFICIALES

Corte Constitucional de Colombia, (2009), *Auto No. 004*, en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a004-09.htm>.

Ministerio de Cultura, *Koreguaje, la gente de Tierra*, en <http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/files/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Koreguaje.pdf>.

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, *Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Coreguaje*, en http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Documents/2010/DiagnosticoIndigenas/Diagnostico_COREGUAJE.pdf.

Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, (2016), *Pueblo Coreguaje realiza Minga de Armonización para la Paz en defensa de los derechos territoriales y reconocimiento de su lucha política organizativa*, en <http://www.onic.org.co/comunicados-regionales/1394-pronunciamiento-del-pueblo-indigena-coreguaje>.

Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, (2017), *Censo Anual de Cultivo Ilícitos*, en <http://www.biesimci.org/Illicitos/cultivosilicitos/Censos.html>.

Unidad de Víctimas, (2017), *Reportes del Registro Único de Víctimas*, en <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394>.

ENTREVISTAS

Entrevista realizada a Álvaro Piranga Cruz, llevada a cabo en Bogotá en agosto de 2017.

Entrevista realizada a Germán Ibáñez Gutiérrez, llevada a cabo en Puerto Leguízamo, Putumayo, en agosto de 2017.

Entrevista realizada a Pedro Tulio Marín Silva, llevada a cabo en Bogotá el 9 de agosto de 2017.

Entrevista colectiva realizada a Yasmina Ibáñez, Bertha Ibáñez, Alfonsita Ibáñez, María Veyanith Ibáñez, Silvia Ibáñez y Fabián Ibáñez, llevada a cabo en Puerto Leguízamo, Putumayo, en agosto de 2017.

Entrevista realizada a Humberto Figueroa Claros, llevada a cabo en Bogotá, en septiembre de 2017.

Entrevista realizada a Eduardo Bolaños Piranga, vía telefónica en agosto de 2017.

Entrevista realizada a Miriam Piranga, vía telefónica en agosto de 2017.



Julisa Mosquera durante la obra *Victus* de Casa Ensemble.

Foto: Cortesía de Casa Ensemble.

El arte de escuchar el corazón

Por Claudia Mejía

El relato de Julisa y de varias personas ofrece no un libreto sino una comprensión más amplia a una realidad tremenda, a través de una puesta en escena, artística y poética, donde todos, víctimas y perpetradores, “empezaron oyéndose el alma”. Una apuesta donde se hacen esas preguntas inquietantes en un país del posconflicto.

“Ahora soy Victus. Ya llegaremos a esa historia. Pero primero, déjeme decirle algunas cosas sobre mi pasado y mi país. Colombia es racista. Lo siento cuando, digamos, uno tiene que presentar una hoja de vida. A veces es mejor no poner una foto porque eres negra y te cuesta más. Yo entendí el racismo cuando llegué hace unos pocos años a Bogotá, porque en el Chocó nos llamamos por el nombre. En cambio, acá la gente me decía: “Ay, negra, mira tal cosa”. ¿Por qué no me dicen por mi nombre? Por eso soy feliz cuando voy a Quibdó: allá nadie me llama por el color de mi piel. Son luchas. Como ser mujer. Una batalla que tengo atravesada. Yo me crié con mi madre y mi abuela y aunque mi padre está vivo, nunca tuve contacto con él. Mamá se enfrascó en el capricho de que ella podía solita. Así se crean todos estos irresponsables que hay. Y en el Chocó hay cualquier cantidad de esos hombres por mujeres como mi madre. Esa era mi lucha en mi tierra.

Mi abuela, que era indígena, tenía un temperamento muy fuerte. Mi mamá tuvo que salir a trabajar muy joven porque papá no estuvo presente. Se enfrentó a una sociedad que solo concebía la figura paterna como líder de un hogar y ella fue quien asumió las riendas de la familia. Era muy liberal para la época y creo que también le heredé eso. Me acostumbré a enfrentar las cosas que no creía correctas, luchando por lo que creía justo. En 1986, por ejemplo, cuando tenía 18 años y estaba terminando el colegio, nos tomamos la catedral de Quibdó en un paro cívico. Protestábamos por la escasez de vías y han pasado treinta años y seguimos en lo mismo. Ha habido un atraso histórico en el Chocó. Nuestros mandatarios no han estado a la altura, en cambio muchos de ellos se han enriquecido los bolsillos.

También he luchado por los jóvenes. Para mí son muy impactantes las historias de cómo la guerra se llevó a muchos niños en Colombia. Incluso el Ejército. Mi hijo mayor prestó servicio militar, primero en Coveñas, Sucre, y luego lo mandaron a Tumaco, Nariño. Allá le tocó una toma donde murieron varios soldados. Mi hijo me decía: “No quiero estar acá, esto es terrible, todos los días matan”. Fueron dos años espantosos de zozobra. Yo decía: “Yo trabajando para que no se llevaran los muchachos y preciso se llevan al mío”. Fíjate las contradicciones de la vida. El chiquito recién cumplió los dieciocho años hace unos meses y por ser hijo de una víctima del conflicto y gracias a la Ley 1448 se salvó de prestar servicio. Esa preocupación por nuestros niños me llevó –mucho antes de que pasara lo que pasó– a asumir la presidencia de la Asociación de Mujeres Afro por la Paz (Afromupaz), una organización en la que hemos trabajado por más de quince años en la labor social, humanitaria, de denuncia e incidencia política por la defensa de los derechos de las mujeres, especialmente las violentadas en el marco del conflicto armado.

Como lideresa comencé a principios del año 2000. Me volví la voz y la cara de esas mujeres, y ellas me empezaron a traer denuncias y mi deber era ponerlas en conocimiento de las autoridades. Pronto me convertí en la piedra en el zapato para muchos grupos ilegales. Y me señalaron de guerrillera. Pero yo no he estado en nada de eso. Detesto la violencia y jamás he visto que las armas sirvan para hacer transformaciones reales. Siempre he pensado que estas solo se dan desde la palabra y el amor. En Quibdó me con-

vertí en una matrona porque la gente llegaba a plantearme sus problemas. En algún momento dejás de ser tú para convertirte en esa comunidad que defiendes. Y muchas veces uno no logra dimensionar los peligros que nos rondan. Uno ve la violencia muy lejos y cree que nunca le va a pasar a uno.

En Chocó la estructura del paramilitarismo no se acabó luego del proceso de Justicia y Paz. Unos cuantos se entregaron, pero otros lo que hicieron fue mutar a otros grupos, Águilas Negras, Urabeños, la Empresa y así. En el Chocó siempre hemos estado sitiados por los violentos. Y allá hablar de estos era un tabú, algo prohibido. Para referirnos a ellos se decía: “Fulana dijo que los dueños del mundo...”, y así. Porque eran los dueños del mundo, de nuestro mundo. Usábamos frases así para comunicarnos.

Quibdó ya era difícil en mi juventud. Desde un tiempo para acá se comenzó a hablar de barreras invisibles entre barrios. El control se fue parcelando. En la ONG hacíamos el trabajo en las afueras de la ciudad porque allí estaba la gente más vulnerable, pero nuestra presencia empezó a incomodar. A María Eugenia Urrutia, la directora de nuestra organización, casi la matan por ese trabajo. Y cuando la reemplacé debí reconocer el peligro en el que me estaba metiendo. Pero el liderazgo hace que uno se vuelva intrépido y que no mida las consecuencias. Entonces comenzaron las amenazas y los panfletos. Me llamaron “sapa”. El miedo se fue instalando. Pero las mujeres de nuestra ONG resistían bajo una consigna: si no había Estado, nosotras sí estábamos para ayudar. En diciembre siempre les regalábamos cosas a los niños y hacíamos una olla comunitaria para celebrar. Gracias a jornadas así salvamos a muchos jóvenes del reclutamiento. Les decíamos: “Mi amor, tenga su camisa, tenga sus zapatos... ¿Qué se va a ir por allá?”. Nos volvimos el foco de la discordia.

Mis hijos y mi esposo empezaron a decirme: “Julisa, no queremos que estés en eso”. Ellos temían que nos pudieran hacer daño. Pero yo seguía. Era mi deber porque eran las mujeres de mi tierra, no podía ser ajena a ese maltrato. Recuerdo que por esa época viajé a Bogotá a hacer unas denuncias sobre unas “casas de pique” en el Chocó, en donde desaparecían a las personas desmembrándolas y eliminando sus cuerpos. Con ocasión de estas denuncias me conocieron en la capital. Pero de muchas de esas investigaciones se enteraron en esos grupos ilegales. Quedé expuesta y en peligro. Y

el miedo se acentuó cuando las mismas autoridades judiciales me dijeron en voz baja: “No se meta en esos problemas”. Ahí uno se da cuenta que no hay una presencia real del Estado. Desde 2007, cuando asumí la dirección de Afromupaz en Chocó, y durante tres años fui amenazada.

En 2010 la cosa se complicó. Recuerdo que hice unas denuncias muy fuertes porque dos jovencitas de colegio fueron violadas y las niñas lograron identificar a los agresores. Eran paramilitares. Ellas iban camino a un balneario, pero estos tipos, que manejaban una rapimoto, un transporte informal muy utilizado allá, se las llevaron. Yo me vine con las niñas y los papás a Bogotá e hicimos las denuncias porque en Chocó no pasaba nada. Ahí empezó mi Viacrucis. Después vinieron por mí.

Por esa época conocí a una mujer de Antioquia que se me presentó como Magola. Ella llegó a la organización en Quibdó. Como todas, dijo que era golpeada por su marido. La verdad era que hacía parte de los paramilitares y me la pusieron a que me hiciera inteligencia. En principio la historia de Magola me conmovió y me volví su amiga. Al final me la llevé a la casa porque me dijo que estaba huyéndole al marido. Acepté darle posada hasta que pudiera organizarse. Vivió seis meses con nosotros. Ella siempre dijo que sus hijos vivían en Medellín y que ella se iba a regresar. Duramos seis meses así. De esta manera conoció hasta lo más íntimo de mi hogar, cómo vivían mis hijos, dónde estudiaban, dónde trabajaba mi esposo. Todo. También, ella se dio cuenta de todo lo que hacía, las denuncias que ponía. Incluso entró a mi correo electrónico para robarse toda la información.

Hasta que llegó ese día. “El hecho victimizante”. Así le digo. Fue el 23 de julio de 2011. Ese día le dije a Magola que fuéramos a la organización y ella me dijo que no, que se iba a quedar en casa. En la tarde ella fue a la sede y me dijo: “Julisa, estuve gestionando unos juguetes y un amigo de Medellín los va a mandar”. Pensé: “Qué buena suerte”. Sentí que era mi aliada. Al rato ella me dijo que fuéramos a buscar esos juguetes, pero que el lugar era lejos. Me tendió una celada. Yo ya me imaginaba repartiéndoles esos juguetes a tantos niños pobres en Quibdó, pero en el trayecto apareció una camioneta, nos subimos a ella porque me dijeron que eran sus amigos. Al rato, uno de esos tipos sacó un arma y gritó mientras me apuntaba: “Ah, es que esta vieja hijueputa de verdad pensaba que iba a haber muchos regalos”. Quedé

paralizada. Volteé a ver a Magola y vi que ella se reía. “Magola, ¿qué está pasando?”, le dije. Y ella me contestó: “Es que yo no me llamo Magola”. ¡Ayyyyy, Dios! Todo se me vino al piso. Inmediatamente pensé en mis cuatro hijos. “Me voy a morir y no me despedí de ellos”, me lamenté. Fue entonces cuando entendí que esa mujer se había infiltrado en mi casa para hacerme daño. Me pusieron una capucha en la cabeza y me llevaron a un lugar en pleno monte a dos horas y media de carretera. En el trayecto yo les pregunté: “¿Me van a matar?”. Ella respondió: “Algo peor”.

“¿Puede haber algo peor que la muerte?”, contesté con la voz temblorosa. Uno de los secuestradores resaltó: “Eso depende de usted”. El viaje fue una tortura. Yo estaba segura de que me iban a matar. Invoqué a todos mis ancestros, a santo Cebú, a San Francisco de Asís y a Jesucristo. Clamé por mi vida. De pronto el carro se detuvo. Me quitaron la capucha y vi que habíamos llegado a una casucha en la selva. Pensé: “¡Es una casa de pique!”. Les rogué: “Mátenme de un tiro, pero no me vayan a picar. Mis hijos no me van a reconocer”. Entramos a la casa y había dos hombres más. En total eran cinco. Uno de ellos me dio una cachetada terrible y dijo: “Ah, esta es la que anda de bocona. Esta es la que va a Bogotá a hacer denuncias”. Luego me escupió un montón de vulgaridades. Ahí estaba un hombre de gafas oscuras y sombrero al que le decían “comandante”. Él me increpó: “¿Usted por qué se fue a hacer esas denuncias?, ¿qué le importan esas dos chinas?” “¿Cuáles chinas?”, le dije. Yo no me acordaba de ellas, las niñas violadas. En esos momentos todo se te borra. Y, ¡zaz!, sentí otro porrazo en la cara. Comencé a sangrar. El comandante insistió: “A ustedes lo que hay que hacer es cogerlas, violarlas y matarlas”. Y añadió: “¿Vino usted por un regalo? Pues aquí está”. Dijo eso mientras sacaban a mi hija Camila de catorce años. Ella estaba llorando. La habían secuestrado también. Casi me muero ahí.

Miré a Magola y le dije: “Te llevé a mi casa y te robaste lo más sagrado”. Me arrodillé y les dije: “Háganme lo que quieran, pero a ella no la toquen. Ella no tiene la culpa de querer yo cambiar el mundo”. Mi niña lloraba y me decía: “Mami, ellos me dicen que me van a hacer cosas horribles”. Las dos llorábamos, pero no nos dejaron abrazarnos. Ella en un extremo de la habitación y yo en el otro. Y yo solo pensaba: “Van a violarla delante de mí”. No. No. No. “Prefiero que me maten ya”, les imploré. Los paramilitares le pregun-

taron la edad a la niña. Como era menudita les grité que tenía nueve años. No nos creyeron al principio. Incluso uno de ellos le rompió la blusa. Pero la vieron muy delgada, muy niña. Y la sacaron a otra habitación. Pensé que todo había acabado para ella, que no le iban a hacer nada. Entonces empezaron conmigo. Un calvario que duró cinco días. Todos los días me abusaban, todos los días me golpeaban. Me cortaron los senos, me cortaron la nalga, me cortaron los brazos. A lo lejos yo oía los gritos de mi hija Camila.

Hasta el tercer día estuve consciente. Los otros días ya no. Me desprendí de lo que pasaba para no sentir los dolores. En un momento me golpearon tanto que la piel se me durmió. Me desfiguraron el rostro. Fui violada por todos lados, y así mi cuerpo se hubiera anestesiado, mi alma seguía penando por los gritos de mi hija. En un momento perdí el conocimiento y cuando desperté estaba en el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó. Fue como a los cinco días de que me encontrara el Ejército. Los soldados me recogieron, aunque a primera vista me dieron por muerta. Al fin consciente, pregunté enloquecida por Camila. Nadie me daba razón de ella. Imaginé, aterrada, que la habían matado por mi culpa. Otra de mis hijas, Eliana, estaba acompañándome en el hospital y me dio la buena noticia: Camila estaba intacta. Imagínese que uno de los paramilitares que estaban ahí era hermano de un muchacho al que yo había evitado que se lo llevaran para la guerra. Él salvó a mi hija. Le dijo al comandante que me conocía y que esa *pelaíta* era una niña. Así la salvó. Pero le quedaron secuelas. Duró seis meses como autista. No hablaba”.

La reconocida actriz y directora del centro cultural y artístico Casa Ensamble Alejandra Borrero fue la gestora de *Victus*. Un oficial de la Policía le dio la idea. La buscó y le dijo entonces que le ayudara a crear una obra de teatro que narrara las esquirlas de la guerra. Y que reivindicara la memoria. Según el uniformado, en Rusia vio cómo el arte logró ejercicios de reconciliación entre militares y policías víctimas de la violencia. A Borrero le encantó la idea, pero, antes, le lanzó una pregunta provocadora: ¿Cómo hablar de reconciliación con un solo actor del conflicto? Ella sabía que, sin escuchar todas las orillas y protagonistas de esta guerra infernal de casi sesenta años, la propuesta artística resultaría estéril. El diálogo entre excom-

batientes y víctimas le dio forma a *Victus*. Julisa Mosquera llegó al proyecto en 2015 luego de pasar el proceso de selección, recomendada por Afromupaz.

Pero, en un país tan lacerado por los odios rumiados durante décadas, con heridas abiertas y llagas supurantes aún, ¿quiénes iban a narrar esa historia? Borrero se enamoró de la idea: reunir en un mismo escenario a cinco uniformados en retiro, cinco víctimas civiles, cinco exmiembros de los paramilitares y cinco exguerrilleros.

Ella y su equipo tocaron la puerta de la Agencia Colombiana para la Reintegración y de distintas ONG para ubicar a los protagonistas de este ejercicio de reconciliación. Luego hubo distintos filtros y hasta casting, no para saber si actuaban sino para saber que no lo hacían y que sus relatos, crudos, tristes, trémulos, podían enriquecer un libreto que dejara constancia sobre la horripilante guerra colombiana y su resiliencia ante las vicisitudes de la vida. Al final, esas veinte personas se juntaron un día en Casa Ensemble y, sin saber sus nombres, su pasado, o en qué orilla combatieron, comenzaron a transitar el angustiante camino de quitarse las caretas. Su primer ejercicio en las tablas fue escuchar sus corazones. En una fila el oído del uno se ponía sobre el pecho del otro, y así. Los latidos desarmaron sus prevenciones. Empezaron oyéndose el alma.

María Victoria Estrada, directora pedagógica de Casa Ensemble, lo explica con sencillez: desde lo simbólico el arte es capaz de transformar la realidad para darle otro sentido, sin buenos ni malos, sin rótulos perniciosos, sin mitos ni imaginarios. Comenzó a tejerse una nueva historia. El libreto fue escribiéndose solo y el teatro fue cosiendo poco a poco sus pasados azarosos. *Victus* nos enrostra la realidad del conflicto armado, pero al mismo tiempo nos esperanza en la construcción de la paz. Sus protagonistas son 17 colombianos –tres de los veinte escogidos decidieron irse–. Sus historias son reales y se van desgranando en las tablas como mazazos al espectador. En el teatro conjugan sus cargas, se liberan, se exorcizan y nos encaran. “Es memoria viva”, dice Alejandra Borrero.

La obra se ha presentado en diferentes ciudades del país. Ahora los antagonistas de la guerra protagonizan un ejercicio único de reconciliación. Tatiana Zabala, directora ejecutiva de Casa E Social, quien además gestiona

recursos para darle larga vida a este proyecto, no oculta su sonrisa guasónica cada vez que ve a esos 17 valientes martillar la memoria del conflicto sobre el escenario. Entre ellos, a Julisa.

“Después de ese episodio entré en una etapa de conflicto conmigo misma. Me sentía culpable. A mi hija Camila no la violaron. Pero la grabaron gritando. La golpearon y la grabaron. Y luego, a pesar de que la liberaron, ponían esa grabación todo el día y eso a mí me torturaba. Con esos gritos al fondo, a mí me violaban. Los paramilitares utilizaron unas prácticas terribles, ahí no había ideología, lo único era someterte como persona. Después de eso tuve dos intentos de suicidio porque caí en una depresión profunda. Imagínese, mi hija. Camila no hablaba; la otra niña, igual; mi hijo mayor amenazaba con buscar a esos tipos. Sentí que había provocado esa tragedia. Mi esposo me culpó de todo. Me reprochó que hubiera llevado a esa señora a la casa. Y decidió no seguir conmigo. Fue terrible. A los seis meses intenté quitarme la vida. Sí, yo me confié y llevé a esa señora a nuestra casa. Pero yo pensé que mi esposo me iba a ayudar a salir adelante. Nada de eso. Es más, cuando se enteró de que había sido abusada, se fue de la habitación. Me dijo que no podía con eso y que todos en Quibdó se iban a enterar porque ese es pueblo pequeño, allí viven un poco más de cien mil habitantes.

Denuncié lo que me pasó. Primero en la Fiscalía y luego en una emisora. Hablé con mi familia y les dije que iba a contarle todo porque además siguieron las amenazas. Al otro día de hablar en la radio me tocó salir de Chocó. Fueron a buscarme a la casa y me dejaron una razón con la señora que me ayudaba: tenía 24 horas para irme. Llegué a Manizales y después a Bogotá. Aquí me propusieron en la arquidiócesis que saliera del país, pero que me iba a ir sin mis cuatro hijos. Muchos me ayudaron, en la Procuraduría, en la Alta Consejería Distrital para las Víctimas. Así estuve un año, sola, porque los chicos estaban en el colegio y yo sin estabilidad en mi nueva ciudad. Ellos se quedaron en Quibdó hasta que tomaron la decisión de venirse hace tres años. Ha sido duro, pero hemos salido adelante. Me puse a trabajar. Comencé atendiendo víctimas de abuso sexual en la Alta Consejería, una entidad adscrita a la Alcaldía de Bogotá que tiene como propósito la coordinación institucional para la atención y reparación de las víctimas por

diferentes violencias. Aquí en, en esta ciudad, Camila entró a la universidad a estudiar derecho, Elianita terminó su carrera de ingeniería ambiental, Jonathan hoy es técnico en publicidad. El menor se graduó de bachillerato y va a entrar a estudiar Finanzas y comercio internacional. Cada uno en su rama.

El Estado, a través del proceso administrativo de reparación de la Unidad Nacional de Víctimas, reconoció que fui víctima de tortura, secuestro, violencia sexual y desplazamiento. A Camila también le reconocieron el hecho victimizante de secuestro. En Bogotá ella empezó a soltarse. Y logró superar eso tan terrible que nos pasó. La catarsis que hicimos en Casa Ensamble con la obra nos ayudó mucho. Recuerdo que un día todos los Victus comenzamos a contarnos nuestras historias. Camila me acompañó a ese momento y lo recordamos juntas y fue como si hubiéramos transitado nuevamente ese instante horrible. Alejandra Borrero, la directora de Casa E y del proyecto Victus, no pudo contener el llanto. Mis compañeros de la obra tampoco. Las mismas niñas que hicieron parte de los paramilitares y ahora eran Victus y hacían teatro conmigo me abrazaron y me pidieron perdón. Tuve mucha rabia al principio porque veía en ellas a Magola. Pero hoy todas somos parceras. El arte nos curó. Primero, por supuesto, nos obligamos a escucharnos. A ponernos en la piel del otro. Del guerrillero, del policía, de la madre que perdió a su hijo, del paramilitar, del asesino, del que perdió una pierna. Todos perdimos en la guerra.

Esos relatos eran tan parecidos a los míos... Cristina tuvo diez abortos allá. A la chiquita, Alexandra, que ya iba a parir, le sacaron el niño a la fuerza. Ellas también fueron víctimas como yo. La rabia se fue yendo. Mira, todas las mujeres que están en Victus son ahora como hijas mías. Cuando una de ellas contó que se la llevaron a la guerra a los nueve años, pensé que esa mujer habría podido ser Camila. Nuestras vidas, desgarradas por la violencia, comenzaron a cruzarse en el teatro. A todas las chicas de la obra empecé a quererlas. Algunas de ellas comenzaron a decirme “mami”. Esas niñas me enamoraron. Y también los muchachos. Anderson, por ejemplo, narró cómo su hermano lo entregó a la guerrilla del ELN. Había demasiado dolor en nosotros. Muchas cicatrices. El teatro nos cosió por dentro.

El proceso de sanación, sin embargo, ha sido terriblemente duro. Durante mucho tiempo solo lloré. Tuvieron que medicarme para poder dor-

mir. Los recuerdos eran demasiado violentos y persistentes. Pero en Casa E aprendí a soltar las lágrimas. Alejandra Borrero, con mucho amor, me decía: “Aquí nadie te va a hacer daño”. Así me fui soltando. Y la obra me ayudó mucho. Incluso en mi monólogo en la obra cuento hasta lo de mi esposo. Allí digo: “Él se separó de mí porque se sintió humillado”. La poética de las tablas lo dejó salir todo. Pero Victus no es una cosa lastimera. Al revés, significa “víctimas victoriosas”. Después de la obra muchos espectadores quedan con una sonrisa en el alma por la admiración que les provocamos. Nada de lástima.

¿Por qué contar nuestras historias? Muchos de nosotros padecemos en silencio. Pero la reconciliación necesita el relato. En este posconflicto tenemos que contarles a Colombia y al mundo que aquí pasaron cosas aterradoras, cosas que no pueden repetirse. Si esas historias no se cuentan, si no aprendemos de lo que pasó, la violencia encontrará el modo de reciclarse. Aquí las mujeres hemos sido botín de guerra. Dentro y fuera del conflicto hemos puesto las cuotas más altas de dolor. Nuestros cuerpos son testigos de ello. ¿Y por qué tenemos que quedarnos calladas? El mundo tiene que darse cuenta de lo aterradora que ha sido la violencia para nosotras. El daño sufrido nunca tendrá cómo reparármelo el Estado. Ahí están mis años de insomnio y de tristeza. Ahí está mi cuerpo lacerado. Si no fuera tan espiritual, ya hubiera acabado con mi vida, hija. Tuve dos intentos de suicidio. ¿Te conté? Me sentía sucia, me sentía fea, sentía que no valía y me culpaba todo el tiempo. Me hicieron odiar lo que yo tanto quiero: la vida”.

Como Julisa, cada día 400 mujeres en Colombia son víctimas de violencia sexual. En total se identificaron 875.437 casos de mujeres que sufrieron este flagelo entre 2010 y 2015, según la Encuesta de Prevalencia de Violencia Sexual contra las Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado Colombiano, publicada en 2017. La Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía presentó un informe en 2016 sobre el Bloque Oriental de las Farc con una decena de testimonios de mujeres excombatientes quienes explicaron que las prácticas de violencia sexual eran habituales y el control sobre su cuerpo, incluso para abortar, era completo.

La violencia sexual es un arma de guerra empleada no solo en el conflicto colombiano sino en diferentes partes del mundo. Y en nuestro país ha sido una práctica sistemática de todos los grupos armados. De esta manera lo expone la organización internacional Oxfam en un informe publicado en 2009: “El objetivo es sembrar el terror en las comunidades usando a las mujeres para conseguir sus fines militares. Pero además se utiliza como forma de tortura y de castigo, como control sobre la población, como medio para imponer férreos códigos de conducta, como instrumento de venganza y de presión o como herramienta para lesionar y aterrorizar al enemigo”. Julisa es testigo viviente de ello. Pero ella no fue la única Victus que padeció este tipo de violencias.

De las 17 personas integrantes de la obra de teatro, 10 son excombatientes de grupos ilegales, quienes en su mayoría ingresaron siendo personas menores de edad. Una de ellas fue reclutada a los nueve años. La guerra fue su opción de vida. Otros cinco Victus fueron víctimas del conflicto por razones de exilio, desplazamiento y desaparición forzosa; mujeres del campo y de la ciudad, afrodescendientes, indígenas y mestizas. Los militares y policías que terminaron involucrándose en este proyecto también tienen memorias tristes y, uno de ellos, una amputación en su pierna izquierda.

“Victus es volver a mis miedos a través del arte para canalizar el sentimiento”. Son las palabras de Raúl Estupiñán, quien trabajó por catorce años como enfermero de la Policía. Perdió su pierna izquierda el 12 de julio de 2014 al pisar una mina antipersonal cuando trataba de salvar a alguien, no importa de cuál bando. Por muchos años se dedicó a cuidar y aconsejar a aquellos que quedaban lesionados por la guerra. Desde entonces, su conflicto es interno, consigo mismo, para apropiarse esas palabras de aliento que transmitía a otros. El reto ahora consiste en resignificar su vida. Para él, Victus no se centra en la guerra sino en la humanidad. Porque, tras el zumbido de los fusiles y las balas, disparando o huyendo, el “enemigo” era siempre otro ser humano. Por eso le halaga e impresiona que cada vez que termina la obra, oye los aplausos rabiosos y conmovidos de los espectadores y con esa imagen se va a la cama. “Es que Victus es de víctimas victoriosas, no un espacio para dar lástima”, sentencia.

A Ferley Ruiz, exintegrante del paramilitarismo, también le pone el pellejo arrojado la reacción de la gente a la obra. Hoy trabaja capacitando en

construcción de paz a funcionarios de diferentes entidades nacionales y regionales a través del Departamento de la Función Pública. Dice que, sin duda, el arte y el teatro son instrumentos poderosos. Él pasó de un largo tiempo en las montañas del país cargando un fusil, incluso desde su infancia, a vivir en Bogotá, conformar su familia y estudiar la Maestría en Construcción de Paz en la Universidad de los Andes. Giros en su vida que lo han llevado a convencerse de que Colombia tiene esperanza. Si le da la gana, claro. “No necesitamos pensar igual, hay es que aceptar la diferencia”, cuenta. Su otra consigna es el perdón. Él mismo se perdonó y perdonó a otros. Uno de los momentos más fuertes que vivió en el proceso de Victus fue el abrazo profundo de perdón a Julisa por el daño que sufrió. Daño que perpetraron otros paramilitares pero que él sentía como suyo. Hoy Ferley y Julisa siguen abrazándose con fervor.

“Mira: transformar el dolor en arte ha sido complejo. Una vez, durante un ensayo, hicimos un ejercicio horrible con los sonidos de la guerra. Ferley (otro compañero de Victus) dijo así nomás que su fusil era como su esposa. Claudia (también de Victus) le contestó: “¡Cómo dice eso!”. Milena (otra Victus) añadió: “Cuando uno prendía esa motosierra...”. A ella le tocó prenderla muchas veces. Fue traumático ese ejercicio, pero nos hizo entender las lógicas de la guerra. Ferley, por ejemplo, explicó que en el monte el arma era la vida y así había que cuidarla. Fue difícil entender eso porque para mí la única arma posible es la palabra. Pero esos otros ángulos, esos otros lenguajes, nos fueron acercando entre nosotros. El teatro ha sido un proceso constante de aprender y desaprender.

Es que la guerra es salvaje. Muchos de mis compañeros creyeron que podían cambiar el país por medio de las armas. Las desigualdades tan tremendas de Colombia han provocado tantos conflictos. Victus también nos ha llevado a esa reflexión. Y a otras muchas. Yo digo que el posconflicto será más duro que la guerra misma porque tendremos que aceptar al otro y ya no mirarlo como asesino. ¿Qué vamos a hacer para convivir con los hijos de esos exguerrilleros sin señalarlos, cómo vamos a desmontar eso? ¿Y las víctimas? ¿Cómo las incorporamos a ellas también?

Mira, hay mucho morbo en esto. Algunas personas que conocieron mi historia les preguntaban a mis hijos que cuántos tipos fueron, que pobrecita su mamá, y así. Y la gente ni siquiera es por hacerte daño, sino que les puede el morbo. A veces, incluso, me preguntaban por eso delante de mis hijas y ellas se largaban a llorar. Tenemos que aprender a manejar el rechazo. Incluso dentro de nuestra propia familia. Muchas cosas se rompen por dentro y empiezan a mandar ciertos silencios. Y hay unos lógicos resentimientos. Mi hijo mayor, Jonathan, decía que quería tener a esos tipos enfrente para matarlos. Poco a poco fue liberándose de ese odio al notar que yo tampoco odiaba ya. Pero su proceso fue difícil. Un día lo senté y le dije: “O sea, ¿tú vas a hacer lo mismo que me hicieron a mí? ¿Ganaron ellos porque destruyeron mi familia? Ellos pudieron herir mi cuerpo, pero mi espíritu sigue intacto, ese no lo tocaron”. He tratado de criar hijos sanos para la sociedad. A ellos les he dicho que crean en el amor y en el respeto. Camila ha entendido ese lenguaje y esa lección. Acabo de cumplir 50 años. Me abusaron a los 43. El pasado ya fue. No lo podemos cambiar, pero sí el futuro.

Yo creo mucho en Alejandra Borrero, en su apuesta, en su arte, porque detesto que me revictimicen. No permitiré que nadie lo haga. Estoy en Victus porque sueño que podamos reconciliarnos en Colombia. Esos verdugos del ayer serán nuestros vecinos. ¿Los vamos a aceptar? Yo quiero poner mi granito de arena y me sueño regresando al Chocó para hablarle a la gente y decirles: “Ya está, cambiemos, el Chocó no se merece tanto dolor”. Y quiero que mis hijos no hablen jamás desde la rabia, quiero que den ejemplo. En Victus he hallado unos seres increíbles con una inmensa capacidad de perdonar y que quieren transformar. Somos diecisiete almas transformando el dolor en arte. El camino de la liberación fue el amor.

El amor hizo que me encontrara de nuevo con el mundo, pero sobretodo conmigo misma. Mija, como te dije, cuando me ocurrió el acontecimiento, empecé a negar mi cuerpo, a odiarlo por lo que había pasado. Empecé a vestirme tapada, ¡y Chocó que es un hervidero! Blusas cerradas y faldas largas. Una vez le dije al siquiatra que sentía que me habían violado porque a mí me gustaba la moda, porque me gustaba mi cuerpo. Él me hizo entender que no fui culpable de nada. Sin embargo, seguía manteniendo ese luto por dentro. En Casa Ensamble, muy al principio de esta maravillosa travesía llamada

Victus, cuando hacíamos ejercicios no me quitaba la chaqueta. Como al mes, hicimos un taller y me vi al espejo y recordé lo bonita que soy, y me quité la chaqueta. Me liberé. Durante años odié los espejos, era incapaz de verme. Ahora tengo uno grande en la sala de mi casa. Pero, para volver a verme reflejada tuve que empezar un proceso de aceptación de mi cuerpo. Volví a quererme. Con mis cicatrices incluidas.

Eso quisiera para Colombia. Que aprendiera a quererse con sus cicatrices. Mija, si diecisiete personas tan diversas y tan antagónicas como nosotras pudieron transformarse, todos pueden hacerlo. Ahora somos una familia. Y en esta familia hay personas que antes pertenecieron al grupo que casi me arruina la vida. Hoy yo las amo. Este país tiene que aprender a reconocerse en el otro. Más allá de la ideología o del color de la piel. Yo sueño con ver un país diferente. A mí me aterra cuando Elianita, mi hija mayor, que tiene 25 años, me dice que no quiere tener hijos porque le horroriza esta Nación. Entonces yo le digo: “¿Y la lucha que está dando su mamá para qué es? Tenemos que vencer esos imaginarios de dolor. Sin embargo, para lograrlo hay que superar esta desigualdad tan absurda. Y tanta impunidad. Mira que de abuso sexual casi no se hablaba antes.

Cuando el presidente Juan Manuel Santos firmó la paz en Cartagena en el 2016, nosotros hicimos un performance en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Estábamos en el mismo escenario con la Filarmónica de Bogotá. ¿Qué es esto?, pensé. Nosotros todos importantes, en un camerino maquillándonos. Luego, Alejandra Borrero nos dijo que íbamos a ver los Nobel de Paz en un evento en Bogotá. Fui encargada de decirles unas palabras. La noche anterior me senté a escribir, quería recoger lo que pensábamos en Victus, pero también quise visibilizar a mi gente del Pacífico. Al fin, frente a ellos, dije: “Nosotros somos la diversidad, somos el pasado y somos el presente, fuimos el ayer y el hoy”.

Cada que salgo a escena hago un ritual, invoco a mis dioses, les pido autorización para las tablas. Y a mi hija Camila le digo mentalmente: “Vamos a estar juntas en el escenario”. El primer día que vio Victus, vino con el novio. Y él no sabía lo que nos había pasado. Cuando terminó la obra, el muchacho me dijo: “Doña Julisa, yo siempre le voy a respetar a su hija”. Es increíble cómo ha impactado Victus a la gente. Han venido amigos del

Chocó, algunos, incluso, amigos de mi esposo Iván. Sí, el que me dejó. Él un día me llamó y me dijo: “Julisa, yo no la dejé por eso, era que usted nos iba a hacer matar”. Yo le respondí: “Las explicaciones sobran”. En realidad, ya no me importa. Hoy tengo una misión mayor. La reconciliación. Ahora estoy para servir.

El año pasado fui elegida como consejera distrital para las comunidades negras en mi localidad en Bogotá. Estoy construyendo mi sueño, pero quiero volver a Quibdó. Quiero ayudar a mi tierra. Transformarla. Para algo ha de servir mi historia. Mire, hija, nosotros presentamos la obra en Caquetá a varios excombatientes. Al final se me acercó un hombre y me zampó tretemando abrazo. Quedé atónita. Él lloraba y me pedía perdón. Supe después que hizo parte del grupo armado que me hizo daño. No pude decirle ni mú. Hoy quisiera que sepa que ya lo perdoné”.



18 colombianos entre exparamilitares, exguerrilleros, militares, policías y víctimas de la guerra se reconciliaron en las tablas. Foto: Cortesía de Casa Ensemble.

Referencias

ARCHIVOS Y COLECCIONES DE MANUSCRITOS

Archivo privado de Julisa Mosquera.

PERIÓDICOS Y REVISTAS

El Espectador, (2016, 11 de noviembre), “Crímenes sexuales del Bloque Oriental de las Farc”, en <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/crimenes-sexuales-del-bloque-oriental-de-farc-articulo-664930>.

PUBLICACIONES OFICIALES

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, (2016), *Informe: Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia 2016*, en <http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2016>.

Humanidad Vigente, (2017), *Encuesta de Prevalencia de Violencia Sexual contra las Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado Colombiano*, Bogotá, 2017.

Oxfam Internacional, (2009), *Informe: La violencia sexual en Colombia, un arma de guerra*, en http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2737.pdf.

ENTREVISTAS

Entrevista realizada a Julisa Mosquera, líder chochoana de Afromupaz, actriz de la obra *Victus de Casa Ensamble*, llevada a cabo en Bogotá, en agosto de 2017.

Entrevista realizada a Raúl Estupiñán, enfermero de la Policía, retirado, actor de la obra *Victus de Casa Ensamble*, llevada a cabo en Bogotá, en agosto de 2017.

Entrevista realizada a Ferley Ruiz, exintegrante de un grupo paramilitar, actor de la obra *Victus de Casa Ensamble*, llevada a cabo en Bogotá, en agosto de 2017.

Entrevista realizada a María Victoria Estrada, directora pedagógica de Casa Ensamble, llevada a cabo en Bogotá, en agosto de 2017.

Entrevista realizada a Tatiana Zabala, directora ejecutiva de Casa E Social y productora ejecutiva de Victus, llevada a cabo en Bogotá, en agosto de 2017.

Entrevista realizada a Alejandra Borrero, actriz y directora del centro cultural y artístico Casa Ensamble (testimonio al cierre de la obra), llevada a cabo en Bogotá, en agosto de 2017.



En las largas jornadas que Jeison debía cumplir dentro de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (patrullando carreteras, cobrando extorsiones, prestando guardia en los campamentos) lo que más extrañaba de su vida de niño eran las tardes de fútbol con los amigos.

“Es más fácil hablar de los tristes”

Por Juliana Castellanos

Narrar momentos felices de la infancia no es fácil, en un país donde los datos del Icbf indican que, a lo largo de 18 años, han sido atendidas 6.310 personas desvinculadas de grupos armados ilegales que fueron reclutadas siendo niños o niñas. Por eso “es más fácil hablar de los tristes”, señalan las personas desvinculadas.

Los diarios personales se abren al ritmo vertiginoso que impone el timbre escolar a las siete de la mañana. Organizados en círculo, catorce alumnos, con edades entre los 13 y los 19 años, inician la lectura de lo vivido el día anterior: “la-la pro-fe dijo, la-la pro-fe cantó...”. No ahondan en lo emocional. Les cuesta describir lo extraña que resulta su vida en una ciudad desconocida, con una familia que no es la suya, bajo una condición que no dimensionan: desvinculados del conflicto armado.

Estos catorce estudiantes llegaron entre 2016 y 2017 desde lejanas veredas de Antioquia, Chocó, Caquetá, Nariño y Guaviare, a una ciudad intermedia ubicada en la cordillera central, en el occidente del país, donde los conocimos en medio de su rutina escolar, en un antiguo colegio oficial. Su

salida de esos territorios, explican algunos, fue una decisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), como una medida de protección especial, para iniciar el programa de atención especializada para el restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito.

Asistir a este colegio, en esta ciudad fría y montañosa, es parte del retorno a lo que llaman “la vida civil”. Lejos de sus lugares de origen, emergen los recuerdos de los anchos ríos que conocieron en sus marchas de guerra. Los hombres añoran el camuflado porque los hace sentir poderosos. Las mujeres, en cambio, prefieren el uniforme escolar, a pesar de los remiendos, y de lo holgado o estrecho que les queda, porque se los han regalado estudiantes de otros grados, tras una campaña que hace la maestra cuando llega un nuevo integrante a ese salón que todos reconocen como El Aula del Sol.

Hace once años existe este proyecto escolar, en un lugar apartado de la institución en el que apenas se percibe la algarabía de los 1.887 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. El aula hace parte del programa para personas desvinculadas de grupos armados organizados, que abrió el Icbf en 1999. Desde ese año, y hasta junio de 2017, el programa ha atendido a 6.310 personas menores de edad. Según las cifras, el 38 por ciento salió del grupo armado a los 17 años, el 28 por ciento a los 16, el 16 por ciento a los 15, el 9 por ciento a los 14, y otro 9 por ciento lo hizo entre los 11 y los 13 años.

Aunque esa compleja realidad atravesó todo el siglo XX, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los conflictos armados escandalizó al mundo apenas en 1996, cuando Graca Machel, defensora internacional de la infancia y profesora de Mozambique, entregó el estudio *Repercusiones de los conflictos armados sobre los niños*, que le había encomendado Naciones Unidas.

La lectura de los diarios ha terminado en aquel salón de paredes blancas adornadas con figuras de globos de fiesta -con catorce fechas de cumpleaños-, dos carteleras con reglas de convivencia, y tres textos de cuentos clásicos: Hansel y Gretel, Caperucita Roja y Blanca Nieves y los siete enanitos. Resulta extraño verlos allí, en un ambiente infantil, como si la ornamentación fuera un intento por entregarles un fragmento de lo que la guerra les arrebató.

Un silencio conventual se apodera del espacio tras la indicación de la siguiente actividad: narrar, a través de dibujos o textos, momentos felices de la infancia. El sonido retorna entre voces de protesta: "es más fácil hablar de los tristes". Los trabajos se convierten en el pasaporte para circular por los pasadizos y recovecos de las memorias de cuatro de ellos. Estos son sus recuerdos.

Soldado de plomo

Fredy miró el reloj. Eran las 2:30 de la madrugada. Había pasado la noche dando vueltas en la hamaca, al ritmo de la lluvia que venía furiosa contra las ventanas de la casa, en la que se quedó junto con trece compañeros y un comandante. Se levantó con cautela. Cuando descolgaba la hamaca escuchó la voz del comandante:

—¿Usted por qué está soltando eso?

—Voy a prestar guardia.

El sonido de la alarma del reloj anunció las tres de la madrugada. Fredy dio un paso cuando una tormenta de balas llegó desde afuera. Se tiró al piso, sacó su AK-47 y comenzó a disparar. "¡Nos cayeron!" —gritó—. "Comandante, ¿qué hacemos?". No obtuvo respuesta. Lo buscó con la mirada, sin parar de disparar. Lo encontró muerto.

A las 5:30 de la mañana las municiones escaseaban. Se arrastró hasta la puerta, lanzó una granada a los hombres del Ejército que logró divisar. Corrió, saltó una alambrada de ochenta centímetros, rodó. Mientras se levantaba sintió el calor de una bala entrando en su mano izquierda. Cuando estuvo erguido descubrió a hombres del Ejército rodeándolo. Dejó caer su fusil.

"Me preguntaron por el mando, yo respondí 'cuál mando, de qué hablan'. Me preguntaron que cuántos había, yo respondí que cincuenta. Les dije: 'tienen que ponerse pilosos que los otros están por ahí'. Luego cogieron a una de las compañeras, ella sí soltó que éramos quince, y el militar me gritó ¡mentiroso!", concluye con una risotada.

“Eso fue en abril de 2016, en una vereda de Cáceres, Antioquia. De ahí me llevaron al hospital de Caucasia. Llegaron la Policía y Bienestar Familiar, porque yo tenía 16 años. Y llegaron otros de civil, llevaban un computador que tenía fotos de nosotros. Entonces me preguntaban ‘¿quién es ese?’ Yo les decía que no sabía. Luego uno negro, grandote, me dijo, ‘y este quién es. Mírelo bien. No ve que es usted’”, vuelve la risotada que desvela los dientes grandes y blancos enmarcados por los labios gruesos.

La risa se va extinguendo mientras concluye: “pero vea, me cambió la suerte. Ese día se me tiraron la vida”.

Fredy mide 1 metro con 68 centímetros, lleva el cabello al estilo militar, las uñas cortas, la ropa limpia. Su piel es negra y señala a su padre como el responsable: “¿mi papá? Sé que es un negro ahí. Pero tampoco quiero distinguirlo, porque dañó la pinta. No ve que de mi casa soy el único negro”. De su mamá habla poco, evade el asunto: “ella es muy brava conmigo. Yo la insultaba. Ella me decía ‘no se vaya por allá’, y yo más rápido me iba. Cosas que hace uno de niño”.

Cuando tenía cinco años recorría las calles de su pueblo, Valdivia, al norte de Antioquia, buscando amigos para jugar con las canicas que cargaba en los bolsillos. También evoca, con limitadas descripciones, las tardes en las que jugaba con Goku, su muñeco favorito, un personaje del anime Dragon Ball.

El primer amor lo sorprendió a los diez años, cuando ya se sentía todo un hombre porque “desde los ocho años trabajaba voleando machete, raspando coca, sembrando yuca y plátano. Yo estaba en mi casa y un amigo llegó con ella. No eran novios, pero salían. Me pareció hermosa. Me enamoré. Tenía unos ojos azulitos y era peli mona. Un cierto día fui a visitarla”.

—¿Está solita?

—Sí.

—Entonces estamos solitos.

—Si quiere dentre.

–Con permiso yo me siento.

“Empecé a decirle cosas bonitas. Luego en mi casa le hice un poema. Se lo mandé. Un sábado ella me entregó una cartica toda rarita”. Mueve los ojos con picardía y lanza una risotada: “la carta me parecía maluquita porque yo no sabía leer. Pero yo esperaba a que mi hermano llegara de trabajar, y él me ayudaba. Él fue el que me colaboró con el poema. Y esa noche, con pena, le pedí que fuera mi novia. Dijo que sí, que yo le parecía bonito”.

El romance duró once meses, hasta que, por cuenta de su infidelidad, la niña le terminó. Con el desamor a cuestas partió a trabajar a la finca de un tío que vivía en la zona rural de Valdivia. Se levantaba cuando el reloj marcaba las cinco de la mañana. Ordeñaba las vacas, preparaba la melaza para los caballos. En las tardes guardaba los terneros en el corral, y ayudaba en la atención de los clientes que iban por leche y queso.

“Un día llegaron los hombres del ELN a comprar queso, yo los distinguía porque pasaban mucho. Al otro día se quedaron en la finca. Yo ya sabía qué hacían porque tengo primos con ellos; también con las Farc y con los paracos. Entonces le pedí incorporación a un mando”.

–¿Cuántos años tiene?

–Tengo 12.

–Mijo: le voy a dar quince días para que lo piense.

–Ya lo pensé.

“No quería jornalearle a nadie. Salimos a las seis de la tarde para una finca arriba de donde mi tío. Cuando llegué vi un batallón grandísimo y me asusté. Al día siguiente me enseñaron a manejar un fusil. Estuve con el grupo cuatro años y tres meses. Yo era un tropero, de los que están en combate. Mi sueño era ser un comandante o morir allá”.

El día de su captura salió del hospital de Caucasia con una funcionaria del Icbf hacia Rionegro, Antioquia, en donde permaneció cinco días en un hogar de paso. “Ahí lo tienen a uno mientras piensan pa’ dónde lo van a echar. Un día llegó una sicóloga de Bienestar Familiar y con ella me fui al

aeropuerto. Yo feliz en ese avión”, explica Fredy. En el viaje le hablaron de las reglas de la familia tutora que lo acogería: debía ayudar en las labores domésticas y pedir permiso para salir.

Cuatro meses llevaba compartiendo con la familia cuando le anunciaron un nuevo traslado. Hoy, está a punto de cumplir un año en ese nuevo hogar. Dice que se siente tranquilo porque vive con José, un indígena cho-coano, que es también compañero del aula. “Los fines de semana salimos a caminar con él, con la mamá tutora, la hermana tutora y las sobrinas”.

En el pequeño salón Fredy busca, entre los cajones de un viejo mueble, el primer diario que hizo. Lo encuentra. Muestra con orgullo los fusiles que dibujaba, acompañados de letras grandes, mal escritas, en las que se lee: ELN. Mientras tanto, la maestra explica que la clase de educación física fue cancelada. Fredy replica: “cancelado el combate compañeros”.

Desamor y traición

Juan escuchó la orden de Jeison, su hermano menor, y la acató, como lo había aprendido en la organización. Caminó con prisa por el borde de la carretera, mientras le hacía señas a un camión para que se detuviera. El vehículo frenó. Juan abrió la puerta y se sentó al lado del conductor. Le ordenó pagar el impuesto si quería seguir el trayecto.

Mientras hablaba escuchó gritos: “¡quieto, quieto!”. Descubrió varios fusiles que le apuntaban. Abrió la puerta con ímpetu, intentó correr, pero unos hombres vestidos de civil lo rodearon. Se identificaron como Ejército Nacional de Colombia. En tanto, Jeison huía sin que nadie se percatara.

El traje de Juan delataba que pertenecía a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), una organización que surgió del rearme de hombres que hicieron parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo que desmovilizó cerca de 35 mil combatientes, entre 2003 y 2006, bajo un polémico acuerdo con el entonces presidente Álvaro Uribe.

Juan entregó con tristeza el arma y el chaleco a uno de los militares. Lo subieron a un carro, guardó silencio durante el trayecto, mientras descubría

que lo llevaban a una base del Ejército, cerca de Barbacoas, Nariño, el pueblo en el que había vivido entre los once y los trece años.

A Barbacoas, que ocupa el octavo lugar en la lista de territorios con mayor área de coca sembrada en el país, según el monitoreo que entre 2016 y 2017 realizó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, llegó en busca de su hermana mayor. Decidió quedarse. "La gente allá tiene finca con coca, y uno va a agarrar la hoja. Cuando el trabajo está bueno le pagan cinco mil pesos por arroba. Yo me agarraba hasta diez arrobas", relata Juan con emoción, señalando con las manos la altura de los bultos que él hacía.

Juan ya sabía trabajar. Había iniciado a los nueve años: esperaba el camión de cervezas que pasaba por la carretera destapada de una vereda de Barbacoas, para comprar una canastilla del licor que debía entregarle al tendero de la vereda. También trabajó llevando desayunos y almuerzos a los obreros de una mina de oro. Sonríe mientras relata que el dueño le pagaba 300 mil pesos cada quince días.

La risa termina cuando habla de su madre. Tenía ocho años cuando tirado en el suelo de su casa, mientras empujaba carritos de plástico con Jeison, escuchó que su hermana mayor lloraba por la noticia que llegaba del hospital: su mamá había muerto. "A la muerte no pude ir. Como de la casa al lugar en el que ella murió estaba larguito no nos llevaron. Yo no lo creía. Lloraba yo y lloraba Jeison. Creo que murió como de algo de los riñones".

Juan mide 1 metro con 70 centímetros, es negro, tiene el cabello ensortijado, la espalda ancha, los músculos pronunciados. Es tímido y le encanta bailar salsa choke. El mejor recuerdo de la niñez lo evoca construyendo armas de madera para jugar a los pistoleros con los vecinos. "Se forman dos grupos, ¿sí pillá? Uno se va para un lado, el otro pa' otro. Uno se va lejos del pueblo, pa' las montañas. Cuando se encuentran se dan plomo: 'pa-pa-pa-pa' ¡estás muerto!", dramatiza, desde la silla, cómo disparaba a los ocho años.

El amor llegó a los doce años, cuando conoció a Diana, en Barbacoas. Juan la describe bajita, gordita, muy linda. Una tarde la notó rara. La abuela de la novia interrumpió el extraño encuentro con una orden: debían ir a buscar un marrano que se había escapado. Los dos emprendieron la labor

por las calles del pueblo. Lo encontraron. Lo llevaron de vuelta a la marra-nera en donde esperaban dos cerdos más. Y ahí, en medio del trío porcino, Diana lo besó y le anunció que debían terminar.

“Un día salí y me encontré con mi hermano que estaba en el grupo [AGC]. A él se lo llevó una tía [para Barbacoas], y como por allá mantenían los paramilitares él se metió con ellos, pero yo no sabía. Estuvimos conversando. Ese día estaba por ahí la abuela de la novia mía y pensó que yo estaba en el grupo. Le dijo que no anduviera en la junta mía, porque yo era paramilitar. Le expliqué a Diana que eso no era así, pero le dije ‘listo, terminemos’. Toda la noche estuve despierto, muy triste. Y pensé: me voy a ir con ellos para que de verdad digan que soy del grupo”.

Cuando el sol despuntaba, Juan emprendió la búsqueda de los integrantes de las AGC, pero unos hombres del grupo le anunciaron que el comandante andaba en la selva. “Me devolví muy triste porque no me llevaron. Pero cuatro días después vi al escolta del duro”.

–A quién necesita.

–Al comandante.

–Para qué.

–Quiero trabajar con ustedes.

“El comandante era gordo, estaba muy armado, pero como mi hermano estaba en ese grupo no me dio miedo. Al otro día me entregaron el fusil. Me sentí como un dios poderoso”.

La primera noche que Juan pasó en la base del Ejército Nacional, tras la captura, les dijo a los soldados que fueran por su hermano. “Yo pensaba ‘Jeison se va a quedar solo en ese grupo’, ¿sí pillas? Yo quería estar con él”. Decidieron que al día siguiente irían por Jeison, en un operativo en el que Juan era clave.

Juan condujo a los soldados hasta una casa. Tocó con fuerza la puerta de madera. Empujó a quien atendió el llamado. Entró al cuarto en el que su hermano dormía. Gritó “¡quieto!”, mientras le apuntaba con el arma. Jeison

quiso escapar, pero cuando miró por la ventana descubrió a un grupo de hombres armados rodeando la casa, bajo el sol de las seis de la mañana.

"Me quitaron tres millones de pesos y el armamento. Les pedí que me dejaran la cobijita, que era un recuerdo. Aún la tengo. Me subieron a un helicóptero y me llevaron con Juan a una base [militar] en Tumaco", cuenta Jeison, con la voz pausada.

Y sube el tono, como pocas veces, para contar que camino a Tumaco le dijo a su hermano: "usted es una gonorrea, parce". Recuerda que ese día estaba que "lo estallaba". Y, como revelando un secreto, continúa: "yo llegué a ser comandante de escuadra. La meta mía era que me mataran allá". Al momento de la captura Juan tenía 17 años y Jeison 16. El primero estuvo cuatro años con las AGC, el segundo cinco.

Luego de permanecer una semana en Tumaco, los trasladaron a Cali, a un hogar de paso en el que debían aprender reglas de convivencia. Según Juan, el hogar tenía capacidad para 32 personas desvinculadas. Les entregaron ropa nueva, les dieron cupo en un colegio del que no recuerda el nombre.

Once meses después les hablaron de otra ciudad a la que irían a continuar sus estudios, y en la que una familia tutora del Icbf los esperaba. "Yo no venía para acá. Como ya era mayor [de edad] iba para otro programa, a estudiar carreras técnicas. Pero como no nos pueden separar a Jeison y a mí, porque somos hermanos, nos mandaron juntos", explica Juan.

Luego de un viaje de seis horas por tierra entraron a esta ciudad envuelta en neblina. Los esperaba una familia pequeña, en un barrio antiguo de casas grandes, con una habitación ordenada para los dos. "La mamá tutora es bien, nos gusta como nos trata", explica Juan, y tras una pausa, en busca de las palabras apropiadas, dice: "pero ya quiero volver. ¿Cómo le explico? Lo que pasa es que no estoy acostumbrado a depender de otros, ¿sí pilla? También porque en Barbacoas uno saca su columna [equipo de sonido] a la calle y se arma la rumba, por acá no".

Jeison no habla de volver a su pueblo, pero enfatiza, en voz baja, que extraña a su hermana mayor, a quien no ve desde los tiempos del grupo ar-

mado. “Me gustaría que ella pudiera venir a uno de los encuentros familiares que organiza Bienestar Familiar”.

Es mediodía, y en el Aula del Sol la monotonía se disuelve con los abrazos y despedidas de los siete alumnos que irán a un encuentro familiar con parientes que han emprendido travesías que superan los 400 kilómetros para llegar a un balneario, a las afueras de esta ciudad, donde se ha planeado la cita. Jeison y Juan no irán. La hermana mayor no puede, por sus hijos pequeños y por su situación económica, emprender un viaje de más de quince horas, desde Barbacoas.

Mientras los compañeros abandonan felices el salón, Juan se queda mirando por la ventana el desolado patio escolar en el que entrena fútbol. Jeison vuelve al silencio que lo caracteriza, solo habla lo necesario. Abre un cuaderno para hacer las divisiones que la maestra le ha dejado de tarea, mientras sueña con que un día será administrador de empresas. Ambos esperan la noticia del ingreso al programa de adultos, que lidera la nueva Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

Del amor y la guerra

Se acostaron a las ocho de la noche bajo un cambuche de tela verde. Alex abrazó a Margarita, le susurró:

–Estoy aburrido en el grupo.

–Pues váyase.

–Pero no quiero que usted se quede. Mire, esto primero es bueno, después no. Hay una prueba que hacen, y es matarse entre amigos. Uno se para frente a frente, y si uno no lo mata a él, él lo mata a uno.

A Margarita le asustó la explicación, pero decidió continuar con la rutina que había aprendido desde una noche de enero de 2017, cuando llegó, con quince personas más, a un campamento de las Farc, ubicado en una vereda del municipio de Miraflores, Guaviare, al sur de Colombia.

Ella, a sus 13 años, no entendía que había ingresado a un grupo disidente de las Farc, que se negó a participar del proceso de paz que la organización

emprendió desde 2012. Una estructura que nació, según información de inteligencia militar, con unos 120 integrantes y que ha seguido vinculando habitantes de estas veredas, sobre todo indígenas y personas menores de edad.

Esa noche de enero le cambiaron el nombre y la edad. "Usted se va a llamar Yamile y tiene 15 años", dijo el hombre que la recibió. Margarita aceptó, sin explicaciones, la orden con la que los comandantes pretenden eludir cargos por vincular a personas menores de 15 años a grupos armados, y por exponer a personas menores de 18 a hostigamientos; ambos considerados delitos de guerra y de lesa humanidad en Colombia, desde el año 2002, cuando el país ratificó su inclusión al Estatuto de Roma.

Nuevamente el abrazo nocturno. Alex insistió y Margarita aceptó. Se escaparían en quince días. No se imaginaba la vida sin él. Tenía claro que la que no tenía novio podía ser abusada sexualmente por los comandantes.

"Eran como las seis de la mañana y Alex me dijo 'hágase detrás del árbol y dispare al mismo tiempo que yo'. Cuando él disparó, yo también disparé. Yo escuché cuando uno gritó 'Yamile y Alex mataron al mando'. Corrimos como cinco metros, nos tiramos al río, nadamos por ahí quince minutos. Salimos y corrimos sin parar", relata con su voz infantil, mientras se quita con el dedo pulgar de la mano derecha, el esmalte rosado que cubre las uñas de la mano izquierda.

"Entramos a un negocio donde vendían minutos a celular. Alex llamó a la hermana que había tenido un novio soldado. Entonces nos subimos a una canoa hasta Miraflores. Nos recibieron unos soldados. Sentí miedo. Me llevaron a un batallón y de ahí a un hospital, me examinaron. Estaba en esas cuando mi mamá llegó. Me abrazó y se puso a llorar. Me reclamó por dejarla sola. Yo también lloré. Mi mamá quería que me quedara, pero los soldados le explicaron que no se podía porque el caso estaba complicado. Nos mandaron para San José del Guaviare, a un lugar de Bienestar Familiar". El Icbf trasladó a Margarita a esta ciudad del occidente del país, a más de 738 kilómetros de su hogar. Alex fue enviado a otro lugar, en el suroccidente de Colombia.

A Margarita le gusta hablar de Peluche, un perro criollo que adoptó su familia cuando ella tenía cuatro años, y de un gato que su hermana mayor le regaló en un cumpleaños y a quien algún vecino envenenó porque se robaba la comida de las casas.

Desde que tenía diez años acostumbraba, al salir de la escuela, buscar a su prima y con ella se iba al encuentro de Sebas, un niño de la misma edad con quien había emprendido la ruta del amor. Los tres regresaban a la casa de Margarita, sacaban un equipo y practicaban bachata. Al ritmo de Romeo Santos, las tardes calurosas pasaban felices. En ocasiones, todo terminaba cuando el padrastro de Margarita irrumpía, borracho y bravo, en la escena. Pero la fiesta volvía cuando su mamá llegaba de trabajar en las cocinas de las fincas de la región.

Margarita quería ser una artista, aprender a cantar. Entona un fragmento a ritmo de bachata: “si te invito una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito...”, se ríe mostrando los pequeños dientes que juegan con el rostro redondo, los ojos cafés y el cabello lacio a la altura de los hombros.

Tres años llevaba su romance infantil con Sebas, cuando otro hombre arribó en su vida. “Había un guerrillero que me parecía muy lindo, pasaba mucho por mi escuela. Él me mandaba cartas con una niña”. Era Alex, quien además de alabar la belleza de Margarita, la invitaba a ingresar al grupo armado.

Un domingo cuando ella caminaba por una calle de la vereda Alex la abordó. “Más tarde lo busco, mi mamá está ahí y me regaña”, dijo la niña. A las seis de la tarde, cuando el padrastro borracho abrió la puerta de la casa, ella salió en busca de ese joven rubio de 16 años que la traía cautivada un mes atrás. “Y ese día me fui con él. Yo no sé qué me pasó”. Hay un silencio, se concentra en sus uñas, y concluye: “yo estaba enojada con mi mamá porque no me daba todo lo que yo quería. Yo quería un celular”.

Hace cuatro meses llegó de San José del Guaviare. Se está adaptando al viaje de veinticinco minutos en un bus, entre la casa en la que habita con la familia tutora y el colegio. El olor del carro la marea porque antes, en su vereda, solo debía caminar para llegar a la escuela. No sabe nada de su mamá desde ese día que se despidieron en el hospital de Miraflores. “No podemos hablar. Pero en estos días voy a buscar al defensor para que me diga cómo va mi caso, y así poder buscarla”.

Sentada en una mesa del colegio, Margarita escribe una carta, con mala ortografía: “*Sebastian es el amor de mi vida, lo amo con toda mi alma y mi cora-*

zon lo yebo en lo mas profundo". Está segura de que no lo volverá a ver. "Yo no puedo ir a mi tierra. Sí quisiera, cuando mi estado cambie y ya no nos estén buscando".

Su temor a ser perseguida no disminuye con las noticias sobre el desarme de las Farc, porque el Frente Primero al que ella perteneció sigue creciendo. "Cuál paz. Un día antes de yo volarme entraron más personas".

Es una realidad llena de contrastes. El 16 de agosto de 2017 Paula Gaviria, la alta consejera para los derechos humanos, confirmó que en el marco del proceso de paz las Farc entregaron 124 personas menores de edad para que fueran vinculadas al programa estatal, a pesar de que esta guerrilla ha sido muy crítica con el funcionamiento de los hogares tutores y ha reclamado para estos jóvenes oportunidades reales de reintegración a sus familias.

La funcionaria reconoció que quedaban otros -nunca se supo cuántos- que se resistían a abandonar la organización. Muchos de ellos, según explicaron los miembros del secretariado de las Farc, ya habían conformado familia en las filas, y no querían ser separados de sus parejas e hijos para irse a un hogar tutor como lo exige el programa.

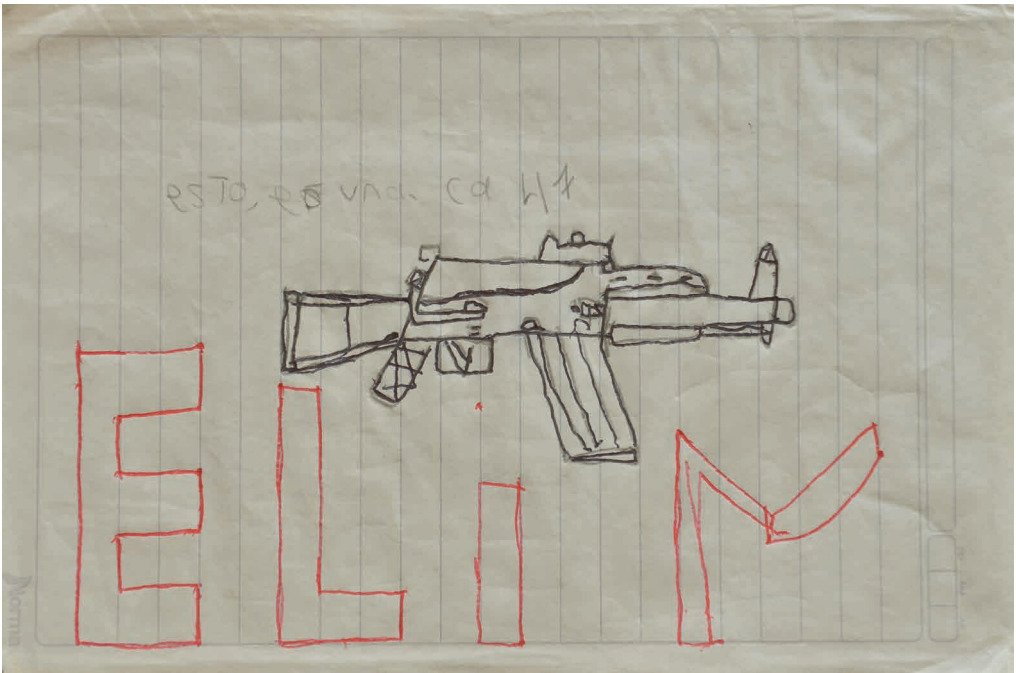
Según reporte del Icbf, las Farc ha sido históricamente el mayor reclutador de niñas, niños y adolescentes: el 60 por ciento de estas personas desvinculadas entre 1999 y 2017 venían de sus filas, mientras que el 17 por ciento procedía de las AUC, otro 17 por ciento del ELN, y un 4 por ciento de las bacrim. El porcentaje restante nunca entregó el nombre de la organización que los había reclutado.

Hilda Molano, desde Coalico, organización acompañante de la salida de personas menores de edad de las Farc en el marco del proceso de paz, explica que en los últimos cinco años el mayor reclutador de personas menores de edad han sido los grupos posdesmovilización, más conocidos como bacrim. Y aclara que esas organizaciones están conformadas por un gran número de niños y niñas que no fueron entregados por las AUC durante la desmovilización.

Es medio día, y en el Aula del Sol no hay reservas para cantar. La maestra saca la guitarra. Fredy entona, desafinado, su corrido favorito, *Tengo tres viejas*. Lo explica: "Blanca es la cocaína, María la marihuana, y la Negra es la

sangre que corre por las venas”, se escuchan risas. Jeison propone otra canción: *Color esperanza*. La cantan, ordenados en un círculo que es una sinopsis del pasado y el presente del país.

*Los nombres de los niños fueron cambiados por seguridad. Por la misma razón no se puede dar el nombre del lugar donde se hicieron estas entrevistas.



Fredy conserva en un antiguo cajón el primer diario que elaboró, tras la exigencia de la maestra. En ese momento solo sabía escribir su nombre y garabatear las letras del grupo armado del que había sido desvinculado.

Referencias

PUBLICACIONES OFICIALES

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (2017, 28 de julio), “Respuesta a derecho de petición número: 1760946603”, Bogotá.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, (2017), Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos, [En línea] consultado en https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/julio/CENSO_2017_WEB_baja.pdf

ENTREVISTAS

Entrevista realizada a Hilda Molano, coordinadora de la secretaría técnica de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), llevada a cabo en Bogotá el 2 agosto de 2017.

Entrevistas realizadas a Fredy, el 25, 26 y 27 de julio de 2017.

Entrevistas realizadas a Juan, el 25, 26 y 28 de julio de 2017.

Entrevistas realizadas a Jeison, el 26 y 29 de julio de 2017.

Entrevistas realizadas a Margarita, el 28 y 29 de julio de 2017.



Memorial por las víctimas de crímenes de Estado en Bogotá, organizado por el MOVICE.

Foto: Daniel Sarmiento para el CNMH.

No me puedo cortar las venas: mayor Parga

Por Andrés Córdoba

El oficial no quiere pedir perdón a las familias de las 43 personas asesinadas en hechos en los que estuvo involucrado. Parga fue judicializado por su responsabilidad en los llamados falsos positivos, que son 3.512 homicidios cometidos por agentes del Estado en varias regiones del país durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

El mayor Julio César Parga Rivas no pedirá disculpas. A nadie. No tiene por qué. Lo asegura en un breve diálogo telefónico que se dio repentinamente después de buscarlo durante varias semanas del mes de agosto de 2017. El mayor no quiere pedir perdón públicamente a los familiares ni a las víctimas pese a que aceptó su responsabilidad con el homicidio de 43 personas. No quiso hablar porque para él esos hechos ya son pasado. Prefirió guardar silencio justo por la época en que la señora Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional, vino a Colombia por primera vez a indagar sobre los llamados “falsos positivos”, que son ejecuciones extrajudiciales.

Del otro lado de la línea telefónica se escuchó una voz serena. Amable. Por momentos se tornaba estremecedoramente fría, indiferente con los hechos pasados, como si no fuera responsable de nada. Fue inevitable no tratar de reconstruir su rostro mientras avanzaban los quince minutos de conversación. De golpe recordé la copia de una foto suya que había obtenido de un archivo judicial. La imagen es la de un hombre de 45 años. De contextura delgada. Mentón y hombros anchos. Su foto es difusa y cuesta descubrir nítidamente quién se encuentra a través de esas tonalidades blancas y negras. Su mirada al frente. Imperturbable, como la voz que me habla.

Diálogo telefónico con el mayor Julio César Parga Rivas

Agosto de 2017

—Andrés Córdoba: Quisiera abordar algunos temas de ejecuciones extrajudiciales ¿Tiene la disponibilidad para hacerlo?

—Mayor Parga Rivas: *Me agrada saludarlo. En este momento... la verdad. Eso ya pasó. Yo no soy nadie para estar hablando de lo que ocurrió. Lo que tenía que decir ya lo dije a la Fiscalía, creo que son ellos los que tienen que contarle. Yo la verdad ya no miro para atrás. Ya pasó el tiempo. Ya llevo casi diez años y estoy en otro perfil ¿no?*

Hace algunos años conocí el nombre del mayor. Se le mencionaba de manera intermitente en las largas conversaciones que tenía con familiares y amigos de las víctimas de “falsos positivos” de la ciudad de Popayán (Cauca); o con abogados que le hacían seguimiento a casos donde se le vinculaba por los mismos hechos, o con periodistas a los que buscaba incansablemente para indagar sobre el tema. Escuché que el mayor Parga Rivas autorizó la ejecución de tres misiones tácticas: Saturno 27, Orión 31 y Orestes 36, donde fueron asesinados cuatro jóvenes de la comuna siete de la capital caucana en zonas rurales del departamento de Córdoba. Viajaron cerca de mil kilómetros para encontrar la muerte.

Un patrón común que se repitió en otras regiones de Colombia. Personas llevadas a través de engaños o por la fuerza desde sus lugares de origen hacia otras tierras. Para quitarles la vida. Para presentarlas como guerrilleros o delincuentes abatidos en combate. La Coordinación-Colombia-Euro-

pa-Estados-Unidos, una plataforma de derechos humanos que integran 269 organizaciones a nivel nacional, registró 3.512 casos entre los años 2002 y 2010. Periodo de tiempo que duró el mandato del entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, hoy senador del partido político Centro Democrático.

Un dato abultado que se puede quedar corto. No solo porque las cifras podrían aumentar, sino porque aún se desconocen los detalles de cómo se cometieron estos delitos, más allá de creer que fueron solamente soldados matando civiles. “Es la punta del iceberg”, fue la frase premonitoria que mencionó en el año 2009 Philip Alston, relator de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias, después de conocer el emblemático caso de Soacha.

—**Andrés Córdoba: Su relato es importante...**

—**Mayor Parga Rivas:** *Yo me puse a estudiar. Yo ya me gradué. Ya hago otras cosas, entonces, la verdad, ya no tengo nada que declararle a nadie. Ya me condenaron y sé que lo único que me toca es pasar un tiempo en la cárcel. Y eso es lo que estoy haciendo. El tiempo que estoy en la cárcel debo trabajar y estudiar. Si usted quiere seguir investigando más, vaya donde el juez de ejecución de penas que tiene mis casos. Yo, la verdad, no tengo nada más que decir y, respetuosamente, ya estoy en otro ambiente. Lo que pasó en el tiempo de la guerra, eso se quedó allá, y de ese tiempo para acá ya no me interesa hablar más. Mis culpas y mis errores ya se quedaron en el pasado. Yo soy otra persona. No tengo que darle más trascendencia a lo que ocurrió. Eso ya no hace parte de mi vida, la verdad.*

El 8 de febrero de 2006 el entonces ministro de defensa Camilo Ospina, creó el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal de Córdoba, Gaulta Córdoba, cuya misión era “contribuir a la lucha por la erradicación de las conductas que amenazaran y violentaran la libertad personal, a través de acciones de prevención, inteligencia, investigación y operativa, para el rescate y protección de las víctimas”. Su accionar se repartió entre 27 municipios del departamento de Córdoba; ocho del Urabá antioqueño y seis del Bajo Cauca antioqueño.

Se creó justo cuando el departamento de Córdoba y el país presenciaban las últimas desmovilizaciones paramilitares, que le daban cumplimiento al “Acuerdo de Santa Fé de Ralito para contribuir a la paz de Colombia”, después de que el 15 de julio de 2003, el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, consiguiera que nueve comandantes asociados a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) lo firmaran.

Meses después, según el séptimo reporte de la MAPP-OEA se comenzaron a dar situaciones de posibles rearmes y aparición de grupos armados que se presentaban como “una nueva generación del paramilitarismo”. Bandas que se alzaban en donde antes habían hecho presencia los bloques paramilitares. Aparecieron así Las Águilas Negras, Los Paisas, Los Rastrojos, entre otros grupos “liderados por jefes paramilitares que se habían salido temporalmente del proceso o habían conseguido huir, cuando vieron que el gobierno no les iba a cumplir el cielo prometido”, narra la periodista María Teresa Ronderos en su libro *Guerras Recicladas*.

A este contexto se le suma que un año antes, en el gobierno de Uribe Vélez, el Ministerio de Defensa expidió la Directiva Ministerial Permanente No 29 de 2005, con la cual se promovía el desarrollo de criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia, comunicaciones e información sobre actividades relacionadas con el narcotráfico y pago de información que sirviera para el desarrollo de labores de inteligencia y planeamiento de operaciones. Las compensaciones económicas iban desde 100 pesos por cada kilo de metralla incautado, hasta cinco mil millones por algún cabecilla. Los resultados no tardarían en darse.

—**Andrés Córdoba:** *Hay hechos que deben aclararse...*

—**Mayor Parga Rivas:** *No tengo nada que aclararle a nadie. De pronto a Dios, cuando esté allá... que las cosas que se hicieron bien o se hicieron mal, pero ya. Eso no hace parte de mi vida. Me da pena no poderle ayudar. Pero sí le puedo colaborar en otras cosas. Yo estudié, yo soy profesional. Soy administrador de empresas, soy ingeniero ambiental, ingeniero agrónomo, tengo especialización, maestría, doctorado en medio ambiente. En eso sí le podría colaborar.*

Después de la expedición de la Directiva 29, la presión para obtener resultados recayó sobre las líneas de mando de las unidades militares del Ejército Nacional. Algunos, para responder a estas exigencias y buscando otro tipo de beneficios, comenzaron a tejer una serie de alianzas que tendrían como resultados acciones criminales que estremecieron al país. El Grupo Gaula de Córdoba es un ejemplo de ello. Según el informe de Human Rights Watch “El rol de los altos mandos en falsos positivos”, entre 2006 y 2007 fue la unidad de la Decimoprimer Brigada que más bajas reportó: 52 “falsos positivos” en total.

Según las declaraciones del capitán Antonio Rozo Valbuena, quien hizo parte del Gaula de Córdoba desde su creación, durante el año 2006 las extorsiones en el departamento se habían disparado. “Como la política para medir operacionalmente a una unidad militar eran las muertes en combate, el mayor Oscar Alberto Acuña Arroyo, presionado y con los deseos de mostrar resultados, diseñó un plan para obtenerlos”, mencionó el 2 de febrero de 2012 en una indagatoria ante la Fiscalía.

Óscar Alberto Acuña, entonces comandante del Grupo Gaula Córdoba, se reunió con Jorge Elías Fontalvo, detective del extinto DAS; con Jesús David Cartagena, miembro de CTI; y con Antonio Rozo Valbuena, capitán del Gaula. La alianza surgió y la primera tarea no se hizo esperar. Acordaron que para dar las bajas debían recibir una noticia criminal, una denuncia que les permitiera *amarrar* las muertes en combate. No se permitieron más las capturas, desde ese momento solo se aceptarían bajas.

“Eso me lo dijeron Fontalvo y Cartagena. Ellos verificarían el lugar de los hechos antes de informar a las autoridades competentes para que realizaran el levantamiento de los cadáveres, de tal manera que tendrían tiempo para alterar la escena si fuese necesario, es decir, manipular los cuerpos o los elementos materiales probatorios”, declaró Rozo Valbuena.

Furia 19 fue una de las primeras misiones tácticas del Grupo Gaula de Córdoba que se llevaron a cabo para obtener estos resultados. Se realizó el 16 de agosto de 2006 en la vereda la Victoria del municipio de Montería. En ese momento se reportó la muerte de dos supuestos extorsionistas que luego serían identificados. Cartagena y Fontalvo verificaron que todo estuviera en orden y dieron

el visto bueno para que la Policía Judicial del CTI y el Fiscal de turno llegaran a realizar el levantamiento. Las felicitaciones del mayor Acuña no se hicieron esperar. Todo había quedado dentro de la legalidad. La escena había quedado bien *amarrada*. “Así deben seguirse haciendo las bajas”, dijo Acuña.

—**Andrés Córdoba:** *¿Cuál es su situación hoy en día?*

—**Mayor Parga Rivas:** *Aquí en el centro de reclusión nos dan becas, capacitaciones de estudio y lo único que podemos hacer es estudiar todos los días. Y todos los días tenemos que trabajar. Tenemos proyectos productivos. Esa es mi vida, trabajar, porque mis hijos tienen que comer, tienen que ir a colegio. Me toca trabajar duro porque si no trabajo, ellos no comen.*

—**Andrés Córdoba:** *¿Usted no fue desvinculado de las Fuerzas Militares?*

—**Mayor Parga Rivas:** *Toda la vida seré militar y tengo que comportarme como un militar. Obedecer órdenes, cumplir con un régimen interno que hay en el centro de reclusión. Levantarse temprano, hacer deporte, ir al desayuno, a la formación, ir a almorzar y así es todo el régimen que se tiene que cumplir, porque estamos sometidos a las leyes.*

En diciembre de 2006 Julio César Parga Rivas asumió la comandancia del Grupo Gaula de Córdoba, que estaba en manos de Óscar Alberto Acuña. Las cosas no cambiaron con su arribo. Encontró en el capitán Antonio Roza Valbuena un gran aliado para seguir reportando civiles como delincuentes muertos en combate. Bajo su mando, según información de la Fiscalía, el número de bajas aumentó. Durante el año 2007 se intensificaron las operaciones y misiones tácticas. Para esa misma época, Katia Jiménez, directora de la Unidad de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía en Montería, manifestaba ante los medios de comunicación su preocupación por la desaparición de 53 jóvenes. Muchos de ellos fueron hallados muertos.

Entre los años 2006 y 2007, según su hoja de vida militar, Parga obtuvo 39 felicitaciones por parte de los comandantes de la Décima Primera Brigada o Séptima División a la que pertenecía. Un logro que no había conseguido nunca desde el año 1993, cuando ganó su primera distinción dentro de las Fuerzas Armadas, al ser el primero en un campeonato de tiro.

No fue el único en obtener reconocimientos numerosos en tan poco tiempo. El capitán Rozo Valbuena acumuló 41 en estos dos años. ¿Los motivos? “Excelentes resultados de operaciones”, “criterio para el ejercicio de mando”, “obtención de resultados operacionales”, “coraje, arrojo, valentía, ímpetu, bravura, intrepidez demostradas en desarrollo de acciones contra el enemigo”, entre otras felicitaciones venidas de comandantes de Batallón, División y Grupo Gaula que reposan en los archivos militares.

Estas distinciones fueron producto de los resultados obtenidos a través de algunas Órdenes de Operaciones como Soberanía, Cascabel, Escorpión y Ébano, con las que se realizaron cerca de 25 misiones tácticas como Furia 19, Támesis, Minero, Mónaco 9, Júpiter 11, Apolo 22, Saturno 27, Orión 31 y Orestes 36, entre otras.

—**Andrés Córdoba: Entiendo su posición y yo hago mi trabajo...**

—**Mayor Parga:** *Está bien. Yo no estoy enojado. ¿Por qué me voy a enojar? Ese es su trabajo y tiene que ser así...Yo soy una persona que viví en la guerra. Eso hace parte del pasado. Ya no quiero hablar de eso, porque ni me suma ni me quita ni me llena. No me llena a mí de orgullo. Fueron 24 años que estuve en la guerra y ya no hago parte más de ella. Además, la guerra en Colombia ya se acabó. Ahora yo hago parte es formándome para hacer lo que siempre hice, servirle a la sociedad.*

—**Andrés Córdoba: Sí...**

—**Mayor Parga Rivas:** *Ahora ya tengo que enseñarle a la comunidad cómo sembrar un árbol, cómo cuidarlo, cómo ser productivo. Sembrar un cultivo, agruparlos. Enseñarles un sistema de gestión, que sea de calidad, de ambiente... lo que sea. Ese es mi trabajo ahora.*

Edwin Carlos Rodríguez, de Barranquilla, le dijo a su madre un 27 de abril que se iría a Valledupar a escoltar camiones. Yeison David Idrobo Hoyos y Enfrén Darío Chantre salieron juntos el 4 de septiembre desde Popayán hacia Córdoba para trabajar en una finca. “Primero ganarían 700 mil pesos mensuales. Después más que el Presidente”, les dijeron. Luis Fernando Herrera Tuirán no dijo nada. Se lo llevaron a la fuerza en una camioneta mientras tomaba con unos amigos al frente del bar El Goce, en

Sincelejo. La suerte para todos ese 2007 fue la misma: se convirtieron en “falsos positivos”.

—A usted se le sindicó por homicidio agravado ¿Qué tiene que decir al respecto?— le preguntó un Fiscal al soldado profesional Moisés Cáceres Martínez en una indagatoria realizada en el mes de agosto de 2011.

—Eso no es cierto —respondió.

Según Cáceres, el comandante del Grupo Gaula ordenó que se hiciera registro a una propiedad en Chinú, Córdoba, pues su propietario al parecer era extorsionado. Así inició la Operación Ébano, Misión Táctica Júpiter 11. El resultado: tres personas muertas. ¿La explicación? “El teniente Rozo lanzó la proclama: “¡Somos el Grupo Gaula de Córdoba!”. De inmediato nos sorprendieron disparándonos. Tomamos la reacción inmediata. Muchos de los soldados dispararon. Yo tomé mi posición. Después todo quedó en silencio. A media noche hicimos registro y encontramos los cuerpos de los delincuentes (los llamamos así) porque estaban armados. Los que andaban con nosotros del CTI hicieron el levantamiento y los llevaron al pueblo de Chinú”.

Jorge Gabriel Herrera Tuirán recibió la noticia de que había unos cuerpos sin identificar en la Inspección de Policía de Sincelejo. Solo faltaba uno por identificar. A través de fotos descubrió que era su hermano Luis Fernando Herrera Tuirán, quien llevaba unos días desaparecido. Había muerto con Mauricio Antonio Ramírez y Jader Antonio Chávez. Dos hombres vestidos de negro se los llevaron a la fuerza en una camioneta blanca, una cuatro puertas de vidrios polarizados.

Mientras viajaba de Suárez (Cauca) hacia Popayán, Fredy Idrobo Hoyos solo pensaba en su hermano, Yeison. Pasó más de un año sin tener noticia de él. Trataba de buscar en su cabeza el recuerdo más reciente. La última vez que compartieron juntos, la última vez que lo vio en el barrio cuando le manifestó que solo quería ayudar a su madre. Viajaba pensando en llegar a la ciudad y buscar algún dato de él. Lo obtuvo. Mientras su madre descansaba en la noche del 10 de junio de 2008, alguien le susurró desde la puerta que daba hacia la calle la noticia que tanto habían temido: “Los encontraron. Están muertos”.

Ya han pasado 10 años desde la muerte del hermano de Fredy y tres amigos más que fueron asesinados por el Gaula de Córdoba. A pesar de la sentencia condenatoria contra Parga Rivas, él asegura que no ha escuchado ningún pronunciamiento por parte del Estado frente a esos casos. “Nosotros hemos seguido, pero es como si se nos hubieran llevado la mitad del corazón. Si ellos estuvieran aquí, todo sería distinto. Pero no queda más que seguir”, dijo.

Los soldados no participaban de lleno en todas las misiones. Moisés Cáceres confesó que pese a no ser parte de una de las misiones tácticas, tuvo que ir al sitio de los hechos por orden del mayor Parga.

—Por qué manifiesta que tenían que declarar como si el combate fuera real ¿es que no lo fue? —preguntó el Fiscal a Cáceres.

—Había un mayor que nos daba las órdenes de decir si había combate y así no hubiera participado, tenía que decir que sí, porque en la Orden de Operación íbamos todos inscritos —dijo brevemente el soldado profesional en la indagatoria realizada en septiembre de 2012.

—¿Por qué razón su nombre y el de otras personas aparecen como intervinientes en un enfrentamiento y gastando munición sin que sea cierto, y que no coloquen el nombre de quienes supuestamente sí intervinieron? —continuó el interrogatorio.

—Para que se pensara que los hechos sí sucedieron. Por eso nos dijeron que teníamos que decir y declarar que sí hubo combate —contestó Moisés.

El Capitán Roza Valbuena dijo que los soldados siempre fueron engañados. “Fueron unos idiotas útiles para todos los procedimientos que realizamos en el año 2007, por eso señor Fiscal hago la salvedad que los soldados no tienen nada que ver en estos hechos”.

Después de que Moisés Cáceres diera sus declaraciones, pidió al Fiscal protección para él y su familia, pues su esposa recibía constantes llamadas para que se quedara callado.

—Andrés Córdoba: Hay muchas familias que no supieron nada de sus hijos. No le gustaría dar un mensaje, alguna voz que...

—**Mayor Parga:** *No. Yo no tengo que mandarle mensajes a nadie. La verdad es que yo hice mi trabajo. De pronto... estuvo mal o bien hecho... Yo no tengo que ir a recriminar a nadie, si me ven como un héroe o si me ven como un asesino. Usted, por ejemplo, puede opinar lo que quiera de mí, y está bien. No le voy a recriminar nada. Cada uno en este mundo puede pensar lo que quiera. Y si quieren ver que yo les causé mucho daño y sus familias están sufriendo y padeciendo, si lo hubiera sabido antes, posiblemente no hubiera ocurrido nada. Pero como las cosas ya ocurrieron ya no puedo echar nada para atrás. No me puedo cortar la cabeza para devolver a las personas. No me puedo cortar las venas para que me vean sufriendo. Simplemente hice mi trabajo, lo que aprendí en la institución. Pelié, luché, traté de acertar. Hubo errores, cometimos errores y ya... la justicia tomó medidas, dijo que estaba mal... con mis palabras, quitándome la vida no voy a calmar el dolor de nadie. Entonces me toca seguir privado de la libertad y seguir cumpliendo con la ley para recobrarla en algún momento.*

El manejo del dinero destinado para la realización de operaciones es otro detalle por aclarar. ¿Cuánto se gastaron y en qué? En la Misión Táctica Júpiter 11 el mayor Parga firmó el comprobante y el acta de pago de información por seis millones de pesos, dinero que provenía del rubro de Gastos Reservados del Gaula. Para la Fiscalía hubo una apropiación indebida del dinero, pues legalizaba las actas de pago de diferentes personas que nunca suministraron información.

Parga Rivas autorizó varias veces el uso de dinero de los Gastos Reservados para seguir con el desarrollo de las misiones. Por ejemplo, se pagaron cuatro millones de pesos según el Acta de Pago de Información 31, fechada el 20 de septiembre de 2007 “por concepto de información que condujo a la muerte en combate de 2 N.N, en desarrollo de la Misión Táctica antiextorsión Afrodita 26”. Esa misma cantidad se pagó para el desarrollo de la Misión Juno 13 bajo el acta 27. El 14 de junio de 2007, se autorizaron 3 millones y medio para Támesis 21.

En total se destinarían 87 millones de pesos para el supuesto pago de información, pero no fue así. El mismo mayor Parga en indagatoria ante la Fiscalía el primero de diciembre de 2011, aseguró que los gastos se hicieron para la compra de armas, “pagos a otras personas que supuestamente son

los informantes y que en realidad eran sapos que tenían conocimiento del pago de recompensas. En muchos hechos estas personas nos llevaron a hacer diferentes operaciones en las cuales los gastos se hicieron fuera de la ley, es decir, legalizándolos como pago de informantes que en realidad no existieron”.

Según sus declaraciones, el dinero fue usado muchas veces antes de la realización de las misiones. Se daba la plata a los oficiales responsables de los operativos, como a los tenientes Rozo Valbuena y Wilmar Criollo Lucumí, para el desarrollo de cada una de ellas. “Es por eso que deduzco que pudo cometerse irregularidades en las operaciones. Acepto mi responsabilidad por peculado y mi conducta omisiva en lo sucedido en el desarrollo de estas”, dijo Parga.

—Andrés Córdoba: Fueron cerca de 45 asesinatos según la fiscalía y el juez, muchas familias en este tiempo de posconflicto, de reconciliación...

—Mayor Parga: *No... es que para usted es asesinato. Esos nunca fueron asesinatos.*

—Andrés Córdoba: ¿Entonces qué fueron?

—Mayor Parga: *No... si usted cree que fueron asesinato... tranquilo. Está bien.*

—Andrés Córdoba: Eso lo dicen la fiscalía y el juez... homicidios agravados.

—Mayor Parga: *Por eso. Es que vuelvo y le digo una cosa. Usted me cuestiona a mí y me dice... si usted lo cree así, pues sígalo creyendo. No hay ningún problema. No pasa nada. Ni lo voy a recriminar. No, no. Está bien. Y si usted quiere que le repitan eso, vaya donde el juez y dígame: “repítame la sentencia y léamela” y él se la lee. Ellos le van a dar unas cosas particulares que de pronto usted quiere saber y escuchar. No va a pasar nada. Ni estoy en contra de nada, ni voy a refutar nada. Vuelvo y le digo, eso hace parte del pasado. Yo estoy en otro camino. Mi camino es cumplir la ley, cumplir las normas y cumplir un régimen.*

El Grupo Gaula de Córdoba tejió en este periodo otra alianza: con bandas criminales. Muchas participaban en el desarrollo de las operaciones después de establecer contacto con las personas a cargo de los operativos. En la ejecución de la Misión Támesis 10, por ejemplo, se habla de la participación de dos sujetos: Luis Fernando Rosado, alias *Tomate*, y un desmovilizado de las AUC, el *Pollo Lizcano*.

—¿Qué sabe usted de la intervención de dichos individuos? —preguntó el Fiscal a Antonio Rozo Valbuena en indagatoria el 19 de agosto de 2011.

—El *Pollo Lizcano* era informante de nuestra Red de Cooperantes. Pertenecía a las Autodefensas. Tenía a cargo el municipio de Pueblo Nuevo, conocía todos los movimientos que se realizaban ahí o en sus alrededores. Tenía injerencia y control sobre la población —dijo el capitán.

La participación del *Pollo Lizcano* y de *Tomate* en Támesis 10, según Rozo Valbuena, la manejó el mayor Parga. De hecho, para esta misión el mayor le entregó cinco millones de pesos para el pago de información suministrada por Lizcano, y para la compra de un revólver que podría servir como comodín en caso de que las víctimas no llevaran armas.

La Red de Cooperantes, una apuesta de Álvaro Uribe Vélez que promovió la participación voluntaria de los ciudadanos para apoyar la lucha contra los grupos alzados en armas, se convirtió en esta zona del país en un grupo de delincuentes, cómplices de varios delitos. Además de estar conformada por personajes como Lizcano, contaba con miembros de las Fuerzas Militares retirados que terminaron vinculándose con otras organizaciones al margen de la ley. La Red de Cooperantes terminó realizando varias actividades para apoyar al Gaula y así cometer los “falsos positivos”.

En la indagatoria del 7 de junio de 2011, el mayor Parga afirmó que “los cooperantes, llevaban los tipos bajo engaño hasta el sitio de los hechos, y a la vez la patrulla estaba realizando una maniobra de búsqueda y provocación dentro de la misión, lo anterior para mostrar que la patrulla fue hostigada de diferentes sitios, para que hubiera una reacción y poder justificar la utilización de los fusiles y dar las bajas. Pero ese hostigamiento nunca existió, porque ya habíamos coordinado desde antes llevar las víctimas a ese sitio, es decir, que las víctimas iban a estar en sitio engañadas”.

La Red formulaba falsas denuncias sobre actividades irregulares que estuvieran cometiendo las víctimas para luego asesinarlas. Para llevar a cabo una operación debía existir una denuncia de la comunidad, por eso se apoyaban en ella para que buscaran a civiles y denunciaran. Los cooperantes “calentaban” el área. Hostigaban a la gente para generar una sensación de inseguridad en la zona.

La alianza entre miembros de las Fuerzas Militares y bandas criminales para la realización de “falsos positivos”, es algo que poco se menciona. Pero se puede evidenciar a través de los vínculos que el mayor Parga tenía con la organización Los Paisas. Según documentos de la Fiscalía, Parga colaboró en diferentes actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, municiones, explosivos, conformación de grupos armados, homicidios, desapariciones y el transporte de dinero para el pago de nóminas de los grupos armados de la zona de injerencia.

Parga tenía su propio alias dentro de la organización: *Ronald*. Algunos audios de llamadas obtenidos por la Fiscalía dan cuenta de las acciones que realizaba con Los Paisas. Por ejemplo, el primero de enero de 2008 le preguntan a *Ronald* por “Chamorro y todo el combo”. *Ronald* dice que están ahí todos listos para la misión. Dos días después, *Ronald* habla con alguien nombrado como “Elkin” para que llame a otras tres personas: “Chamorro”, “Mauri” y “Curita” y les diga que estén listos para que realicen “una misioncita por ahí”. Ese mismo día, *Ronald* le dice a “Julián” “que ya esos manes están en el diez, que ya hay tres y faltan dos, que los están esperando”. El 11 de enero del mismo año “Julián” le pregunta a *Ronald* si hay forma de que transporte papelería (dinero) de Medellín a Montería para pagarles a los muchachos de él.

—**Andrés Córdoba:** *¿cuál será su proyección ahora que salga?*

—**Mayor Parga Rivas:** *Yo soy profesional, yo estudié agronomía en la Universidad Abierta y a Distancia. Estudié en la Universidad Militar administración de empresas, contaduría y me gradué. Hice especialización en docencia universitaria, hice maestría en gestión ambiental, maestría en recursos humanos, estoy haciendo doctorado. Estoy estudiando para ponerme al servicio de la comunidad, cuando salga de acá lo pondré al servicios de la comunidad o donde me necesiten.*

Pasaron varias semanas del mes de agosto hasta poder hablar brevemente con el mayor Parga Rivas, condenado a veinte años de prisión por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado. Sorprende saber que por ahora no reconocerá nada, aunque es una de las personas que puede aclarar muchas cosas al país, para entender más este capítulo del conflicto armado.

Al capitán Antonio Rozo Valbuena también intenté contactarlo. Él se encuentra vinculado con varios hechos por los cuales se condenó a Parga Rivas, pero ya no está detenido. Hace poco salió en libertad transitoria condicional, al acogerse a la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 de la Jurisdicción Especial para la Paz, por la cual se adoptan tratamientos penales especiales a los agentes del Estado señalados de cometer conductas punibles relacionadas con el conflicto armado. “Salió hace unos días. Dentro de su beneficio está que tiene que presentarse una vez al mes en cualquier unidad militar”, aseguró un teniente desde uno de los Centros de Reclusión Militar.

Aún hay mucho qué contar y varios fiscales del país lo saben. Pero también sienten incertidumbre alrededor de estos casos. Afirman que algunas investigaciones por “falsos positivos” les fueron pedidos para ser centralizados en Bogotá. No saben qué pasará con todas las que están adelantando.

Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional llegó Bogotá a mediados de septiembre para consultar de primera mano estos hechos. Vino a indagar sobre los expedientes judiciales de varios generales y coroneles activos y retirados implicados en estos casos. Su visita puede ser crucial para continuar dando pasos hacia la verdad y que permitan conocer a todo el país las entrañas de los “falsos positivos” que tanto dolor generaron en Colombia.

—Andrés Córdoba: Respeto su posición. No está en la obligación de hablar conmigo. Pero si quiere contarme algo este es mi número.

—Mayor Parga: *Tranquilo... Mire, la vida lo único que le enseña a uno es que hay aciertos y desaciertos. Y en el momento que usted se golpea y se da contra la pared, no le queda el chichón para toda la vida. Cuando usted se cae, hay que levantarse en la vida y continuar. No solamente se hace daño*

una sola vez, sino que hay muchas personas que hacen daño todos los días y no por el hecho de que lo condenen es malo. La vida continúa y hay que seguir sirviendo. En unas formas acierta más que otras. Pero eso ya pasó, no hace parte sino la de la historia, eso nadie lo va a borrar, pero lo que estamos viviendo es ahora y ya. Hasta Luego.



Ilustración realizada por el maestro Alfonso Espada.

Referencias

PERIÓDICOS Y REVISTAS

El Tiempo, (2009, 4 de enero), “Preocupación en Córdoba por índice de desapariciones; en 2008, Fiscalía recibió 106 denuncias”, en <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4742571>.

Vanguardia, (2009, 18 de junio), “Ejecuciones fueron casi sistemáticas en Colombia, dice relator ONU”, en <http://www.vanguardia.com.mx/ejecucionesfueroncasisisematicasencolombiadicerelatoronu-365870.html>.

PUBLICACIONES OFICIALES

Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; Fiscalía Sexta Especializada, Radicado 6820 (Cuadernos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18).

Ministerio de Defensa Nacional, (2006), *Resolución 0111 de 2006*.

Ministerio de Defensa Nacional, (2005), *Directiva Ministerial Permanente No 29 de 2005 (secreto)*.

Organización de Estados Americanos, OEA, (2006), *Séptimo informe trimestral del secretario general al consejo permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAAP-OEA)*.

ENTREVISTAS

Entrevista realizada a Julio César Parga Rivas, vía telefónica en agosto de 2017. (Por seguridad no se mencionan lugares).

Entrevista realizada a fiscales, en agosto de 2017. (Por seguridad y a petición de ellos no se mencionan nombres ni lugares).

LIBROS, ARTÍCULOS, ENSAYOS, TESIS

Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos, (2012), *Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia 2002-2010*, Bogotá, Editorial Códice Ltda.

Human Rights Watch, (2015), *El rol de los altos mandos en falsos positivos*, Estados Unidos.

Ronderos, María Teresa, (2014), *Guerras Recicladas*, Bogotá, Aguilar.

Autores

Paola Benjumea

Comunicadora Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Cursa la Especialización en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad del Norte. Trabajó como reportera en Caracol Radio en La Guajira y desde 2006 está vinculada a la Casa Editorial El Tiempo, primero como *freelance* en La Guajira y desde octubre de 2009 como redactora en el Magdalena. Ganadora del Premio de Periodismo Mario Ceballos Araújo por el trabajo colectivo Erosión costera en el Litoral Caribe, en agosto de 2010. Miembro asociado de la organización de periodistas de investigación de Colombia, Consejo de Redacción (CdR).

Martha C. Romero

Doctorada en Comunicación y Magister en Comunicación de la Universidad del Norte. Comunicadora social-periodista de la Universidad Autónoma del Caribe y Licenciada en lenguas modernas de Uniatlántico. Docente de la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla-Colombia en el programa de Dirección y Producción de Radio y Televisión. Se ha desempeñado

como periodista de prensa, radialista y docente, asesor y consultor gubernamental, promotora de iniciativas de comunicación escolar y comunitario. Miembro asociado de la organización de periodistas de investigación de Colombia, Consejo de Redacción (CdR).

Diana Salinas

Periodista colombiana. Licenciada en Literatura de la Universidad del Valle. Cursó Maestría de Periodismo en la Universidad Torcuato Di Tella, en Buenos Aires, Argentina. Trabajó como reportera en el diario La Nación, de Argentina. En 2010, ingresó al noticiero de televisión Noticias Uno, de Daniel Coronell. Durante su paso por Noticias Uno fue ganadora de dos Premios Simón Bolívar, en 2013 por mejor noticia en televisión y en 2014 por mejor investigación en televisión. Periodista de crónicas y reportajes en el programa Cuatro Caminos, de RCN TV. En 2016 y 2017 realizó varias investigaciones destacadas. Además de periodista, también es docente universitaria y miembro asociado de la organización de periodistas de investigación de Colombia, Consejo de Redacción (CdR).

Juliana Castellanos

Comunicadora social y periodista de la Universidad de Manizales. Magister en comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue reportera de la revista Cambio y la emisora de la Policía Nacional. Cuenta con una trayectoria de once años como docente universitaria en la Universidad Politécnico Grancolombiano, Pontificia Universidad Javeriana y Universidad de la Sabana. Ha escrito los libros: *Dos miradas un silencio*, construcción de realidades mediáticas en las crisis del proceso de desmovilización paramilitar (2012), *¿Cuánto nos cuesta la guerra?* (2013), y los ebook *La guerra va a la escuela* (2016) y *La guerra va a la escuela II* (2017). Actualmente dirige la Unidad de Investigación Periodística de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. Miembro asociado de la organización de periodistas de investigación de Colombia, Consejo de Redacción (CdR).

Andrés Córdoba

Comunicador Social con estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo y maestrando en Estudios Interculturales en la Universidad del Cauca. Se desempeña actualmente como periodista de investigación independiente y como investigador del Centro de Estudios Urbanos de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. Su trabajo periodístico le ha merecido varias distinciones como “Mejor obra publicada” (2016) otorgada por la Universidad del Cauca; Premio Nacional de Periodismo CPB (2014); Premio de Periodismo Caucaño (2014); Premio Nacional de la Revista Semana (2013); Mención de Honor otorgada por la Universidad del Cauca (2013). Miembro asociado de la organización de periodistas de investigación de Colombia, Consejo de Redacción (CdR).

Juan Diego Restrepo

Licenciado en Español y Literatura de la Universidad de Medellín, y especialista en Periodismo Investigativo de la Universidad de Antioquia. Actualmente se desempeña como director/editor del portal VerdadAbierta.com.

Edilma Prada

Periodista y Especialista en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario. Candidata a Magíster en Derechos Humanos. Fundadora y Directora de *Agenda Propia*. Lleva quince años cubriendo temas de conflicto armado, paz, minorías étnicas y medio ambiente, especialmente en el sur de Colombia, para distintos medios de circulación regional, nacional e internacional. Actualmente es periodista de *Environmental Investigation Agency –EIA–*. Ha participado en la coordinación editorial de los libros *Pistas para narrar la paz*, *Pistas para narrar la memoria* y *Agenda Verde*. Ganadora del Premio Excelencia Periodística que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa –SIP–, entre otros. Es capacitadora en periodismo colaborativo, miembro de *Connectas Hub* y miembro asociado de la organización de periodistas de investigación de Colombia, Consejo de Redacción (CdR).

Sania Salazar

Comunicadora social y periodista de la Universidad de Manizales. Especialista en creación narrativa de la Universidad Central. Reportera de prensa hace siete años en medios como La Patria, La Tarde y Unimedios. Periodista de Colombiacheck desde hace un año. Miembro asociado de la organización de periodistas de investigación de Colombia, Consejo de Redacción (CdR).

José Navia

La gente es la principal motivación de su oficio de contador de historias. Sobre todo la gente que ríe y llora con cada latido de este país. Escribe para la memoria hace 24 años de periodismo, 18 de ellos en El Tiempo. Nació en una vereda de Popayán, con ancestros nasa o paeces. Tiene reconocimientos por su labor periodística, entre ellos cuatro premios nacionales de periodismo, el Premio Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, 2007 y el Premio Rey de España en Periodismo Digital-2007. Ha publicado varios libros de historias urbanas y de los nasa. Miembro asociado de la organización de periodistas de investigación de Colombia, Consejo de Redacción (CdR).

Margarita Isaza

Periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Project Manager de Hacemos Memoria, convenio de la DW Akademie y la Universidad de Antioquia. Lectora compulsiva de lo que cae en sus manos, correctora y editora de libros, aprendiz de múltiples oficios. Estudiante de una segunda maestría porque de la primera aún debe la tesis.

Edinson Bolaños

Comunicador Social y Periodista de la Universidad del Cauca. Actualmente es periodista del proyecto periodístico para el posconflicto de El Espectador, Colombia2020. Merecedor de los premios de periodismo Gui-

lermo Cano de El Espectador 2010 en la categoría Judicial. En 2011 inició como corresponsal del diario El Espectador en el departamento del Cauca. Fue investigador de El Nuevo Liberal de Popayán y luego editor de la edición dominical de ese diario. Fue Premio Nacional de Periodismo Ambiental Amway 2012 y en 2016 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y el Premio de Periodismo Regional Semana por la investigación “El antifaz de los mineros ilegales”. Miembro asociado de la organización de periodistas de investigación de Colombia, Consejo de Redacción (CdR).

Claudia Mejía R.

Comunicadora social y periodista de la Universidad Manizales con más de once años de experiencia en monitoreo y análisis del cubrimiento de medios sobre temas de derechos humanos, infancia, libertad de expresión y periodismo. Coordinó en 2012 el diseño e implementación del Índice de Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública del Proyecto Antonio Nariño –PAN. Igualmente, su trayectoria incluye el diseño y gestión de estrategias de comunicación para el desarrollo y la divulgación de la ciencia. Actualmente estudia la Maestría en Estudios de paz y resolución de conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana y es comunicadora de la Vicerrectoría de Investigación de la misma institución. Miembro asociado de la organización de periodistas de investigación de Colombia, Consejo de Redacción (CdR).

¿Qué podemos tener en la cabeza los asociados –periodistas y profesores– de Consejo de Redacción para compartir con humanidad algunas historias de los oprimidos, para hacer visibles las verdades, para demandar del Gobierno atención en la construcción de las memorias territoriales? La respuesta como colectivo es una: el periodismo que hace memoria no puede escurrirse como agua entre las manos en la etapa crucial que vive Colombia. Puede ser eco de las voces que merecen ser escuchadas o que buscan en estos instantes romper las barreras de la indiferencia y la insolidaridad.

El país se inicia en una etapa de reconstrucción de las verdades, y como organización de la sociedad civil, Consejo de Redacción se comenzó a pensar en función de ello promoviendo dos guías periodísticas y académicas: *Pistas para narrar la paz* y *Pistas para narrar la memoria*. El paso siguiente, el que estamos dando ahora, no podía ser otro que el de convocar a un grupo de periodistas a reportear, a andar los pasos que con dolor, y con cierto halo de esperanza, han recorrido millones de colombianos.

La apuesta es que esos relatos de la gente en sociedades conflictuadas como la nuestra se inserten en los reportajes periodísticos del hoy, para así sumar a la responsabilidad que como nación tenemos con las víctimas de devolverles el lugar y reconocer los hechos que las pusieron en esa condición que no debe perpetuarse.



ISBN: 978-958-59512-5-9



9 789585 951259